

Movimientos sociales y conflicto en América Latina

José Seoane (Compilador)

Introducción **José Seoane**

Este libro tiene su origen en el seminario latinoamericano “Conflicto social, militarización y democracia. Nuevos problemas y desafíos para los estudios sobre conflicto y paz en la región” que el Observatorio Social de América Latina (OSAL) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales organizara, con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, en la Ciudad de Buenos Aires entre los días 16 y 18 de septiembre de 2002. Este evento contó con la participación de veintiséis investigadores de once países de América Latina, al paso que acompañaron las exposiciones y participaron del debate numerosos investigadores y estudiantes pertenecientes a distintos grupos de trabajo –de la Ciudad de Buenos Aires y del interior de Argentina– vinculados a la problemática central del seminario.

A lo largo de las tres intensas jornadas de sesiones, tanto las presentaciones de las diferentes ponencias como los debates suscitados a partir de ellas se concentraron particularmente en la cuestión de los movimientos sociales y populares que caracterizan el paisaje sociopolítico de nuestra región en el último período desde una doble perspectiva: por un lado, el análisis concreto de estas experiencias; por el otro, los debates teórico-metodológicos que se plantean en torno a su estudio. Desde esta problemática las exposiciones tuvieron también en cuenta la cuestión de los regímenes políticos en la región, particularmente la involución experimentada por la democracia representativa como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales durante las últimas décadas. Otro tema que mereció especial atención fueron los procesos de militarización social y criminalización de la protesta que trágicamente parecen desplegarse en muchos países de América Latina, particularmente acentuados después del 11 de septiembre de 2001 y la proclama de la “guerra infinita” enunciada por el presidente George Bush.

Sin duda la perspectiva latinoamericana que arroja la reunión del conjunto de las contribuciones resulta el aspecto más sobresaliente tanto del seminario como de esta publicación. La promoción de la investigación sobre los movimientos sociales y el conflicto desde una perspectiva regional ha sido una de las preocupaciones del Consejo en los últimos años, consciente tanto del destacado lugar que dichos estudios ocuparon en el florecimiento del pensamiento crítico latinoamericano en las décadas de los años sesenta y setenta como de la importancia adquirida por la emergencia y consolidación de significativos movimientos populares y la intensificación de la conflictividad social en la confrontación con el modelo societal forjado por las recetas neoliberales en las últimas décadas.

Fue precisamente con base en estos entendimientos que el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales creó, a inicios del año 2000, el programa Observatorio Social de América Latina. Durante estos más de tres años de trabajo el OSAL ha intentado contribuir a la reflexión sobre el conflicto social y los movimientos que lo protagonizan en nuestra región, sumando su esfuerzo a una necesaria e impostergable tarea de renovación del pensamiento crítico. La publicación de una revista cuatrimestral, la elaboración de una cronología de los hechos de conflicto social registrados en diecinueve países latinoamericanos, así como las numerosas actividades realizadas en el marco de este programa, han buscado –en consonancia con los objetivos institucionales fijados para el mismo– promover un necesario y permanente intercambio entre investigadores y protagonistas de las luchas sociales que se despliegan en Latinoamérica. En este camino la realización del referido seminario y la edición del presente libro significan un paso importante en el fortalecimiento de un espacio regional de debate y análisis sobre la temática de los movimientos sociales que hoy caracterizan a la vida política y social de nuestros países.

En este sentido, los diecisiete textos que el lector encontrará en esta compilación expresan con nitidez la riqueza de los análisis volcados en el seminario. Lamentablemente, las tradicionales limitaciones de espacio impidieron incluir las discusiones que acompañaron cada sesión. Para

facilitar la lectura del texto hemos modificado, en algún caso, la secuencia original que ordenó las diferentes mesas a lo largo del seminario.

El primer capítulo reúne, bajo la referencia al conflicto en relación a los procesos de polarización social, tres contribuciones que abordan casos tan disímiles como los de Venezuela, Uruguay y Paraguay. Abre la sección el artículo de Margarita López Maya que reflexiona sobre las raíces, formas y características de la polarización política que atraviesa a la sociedad venezolana en la confrontación entre los proyectos “bolivariano” y “liberal”. La investigadora analiza con detenimiento la serie de paros cívicos, golpe militar, lock-out patronal y conspiraciones que asediaron al gobierno electo del presidente Chavez desde fines de 2000 hasta principios de 2002, concluyendo con un señalamiento de las consecuencias y desafíos que enfrenta la democracia venezolana, y en realidad todas las democracias de América Latina. A continuación, Alfredo Falero, partiendo de las formas y consecuencias que conllevó la implantación del neoliberalismo en Uruguay, nos presenta un panorama de los movimientos sociales en dicho país desde una apropiación crítica del concepto de sociedad civil y en referencia particular a las nuevas subjetividades sociales que parecen signar una buena parte de estas experiencias. Finalmente Quintín Riquelme analiza también el proceso de implementación del neoliberalismo y profundiza sobre la configuración de los movimientos sociales en el caso de Paraguay. Sobresale en sus consideraciones la importancia que le cabe al movimiento campesino en la conflictividad y movilización social –a diferencia de lo que sucede con las organizaciones sindicales de trabajadores urbanos. Así, el autor concluye señalando la importancia de la experiencia del Congreso Democrático del Pueblo y la serie de protestas que este promovió y que supusieron la derrota de la tentativa privatizadora impulsada por el gobierno.

El análisis de la experiencia del movimiento campesino en Paraguay nos introduce, en cierto sentido, en el segundo capítulo. Este reúne cuatro contribuciones que abordan los movimientos sociales de origen rural más importantes en la última década en Latinoamérica: el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) en Brasil, el movimiento cocalero del Chapare boliviano, la experiencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y el zapatismo en México. La emergencia y consolidación de estas organizaciones y colectivos, sus formas de acción, programáticas y referencias, su significación nacional e internacional, hacen de estos movimientos populares una de las características distintivas de la nueva configuración de la protesta y del debate sobre las alternativas en nuestra región.

Inicia este capítulo Claudinei Coletti analizando la trayectoria del MST a lo largo de la década de los noventa a partir de señalar que dicho movimiento se constituyó “en el principal foco de resistencia política al proyecto neoliberal” impulsado por el gobierno brasilero. Como resultado del análisis del número de ocupaciones de tierra, el autor afirma que el movimiento avanza durante el primer mandato de Fernando Henrique Cardoso para luego pasar a una actitud defensiva en el último período. A continuación, Humberto Vargas y Eduardo Córdova abordan la experiencia reciente de los movimientos campesinos e indígenas en Bolivia –a la luz de las consecuencias y transformaciones forjadas por el neoliberalismo– desde las jornadas de la Guerra del Agua en Cochabamba, los bloqueos de carreteras de septiembre de 2000 hasta el significativo resultado que obtuvieron partidos políticos emergidos de dichos movimientos –especialmente el Movimiento al Socialismo liderado por Evo Morales– en las últimas elecciones en dicho país. En un sentido similar, Francisco Rhon Dávila analiza el proceso político y de conflictos que signa la constitución del movimiento indígena ecuatoriano a lo largo de la década de los noventa, concentrándose particularmente en la experiencia de la CONAIE y profundizando en las cuestiones que este movimiento plantea a la sociedad ecuatoriana y los desafíos y dificultades que enfrenta. Por otra parte, Miguel Álvarez Gándara reflexiona sobre las características novedosas que signan al zapatismo como actor social y al tipo de conflicto que éste origina, señalando que sus planteamientos van más allá de sus derechos como pueblos indígenas e incorporan una “amplia gama de agendas y demandas de los movimientos sociales nacionales y mundiales”.

Desde estas múltiples miradas, un conjunto de cuestiones comunes recorren las contribuciones reunidas en este capítulo. Aún teniendo en cuenta la heterogeneidad de las respuestas que proponen, estos movimientos sociales de origen rural –que han ocupado un lugar destacado en el conflicto social contra el “neoliberalismo”– dieron nacimiento a una serie de originales y

novedosas construcciones colectivas portadoras de inéditos desafíos e interrogantes en lo concerniente a sus formas organizativas y de protesta, sus programáticas y referencias (por ejemplo la demanda de “autonomía” formulada particularmente por el movimiento indígena), sus concepciones sobre la política, los partidos y el Estado, así como sobre los horizontes emancipatorios que éstas plantean.

La tercera sección está dedicada a reflexionar sobre algunos de los casos nacionales donde los procesos de militarización social y criminalización de la protesta parecen adquirir, en el espacio regional, perfiles más definidos. Como lo sugieren los autores, estos procesos han cobrado una mayor fuerza en el marco de la postulada “guerra contra el terrorismo” promovida por el gobierno norteamericano con posterioridad a los atentados del 11 de septiembre de 2001, abriendo una fase que algunos han bautizado como “neoliberalismo de guerra”. En relación a ello reunimos en este capítulo las contribuciones de Jaime Zuluaga Nieto sobre Colombia, Carlos Figueroa Ibarra sobre Guatemala y Fernando Salazar Ortuño en relación al Trópico de Cochabamba en Bolivia. En el primer caso, Jaime Zuluaga Nieto realiza un detallado análisis de la llamada política de seguridad impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe señalando su impronta militarista y sus consecuencias en términos de acentuar la escalada bélica, al paso que describe la profundización del rumbo neoliberal promovida por el gobierno como una verdadera “guerra social”. Por otra parte, Carlos Figueroa Ibarra ofrece un panorama de las consecuencias que en términos del incremento de la pobreza y restricción de la democracia conllevó la aplicación de las políticas neoliberales en Centroamérica, y particularmente en el caso de Guatemala. En su reflexión el autor articula los procesos de criminalización de la pobreza y emergencia de un autoritarismo de masas, el desarrollo del crimen organizado que parece convertirse en un nuevo poder invisible, y la impunidad que abre paso a la continuidad de las violaciones a los derechos humanos y a la consolidación de un aparato clientelar heredero de la contrainsurgencia. Estas líneas parecen converger en torno del proyecto político impulsado por el general Ríos Montt –que detentara el gobierno a inicios de la década de los ‘80– que lleva al autor a preguntarse sobre la amenazadora posibilidad del “retorno del centauro”. Por último, Fernando Salazar Ortuño, en el marco de un análisis de las políticas de erradicación del cultivo de coca impulsadas por los diferentes gobiernos bolivianos en las últimas décadas bajo la insistencia y apoyo estadounidense, concentra su atención en el Plan Dignidad (1997-2002) y sus consecuencias en la región del Chapare boliviano. Tras un análisis detallado de la situación, el autor señala la consolidación de un nuevo tipo de militarismo que, en beneficio de una “élite política, militar y de intereses financieros transnacionales”, hace de los movimientos sociales el “enemigo interno” del Estado.

Estos casos, pese a sus diferencias, pueden pensarse como ilustrativos de un proceso más amplio a nivel regional que promueve un diagrama social represivo tendiente a militarizar las relaciones sociales y que puede abarcar tanto las reformas legales que cercenan libertades democráticas y refuerzan la capacidad punitiva del Estado como la criminalización de la pobreza y el crecimiento de formas represivas paraestatales. En este sentido, conviene también señalar que, en dos de las tres experiencias analizadas, el asesoramiento y la presencia militar estadounidense juega un papel de extraordinaria importancia. El capítulo cuarto aborda, desde diferentes perspectivas, el proceso de conflicto y movilización social que recorre la Argentina en los últimos años y que tuvo en las jornadas de diciembre de 2001 su punto más álgido. Las protestas y movilizaciones que signaron esos días y que concluyeron con la apurada renuncia del Presidente Fernando De la Rúa marcaron el apogeo de una excepcional crisis política del régimen forjado en la década de los noventa por el menemismo. Esta crisis, de una gravedad sin precedentes en la historia argentina del siglo XX, tuvo una gran repercusión en Latinoamérica –y también a nivel internacional– en tanto señalaba el estruendoso derrumbe de un modelo que había sido postulado por el “pensamiento único” y los organismos financieros internacionales como el ejemplo a seguir por los países de la periferia. Estas consideraciones nos motivaron a organizar, en el marco del seminario, un panel dedicado a este proceso de conflicto social vivido en Argentina. En este caso se acompañan cuatro contribuciones que abordan, desde perspectivas y temporalidades diferentes, algunas de las experiencias populares desarrolladas en este país en el plano nacional, sectorial o provincial. Norma Giarracca –con la colaboración de Pablo Lapegna y Ana M. Weinstock– aborda la protesta agrorural a lo largo de la década de los noventa, profundizando en las características –en tanto sujetos y formas de acción– que aquella presenta en 1999 y concluyendo en el carácter de acontecimiento que en este ciclo cabe a las

jornadas de diciembre de 2001 y la novedad en términos de representación social y política que parece signar a algunas de las experiencias sociales desarrolladas posteriormente. Nicolás Iñigo Carrera y María Celia Cotarelo parten en su reflexión de lo que denominan la “insurrección espontánea” del 19 y 20 de diciembre, para analizar las condiciones, sujetos y formas de lucha que se reúnen a lo largo de dicho mes. Los autores interpretan estos hechos como un hito en un ciclo más amplio de enfrentamientos sociales que parece iniciarse en 1993, y concluyen su análisis con un examen de las características que presenta el conflicto social a lo largo de la primera mitad de 2002. Por otra parte, Gloria Rodríguez aborda, desde las transformaciones estructurales operadas por el neoliberalismo y la nueva configuración de la protesta en la ciudad de Rosario, la experiencia de ocupación y gestión del ex supermercado Tigre desarrollada por sus trabajadores y las vinculaciones que este proceso tiene con nuevas prácticas sindicales y con otros colectivos y movimientos sociales. En similar sentido vale leer la contribución de Orietta Favaro, que analiza las características que presentó la protesta en la provincia de Neuquén a lo largo de los años noventa señalando el lugar destacado –según la autora– que en ésta les cabe a aquellos colectivos identificados en función de su carencia (“los sin”), y profundizando en la descripción de la experiencia de la fábrica de cerámicas Zanón, ocupada y gestionada por sus trabajadores desde el segundo semestre de 2001. El conjunto de estas contribuciones nos permite aprehender la amplitud, intensidad y riqueza del proceso de movilizaciones, conflictos y experimentación popular que atravesó a la sociedad argentina, particularmente durante los años 2001 y 2002, y que tuvo en los movimientos de trabajadores desocupados, las asambleas populares, las empresas recuperadas y los trabajadores del sector público sus expresiones más destacadas. En su conjunto estos trabajos ofrecen valiosos elementos para una mejor comprensión de los debates planteados en torno a la caracterización de dicho proceso, su significado y las perspectivas que plantea.

Por último, cierran el libro las contribuciones dedicadas a debatir sobre las aproximaciones teórico-metodológicas referidas a los estudios del conflicto y los movimientos sociales. En este caso, Inés Izaguirre inicia el capítulo planteando la importancia de una mirada que entienda al conflicto como el espacio de constitución permanente de las clases sociales. Desde esta visión la investigadora propone cinco ejes teórico-metodológicos que recuperan las nociones de historicidad y periodización de los procesos sociales así como la matriz del enfrentamiento para entender la constitución de las fuerzas sociales. Por otra parte, Carlos Walter Porto-Gonçalves, a partir del señalamiento de que el territorio es constituido por la sociedad en el propio proceso en que ésta teje sus relaciones sociales y de poder, aporta elementos significativos para pensar la nueva configuración territorial que parece caracterizar a los movimientos sociales y populares recientes en Latinoamérica así como la redefinición de la territorialidad de la dominación que el neoliberalismo, como fase capitalista contemporánea, trae aparejada. Por último, a partir del señalamiento de la necesidad de interrogarnos sobre las características y naturaleza contemporáneas de los sujetos sociales, los grupos dominantes y el sistema político, Hugo Zemelman propone una mirada teórico-metodológica centrada en el proceso de constitución de los sujetos sociales que toma cuerpo en la secuencia de coyunturas, y que el autor denomina una estrategia de investigación transcointegral.

Como puede desprenderse de esta breve introducción, tres cuestiones centrales atraviesan a nuestro entender la mayoría de los textos recogidos en esta compilación. La primera remite al proceso de implantación del neoliberalismo en Latinoamérica, que tiene en la década de los noventa su momento de mayor extensión y radicalidad. El necesario señalamiento del carácter integralmente regresivo que supusieron estas políticas –en términos de concentración del ingreso, pauperización de masas y vaciamiento de la democracia– se complementa en este caso con las referencias a las transformaciones de carácter estructural que conllevó la imposición de dicho modelo tanto en el terreno de la estructura económica como en lo social, lo político, y lo cultural. Desde la perspectiva del análisis de los movimientos sociales ésta es, quizás, la segunda cuestión relevante. El tercer interrogante, a su vez, está referido a la manera de interpretar la nueva configuración que parecen presentar la protesta y los movimientos populares en la región (en términos de sujetos, formas de organización y de lucha, referencias programáticas y horizontes emancipatorios) en el ciclo de crecimiento de la conflictividad social registrada en la segunda mitad de la década de los noventa en muchos de los países del continente. Son cuestiones en debate que interpelan tanto a los estudios de caso como a las reflexiones metodológicas volcadas en este libro.

Por otra parte, este ciclo de conflictos y movilización popular –sumado a la recesión y crisis económica que recorrió la región en los últimos años– ha abierto un cuestionamiento cada vez más amplio a la hegemonía que construyó el modelo neoliberal a principios de la década de los noventa. En este sentido las contribuciones que presentamos en este volumen arrojan luz tanto sobre las tentativas de responder a dicha crisis con la promoción de un nuevo autoritarismo, como sobre la riqueza, desafíos y dificultades que afronta la construcción de genuinas alternativas a las políticas en curso.

La realización del seminario así como la preparación de este libro supuso un proceso de trabajo colectivo resultado de múltiples esfuerzos y dedicaciones. Como suele decirse en estos casos, resulta prácticamente imposible dar justa cuenta de ello. A sabiendas de esto, de todas maneras no podemos dejar de agradecer a los expositores y participantes tanto del seminario como del presente volumen. Ambas iniciativas contaron con el inestimable apoyo y calificado aporte del Consejo, en especial de su Secretario Ejecutivo, Atilio Boron, y del Coordinador Académico del Consejo, Emilio Taddei. Dicha tarea contó también con el esfuerzo de todo el joven equipo del OSAL, al cual quiero expresar mi gratitud. Quisiera hacer un reconocimiento especial a Clara Algranati –cuya participación en el diseño y realización de estas jornadas fue insustituible para que las mismas tuvieran lugar– y a Ivana Brighenti –que hizo posible, con su dedicación y cuidado, la ardua y prolongada tarea de preparación y edición de este libro. En esta labor y en el diseño de la publicación contamos también con el intenso trabajo desarrollado por el Área de Difusión del Consejo y especialmente de su Coordinador, Jorge Fraga. Finalmente debe mencionarse que el seminario y esta publicación fueron posibles gracias al interés de SAREC/ASDI, que con la participación de Jan Lundius estuvo presente en la apertura de la actividad realizada en Buenos Aires y acompañó su desarrollo. Pero, por sobre todas las cosas, quisiéramos dedicar este esfuerzo a todas las mujeres y hombres que, a lo largo de nuestra Latinoamérica, de diferentes maneras y en distintos lugares, batallan todos los días haciendo realidad el sueño de que “otro mundo es posible”.

CAPITULO 1

Polarización social y conflicto. Los casos de Venezuela, Uruguay y Paraguay

Insurrecciones de 2002 en Venezuela. Causa e implicaciones

Margarita López Maya*

PREÁMBULO

La sociedad venezolana vivió en 2002 uno de los años más convulsionados de su historia contemporánea. Fracturada en dos bloques poderosos que se enfrentaron continuamente a lo largo del año, en dos oportunidades el Estado hubo de afrontar una insurrección de grandes proporciones que puso en peligro el gobierno del presidente Chávez, elegido abrumadoramente en comicios democráticos de 1998 y 2000. El golpe de estado del 11 de abril y el paro general indefinido con parálisis de la industria petrolera de diciembre constituyen dos episodios estrechamente relacionados. En ambos una significativa porción de venezolanos militares y civiles se sublevaron contra el gobierno desconociendo su legalidad y legitimidad, mientras otra también significativa porción de venezolanos, igualmente civiles y militares, se movilizaron intensamente e incluso expusieron sus vidas para defenderlo. Por el momento, el gobierno de Chávez ha sobrevivido a estas poderosas insurrecciones.

Entender por qué un gobierno democráticamente electo y ratificado, que en sus primeros dos años cumplió con algunas de las demandas más exigidas por el electorado venezolano en la última década, es repudiado y desconocido por una parte de la población hasta el extremo de sentirse legítimamente autorizada a usar la violencia para deponerlo, mientras es respetado y amado por otra, es el objetivo del presente trabajo. Planteo que una explicación para esta situación debe necesariamente tomar en cuenta una causalidad compleja, de distintas temporalidades en su desarrollo. Considero que algunas de esas causas proceden de procesos propiamente nacionales, pero también hay otras más vinculadas a la dinámica actual del ámbito internacional. Estos factores se fueron acumulando, articulando y convergiendo hasta hacer estallar en Venezuela esta crisis, que pareció primeramente política pero ha terminado por afectar hasta los últimos resquicios de la vida social.

La crisis que padece Venezuela contiene importantes semejanzas y vínculos con problemas que se están desarrollando en diversas sociedades nacionales del Tercer Mundo. De allí la necesidad y utilidad de analizar la crisis venezolana con miras a iluminar aspectos que pueden contribuir a la comprensión de procesos de transformación más generales ocurriendo en sociedades sometidas a las mismas dinámicas de la globalización. La llegada de Chávez a la presidencia en 1998 tuvo una trayectoria, y representó una opción política, que guarda similitudes, por ejemplo, con el arribo de Lucio Gutiérrez a la presidencia de Ecuador. La crisis y colapso de los partidos políticos que Venezuela vive desde la década del noventa –y que explica en parte su inestabilidad política reciente– es compartida por varias naciones suramericanas: véase el caso dramático de Argentina. Las difíciles relaciones entre medios de comunicación y gobierno han sido también denunciadas en Perú y Ecuador. El debilitamiento del Estado nacional y su vulnerabilidad ante agencias y corporaciones internacionales es una característica compartida actualmente por la mayoría de las sociedades del continente. El presente artículo está dividido en dos partes. En la primera haré una descripción analítica de cómo evolucionó entre octubre de 2001 y enero de 2003 la crisis política venezolana. Presentaré los episodios y elementos más reveladores de la extensión e intensidad de esta convulsión. Para ello he utilizado principalmente fuentes hemerográficas nacionales e internacionales. En la segunda, desarrollo una interpretación de las causas que concurrieron para impulsar la situación insurreccional, poniendo de relieve el problema de la legitimidad del gobierno de Chávez. Procuero responder una pregunta que en muchos momentos se me ha formulado: ¿por qué una parte de la sociedad odia tanto a Chávez, mientras otra lo ama con pasión?

LA EVOLUCIÓN DE LA CRISIS2

Entre fines de 2001 y enero de 2003 ocurrieron en la sociedad venezolana varias

confrontaciones entre gobierno y oposición que pusieron de manifiesto la existencia de una polarización política extrema, así como su canalización hacia una situación insurreccional contra el gobierno legal y legítimamente constituido. Las condiciones propiciadoras de la polarización política venían desarrollándose en los años previos, pero se fueron ahondando en el último cuatrimestre de 2001, impulsadas por acusaciones de autoritarismo y agresión verbal que la oposición hacía de manera creciente contra el presidente y su gobierno a propósito de la aprobación de un conjunto de leyes, algunas medulares de su proyecto político. En diciembre de 2001 la confrontación desembocó en un paro cívico, el primero de cuatro, que fue respondido con un endurecimiento del discurso presidencial y amenazas de dirigentes del partido de gobierno al orden democrático. A partir de entonces la polarización y la confrontación se hicieron más intensas, desembocando en el segundo paro cívico, en abril de 2002, que sirvió de antesala al golpe de estado del día 11. Con este golpe de estado y el retorno de Chávez al poder 48 horas después, se reveló la hondura de la fractura sociopolítica venezolana y se entró en una crisis política. Las iniciativas de diálogo, negociación o acuerdos que se intentan en los meses siguientes no producen resultados significativos. Ese diciembre se arribó de nuevo a un impasse entre los dos bloques, que llevó a la oposición a organizar un cuarto paro cívico, el cual, al igual que en abril, desembocará en una situación insurreccional. Para fines de enero de 2003 se hace claro que el gobierno de Chávez ha logrado resistir. Veamos algunos de los aspectos más importantes de los tres picos de esta crisis.

EL PRIMER PARO CÍVICO

El paro cívico del 10 de diciembre de 2001, convocado por la máxima representación patronal del país, la Federación de Cámaras de Industria y Comercio (FEDECAMARAS), fue el resultado del creciente enfrentamiento de distintos grupos empresariales con el gobierno de Chávez. El descontento de empresarios y comerciantes se había venido manifestando prácticamente desde el inicio de la gestión gubernamental, pero fue en este año que se cohesionaría como fuerza política opositora por la forma -además de los contenidos- en que el Ejecutivo nacional aprobó cuarenta y nueve leyes. Éstas fueron aprobadas el 12 de noviembre a través del uso de facultades extraordinarias contempladas en la Constitución y concedidas al Ejecutivo por la Asamblea Nacional por medio de una ley habilitante. FEDECAMARAS argumentó que las mismas no habían sido suficientemente consultadas con la sociedad y lesionaban derechos constitucionales, como los de participación, propiedad privada, justicia, libertad, derechos humanos y pluralismo político. Entre las leyes más criticadas por los empresarios estaban las leyes de tierras, pesca e hidrocarburos, que sin duda afectan intereses de estos sectores. Propietarios de tierras rurales y empresarios de la pesca industrial venían movilizándose desde septiembre de ese año, y recibieron hacia octubre el respaldo de la máxima representación empresarial (López Maya, 2002).

El paro del 10 de diciembre no sólo paralizó de manera significativa las actividades comerciales del país urbano, sino que también cohesionó por primera vez a las distintas fuerzas organizadas de la oposición, incluyendo sectores gremiales, sectores medios de diversa naturaleza, pequeños partidos políticos emergentes, viejos partidos venidos a menos como Acción Democrática (AD) y COPEI, y algunos intereses sindicales tradicionales representados en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), todos ellos descontentos por considerar afectados sus intereses y por un estilo autoritario y pugnaz del gobierno de Chávez. Este paro cívico fue el primer éxito que se anotó la oposición en su confrontación contra el gobierno de Chávez, y constituye el punto de partida de un endurecimiento de las posiciones de ambos bandos que desembocará en un segundo paro cívico en abril, esta vez como parte del desarrollo de un golpe de estado. Por su actuación durante ese paro, en los meses siguientes la oposición reconocería al presidente de FEDECAMARAS, Pedro Carmona Estanga, como cabeza de su movimiento.

El gobierno y las fuerzas que lo respaldan, agregadas en los partidos Movimiento Quinta República (MVR), Patria Para Todos (PPT) y otros, reaccionaron ante esta primera demostración de fuerza de la oposición acentuando el discurso belicoso y la acción confrontacional, y fortaleciéndose su liderazgo más intransigente. El mismo 10 de diciembre, por ejemplo, el gobierno resolvió trasladar a Caracas los actos conmemorativos del día de la aviación, que estaban pautados para realizarse en la ciudad de Maracay. Buscó con ello hacer

sentir su fuerza exhibiendo en el cielo los aviones militares. Asimismo, organizó en Caracas una concentración campesina en la tarde para celebrar la promulgación de la ley de tierras. En ambos actos el presidente se presentó en traje militar, declaró que iba a acelerar la aplicación de las nuevas leyes, y amenazó con nuevas resoluciones oficiales para regular actividades privadas. En el MVR se emprendieron acciones contra aquellos de sus parlamentarios que habían propiciado el diálogo con la oposición, pasando sus expedientes al órgano disciplinario del partido. Este endurecimiento de las posiciones del gobierno y su partido tuvo su contraparte en FEDECAMARAS y la oposición en general, que en una actitud igualmente intransigente, y desde una posición fortalecida por el éxito del paro cívico, exigieron a partir de entonces la derogación de las cuarenta y nueve leyes sancionadas a través de la habilitante. Algunos ya solicitaban la renuncia del presidente. Estas posiciones extremas impedirían en los meses siguientes el diálogo y la negociación política entre las partes en pugna.

SEGUNDO PARO Y GOLPE DE ESTADO

La política de la calle, es decir, una continua movilización de lado y lado, es la característica de la dinámica sociopolítica de los primeros meses de 2002 ante la polarización y el bloqueo de salidas negociadas. Una parte de la oposición maneja desde fines de año la demanda de la renuncia del presidente; otros piden que se impulse a mediano plazo un referendo revocatorio. Corren también insistentemente rumores sobre el descontento en las fuerzas armadas, habiendo señas de que un sector radicalizado de la oposición juega al golpe de estado. En este contexto se produce en el mes de febrero el conflicto entre el Ejecutivo nacional y sectores de la gerencia de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), plataforma que impulsará el segundo paro cívico, que desembocará en el episodio del golpe de estado del 11 de abril.

El conflicto de sectores de la gerencia mayor y ejecutiva de PDVSA tuvo como motivo visible el nombramiento en febrero por parte del Ejecutivo de un nuevo presidente y una nueva junta directiva de la empresa. Con Gastón Parra como nuevo presidente de la compañía, eran ya cuatro los presidentes que había nombrado el gobierno, aparentemente sin lograr sus objetivos de alinear la empresa con la reforma petrolera que venía desarrollando como parte medular de su proyecto político. Sin embargo, el motivo hecho público para el paro no era éste, y no se cuestionó abiertamente el nombramiento de Parra sino el de miembros directivos internos de la compañía. La gerencia alegaba que estos nombramientos violaban reglas consuetudinarias de la empresa, que otorgaban esos cargos por "méritos". El argumento de la meritocracia para ascender o sentarse en la junta directiva de PDVSA era la reivindicación tras la cual se ocultaba la diferencia más honda entre el gobierno y sectores de la gerencia en torno a la política petrolera. En la década anterior, de implementación de orientaciones económicas gubernamentales de naturaleza neoliberal, la gerencia se había independizado de la supervisión estatal y había formulado y desarrollado una política de apertura petrolera. Con ella buscó distanciar al país de la OPEP, reducir el ingreso fiscal petrolero, propiciar el retorno de los capitales foráneos petroleros y eventualmente llevar a una privatización de la industria³. Las leyes de hidrocarburos gaseosos de 1999 y de hidrocarburos de 2001 revirtieron estas tendencias y retomaron una política que podría grosso modo caracterizarse como una continuación, actualizada a los nuevos tiempos, de la política nacionalista que a lo largo del siglo XX había desarrollado el Estado venezolano con la industria petrolera.

El paro de actividades administrativas en PDVSA demandando la renuncia de los directores internos de la junta nombrados recibiría en abril el apoyo de la CTV, que tomó la iniciativa de convocar el día 9 a un segundo paro cívico de solidaridad, ampliamente respaldado e incluso impulsado por FEDECAMARAS, organizaciones sociales y políticas de oposición y el episcopado de la Iglesia católica, aunque menos exitoso que el del 10 de diciembre. El sindicalista Carlos Ortega prorrogó este paro por 24 horas más, y el 10 de abril, ante una poco concurrida concentración frente a la CTV, declaró un paro indefinido, que paradójicamente fue apoyado con entusiasmo por el empresariado y el resto de las fuerzas opositoras. Esa misma tarde convocaron también a una marcha para el día 11 que se movería del Parque del Este de Caracas hacia una de las sedes de PDVSA, también en el este, para mostrar su solidaridad con la gerencia. Como es sabido, esa marcha, ampliamente convocada por los medios de comunicación, fue multitudinaria, y una vez llegada a PDVSA-Chuao fue persuadida para seguir hacia el centro de Caracas, a la sede del Palacio Presidencial, para sacar de allí al

presidente Chávez. Esta insurrección civil confrontó en el centro una situación de violencia, cuyo origen a la fecha no ha podido ser aclarado, que arrojó diecinueve muertos y más de un centenar de heridos. Estos sucesos sirvieron de justificación para la insurrección militar de un sector de oficiales de alto rango, produciéndose un golpe de estado que depuso por 48 horas al presidente⁴.

El 13 de abril, instaurado ya el gobierno de facto presidido por el señor Carmona Estanca, de FEDECAMARAS, diversas y nutridas movilizaciones de los sectores populares que apoyaban al presidente derrocado, conjuntamente con una insurrección militar de signo contrario al del día 11 y el apoyo de organizaciones y medios internacionales, devolvió a Chávez al poder, retomándose el hilo constitucional roto por el golpe cívico-militar. A partir de entonces, y a diferencia del 10 de diciembre, el presidente prometió y se avino a bajar el tono de su discurso, pidió disculpas por errores y ofensas, prometió rectificaciones y tomó iniciativas para el diálogo y la negociación con sus adversarios políticos. En los meses siguientes los dirigentes y sectores más democráticos del gobierno se fortalecieron, y se hicieron manifiestas, en efecto, algunas rectificaciones importantes: cambios en el gabinete económico, colocándose funcionarios con mayor capacidad de comunicación con sectores empresariales; política de rectificación y reconciliación con la gerencia mayor de PDVSA; moderación del discurso presidencial; mayor respeto por los procedimientos institucionales. El presidente no volvió a usar el uniforme militar e invitó al país a personalidades y organismos internacionales que pudieran brindar sus apoyos para ayudar a salir de la crisis política que el golpe había abierto. El vicepresidente, por su parte, tomó la iniciativa de abrir mesas de diálogo con diversos sectores de la sociedad.

En contraste, la oposición se mantuvo renuente al diálogo o la negociación con el gobierno y siguió centrada en la política de la calle, pidiendo elecciones “ya”, lo que no está contemplado en la Constitución, y/o la renuncia del presidente. Aunque en un primer momento se halló debilitada políticamente por el retorno del presidente, y dividida por desavenencias reveladas durante el golpe y el gobierno de facto entre partidarios y detractores de atajos violentos, no construyó en los meses siguientes una estrategia de clara vocación democrática que neutralizara a sus sectores más radicalizados. Recién en noviembre, tres semanas antes del inicio del cuarto paro cívico, bajo reiteradas presiones de personalidades y organismos internacionales, se avino a sentarse a la Mesa de Negociación y Acuerdos instaurada bajo la facilitación del secretario de la OEA, César Gaviria. Sin embargo, para ese momento, el predominio de los sectores radicalizados y antidemocráticos en la Coordinadora Democrática (CD) hacía improbable que un acuerdo político prosperara antes de la nueva medición de fuerzas que prometía el paro, donde la oposición se sentía confiada en salir victoriosa.

PARO PETROLERO

La segunda gran insurrección de este año comienza a fabricarse desde agosto. Una decisión del Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que no existían méritos para enjuiciar por rebelión militar a cuatro altos oficiales, responsables del golpe de estado del 11 de abril. Fue ésta una clara decisión política y no jurídica del máximo tribunal, que abrió la puerta para una nueva aventura militar. Para el mundo civil fue una señal de que en el país reinaba la impunidad. El 22 de octubre, catorce militares, entre ellos algunos de los absueltos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en agosto, tomaron la plaza Francia de Altamira, en el este de Caracas, pronunciándose en “desobediencia legítima” contra el gobierno y declarando la zona “territorio liberado”. Anunciaron que sólo abandonarían la plaza cuando cayera Chávez, y llamaban a sus compañeros de armas a alzarse contra el gobierno.

En el mismo mes de octubre, luego de una marcha, la CD dio lo que según dijo era un ultimátum a Chávez: si no renunciaba y convocaba a elecciones, la oposición llamaría a un paro cívico. El presidente hizo caso omiso y la oposición convocó para el 21 de octubre su tercer paro cívico. Aunque este paro fue parcial y menos beligerante que los previos, comenzó allí la recta final para desembocar en el paro indefinido y petrolero de diciembre. A partir del paro de octubre se suceden sin cesar una serie de hechos que van cargando con violencia la atmósfera del país: la toma de la plaza Altamira por los militares, ya señalada, al día siguiente de este paro; a inicios de noviembre, un encuentro violento en el centro de Caracas entre

allegados del gobierno y de la oposición motivado por la solicitud de un referendo consultivo por parte de la CD; en esos días se devela también una conspiración al allanar la casa de un ex canciller de AD donde se encuentra material preparatorio de un gobierno transitorio; una balacera se produce a mediados de noviembre en el centro de la ciudad motivada por un conflicto policial, donde mueren tres personas; poco después el Ejecutivo nacional interviene la Policía Metropolitana (PM) y ordena la salida de la Guardia Nacional (GN) a la calle para patrullar la ciudad de Caracas; finalmente estalla una crisis en el Consejo Nacional Electoral que pone de relieve la politización de esa institución.

El 2 de diciembre, con todo lo anterior a cuestas, comenzará el cuarto paro cívico en el lapso de un año.

Este paro mostró connotaciones distintas a los precedentes, al hacerse evidente que no sólo se sumaba al paro la gerencia administrativa de PDVSA, como en abril, sino también buena parte de la gerencia operativa y los capitanes de la Marina Mercante, procediendo a paralizar las actividades operativas de la compañía y prácticamente de la totalidad de la flota de tanqueros de PDV Marina5. PDVSA es la compañía más grande de América Latina, y corazón de la actividad económica de Venezuela. La mitad del ingreso fiscal venezolano proviene del negocio petrolero. El lunes 9 de diciembre, día en que la oposición convirtió el paro en "indefinido" hasta que cayera Chávez, en cadena oficial transmitida por todos los medios de comunicación audiovisual, el presidente de PDVSA reconoció que la compañía estaba virtualmente paralizada. Denunció el paro como una "sabotaje criminal". Convocó al pueblo a salir a la calle y rodear edificios, instalaciones y otros bienes de la empresa, a fin de apoyar al gobierno en su esfuerzo por presionar a la gerencia a levantar la paralización.

El conflicto petrolero se hizo central, y las demás acciones perdieron relevancia. La paralización de la industria dio una dimensión profunda a la crisis. Más allá del gobierno de Chávez, el conflicto perseguía la quiebra financiera del Estado venezolano. En el caso de tener éxito la gerencia de PDVSA, manteniendo el control de la empresa y forzando la salida del presidente, se convertiría en un actor con poder de veto sobre los gobiernos electos, una empresa por encima del Estado nacional capaz de imponer su proyecto político a éste y a la sociedad en su conjunto. Pese a los muchos pronósticos que aseguraban que no había gobierno venezolano que aguantara un paro petrolero, hacia mediados de enero la evolución del conflicto tendía a favorecer al gobierno. Lentamente éste volvía a ganar control sobre la empresa, activaba diferentes operaciones, y anunciaba un proceso de reestructuración de la misma. Hacia principios de febrero más de 5 mil gerentes y trabajadores habían sido despedidos por abandono del trabajo y la empresa había logrado rescatar todos sus tanqueros, iniciar el proceso de arranque de sus refinerías, y exportar poco más de un millón de barriles diarios, un poco más de un tercio de su capacidad normal. En el mes de febrero esta tendencia se hizo franca: los despidos pasaban de 11 mil y se habían reiniciado la exportación de crudos y la producción de derivados.

EL GOBIERNO DE CHÁVEZ: ¿LEGÍTIMO?

En un libro clásico de la sociología de Barrington Moore Jr. publicado en 1978, que se titula *La injusticia. Las bases sociales para la obediencia y la rebeldía*, se explica cómo toda sociedad establece los límites permitidos para quienes gobiernan y quienes son gobernados en aras de la convivencia social. Estos límites pueden estar explícitos, como en la Constitución, o implícitos, como en costumbres y modos de comportamiento. Cuando alguna de las partes, autoridad o gobernado, viola esos límites, se producen indignación moral y sentimientos de injusticia que impulsan la rebeldía. En Venezuela se habían producido desde hacía al menos dos décadas estos sentimientos hacia el gobierno y el Estado, tanto por parte de sectores populares como, más recientemente, por parte de sectores empresariales, gerentes de PDVSA, grupos de clase media y sindicatos tradicionales. ¿Por qué?

Las reglas de la convivencia social y los límites entre gobernantes y gobernados, cimentados en los pactos constitutivos del sistema democrático venezolano de 1958, permitieron relativa paz social en Venezuela por cerca de tres décadas. Pero desde la década del ochenta esas reglas han venido siendo violentadas por el creciente empobrecimiento y cierre de expectativas

de mejora económica y ascenso social que padecen las grandes mayorías (Roberts, 2001; López Maya y Lander, 2001; Briceño León, 2000; entre otros). La exclusión y polarización social, que en nuestras sociedades constituyen un problema histórico, resultado del proceso de colonización, fueron poco superadas por la república nacida de las luchas emancipadoras del siglo XIX. Pero en las décadas del sesenta, setenta e incluso ochenta, la democracia resultante del pacto de Punto Fijo se legitimó con una promesa de inclusión y justicia social por la vía de la distribución de la renta petrolera y la construcción del orden democrático (Coronil y Skurski, 1991).

Esta promesa sería explícitamente rota por los gobiernos venezolanos después del Caracazo de 1989, con la aplicación explícita de programas de ajuste y reestructuración económica de naturaleza neoliberal, así como por la sustitución del discurso de inclusión, armonía y unión social del Estado nacional-populista por el del liberalismo individualista (id.). Por otra parte, ese episodio del Caracazo, con la masiva represión con la que fue resuelto, motivó una toma de conciencia colectiva sobre esa ruptura producida. Nunca más los partidos de Punto Fijo pudieron recuperar la legitimidad perdida.

A mediados de la década del noventa la creciente polarización social va a encontrar expresión política en actores y proyectos también polares, que hasta la fecha se muestran incapaces de reconocerse uno al otro, de respetarse entre sí y, consiguientemente, de moverse de acuerdo con reglas de juego transparentes en la lucha por alcanzar el predominio político en nuestra sociedad. La sociedad venezolana vive desde la década del noventa lo que Gramsci conceptuó como una lucha hegemónica, donde actores con proyectos distintos para la sociedad buscan predominar recurriendo a reglas institucionales pero también extra-institucionales (Laclau, 1985). En diferentes momentos de esta lucha hegemónica, en 1992, y dos veces durante 2002, los actores decidieron hacer caer el tablero del juego democrático para alcanzar el predominio político. Afortunadamente, hasta ahora, ninguno tuvo éxito.

En 1998, de acuerdo a reglas democráticas establecidas en elecciones transparentes, Chávez, y la alianza de fuerzas conocida como el Polo Patriótico, alcanzaron el predominio político para gobernar según su proyecto ofrecido en campaña electoral. Cristalizó entonces la hegemonía del proyecto político llamado bolivariano. Estos mismos actores y su proyecto fueron ratificados por la sociedad venezolana en el referendo constitucional de 1999 y las elecciones de 2000. Chávez y su alianza política representan principalmente, aunque no en forma exclusiva, los intereses de los pobres y empobrecidos del proceso sociopolítico venezolano que aspiran a la inclusión y justicia social. El proyecto bolivariano promete la refundación de la república, el desplazamiento de la vieja élite política, la permanencia de un Estado regulador de diversos aspectos de la vida económica y social, la propiedad estatal del petróleo y la universalidad de los derechos sociales.

Sus adversarios, con distintos matices e ideologías que se orientan principalmente por la doctrina del liberalismo, han recibido el respaldo mayoritario de los sectores medios y altos de la población. Ellos expresan el otro polo social, por el momento no hegemónico. Si bien la polarización política actual tiene estas bases sociales reales y duras que nunca debemos perder de vista por los poderosos intereses que tras ellos se alinean, hay sin embargo factores adicionales que han llevado la confrontación legítima a un antagonismo extremo, que pone en peligro la posibilidad de una superación democrática de la confrontación. Por una parte, desde que asumiera el poder, pero de manera más aguda desde los últimos meses de 2001, el gobierno de Chávez alteró reglas de la convivencia social venezolana, en el sentido que le da Moore al término: aprobó leyes medulares a su proyecto político sin someterlas al necesario debate democrático, e hizo uso de símbolos de fuerza y amenazas para amedrentar a la oposición cuando ésta ha ejercido su derecho a la protesta, aunque es indispensable reconocer que en los tres primeros años de gobierno de Chávez la represión del Estado a estas movilizaciones fue notoriamente menor a la de gobiernos previos (López Maya, 2002). El presidente recurrió permanentemente, hasta el golpe de abril, a un discurso pugnaz, discriminatorio y ofensivo, descalificando a sus opositores y exponiéndolos al escarnio público. El oficialismo ha buscado penetrar organizaciones sociales como la CTV para cooptarlas o ahogarlas, incumpliendo su obligación de producir seguridad y protección y de mantener la paz social.

Muchos de los actores sociales y políticos de la oposición se radicalizaron ante esta conducta gubernamental, y convocaron a la insurrección del 11 de abril aduciendo que era legítima por las violaciones a la convivencia social realizadas por el gobierno y la alianza de fuerzas que lo respaldan. En medio de su resentimiento, estos sectores, respaldados por medios de comunicación también polarizados y radicalizados, por encuestas de opinión en su mayoría también polarizadas del lado de la oposición, identificaron su rechazo al gobierno y su proyecto político con un supuesto rechazo que tendría toda la sociedad venezolana. Desde su posición se trataba de una insurrección “popular” mayoritaria, por no decir unánime. Según estos grupos, el gobierno no tenía ya piso político.

Pero tal como se hizo patente el 13 de abril y luego a lo largo del resto del año, esto era y sigue siendo un craso error de diagnóstico.

¿Por qué la oposición no percibe al otro, a los sectores populares que siguen dándole un sólido respaldo a Chávez y su proyecto político? A mi modo de ver aquí juega un papel central la calidad de las organizaciones sociales y políticas de oposición. O quizás habría que decir con más propiedad la calidad de sus dirigentes. FEDECAMARAS, la CTV, los medios de comunicación privados, la alta gerencia de PDVSA, las diversas organizaciones que se autodenominan ‘sociedad civil’, inclusive los partidos emergentes como Primero Justicia, o tradicionales como COPEI, siguen concepciones doctrinarias liberales individualistas que exaltan las virtudes del ámbito privado mientras colocan todos los vicios de la vida en sociedad en el ámbito público, en el Estado. Estas organizaciones y medios de comunicación se han fortalecido y vienen llenando el espacio político en Venezuela como resultado del rechazo a la política, a los políticos y a los partidos que se convirtió en sentido común en las décadas del ochenta y noventa. El discurso democrático de estas organizaciones se agota rápidamente, como en efecto lo corroboramos en su respaldo inicial al golpe de Estado y al paro insurreccional de diciembre, toda vez que –salvo la CTV– son organizaciones conceptualmente concebidas para ejercer una ciudadanía que se relaciona, en la mejor tradición liberal conservadora, con derechos de propiedad y no con la solidaridad social. Son organizaciones concebidas, en palabras de Edgardo Lander, para la defensa y preservación de derechos de los que ya tienen y no para la inclusión de los que no tienen (1995: 135). De manera que les resultan irrelevantes, amenazadoras o incluso inexistentes las organizaciones populares, cuya concepción de ciudadanía no puede sino ser distinta, porque en ellas se trata de luchar por el cambio. Políticamente hablando, los sectores populares sólo pueden ser vistos por los otros, cuando los ven, como no ciudadanos y amenazas a la propiedad y a la seguridad. De allí el frecuente uso de calificativos despectivos como hordas, turbas, etc., para referirse a ellos. Este no es el caso de la CTV, procedente de otros orígenes doctrinarios y políticos. No obstante, su dirigencia, de dudosa legitimidad, pues el proceso electoral que la llevó a los máximos cargos de la Confederación estuvo lleno de vicios, se ha venido plegando a las concepciones de esta llamada sociedad civil y ha tenido responsabilidad mayor en estas insurrecciones. En el caso del partido AD, también de base doctrinaria socialdemócrata, el pragmatismo y la mediocridad de su dirigencia actual les impiden orientar, y al igual que la CTV, se dejan conducir por los intereses económicamente poderosos del momento.

La ceguera de esta oposición le ha estado haciendo el juego a poderosos intereses nacionales e internacionales que no creen ni se interesan en la democracia, llevando al quiebre institucional, y a salidas plutocráticas y autoritarias. Porque ni el 11 de abril ni en diciembre se estaba ante la presencia de una revuelta popular al estilo de las que derrocaron al socialismo realmente existente en algunos países de Europa Central, o más recientemente, la revuelta popular que condujo a la renuncia del presidente De La Rúa en Argentina a fines de 2001. Estos gobiernos y el Estado mismo que representaban habían perdido toda legitimidad, las insurrecciones allí reflejaban una carencia total de piso político. Ese no es el caso de Chávez y su alianza política. En este caso hemos presenciado gigantescas protestas de la oposición en rechazo a políticas de un gobierno que, si bien violaba tradicionales normas de convivencia social, seguía siendo legítimo para otra gigantesca porción de la sociedad. Para ese otro sector, la legitimación proviene precisamente de haber restablecido un discurso y un proyecto político de inclusión para los históricamente excluidos. Ello ha estado a la vista alrededor del Palacio de Miraflores el día 13 y en las incontables movilizaciones populares de diciembre y

enero en defensa del gobierno y para presionar a la gerencia petrolera a levantar la paralización de la industria.

Pero no son percibidas, o son desestimadas, por quienes en el otro bando marchan y realizan sus actividades insurreccionales, la otra sociedad civil, por las carencias teóricas y prácticas de organizaciones inadecuadas para la representación y mediación política. Gobiernos impopulares elegidos democráticamente siempre ha habido, y gobiernos ilegítimos para ciertos sectores de la sociedad también. En democracia, los actores de vocación democrática los combaten dentro del estado de derecho. Es la única garantía para quienes no somos poderosos de que nuestros derechos e intereses serán respetados.

COMO CONCLUSIÓN: LOS DESAFÍOS PARA LA DEMOCRACIA VENEZOLANA DEL SIGLO XXI

La crisis política venezolana sigue abierta. Las tendencias conspirativas para una salida autoritaria por parte de ambos bandos siguen presentes. Distintas instituciones de los poderes públicos, como las instancias administradoras de la justicia, los cuerpos de seguridad del Estado, el Poder Electoral y el Poder Ciudadano (Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Contraloría), se encuentran fuertemente averiadas por la politización y polarización que las han penetrado y las aventuras autoritarias que ha vivido la sociedad en 2002. Con el paro petrolero, además, las finanzas del Estado quedaron severamente golpeadas, y sólo una acción inteligente y sostenida en el tiempo por parte del gobierno podría recuperarlas en un lapso prudencial. Dados todos estos ingredientes, el panorama para la recomposición de la institucionalidad democrática venezolana luce hoy como un desafío gigantesco. Los procesos insurreccionales que se han desarrollado y los resultados que de ellos se derivarán en el corto y mediano plazo tendrán una influencia decisiva en la pervivencia y la calidad de la democracia no sólo en Venezuela sino también en América Latina en el futuro inmediato. La crisis ha revelado varios desafíos a la democracia que amenazan a sociedades y Estados nacionales como el venezolano.

La relación entre el Estado nacional y las corporaciones transnacionales, ¿es de predominio o de subordinación? Durante esta crisis el enfrentamiento entre los proyectos políticos de PDVSA y del gobierno de Chávez ha sido epicentro de las dos insurrecciones y revela el inmenso poderío que manejan las empresas en el mundo globalizado. El Estado venezolano –y con él la democracia– ha sobrevivido por ahora a este ataque a sus bases económicas. Sin embargo, cabe preguntarse: un Estado no petrolero, o sin el sólido apoyo popular, ¿lo hubiera podido hacer? De haber sucumbido, ¿qué tipo de sistema político hubiese emergido? ¿Qué calidad tendría una democracia en un Estado nacional disminuido y en presencia de una corporación con poder real de veto frente al gobierno?

El rechazo a la política y a los políticos, fenómeno generalizado de las últimas décadas, y la conversión del ciudadano en consumidor de bienes culturales influido decisivamente por medios de comunicación transnacionalizados, han incidido en dificultar la creación de condiciones y actores que promuevan con éxito espacios y acciones facilitadoras de procesos de negociación que eventualmente puedan llevar a la construcción de acuerdos entre los bandos en pugna. Los actores políticos de la actual coyuntura venezolana, faltos de formación y experiencia política, imbuidos en nociones individualistas y de anti-política, han mostrado reiteradamente su incapacidad para contribuir significativamente a la superación de la crisis en democracia.

El caso del rol político jugado por los medios de comunicación privados venezolanos en los procesos insurreccionales del año 2002, entre otras cosas, pone descarnadamente en evidencia el conflicto no resuelto entre el derecho a la libertad de expresión de los medios, defendido por sus dueños, y el derecho a la información veraz y oportuna defendido por el ciudadano común. En un mundo mediático globalizado, el poder de los medios con frecuencia supera al de los Estados nacionales, y no existen suficientes contra-balances sociales, internos o internacionales, para contenerlo.

La crisis política venezolana de estos años ha revelado con claridad el papel que puede seguir

desempeñando el Estado nacional como mediador entre los intereses de las sociedades nacionales e instancias y actores transnacionalizados que detentan el poder mundial. En el contexto de la hegemonía de los procesos de globalización neoliberal, el Estado nacional puede representar un espacio desde donde se desarrollan estrategias de resistencia y se construyen alternativas para las grandes mayorías excluidas de nuestras sociedades. Con gobiernos de vocación popular posesionándose de gobiernos de la región, la experiencia del Estado y gobierno venezolano, con sus errores y aciertos, alimentará estrategias para las fuerzas que se resisten al neoliberalismo respecto de cómo moverse en un mundo cada vez más difícil y conflictivo.

BIBLIOGRAFÍA

Briceño León, Roberto 2000 "Hilos que tejen la vida social", en Asdrúbal Baptista Venezuela siglo XX. Visiones y testimonios (Caracas: Fundación Polar) Vol. 1, 125-154.

Coronil, Fernando y Julie Skurski 1991 "Dismembering and Remembering the Nation: The Politics of Violence in Venezuela", en *Comparative Studies in Society and History*. Vol. 33, N° 2, 288-335.

Laclau, Ernesto 1985 "Tesis acerca de la forma hegemónica de la política", en Labastida, Julio y Martín del Campo Hegemonía y alternativas políticas en América Latina (México: Siglo XXI).

Lander, Edgardo 1995 Neoliberalismo, sociedad civil y democracia. Ensayos sobre América Latina y Venezuela (Caracas: Ediciones de la UCV).

López Maya, Margarita 2002 "Entre protestas y contraprotestas el gobierno de Chávez se endurece y debilita", en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) N° 6, Enero, 97-103.

López Maya, Margarita y Luis E. Lander 2001 "Ajustes, costos sociales y la agenda de los pobres en Venezuela: 1984-1998", en Sader, Emir (comp.) El ajuste estructural en América Latina (Buenos Aires: CLACSO-ASDI) 231-254.

Mommer, Bernard s/f "Petróleo subversivo", en Lander, Luis E. Poder y petróleo en Venezuela (Caracas), en prensa.

Moore, Barrington jr. 1978 *Injustice. The Social Bases of Obedience & Revolt* (EEUU: The Macmillan Press Ltd.).

OSAL 2002 (Buenos Aires: CLACSO) N° 7, Junio.

PROVEA Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos 2002 (Caracas: PROVEA) Informe Anual.

Rey, Juan Carlos 2002 "Un insólito golpe de Estado", en Sic, N° 646, Julio, encartado. *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* 2002 (Caracas: Universidad Central de Venezuela) Vol. 8, N° 2, 185-282.

Roberts, Kenneth 2001 "La descomposición del sistema de partidos en Venezuela vista desde un análisis comparativo", en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* (Caracas) 183-200.

NOTAS

* Universidad Central de Venezuela.

1 Preparado para su presentación en el encuentro 2003 de Latin American Studies Association, Dallas, Texas, 27-29, 2003.

2 La reconstrucción de eventos de este año se ha elaborado a partir de la información de varios diarios: El Nacional, que fue central en los primeros meses de 2002, y Últimas Noticias, central

en lo relativo al paro petrolero de diciembre y enero, ya que El Nacional se sumó al paro. La información de estos dos diarios nacionales fue confrontada y complementada por El Universal, La Jornada (México), Clarín (Argentina) y páginas web de diversa procedencia.

3 Para estudiar la reforma petrolera del gobierno de Chávez y sus diferencias con la política de “apertura” desarrollada en la década pasada véase Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales (2002), cuyo tema central está dedicado a esta cuestión. También recomiendo Mommer (2002).

4 Sobre el golpe de estado del 11 de abril véase OSAL (2002), donde existen una cronología y varios análisis. También PROVEA (2002) y Rey (2002).

5 N de la E: PDV Marina es la filial de PDVSA encargada de trasladar el crudo desde Venezuela a los países importadores como EE.UU.

Sociedad civil y construcción de nueva subjetividad social en Uruguay: condicionamientos, conflictos, desafíos

Alfredo Falero*

En Uruguay, como en toda América Latina, se experimentan búsquedas, se tantean caminos, hacia una nueva etapa cuyas características son absolutamente inciertas. Lejos de constituir una excepcionalidad regional, el empobrecimiento creciente, la extensión de la marginación y la expropiación sin precedentes que viven sectores bajos y medios constituyen manifestaciones inequívocas de la crisis económica instalada, pero sobre todo es el producto inevitable de un patrón de acumulación gestionado desde hace años, en el caso uruguayo, por la centro-derecha del espectro político.

En este contexto, la oposición política, el Encuentro Progresista-Frente Amplio, que aglutina un abanico de sectores que va de la izquierda al centro político, es capaz de acumular descontentos diversos, de crecer elección tras elección, pero al mismo tiempo se presenta atravesado por dosis inéditas de pragmatismo y moderación, frecuentemente con efectos paralizantes. Cada posicionamiento, cada acción, aparece minada con la excesiva prudencia que marca el temor de complicar resultados electorales, lo que a su vez realimenta el desconcierto en una corriente social de cambio que sigue mirando como referente a esa fuerza política.

En todo caso, está latente una vez más el recurso del capital simbólico acumulado, del que se espera, una vez abierto en toda su magnitud el juego electoral, logre neutralizar o matizar los anteriores desconciertos de quienes se alinean en giros políticos de transformación social, e involucrarlos más activamente ante expectativas cercanas de obtener el gobierno. De todos modos, también subyace en tal postura, y en esta coyuntura, la proyección de un escenario enormemente simplista y simplificador que no vamos a caracterizar aquí, aunque el simple sentido común indica que no puede esperarse que quienes gozan de privilegios los cedan sin luchar.

Dentro de este complejo panorama actual signado por la agudización de la degradación social y el utilitarismo y la inoperancia del sistema político se observa un conjunto importante de prácticas colectivas de resistencia, un arco de viejas e inéditas manifestaciones de descontento, acciones de construcciones sociales clásicas y un abanico de experiencias creativas. Pero también existe una evidente percepción de incapacidad y frustración para generar una corriente que pueda incidir en las decisiones políticas. El objetivo de este trabajo es dar cuenta de una aproximación a esos dinamismos considerando un contexto de crisis y de reestructuración social. Se trata, más que de abordar esa pregunta equívoca del impacto de acciones colectivas concretas, de considerar un conjunto de expresiones sociales de demanda, desde actores visualizados no como dados o construidos, sino como en construcción y con potencialidad de abrir otro horizonte de posibilidades. En este sentido, la condición de desarrollo de algunos procesos nos exige ser prudentes. Así, la crisis financiera del año 2002 trajo movilizaciones inéditas como la de los deudores en dólares, pero un balance sociológico adecuado de las mismas exigiría una perspectiva temporal de la que todavía no se dispone. Esto nos lleva a explicitar algunos aspectos teórico-metodológicos.

ALGUNAS CLAVES CONCEPTUALES

Una primera clave que subyace al presente abordaje es que si se elige como único referente el concepto de movimiento social estaríamos cerrando el razonamiento a nuevas configuraciones, obviando los cambios que van germinando discretamente en el tejido social y que hacen a esa capacidad de construcción de lo nuevo. Por ello es preciso en principio considerar un concepto aglutinador de un todo complejo para luego dar cuenta de experiencias que transforman individuos y colectivos (Thompson, 1981) y de elaboración de significados de las demandas sociales (Sader, 1995).

La designación de sociedad civil para considerar lo anterior, en tanto referente sumamente extendido como distinción analítica con el ámbito estatal y con la esfera del mercado, puede ser útil siempre y cuando reparemos brevemente en la intensa disputa de sentidos de que es objeto el concepto y fijemos una dirección. En lo que aquí se presenta, y en la perspectiva ya desarrollada en trabajos anteriores (Falero, 2001[a]), aproximamos el concepto en una dirección gramsciana como campo donde aparece en tensión permanente la construcción de subjetividades y proyectos de sociedad encontrados.

Frente a abordajes que la presentan como mera pluralidad atomística de individuos, grupos u ONGs, como pura diversidad emanada de disolución de contenidos clasistas, rescatamos un ámbito de constitución de sujetos sociales que nos remite a la importancia de la construcción de hegemonía como expresión nuclear de un proyecto estratégico, como apropiación subjetiva y real de elementos de transformación social. En tanto campo de tensión hegemónica, en tanto ámbito de generación de una cultura de referencia alternativa a las relaciones dominantes, tiende a remarcarse a nuestro juicio un aspecto crucial que hace a la dificultosa y contradictoria formación de un nuevo sentido común (de Sousa Santos, 2000), de una nueva subjetividad social y de su capacidad de construcción (Zemelman, 1998).

A partir de lo anterior proponemos en lo que sigue una operacionalización de sociedad civil, reparando en dos aspectos esenciales.

Por un lado, los grandes ejes estructuradores, es decir, movimientos sociales que si bien parten de un tejido social que puede ser más atomizado o más denso presentan cierta permanencia en tanto vectores constituidos en la construcción de lo alternativo. No obstante, su propia complejidad los vuelve sensibles en su interior a tironeos de lógicas culturales diferentes e incluso del propio poder dominante, en tanto éste permanece convenientemente invisible, diseminado por el entramado de la vida social (Eagleton, 1997). O en la perspectiva más reciente de Holloway (2002), se trata de considerar la incidencia de una forma de socialidad de “poder sobre” que es potencialmente desplazable por una socialidad de “poder hacer”.

Por otro lado, la capacidad de construcción de redes de micro-organizaciones del tejido social – insistimos, a partir de la articulación de necesidades, experiencias y expectativas– lo que supone ponderar la activación de prácticas inéditas, si bien sujetas a discontinuidades, de proyectos que abren otros horizontes posibles, en suma de creatividad social y nuevas formulaciones.

Si bien ambos ejes analíticos son parte de un todo interrelacionado, la distinción es una exigencia metodológica insoslayable para poder abordar el doble ángulo de lo constituido y lo constituyente (Negri, 1994), los productos de una determinada construcción sociohistórica pero también la apertura a lo posible, en el contexto de sociedades que están sujetas a una profunda reestructuración. Precisamente, es preciso realizar algunas breves observaciones de contexto sobre lo que este tránsito implica para el Uruguay.

EL URUGUAY DISTINTO

La literatura uruguaya en ciencias sociales exageró, a nuestro juicio (Falero, 1999; Robertt, 1997), en la adjudicación al Estado de un particular carácter de iniciativa como desencadenante de cambios que marcaron a fuego la dirección que se cristalizó en Uruguay desde principios del siglo XX. No cabe duda de que jugó un eficaz papel articulador en la generación de un modelo que tendió a matizar desigualdades socioeconómicas fuertes y que alimentó hasta ahora el mito integrador de la movilidad social ascendente generalizada, pero no puede entenderse ese papel sin la presencia de un movimiento sindical fuerte y de articulaciones construidas por otros actores y en otros contextos.

Esto quedó definitivamente cancelado. No sólo quedó atrás incluso el propio crepúsculo del modelo estatal heredado de comienzos del siglo XX, del llamado primer batllismo, sino que caducó el esquema material y simbólico de integración social que lo legitimó. En verdad, ya

Real de Azúa (1971: 200) lo adelantaba genialmente a fines de los años sesenta al apuntar a la caducidad de toda esta estructura mental y entonces sin reemplazo visible. Se puede decir que las exequias del modelo duraron más de cuarenta años.

Paralelamente, el nuevo patrón de articulación económica y política con el exterior, designado con el eufemismo de “nuevo modelo exportador”, comenzó contradictoriamente a cristalizarse con una manifiesta profundización de un relacionamiento asimétrico, común a la región. Ello ocurrió de la mano de un giro autoritario nítido del presidente Pacheco en 1968. La sucesión de oscuras figuras presidenciales a partir de Pacheco inclusive –Bordaberry y los militares de una dictadura que contó con abundantes cómplices y cortesanos provenientes de los partidos tradicionales, Sanguinetti y una recuperación democrática condicionada– basaron su prédica en un enemigo interno, en orden contra caos, que adquirió y adquiere sucesivas y renovadas designaciones.

No puede escatimarse una continuidad básica en este sentido, desde un comienzo de prédica anti-subversiva que incluía a los tupamaros pero también a partidos, sindicatos u otras organizaciones que supuestamente irrumpieron en una arcádica “Suiza de América”, pasando por la demonización genérica de marxistas hasta el más reciente rótulo de populistas, que puede incluir las más variadas opciones políticas que se pretenda criticar.

De la dictadura que duró entre 1973 y 1985 se salió luego de un intento de auto-legitimación fracasado con el plebiscito militar de 1980, a partir de la eclosión de la organización de sectores populares (Filgueira, 1985) –especialmente a través de tres movimientos sociales importantes: sindical, estudiantil y FUCVAM, organización que nuclea las cooperativas de vivienda por ayuda mutua– y de la acción de los partidos políticos que buscaron una salida pactada en un contexto donde el propio poder económico había ya quitado su apoyo. Los gobiernos electos posteriores –los presidentes Sanguinetti, Lacalle, Sanguinetti nuevamente y Batlle– fueron promotores de ajustes fiscales regresivos, gestores de la consolidación de un patrón de crecimiento socialmente excluyente¹, y cultores, especialmente en el caso de los dos gobiernos de Sanguinetti y en el de Lacalle, de la imagen de un elenco militar siempre acechante, ingrediente básico para el fracaso del referéndum contra la ley de impunidad de los militares en 1989. Imagen continuada en un contexto regional que contradictoriamente no admitía intentos golpistas exitosos.

Existe otro aspecto importante a considerar en ese nivel. Porque aún teniendo presente la transformación de la forma Estado y el fortalecimiento del Poder Ejecutivo en Uruguay (de Sierra, 1992) debe observarse que la sucesión de integrantes de los poderes ejecutivos post-dictadura se fundó igualmente sobre complejos equilibrios políticos difíciles de desmontar, que impidieron un avance del modelo como el que se registró en otros países de la región de la mano de lo que suele rotularse como “globalización neoliberal”.

En especial, ello ocurrió por el funcionamiento de las maquinarias partidarias tradicionales y su necesidad intrínseca de cooptación y corrupción, más generalizada de lo que suelen admitir algunos enfoques, y por la oposición del Frente Amplio, su crecimiento electoral y una sociedad civil fluctuantemente movilizada. Esto explica, junto a la presión de caudillos locales del interior, que en 1992 el 73% de la población diera al gobierno Blanco de Lacalle el mandato de no vender las empresas del Estado mediante un plebiscito (Vitelli, 1998).

En tanto la economía uruguaya post-dictadura adquirió cierto dinamismo, en el que los principales beneficiarios fueron sobre todo los sectores financiero y exportador, resulta extremadamente simplista considerar al sector asalariado como generalizadamente afectado. Mientras sectores asalariados medios, como por ejemplo los empleados bancarios, fueron beneficiados hasta fines de la década del noventa, hubo por el contrario asalariados fuertemente afectados, marcados por ejemplo por la desindustrialización, que llevó a la pérdida de unos 66 mil puestos de trabajo en la industria manufacturera sólo entre 1990 y 1998 en un país de poco más de tres millones de habitantes, y por el desmantelamiento progresivo del estado de bienestar (Olesker, 2001). Todo lo anterior complejizó un proceso de desintegración social que tuvo también otros carriles.

La crisis económica y su manifestación financiera, la dramática situación social que estalló en

toda su magnitud en 2002, marca pues el fin de un proceso y el inicio de uno nuevo. Simplificando la conformación de escenarios posibles, el rumbo será producto de la capacidad de actores colectivos para redireccionar la sociedad en un sentido alternativo o de la capacidad de reacomodamiento de los mismos sectores económicos, articulados a las agencias globalizadas, para llevar adelante un proyecto de crecimiento excluyente. Corresponde pues en lo que sigue señalar las mutaciones y permanencias, las limitaciones y potencialidades que se les presentan a los actores de la sociedad civil uruguaya en la construcción de un horizonte alternativo.

EJES DE CONSTRUCCIÓN DESDE LA SOCIEDAD CIVIL

En primer lugar debe hacerse notar la acción de un movimiento sindical que hunde sus raíces en la segunda mitad del siglo XIX y se construye como independiente del Estado a la vez que cruzado, motivado, por las corrientes ideológicas de transformación social que caracterizaron el siglo XX, y que fue un activador de demandas ante el Estado y la empresa privada. Considerando el modelo anteriormente delineado, que se basaba en la inserción en el trabajo formal, y donde los demás derechos sociales eran construidos a partir de tal inserción, el movimiento sindical se convirtió en el gran eje estructurador de la sociedad civil uruguaya. No es novedad postularlo, pero claramente el universo de construcción de la subjetividad social sentaba una base importante en el sindicato. Es una subjetividad que no se construye en la tranquila continuidad de lo seguro, como a veces se exagera apelando equívocamente a la caracterización de “sociedad amortiguadora”: se construye en el conflicto, en la huelga (como por ejemplo en la de 1962, que frustra el primer intento de congelar salarios), en la tensión entre corrientes sindicales, y finalmente en la represión.

Ciertamente, estando afectada más globalmente la materialidad y la subjetividad del ser que vive del trabajo, está agotado un modelo de sindicalismo global (Antunes, 1999). En el caso uruguayo, la subjetividad se construye ahora sobre una base muchísimo menos tributaria del eje sindical, tanto por ese proceso de desindustrialización mencionado –40% de obreros en el I Congreso Extraordinario de mayo de 1987 contra 19% en el VII Congreso de julio de 2001 (Falco, 2001)– como por el avance del empleo precario e informal, o directamente el creciente desempleo. Se calcula que en 2001 un 54,4% tenía problemas de empleo en Montevideo, y un 62,9% en el interior urbano. En cuanto a la desocupación abierta de 2002, el porcentaje trepó a un 19% en el trimestre julio-setiembre². Notoriamente estas cifras afectan a cualquier movimiento sindical, pero también existen otros problemas que hacen a la baja credibilidad que ostenta el propio sindicato como vehículo para incidir en la realidad.

Frecuentemente sujeto a disputas internas que recortan su capacidad de maniobra, exhibe dificultades para constituirse en tan sólo un vector de la trabajosa construcción de lo alternativo en una sociedad transformada. Más allá de medidas como los paros generales, una de las pocas manifestaciones recientes que contó con apoyo masivo, a excepción de la llamada Concertación para el Crecimiento, sobre la que volveremos, fue una marcha a Punta del Este realizada el 24 de enero de 2002. No obstante, y paradójicamente, su éxito debe adjudicarse más a la publicidad no buscada generada por la prohibición del gobierno del presidente Batlle de entrar en el balneario y a los intentos de desacreditarla por dirigentes de los partidos tradicionales, que a méritos propios de organización en el marco de facilitar la discusión a un nivel de tejido social.

En segundo lugar, cabe destacar el ya mencionado movimiento de cooperativistas de vivienda por ayuda mutua, FUCVAM, federación fundada en 1970 a partir de algunas cooperativas de viviendas generadas en el interior del país, que actualmente aglutina más de trescientas cooperativas de base y unas 16 mil familias. A nuestros efectos, importa destacar que no sólo no se presenta como acotada a la reivindicación puntual de préstamos para construcción de cooperativas de vivienda, sino que tiene una visión de sociedad más amplia y promueve un estilo de vida. En tal sentido su presencia como movimiento ha sido notoria en diversas expresiones colectivas. Pero paralelamente sus acciones incluyen en las actuales circunstancias desencadenar algunas estrategias colectivas para permitir acceder a alimentos. Asimismo, las cooperativas generan fuertes redes de intercambio en algunos barrios en que se insertan y contribuyen a recrear un tejido social fracturado.

En tercer lugar, debe señalarse el resurgir a partir de 1996 de un movimiento estudiantil de enseñanza secundaria. Caracterizado por su discontinuidad y por considerar clave para su funcionamiento el regenerar una organización más bien laxa preocupada por la horizontalidad y la construcción de consensos, ha irrumpido con movilizaciones anuales que incluyeron la ocupación de centros educativos y ha tenido expresiones públicas y planteamientos que expresan mucho más que insatisfacciones educativas puntuales.

Otras características presenta la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, FEUU. Si bien pasó coyunturas históricas con grandes movilizaciones, como en 1958, y el reclamo de la ley orgánica de la Universidad (D'Elía, 1969), o en 1968, cuando se cuestionaron radicalmente las estructuras de dominación (Landinelli, 1989), su impacto público es más bien efímero. Es cierto que ha recobrado cierto nivel de movilización anual cuando se discute en el Parlamento el presupuesto destinado a la educación superior, que ha revitalizado recientemente la más bien modesta práctica de acercamiento con la sociedad, la extensión universitaria, pero es más dependiente de su dirigencia y de otros actores de la universidad que de su propia capacidad para construirse como movimiento desde la cotidianeidad, lo cual no permite advertir un potencial de transformación social significativa.

Cabe finalmente completar este rápido cuadro con una referencia respecto a quienes se mueven en el ámbito de los derechos humanos. A modo de señalamiento de algunos aspectos manifiestos de la temática corresponde mencionar importantes marchas anuales y proclamas que terminaron limitándose a "por la verdad", así como algunos intentos de establecer variantes uruguayas de los "escraches" argentinos con objetivos más ambiciosos, pero de convocatoria acotada.

Pero más allá de estas expresiones, que dejan entrever una fragmentación notoria en varios nucleamientos, debe marcarse como central la búsqueda incansable de apertura de la sociedad a un tema nunca resuelto. Intencionalmente nunca resuelto, puesto que los gobiernos post-dictadura ejercieron sucesivos intentos de clausuras con notoria complicidad mediática y entre amenazas de desestabilización, con la excepción de la Comisión para la Paz del presidente Batlle, si bien ostenta resultados más bien modestos o al menos polémicos.

MOVILIZACIÓN DE BASE RURAL Y CONCERTACIONES

La segunda mitad de la década del noventa marca el desarrollo de movimientos locales de protesta en ciudades del interior del país. Entre sus primeras manifestaciones está el caso de Paysandú, una ciudad con desarrollo industrial en rápido declive. Allí, a fines de mayo de 1997, una manifestación policlasista contra el rumbo de la hambruna producto de la construcción de un consenso social inédito se convirtió en el primer mojón de sucesivas movilizaciones. Igualmente otras ciudades comenzaron a tener inéditas movilizaciones que incorporaban además de asalariados, a pequeños y medianos comerciantes. Debe ponderarse adecuadamente este dato en función de que los ritmos de la política en muchos de esos lugares siempre habían sido pautados por los caudillos locales y una cultura que sin ser muy estrictos podríamos calificar de oligárquica.

Otro trabajoso consenso cristalizó el 13 de abril de 1999, cuando decenas de miles de productores rurales lanzaron la mayor movilización agraria hacia Montevideo en la historia reciente del país. Puede decirse que fue una movilización de composición socioeconómica extremadamente heterogénea, y en tal sentido incluyó tanto sectores que se beneficiaron sistemáticamente por su capacidad de lobby con el sistema político como olvidados peones rurales. Pero considerando la experiencia inédita, que luego tendría otras derivaciones, debe insistirse en la resignificación que para muchos participantes supuso una expresión pública de descontento como ésta.

Entre las marchas que comenzaron a sucederse hasta la capital del país importa mencionar la de los cañeros de Bella Unión, que en diciembre de 2000 recorrieron más de 600 km. La movilización reunió a un espectro amplio de damnificados convocados por la "intersocial" de esa zona norteña del país, famosa por la organización en 1968 del Sindicato de Cañeros de

Artigas a partir del involucramiento social del dirigente socialista Raúl Sendic (Claps, 1985), quien con el tiempo se convertiría en uno de los principales dirigentes tupamaros. En suma, sectores urbanos y rurales del interior del país, habituados a prácticas de cooptación y clientelísticas de los partidos políticos tradicionales, comenzaron lentamente a tener otras prácticas y otra visibilidad pública. Aquí hay que distinguir la diferente trayectoria dibujada por los centros institucionales que agrupan a la élite agropecuaria, puesto que mientras la Asociación Rural siguió manteniendo las coordenadas habituales de interrelacionamiento con el elenco político para obtener demandas, la Federación Rural cambió su estrategia, apareciendo más demandante y participando de la Concertación para el Crecimiento. La central sindical Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) participó activamente en la organización de la primera convocatoria de la misma el 16 de abril de 2002, que logró una multitudinaria concentración, estimada en 100 mil personas, que incluía una heterogeneidad de sectores del trabajo y del capital. Notorias fueron las ausencias del sector importador nucleado en la Cámara de Comercio y los representantes de la Cámara de Industria. No obstante, tampoco todos los sectores populares estuvieron representados, ya que el movimiento cooperativista de viviendas había decidido no participar. De todos modos, la convocatoria, si bien construida desde las dirigencias de organizaciones con intereses heterogéneos y rodeada de un conjunto de dudas sobre su viabilidad, permitió canalizar un notorio descontento social al postular la necesidad de un cambio de política económica. Pero sin bases en el tejido social, el balance de sus posibilidades de continuidad y su capacidad de provocar una real inflexión está todavía abierto.

REDES BARRIALES: ENTRE LA CREATIVIDAD SOCIAL Y EL VOLUNTARIADO

No es nueva la construcción de redes barriales en Montevideo. La coordinadora de ollas populares, por ejemplo, se remonta a los años ochenta. En algunos espacios urbanos, la vitalidad de estas redes ha mantenido vivo un tejido sobre el que se activó, paralelamente con sindicatos y otras organizaciones sociales, la recolección de firmas para convocar a plebiscitos u otras formas de resistencia social. No obstante, lo que se pretende situar aquí es la generación de un dinamismo sin precedentes que constituye una respuesta a una crisis agravada en 2002 pero sólo posible como resultado de prácticas anteriores. El florecimiento de huertas comunitarias, comedores populares, nodos de redes de trueque, comisiones de vecinos, constituye expresiones de un cambio cualitativo, y no simples acciones desencadenadas ante la carencia.

Además se han ido conformando redes que vinculan y organizan comedores, merenderos, asentamientos con viviendas precarias, y que en suma constituyen un arco no siempre visible de manifestaciones colectivas. Pero lo más importante a señalar aquí es que ese arco de experiencias incluye no solamente a Montevideo sino a todo el país, especialmente en cuanto a huertas comunitarias, lo cual es bastante novedoso en función del contexto. Ciertamente no está ausente en esta dinámica, al igual que en el caso de movimientos sociales constituidos, la sociedad política, en el sentido de que muchos organizadores actúan paralelamente a un nivel de base o medio, en particular pero no exclusivamente de fuerzas políticas que componen el Frente Amplio, aunque esto no significa necesariamente que den coordinaciones entre ambos planos. Tampoco están ausentes las ONGs en su más variada gama de objetivos y perspectivas, ni los centros comunales zonales dependientes de la administración municipal de Montevideo, que vienen apoyando, especialmente en barrios periféricos, diversas iniciativas colectivas de sobrevivencia.

Llegados aquí, corresponde insertar las prácticas más allá de la coyuntura. En tal sentido, pueden postularse dos direcciones que coexisten en el contexto de la crisis y que suponen horizontes históricos diversos. Lo que sigue es una simplificación obligada, pero resulta útil para ver la tensión subyacente, los conflictos posibles en este plano que venimos desarrollando.

Por un lado, muchas acciones se enmarcan y se encaminan más en la línea del tradicional y renovado voluntariado que llena los espacios que el Estado va dejando. Es el modelo que aparece en los informativos de televisión. En este sentido, aún configuradas desinteresadamente, las acciones no constituyen una alternativa al mercado que sigue

estructurando las relaciones sociales, sino que simplemente toman, total o parcialmente, el lugar de las funciones de compensación que el Estado realizaba.

Por otro lado, existe una dirección de construcción de cultura alternativa, de fisuras en la subjetividad dominante, de generación de espacios sociales capaces de abrirse a la creatividad social y eventualmente ser base de otras expectativas. Es necesario considerar que ambos proyectos –simple voluntariado y aperturas de espacios de transformación social– suponen horizontes de desarrollo opuestos. En el primer caso pueden llegar a suponer una forma renovada de control social; en el segundo, pueden llegar a constituir el despliegue de resignificación de necesidades, bases de una sociedad más participativa y democrática. Se trata en suma, una vez más, de construcción de subjetividades sociales bien distintas.

CONCLUSIONES

La temática desborda las posibilidades de este artículo, pero si se acuerda que América Latina vive la apertura a una dinámica de búsquedas y tanteos de lo nuevo, las evidencias advierten que Uruguay no es una excepción. No obstante, frente a fenómenos de magnitud social y cuantitativa considerable como el movimiento de los Sin Tierra en Brasil o la eclosión de la sociedad civil en Argentina, por citar los casos de los países vecinos, la realidad uruguaya puede pasar desapercibida. Desvanecidos una construcción social incluyente y el mito sostenedor de la misma que además alimentaba cierta excepcionalidad regional, en un contexto de reformulación de la forma Estado, sólo quedan las exploraciones de proyectos capaces de contribuir a construir alternativas de sociedad.

En esa dinámica la sociedad civil no sólo es un terreno de apropiación semántica: también sugiere una pluralidad de contornos, componentes y aspiraciones de acuerdo al proyecto. Tanto en el accionar de movimientos sociales, entre debilidades y fortalezas, como en las prácticas de nuevos actores y la construcción de nuevas experiencias barriales existen subjetividades sociales distintas. En una coyuntura en que para mucha gente la prioridad pasa a quedar constreñida al acceso a la alimentación, la regeneración de redes comunitarias, de estrategias colectivas, pasa a ser constructora importante de subjetividad, potencialmente de lo alternativo.

Al promoverse formas, intentos organizativos no siempre visibles –a veces, improvisaciones– en la cristalización de efectivas coordinaciones horizontales, se está exhibiendo una apertura inédita a lo colectivo y a resignificar necesidades. Potencialidades sustantivas en tanto de esa construcción cotidiana dependerá la capacidad para incidir o redireccionar en este contexto sociohistórico.

No puede dejar de agregarse sobre tal capacidad lo que significa para las organizaciones de la sociedad civil el desafío de trascender los límites del Estado-nación hacia un plano regional y global. Afortunadamente también en esta dimensión hay experiencias y potencialidades en movimientos y organizaciones sociales de Uruguay, como es el caso de sindicatos y cooperativas de FUCVAM, lo que también abona, en una dirección poco cultivada durante el siglo XX, para la conformación de nuevas alternativas.

BIBLIOGRAFÍA

Antunes, Ricardo 1999 *¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre las metamorfosis y el rol central del mundo del trabajo* (Buenos Aires: Colección Herramienta/Antídoto).

Claps, Manuel 1985 “Luchas sociales y políticas en el campo uruguayo”, en González Casanova, Pablo (coord.) *Historia Política de los Campesinos Latinoamericanos* (México: IIS-UNAM/Siglo XXI) Vol. 4.

Cores, Hugo 1999 *Uruguay hacia la dictadura 1968-1973* (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental).

D’Elía, Germán 1969 *El movimiento sindical* (Montevideo: Nuestra Tierra).

de Sierra, Gerónimo 1992 El Uruguay post dictadura. Estado, política y actores (Montevideo: Facultad de Ciencias Sociales).

Eagleton, Terry 1997 Ideología (Barcelona: Paidós).

Falco, Walter 2001 "Quince años de congresos del PIT-CNT. La representatividad tan discutida", en Brecha (Montevideo) 23 de Agosto.

Falero, Alfredo 2001[a] Asimetrías y cooperación en la construcción de una sociedad civil regional alternativa (Asunción) Mayo. Ponencia presentada en el encuentro del Grupo de Trabajo de CLACSO MERCOSUR e Integración.

Falero, Alfredo 2001[b] "La sociedad civil, globalización y regionalización. Reflexiones a partir del movimiento sindical", en Revista Nueva Sociedad (Caracas) N° 171.

Falero, Alfredo 1999 "Reflexiones en torno a instrumentos conceptuales para el análisis de acciones colectivas", en Revista de Ciencias Sociales (Montevideo: Dpto. de Sociología/FCU) N° 15.

Filgueira, Carlos (comp.) 1985 Movimientos sociales en el Uruguay de hoy (Montevideo: CLACSO/CIESU/Ediciones de la Banda Oriental).

Holloway, John 2002 Cambiar el mundo sin tomar el poder (Buenos Aires: Colección Herramienta/Universidad Autónoma de Puebla).

Landinelli, Jorge 1989 1968: La revuelta estudiantil (Montevideo: Facultad de Humanidades).

León, Emma y Hugo Zemelman (coords.) 1997 Subjetividad: umbrales del pensamiento social (Barcelona: Anthropos/CRIM-UNAM).

Negri, Antonio 1994 El poder constituyente (Madrid: Editorial Libertarias/Prodhufi).

Olesker, Daniel 2001 Crecimiento y exclusión (Montevideo: Ediciones Trilce).

Real de Azúa, Carlos 1971 "Política, poder y partidos en el Uruguay de hoy", en AA.VV. Uruguay hoy (Buenos Aires: Siglo Veintiuno).

Robertt, Pedro 1997 Literatura sociológica uruguia sobre movimientos sociais (1984-1995) (Campinas) Tesis de Maestría.

Sader, Eder 1995 (1988) Quando novos personagens entraram em cena (São Paulo: Editora Paz e Terra S/A).

de Sousa Santos, Boaventura 2000 A crítica da razão indolente. Contra o desperdício da experiência (São Paulo: Cortez).

Tarrow, Sydney 1994 El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política (Madrid: Alianza).

Thompson, Edward P. 1981 Miseria de la Teoría (Barcelona: Crítica).

Vitelli, Rossana 1998 "El gobierno del partido nacional (1990-1995). Instalación o fracaso de un proyecto", en Revista de Ciencias Sociales (Montevideo: Dpto. de Sociología) N° 14.

Zemelman, Hugo 1998 Sujeto: existencia y potencia (Barcelona: UNAM/Anthropos editorial).

NOTAS

* Docente e investigador del Departamento. de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay.

1 Un indicador significativo es que prácticamente la mitad de los niños nacen en situación de pobreza según el Índice de Desarrollo Humano (2001), pero si las condiciones persisten se estima que en quince años el porcentaje treparía al 60% según un informe del Comité de los Derechos del Niño en Uruguay (2002). Para un resumen, véase La República (23 de junio de 2002).

2 Las cifras sobre problemas de empleo en el año 2001 corresponden a dos informes del Equipo de Representación de los Trabajadores en el Banco de Previsión Social, septiembre 2002. Sobre el desempleo del año 2002, el porcentaje corresponde a una estimación del Instituto Nacional de Estadísticas. Véase .

3 Los ejemplos seleccionados están basados en el seguimiento de material de prensa, especialmente del semanario Brecha y en aportes realizados mediante entrevistas.

Los conflictos sociales en el contexto de la democracia paraguaya

Quintín Riquelme*

INTRODUCCIÓN

En el Paraguay, el gobierno de unidad nacional –Partido Colorado (PC), Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y Partido Encuentro Nacional (PEN)– surgido en marzo de 1999 tras el asesinato del vicepresidente de la República, Luis María Argaña, y la renuncia del presidente, Raúl Cubas Grau, electo en mayo de 1998, rápidamente cayó en descrédito por la inoperancia en su gestión. En menos de un año el PLRA se alejó supuestamente para no avalar la incapacidad y la falta de estrategia política del gobierno, en tanto que el PEN continúa con el gobierno hasta el presente.

Los partidos políticos han perdido su calidad de mediador entre el Estado y la sociedad civil, se han distanciado de las necesidades de la gente, se desvincularon de los liderazgos sociales y de las diversas organizaciones de la sociedad civil (Morínigo, 2002). Solamente siete de cada cien personas manifiestan una actitud de confianza hacia los partidos políticos en Paraguay, aunque un 43% admite que no puede haber democracia sin partidos políticos (Latinobarómetro, 2002). La población, sobre todo la más afectada por la pobreza, asocia corrupción, impunidad e inseguridad con democracia. De acuerdo a datos publicados por Latinobarómetro, mientras en los demás países de América Latina la satisfacción con la democracia oscila del 56 al 65%, en Paraguay sólo llega al 7%. La percepción es que la democracia es muy permisiva, todo lo permite, y el poder se esfuma: nadie lo ejerce. Esta percepción, que va cobrando fuerza en la gente, reclama la vuelta de los gobiernos fuertes. El 38% de la población apoya la vuelta de un gobierno autoritario y un 63% manifiesta que no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder (Latinobarómetro, 2002). La democracia es elección, voto y nada más. Si en lo político se logró apertura, en lo social y en lo económico las cosas han empeorado. Los gobiernos electos no demostraron capacidad y mucho menos voluntad para dar respuestas a las necesidades de los sectores más carenciados. Quedó fuera de sus agendas el mejoramiento de la calidad de vida, y la riqueza se concentra en un pequeño grupo empotrado en el poder y amparado en la impunidad, con un Poder Judicial débil y obsecuente. Dentro de este panorama, las autoridades nacionales, así como los políticos en general, se encuentran ante una pérdida total de autoridad moral y de credibilidad. Las acusaciones de corrupción incluyen al propio presidente de la República, con el agravante de una gradual vuelta a prácticas de terrorismo de estado que recuerdan la peor época de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

En lo económico, el Paraguay viene soportando un estancamiento desde 1981, año en que culmina el flujo de capitales proveniente de la construcción de la hidroeléctrica de Itaipú. Durante la década del setenta tuvo un crecimiento promedio del 9%, que bajó bruscamente en 1981 llegando a menos de 2%. Desde entonces, la economía paraguaya no se ha recuperado. En 2001 el Producto Interno Bruto (PIB) llegó a 2,7% con respecto al año 2000, pero con el crecimiento poblacional del 2,6% dicho crecimiento económico quedó congelado. A este problema se debe sumar la devaluación del guaraní frente al dólar en un porcentaje cercano al 50%, lo cual incide negativamente sobre la canasta familiar. En 2002, el crecimiento estimado es de menos de 2,2%. La deuda pública alcanzó 2.201 millones de dólares, casi cuatro veces más que la reserva monetaria internacional, que está en aproximadamente 600 millones de dólares.

En lo social, alarma el crecimiento de la pobreza. De una población total de 5.830.583 habitantes, con una PEA de 2.612.370, la pobreza afecta a 1,9 millones de personas –33,59% de la población total– con situaciones extremas en las zonas rurales y en los cinturones de las ciudades. En las zonas rurales la pobreza afecta al 42%, en tanto que en las urbanas afecta al 26,7% (La Nación, 2002[b]: 30). El agravamiento de la crisis económica y la falta de alternativas políticas generan descontento y un crecimiento gradual de la protesta que podría radicalizarse si las autoridades no encuentran un mecanismo que permita reducir el impacto de la crisis económica y política en la población pobre.

Cuadro 1

Paraguay: evolución de la pobreza 1995-1999

(% de la población en situación de pobreza)

Area/status de pobreza	1995	1997/98	1999
URBANA			
Pobres extremos*	6,8	7,3	6,1
Pobres no extremos**	16,9	15,9	20,6
Total	23,7	23,1	26,7
RURAL			
Pobres extremos	21,4	28,9	26,5
Pobres no extremos	15,8	13,7	15,4
Total	37,2	42,5	42,0
TOTAL PAIS			
Pobres extremos	13,9	17,3	15,5 (874.000 personas)
Pobres no extremos	16,4	14,8	18,2
TOTAL	30,3	32,1	33,7 (1.900.000 personas)

* "Pobres extremos" son aquellos que tienen ingresos inferiores al costo de una canasta básica de consumo de alimentos.

** "Pobres no extremos" son quienes tienen ingresos mayores al costo de una canasta básica de alimentos, pero inferiores al de una canasta básica de consumo total (de alimentos y no alimentos).

Fuente: Barrios, 2002.

El Cuadro 1 muestra el incremento de la pobreza a nivel nacional entre 1995 y 1999. En este período la población ha sufrido un deterioro de 3,4 puntos porcentuales en su condición socioeconómica. Si tres años atrás la pobreza afectaba duramente a los sectores de más bajos ingresos, una reciente publicación admite que al menos 130 mil personas pasarán en el año 2002 a engrosar las filas de la pobreza a consecuencia del pésimo resultado de la actividad económica nacional (Última Hora, 2002: 9).

Con respecto a la distribución del ingreso, el 10% más rico de la población del país acapara el 43,8% del ingreso, lo que equivale a que cada persona de este estrato tiene un ingreso mensual de G. 1.713.000 (280 u\$s), en tanto que el otro 10% más pobre de la población sólo tiene un ingreso mensual de G. 39.000 (6,19 u\$s) (Barrios, 2002: 113). Actualmente Paraguay es considerado uno de los países de mayor inequidad en el mundo. El 19,5% de la población vive con menos de 1 dólar por día (1.136.963 personas) y el 49,3% con menos de 2 dólares diarios (2.874.477 personas) (La Nación, 2002[a]: 12).

En cuanto a acceso a la educación, la población que no sabe leer y escribir es casi seis veces

mayor entre el 20% más pobre de la población. Por otra parte, la probabilidad de que un pobre llegue a cursar estudios universitarios es casi nula, reduciéndose a sólo el 0,3%. La educación superior es un privilegio del 20% más rico de la población (Barrios, 2002: 115). El 8,4% de la población de 15 años y más es analfabeta. Es decir, no tienen el segundo grado aprobado (Informativo Campesino, 2002[b]: 28).

El acceso de la población campesina a la tierra es otro de los problemas generadores de conflictos. La Encuesta Integrada de Hogares 1997/98 citada por Barrios señala que el 29,7% de la población rural del Paraguay no posee tierras, mientras que el 10% de la población con más tierras posee el 66,4% del total de las tierras rurales. Esta polarización en la tenencia de la tierra es una constante que se mantiene desde fines del siglo XIX. Los diversos censos agropecuarios han mostrado que en vez de existir una desconcentración en la distribución de la tierra se ha observado una mayor concentración. Si en 1956 las explotaciones agropecuarias mayores a 1.000 hectáreas totalizaban 14 millones de hectáreas, en 1991 esa cantidad trepó a más de 18 millones de hectáreas. Mientras esto ocurre con las propiedades grandes, las pequeñas se pulverizan cada vez más, acelerando el proceso migratorio de los campesinos a la ciudad o a los países vecinos, especialmente la Argentina.

PROTESTAS SOCIALES Y DEMOCRACIA

En la década del ochenta, la lucha por la democratización del país era el tema aglutinador tanto de los movimientos sociales como de los movimientos y partidos políticos de oposición. El objetivo estratégico era conquistar la libertad y la igualdad y destruir la dictadura y la desigualdad. Ambas partes peleaban juntas y fueron reprimidas juntas. Con la transición a la democracia en 1989 se producen logros importantes, pero también problemas. Hasta 1992, año en que se completa la estructura jurídica de la República con la promulgación de la nueva Constitución Nacional, tanto los movimientos sociales como los movimientos políticos aún permanecían juntos. De la Convención Nacional Constituyente celebrada en 1992 participaron dirigentes sindicales y campesinos. El candidato que ganara la intendencia de Asunción en las primeras elecciones democráticas del país en 1991 surgió del seno del movimiento social. Sin embargo, esta alianza comenzó a sufrir fracturas cuando era necesario dar un segundo paso, la consolidación de la democracia y la calidad de la democracia. En esta fase del proceso aparecen los primeros fracasos, al producirse mutaciones al interior del movimiento social y del movimiento político. El estancamiento del proceso de consolidación democrática y también del crecimiento económico y la conquista de derechos sociales efectivos comienza a afectar al movimiento social ante la falta de propuestas, de cursos de acción en los cuales éste pueda ser útil a la democracia y viceversa, y ambos sean útiles a un movimiento más amplio, ciudadano. La falta de respuestas a las demandas del sector social por parte de la clase política fue otro de los motivos de conflictos. Esta cae en una profunda corrupción, y su interés se centra en ganar lugares dentro del aparato clientelista del Estado sin importar la representación que ejerce y a cuál de los partidos pertenezca (Rodríguez, 2000).

Dentro de este contexto sociopolítico y económico y del encuentro-desencuentro de los actores sociales y políticos que se produce en el proceso democrático paraguayo, los conflictos sociales van en aumento. Si las movilizaciones de repudio a la política económica del gobierno fueron hasta unos años atrás patrimonio casi exclusivo de las organizaciones campesinas de pequeños productores y sin tierras, obreras y en menor medida de los llamados 'sin techo' o 'sin viviendas', a partir del año 2001 vienen sumándose otros sectores que incluso se mostraban reacios a este tipo de acciones. A las periódicas y ya tradicionales protestas campesinas y obreras se han sumado los medianos y grandes productores agropecuarios nucleados en la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), que con el denominado "tractorazo"¹ presionan al gobierno a negociar sus reclamos sobre todos aquellos factores productivos que afectan sus intereses, como la suba del gasoil, la falta de créditos, el impuesto a la exportación, el IVA agropecuario, entre otros.

El proceso de deterioro en el que se ha sumido la agricultura en general en los últimos años, en contraste con la prosperidad a la que estaba acostumbrada este segmento de productores en épocas pasadas, les obliga a salir a las calles a expresar sus quejas. Este nuevo actor social que aparece en el escenario paraguayo, protagonizado por un grupo tradicionalmente soporte

de los grupos de poder y reacio a las movilizaciones de protestas, habla a las claras de que la crisis de la economía comienza a impactar fuertemente a sectores medios que hasta hace pocos años gozaban de una posición económica relativamente holgada.

La emergencia del sector juvenil en los tres últimos años fue otro hecho resaltante, especialmente el estudiantil secundario, que a través de modalidades organizativas específicas respondió a los problemas que le afectan. Las organizaciones juveniles más importantes son el Movimiento por la Obtención del Boleto Estudiantil (MOBE), actualmente Movimiento por el Bienestar Estudiantil, el Parlamento Joven, Juventud Que se Mueve (JQM), y el Movimiento por la Objeción de Conciencia y Contra el Servicio Militar Obligatorio (MOC).

Otros sectores que se suman a estas protestas son las mujeres, los niños de la calle y los indígenas. Si tuviéramos que calificar el impacto de la crisis al interior de los sectores sociales, estos serían los más fuertemente afectados. Si bien se han observado avances en la legislación para proteger sus derechos, en la práctica dichos avances no tuvieron correspondencia con la realidad, mucho más en los casos de los menores y los indígenas. Lo mismo se puede afirmar de los gremios del sector industrial y comercial. Estos, que tradicionalmente se han opuesto a las marchas y a los bloqueos de carreteras, desde un tiempo atrás también recurren a la movilización como parte de su estrategia de presión, y permanentemente, con comunicados y declaraciones a la opinión pública, advierten al gobierno que, si no cambia su política en favor del sector productivo y sigue aplicando tarifazos para cargar su ineficiencia sobre los hombros de la ciudadanía, debe prepararse para una seguidilla de movilizaciones populares.

ORGANIZACIONES CAMPESINAS: ARTICULADOR DE LAS DEMANDAS SOCIALES

Dentro de este panorama de protestas, el sector que está a la vanguardia es el campesinado. Las principales organizaciones campesinas nacionales, como la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), que aglutina a más de veinticinco organizaciones zonales, regionales y nacionales, y la Comisión Nacional de Lucha por la Reforma Agraria, cuyos referentes más importantes son la Federación Nacional Campesina (FNC) y la Organización Nacional Campesina (ONAC), desde 1994 juntos y desde 1998 por separado vienen realizando su marcha anual a la ciudad de Asunción para presentar sus reclamos al gobierno. Desde 1999 hasta septiembre de 2002 la profundización de la crisis económica ha hecho que se incrementaran notablemente las movilizaciones campesinas, llegando a un total de 210. El año 2001 fue el de mayor protesta desde la apertura política, llegando a 73 casos. Los conflictos por la tenencia de la tierra constituyen también otro de los focos de protestas. En los cuatro últimos años, 1999-2002, se produjeron 83 casos de ocupaciones de tierra, de los cuales 70 sufrieron desalojos. Se mantuvo un promedio de 42 conflictos de tierra por año, con un total de 2 mil detenciones. Cabe señalar igualmente que desde la apertura política en febrero de 1989 80 dirigentes campesinos y campesinos sin tierra fueron asesinados, quedando la mayoría de ellos impunes. Sólo en un caso el poder judicial dictó sentencia condenatoria de 9 años de prisión al que matara al dirigente campesino Esteban Balbuena, de la Coordinación Regional de Agricultores de Itapúa (CRAI), hecho que se había producido a inicios de la década del noventa.

Cuadro 2

Conflictos de tierra y movilizaciones

Año	Conflictos de tierra	Ocupaciones	Desalojos	Detenciones	Movilizaciones
1999	52	31	20	1048	54
2000	47	19	12	531	34
2001	42	17	24	260	73
2002	28	16	14	161	49
Totales	169	83	70	2000	210

Fuente: Informativo Campesino, varios números.

En lo que va de 2002, las tensiones entre el movimiento campesino y el Estado se centraron básicamente sobre el proceso de privatización iniciado en el 2000 y sobre la ley de transición económica denominada el impuestazo. De las 49 movilizaciones realizadas por organizaciones campesinas nacionales y por la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) y otras organizaciones sociales, 18 fueron contra las privatizaciones de los entes estatales y 11 contra el proyecto de ley de transición económica, denominado 'el impuestazo'. Otros motivos de protestas fueron el terrorismo de Estado y el fin de la impunidad.

En este orden, las dos protestas más importantes fueron las protagonizadas por el Congreso Democrático del Pueblo (CDP) contra la ley de privatización y contra otros proyectos de leyes en proceso de estudio en el Parlamento en mayo y junio de 2002, y por la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP), que junto con otras 60 organizaciones sociales arremetieron contra el proyecto de ley de transición económica. En ambos casos, el Poder Ejecutivo tuvo que ceder a la presión de las organizaciones. En el primero de ellos las movilizaciones comenzaron el 21 de mayo con bloqueos de las más importantes carreteras del país en varios Departamentos: Caaguazú en tres localidades; Misiones en dos; San Pedro en tres; Cordillera en dos; Alto Paraná; Concepción; Caazapá; Itapúa y Canindeyu. Las protestas duraron 16 días, tiempo en el cual los manifestantes lograron que el gobierno cediera en cinco de los seis puntos reclamados: la derogación de la Ley 1.615 que habilita la privatización de las empresas del Estado; contra el proyecto de reforma de la banca pública; contra el proyecto de Ley Antiterrorista; contra el proyecto de Ley de Concesión de Rutas; contra el IVA agropecuario; y contra la corrupción y la impunidad.

El único punto sobre el cual no se logró acuerdo alguno fue contra la corrupción y la impunidad. El asesinato en la ciudad de Coronel Oviedo del manifestante campesino Calixto Cabral, oriundo del distrito de Nueva Germania (San Pedro), presumiblemente por policías que bloqueaban el paso a los manifestantes, aceleró la negociación en el Senado para la suspensión de los efectos de la Ley 1.615 de privatizaciones.

El hecho resaltante de esta larga jornada de protesta fue el reencuentro de las organizaciones campesinas, la FNC, ONAC y la MCNOC, que se habían separado en bloques diferentes en 1998.

El logro obtenido por el Congreso Democrático del Pueblo acaparó la atención de la prensa y de la ciudadanía en general. Detener la privatización de las empresas públicas fue un acontecimiento histórico. En esta encrucijada, el campesinado fue el sector que mayor protagonismo ha tenido. Belarmino Balbuena, coordinador general de la MCNOC, uno de los dirigentes campesinos de mayor visibilidad durante la movilización, señaló que la "privatización como punto fuerte del modelo neoliberal, globalizador se está empezando a desarrollar en nuestro país, dentro de un marco de otros varios programas económicos y financieros como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la ley supra nacional que se impone a los países y que va a estar por sobre las leyes nacionales, es decir, ellos ya tienen estructurado una serie de medidas que están encaminando, de fases que están quemando dentro de las cuales está también la privatización y que sigue bajo la subordinación de los centros de poder, las órdenes vienen del norte. Entonces creemos que el tema acá no es solo la venta de una empresa como la de comunicación (ANTELCO), ese es sólo un punto de los reclamos, estamos en contra del modelo que nos quieren imponer" (Informativo Campesino, 2002[a]: 6). Esta visión clara de los dirigentes que estuvieron al frente de la movilización de lo que constituye la privatización de las empresas públicas como uno de los núcleos centrales del modelo económico neoliberal fue un factor clave de aglutinamiento de todas las organizaciones sociales.

Otros factores que contribuyeron a acelerar el proceso de negociación fueron la debilidad del gobierno y el discurso ambiguo de los principales referentes del Partido Colorado con respecto a la privatización, teniendo en cuenta que poseen un alto porcentaje de electorado cautivo en estas empresas estatales y privatizarlas implicaría la fuga de dicho electorado.

ORGANIZACIONES SINDICALES: UN ESPACIO EN DECLIVE

Si bien los principales dirigentes sindicales formaron parte del CDP y acompañaron las movilizaciones de las organizaciones campesinas, desde hace unos 5 años el movimiento sindical se viene caracterizando por los conflictos internos y el resquebrajamiento de las centrales obreras. Actualmente existen seis centrales con una baja cuota de sindicalización: la Central Nacional de Trabajadores (CNT), la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central Sindical de Trabajadores del Estado Paraguayo (CESITEP), la Central General de Trabajadores (CGT) y la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) (Pilz et al, 2002).

Es importante señalar que el movimiento sindical fue el que con mayor fuerza sintió el impacto del estancamiento económico vinculado al agotamiento del modelo de desarrollo de la dictadura que no fue sustituido, lo cual generó una desigualdad creciente, acompañada por la corrupción de la clase política, que también logró corromper a parte importante de la dirigencia social (Rodríguez, 2000). La condena de los tres principales dirigentes de la CUT, la CPT y la CESITEP imputados por el vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores (BNT) fue uno de los hechos culminantes que muestra la vulnerabilidad del movimiento sindical ante los hechos de corrupción.

Sin embargo, a pesar de la debilidad demostrada, no dejaron de generar conflictos. Las huelgas y las manifestaciones siguieron y siguen siendo las principales estrategias de presión de los obreros. Entre 2000 y 2002 realizaron 169 huelgas y 262 movilizaciones de protesta, siendo el Estado el blanco de las mismas. De las 49 huelgas y 86 manifestaciones de protesta en este año (Cuadro 3), 42 en el primer caso y la totalidad en el segundo fueron contra el Estado. Los motivos: el reajuste salarial, el atraso en el cobro de los salarios, la política privatista del Estado y los despidos.

Cuadro 3

Huelgas y manifestaciones

Año	Huelgas	Manifestaciones
2000-2001	120	176
2002	49	86
Totales	169	262

Fuente: Informativo Laboral, 2000; 2001; 2002.

Los/as protagonistas principales fueron los/as funcionarios/as del Estado y los/as docentes, quienes expresaron su rechazo al bajo nivel salarial y a la política privatista del Estado y exigieron la aprobación de la Ley del Estatuto Docente, que finalmente, tras 11 años de lucha, fue sancionada por el Poder Ejecutivo en agosto de 2001 (Informativo Laboral, 2001: 49-51), "oportunidad en la que los maestros llevaron adelante una huelga que duró 10 días para presionar a los legisladores y lograr la aprobación y sanción del proyecto" (Pilz et al, 2002).

ORGANIZACIONES DE MUJERES: AVANCES Y RETROCESOS PARA LA IGUALDAD

En el Paraguay las organizaciones de mujeres han logrado importantes avances y visibilidad en los últimos 10 años para alcanzar la igualdad y la superación de la discriminación. Pero a pesar de los logros observados, fundamentalmente en el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, existe un grave deterioro en las condiciones de vida de las mujeres paraguayas. Los indicadores que muestran esta realidad son el alto índice de mortalidad materna y la feminización de la pobreza, especialmente en las áreas rurales, donde las mujeres son las responsables de administrar la pobreza. También existe un alto grado de impunidad en los

casos de abuso sexual hacia ellas, y no cuentan con espacios de participación y de servicios de salud.

A pesar de esta situación existen logros importantes donde las mujeres organizadas tuvieron un gran protagonismo, así como también el Estado, a través de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República, implementando políticas públicas para alcanzar la igualdad. Otro de los logros importantes es la promulgación de la Ley 1.600 contra la violencia doméstica, cuyo anteproyecto fue propuesto por las organizaciones de mujeres en 1998, que además de elaborar la propuesta trabajaron persistentemente promoviendo su aprobación. Esto no significa que la violencia que sufren las mujeres en sus casas ha disminuido, sino que se ha logrado dar visibilidad al problema, lo que ha contribuido a que se establezcan mecanismos para enfrentarlo.

También tuvieron un papel determinante en el reconocimiento de las mujeres como sujetos de la Reforma Agraria en el Estatuto Agrario. La Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI) elaboró un documento en el cual propuso la incorporación de la mujer jefa de familia como beneficiaria de la reforma agraria, y que el título de propiedad sea expedido a nombre de la mujer si es jefa de familia, o a nombre del varón y la mujer si fueran concubinos. Esta propuesta fue incluida en el Nuevo Estatuto Agrario promulgado en enero de 2002 (Pilz et al, 2002).

El movimiento de mujeres ha usado como principales estrategias la elaboración de proyectos, el cabildeo y la negociación con los poderes públicos. Las movilizaciones y conflictos no han sido centrales en este período, con excepción de algunos casos como el de la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP), que ocupó el Parlamento para presionar por la aprobación de la Ley de Reforma del Código Civil, y la CONAMURI que realizó dos movilizaciones de protestas. En efecto, la primera marcha conjunta de mujeres campesinas e indígenas de la Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI) marchó desde la ciudad de Caacupé, capital del Departamento de la Cordillera, hasta el Palacio de Justicia, situado a 60 km, los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2001. Esta caminata por la Dignidad, el Pan, la Justicia y la Igualdad tuvo por objeto sensibilizar a la ciudadanía ante la extrema pobreza en el campo y denunciar públicamente el abandono del gobierno con respecto a la salud y la educación de miles de mujeres, niños y niñas pobres del país. La Coordinadora logró que el Ministerio de Salud Pública le reconociera como entidad colaboradora de hospitales y centros de salud del interior de la República. También el Ministerio de Agricultura se comprometió a conseguir fondos para la ejecución de programas productivos (Informativo Campesino, 2001: 12). Otra movilización realizada por la CONAMURI fue en repudio a la receta del FMI y contra el ALCA, por considerarlos perjudiciales para la vida económica y democrática del país. Alrededor de setecientas mujeres participaron de la manifestación (Diario Noticias, 2001: 7). La participación de las mujeres rurales en las movilizaciones de protesta y en los conflictos de tierra ha venido aumentando, aunque todavía sin mucha visibilidad.

ORGANIZACIONES JUVENILES EN CRECIMIENTO

El protagonismo de los jóvenes no es un hecho nuevo en Paraguay. Los movimientos estudiantiles universitarios independientes en las décadas del setenta y ochenta se han constituido en los principales grupos contestatarios contra la dictadura. Sin embargo, con la apertura política en 1989 perdieron protagonismo. En contrapartida aparecieron otros grupos juveniles que comenzaron a cuestionar una serie de problemas referidos a la práctica democrática. Uno de esos grupos, quizás el de mayor visibilidad y representatividad, es el Movimiento de Objeción de Conciencia contra el Servicio Militar Obligatorio (MOC), que ha logrado el derecho a declararse objetor del Servicio Militar Obligatorio y que los jóvenes objetores cumplan actividades de servicio para la sociedad. Hasta septiembre de 2001 la cantidad de objetores sumó más de 53 mil entre soldados y evasores (Castillo y Couchonal, 2001). El otro grupo que ha logrado a través de movilizaciones y negociaciones conseguir el boleto estudiantil -medio pasaje- es el Movimiento por la Obtención del Boleto Estudiantil (MOBE). Estos jóvenes realizan dos o tres movilizaciones por año ante el incumplimiento de los derechos logrados. Han surgido otros grupos de jóvenes, como el Parlamento Joven, que ya tiene tres años de actividades capacitando a jóvenes de todo el país sobre diversos temas y

generando propuestas para la reforma de la Ley Electoral, del Servicio Militar Obligatorio y de la educación. Juventud que se Mueve (JQM) es otro grupo juvenil impulsado por un grupo católico. Su objetivo es construir un Paraguay distinto a través de la acción directa (López, 2000).

Varios otros grupos de carácter vecinal se están consolidando, entre ellos las contralorías ciudadanas y la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay (ASUCOP), cuyo principal objetivo es resistir contra el incremento de los precios de los productos de la canasta familiar. Otra organización bastante activa que desarrolla diversas manifestaciones de protesta es el Grupo Estafado en Acción, integrado por personas estafadas por bancos y financieras.

COMENTARIOS FINALES

Como se ha podido observar, los conflictos sociales vienen incrementándose en la misma medida en que la crisis económica y política también golpea con fuerza a una gran mayoría de la población. En este sentido se da una relación directamente proporcional entre deterioro de la economía y conflictos sociales. También es notorio que cada vez más sectores se suman a las protestas, y las escasas respuestas del Estado a las demandas sociales no han podido distender la enorme tensión que se va generando entre la sociedad y el Estado. Si bien el logro obtenido por el Congreso Democrático del Pueblo es inédito -nunca antes las organizaciones sociales, y principalmente las organizaciones campesinas, obtuvieron un triunfo tan resonante como el haber logrado parar el proceso de privatización- ello no garantiza que el Estado no vuelva a intentar de nuevo la privatización para resolver sus necesidades de ingreso. Este logro se suma a otros, como el del abril de 1996, cuando rechazaron el intento de golpe de estado del General Lino César Oviedo, y posteriormente en la caída del presidente Raúl Cubas en marzo de 1999 y la condonación de las deudas a los productores aldoneros.

Una mirada retrospectiva de la historia paraguaya muestra que en casi todos los casos el campesinado ha participado de las grandes rupturas y de las grandes continuidades, en algunos casos como grupos amorfos manipulados por otros intereses y en otros como organización gremial defendiendo su interés de clase. La legitimación del gobierno del Dr. Francia, 1813-1840, fue con el apoyo de este sector. El golpe de estado que quebró la institucionalidad en 1936, posterior a la guerra contra Bolivia, tuvo amplia participación de los combatientes campesinos. El Partido Colorado que mantuvo en el poder a Stroessner durante 35 años tenía como base de sustentación mayoritaria al campesinado. La gran represión de 1975-1976 fue contra la organización campesina Ligas Agrarias junto con el movimiento estudiantil universitario. La ruptura del gobierno de Cubas Grau, en 1999, tuvo participación de los campesinos organizados, y finalmente la ruptura del proceso de privatización fue obra principalmente del sector organizado de los/as campesinos/as.

Estas grandes conquistas y también fracasos no han significado un avance hacia el logro de mejores condiciones de vida. Al contrario, otros sectores sociales han aprovechado dichas conquistas. Las organizaciones sociales en general y las campesinas en particular son conscientes y saben bien lo que no quieren, tienen capacidad para resistir a propuestas que afectan sus intereses como sector pero a la hora de proponer y buscar las alternativas que se contrapongan a las propuestas de sus enemigos no logran consensuar propuestas aplicables fuera del sistema que los oprime y contra el cual luchan.

Si bien esta debilidad no es responsabilidad sólo de las organizaciones sociales, sino del conjunto de la sociedad, los partidos políticos, los intelectuales, etc., lo concreto es que el país sigue respondiendo a recetas que son impuestas desde fuera, por los países desarrollados y por los organismos financieros internacionales como el FMI, el BM, el BID. El Paraguay, al igual que los demás países pobres, no tiene capacidad y mucho menos independencia para plantear propuestas socioeconómicas fuera de esas recetas. "La democracia vive hoy la crisis de los estados nacionales que consiste en que muchas cosas -y cada vez más cosas- se gestionan fuera de las naciones, en un espacio adonde no hay democracia" (Rodríguez, 2002: 22). Uno de los principales problemas que se observan es que los conflictos sociales del país no son asumidos por la totalidad de los sectores afectados. Si los partidos políticos tradicionales de la oposición no son referentes ni muestran interés por acompañar estos procesos de lucha,

lo mismo se puede decir de los intelectuales, cuyos aportes no han ido más allá de los análisis e interpretaciones de los hechos sociales. Si al interior del país se puede observar esta incapacidad o debilidad de articulación para enfrentar unitariamente este desafío, mucho más aisladas están estas luchas con respecto a los mismos procesos que se están dando en otros países de la región. Este es uno de los desafíos importantes que debe ser revisado. Otro de los problemas que se siente en el Paraguay es la poca difusión de los temas centrales que hacen a la globalización. Cuestiones como el ALCA, que tendrá consecuencias impredecibles sobre la economía del país, son desconocidos por la mayoría de la población. El hecho de que la crisis económica y social esté afectando no sólo a los más pobres sino también a la clase media en general abre posibilidades de generar un proceso de reflexión sobre el país que queremos.

El desafío más importante de ahora en más es pelear por la verdadera reforma del Estado. Si bien las organizaciones sociales y el Congreso Democrático del Pueblo tienen cada cual elaboradas sus propuestas alternativas, éstas no han sido aún consensuadas con los demás sectores sociales del país, con lo cual pierden fuerza. Existe sí un amplio consenso en que sin un ataque frontal a la corrupción no es posible llevar adelante ninguna reforma del Estado.

BIBLIOGRAFÍA

Barrios, Oscar S. 2002 "Pobreza y Desigualdad del Ingreso en el Paraguay" en Población y Desarrollo (Asunción: FNUAP/FCE-UNA) Año XII, N° 20, julio.

Castillo, Orlando y Ana Couchonal 2001 "Derecho a la objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio (SMO)", en Derechos Humanos en Paraguay 2001 (Asunción: CODEHUPI).

Diario Noticias 2001, 18 de octubre.

Informativo Campesino 2002[a] (Asunción: CDE) N° 164, mayo.

Informativo Campesino 2002[b] (Asunción: CDE) N° 162, marzo.

Informativo Campesino 2001 (Asunción: CDE) N° 158, octubre.

Informativo Laboral 2001 (Asunción: CDE) N° 176, agosto.

La Nación 2002[a], 24 de julio.

La Nación 2002[b], 9 de julio.

Latinobarómetro 2002

López, Oscar 2000 "Participación juvenil" en Derechos Humanos en Paraguay 2000 (Asunción: CODEHUPI), Participación ciudadana de dicho libro.

Morínigo, José Nicolás 2002 "Crisis de la gobernabilidad", en Última Hora, 10 de septiembre.

Pilz, Dania et al 2002 "Los movimientos sociales en el contexto actual del Paraguay", en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) N° 8, septiembre.

Rodríguez, José Carlos 2002 "Democracia formal ¿autodeterminación o crisis?", en Revista Acción (Asunción: CEPAG) N° 229, noviembre.

Rodríguez, José Carlos 2000 "Democracia y movimiento social: La reconciliación necesaria", en Informativo Campesino (Asunción: CDE) N° 145, octubre: 47.

Última Hora 2002, 5 de agosto.

NOTAS

- Coordinador del Área Sociogremial y responsable de la revista Informativo Campesino del Centro de Documentación y Estudios (CDE).

1 "Tractorazo" es una denominación dada a la movilización de los medianos y grandes productores agropecuarios por utilizar sus tractores y camiones en los bloqueos de las carreteras.

FUENTES

ABC 2002, 2 de junio.

ABC 2001, 17 de septiembre.

Informativo Campesino 2002 (Asunción: CDE) N° 165, junio, "Nuestra opinión".

La Nación 2002, 6 de junio.

Última Hora 2001, 30 de abril.

CAPÍTULO 2

Los movimientos campesinos e indígenas. Los casos de Brasil, Bolivia, México y Ecuador

Avanços e impasses do MST e da luta pela terra no Brasil nos anos recentes

Claudinei Coletti*

INTRODUÇÃO

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foi o movimento social popular que mais cresceu no Brasil na década de 1990 e se constituiu no principal foco de resistência política ao projeto neoliberal que vem sendo implementado neste país desde a eleição de Fernando Collor para presidente da República, em 1990. O movimento cresceu, diga-se de passagem, numa conjuntura de refluxo para a maioria dos outros movimentos sociais populares, em especial para o movimento sindical combativo articulado em torno da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Fundado oficialmente em 1984, o MST tem lutado por terra, pela reforma agrária e por justiça social num país que possui um dos maiores índices de concentração de terras e de renda do planeta. E tem organizado em suas fileiras os pequenos agricultores sem-terra, os desempregados ou subempregados rurais, além dos desempregados urbanos sem perspectivas de encontrar emprego nas cidades. Atua hoje em 23 estados do país, com 585 acampamentos envolvendo um total de 75.730 famílias, e em 1.490 assentamentos envolvendo 108.849 famílias, segundo dados fornecidos pelo próprio movimento. Seus principais instrumentos de luta são as ocupações de terra, os acampamentos, as marchas, as ocupações de prédios públicos, os saques e as manifestações públicas, todos utilizados como instrumentos de pressão sobre o governo por desapropriações de terras e por assistência técnico-financeira aos assentados.

O objetivo geral de nossa exposição será analisar a trajetória do MST na década neoliberal, mais precisamente durante o primeiro e segundo mandatos do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), procurando detectar, em primeiro lugar, as possíveis razões do crescimento expressivo do movimento durante o primeiro mandato de FHC (1995-1998), e, em segundo lugar, levantar algumas hipóteses que poderiam explicar, pelo menos em parte, as razões da postura defensiva que assume o MST nos anos recentes, particularmente a partir do ano de 2001.

NÚMEROS DE OCUPAÇÕES DE TERRA E DE ASSENTAMENTOS

Os assentamentos rurais realizados no Brasil nas duas últimas décadas são, em grande medida, o resultado da pressão exercida pelas ocupações de terra e pelos acampamentos dos sem-terra¹. Os números de ocupações e de assentamentos, neste sentido, representam um indicativo fundamental da capacidade de ofensiva política dos movimentos de luta pela terra e dos resultados que essa ofensiva consegue alcançar no plano mais imediato. As Tabelas 1 e 2, a seguir, mostram o número de ocupações e de assentamentos realizados desde o governo de José Sarney (1985-1989) até os anos recentes. Não obstante as discrepâncias que esses números apresentam, segundo a fonte de dados que tomamos como referência, eles permitem que formulemos uma discussão inicial sobre os avanços e recuos da luta pela terra no Brasil nos anos recentes.

Tabela 1

Ocupações de terra no Brasil 1987-2001

Ano	Número total de ocupações, segundo a CPT	Número total de famílias envolvidas, segundo a CPT	Número de ocupações ligadas ao MST	Porcentagem das ocupações do MST sobre o N° total de ocupações	N° de “invasões” de terras segundo o governo
1987	67	11.772			
1988	72	9.986			
1989	80	16.030			
1990	49	8.234			
1991	77	14.720			
1992	81	15.538			
1993	89	19.092			
1994	119	20.516			
1995	146	30.476			
1996	398	63.080	176	44%	397
1997	463	58.266	173	38%	502
1998	599	76.482	132	22%	446
1999	593	78.258			455
2000	393	64.497	190	48%	226
2001	194	26.120	82	42%	157

Para os quadros em branco, não há dados disponíveis.

Fontes: Setor de documentação da Comissão Pastoral da Terra (CPT). Cadernos Conflitos no Campo, 1987-2001.

Dataluta: Banco de dados da luta pela terra, 1999 (apud Bernardo Mançano Fernandes, 2000: 261).

INCRA [Instituto de Colonização e Reforma Agrária]/Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Tabela 2

Famílias assentadas pelo governo federal 1985-2001

Período/ano/governo	Número de famílias assentadas segundo dados do governo	Número de famílias assentadas segundo a ABRA (Associação Brasileira de Reforma Agrária)	Número de famílias assentadas segundo o IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas)
1985-1989 (Governo Sarney)	115.070		
1990-1992 (Governo Collor)	494		
1993-1994 (Governo Itamar)	36.481		
1995 (Governo FHC)	42.912	32.699	
1996	62.044	19.800	
1997	81.944	60.425	
1998	101.094	76.027	
1999	85.226	25.831	53.197
2000	108.986		36.061
2001	102.449	23.573*	

* Até 07/12/2001, segundo o Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo, baseado nos dados do próprio INCRA (Conflitos no Campo-Brasil-2001: 139).

Para os quadros em branco não há dados disponíveis.

Fontes: De 1985 a 1994: INCRA/Ministério Extraordinário da Política Fundiária (apud Sérgio Leite, 1997: 159).

De 1995 a 2001: INCRA/Ministério do Desenvolvimento Agrário; Relatório da Associação Brasileira de Reforma Agrária (ABRA) dirigido à Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), em setembro de 2001; Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA).

A LUTA PELA TERRA NO GOVERNO FHC (1995-2002)

Quando observamos os dados da Tabela 1 percebemos que no primeiro mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso o número de ocupações de terra e o número de famílias envolvidas em tais ocupações tiveram um salto expressivo. Em 1998, por exemplo, segundo os dados da Comissão Pastoral da Terra, ocorreram no Brasil um total de 599 ocupações de terra, envolvendo 76.482 famílias. Ora, uma primeira hipótese explicativa para esse salto é que, diante de um governo eleito por quatro anos –não era, portanto, transitório como o governo anterior, de Itamar Franco– e diante de um governo que se mostrava mais aberto ao diálogo e às pressões reivindicativas, os movimentos sociais de luta pela terra encontraram espaço político para crescer.

Mas, além dessa questão de ordem geral, ligada às características iniciais do governo FHC, outras razões poderiam nos ajudar a explicar esse crescimento do MST e da luta pela terra nesse período. Referimo-nos, aqui, a uma questão a nosso ver fundamental, qual seja, a da inserção das bases sociais do movimento na estrutura econômico-social. Essa questão pode ser expressa através da seguinte pergunta: quais são os trabalhadores que hoje reivindicam terra no Brasil?

Em primeiro lugar, os sem-terra são formados por trabalhadores do campo, cuja relação com a terra é, poderíamos dizer, precária. Trata-se de parceiros, pequenos arrendatários, filhos de pequenos proprietários cujas terras não são suficientes para sustentar famílias extensas, ou ex-pequenos proprietários que perderam, por algum motivo, suas terras. Em segundo lugar, os sem-terra sempre incorporaram às suas bases os trabalhadores desempregados urbanos que, não encontrando condições de sobrevivência nas cidades, passam a ver na luta pela terra uma saída possível para suas vidas. Em terceiro lugar, os assalariados rurais temporários (“bóias-frias”) têm engrossado as fileiras dos movimentos de luta pela terra no Brasil. Ora, o aumento assustador dos níveis de desemprego durante a década de 1990 no Brasil, a mecanização da colheita de vários produtos agrícolas e a inviabilidade da pequena produção agrícola, decorrente da adoção da política neoliberal para a agricultura, jogaram parcela expressiva dessa população marginalizada, desempregada e sem-terra nos braços do MST e de outros movimentos de luta pela terra. A política neoliberal, portanto, ampliou significativamente as bases sociais dos movimentos de luta pela terra no Brasil. Ainda que o modelo neoliberal e a exclusão social dele decorrente tenham começado em 1990, com o governo Collor, foi exatamente no primeiro mandato de FHC que tal modelo foi aprofundado e os movimentos sociais de luta pela terra encontraram, como dissemos anteriormente, a partir de 1994-95, uma conjuntura política mais propícia para sua expansão, pelo fato de o novo governo ser, pelo menos em princípio e à primeira vista, menos repressivo e mais democrático se comparado, por exemplo, ao governo de Fernando Collor (1990-92).

A inserção das bases sociais do MST na estrutura econômico-social explica, também, a dificuldade que o discurso neoliberal encontra para enquadrar esse movimento, à medida que permite determinadas posturas políticas e ideológicas de afronta à atual hegemonia neoliberal burguesa, posturas estas que são difíceis de serem assumidas atualmente, por exemplo, pelo movimento sindical.

Explicamos melhor esta última afirmação. Perry Anderson, no seu trabalho sobre o pensamento gramsciano, observa que a análise dualista de Gramsci –hegemonia de um lado, coerção de outro– “não permite um tratamento adequado dos constrangimentos econômicos que agem diretamente para reforçar o poder de classe da burguesia”. Ele está fazendo referência, neste caso, ao medo do desemprego, da demissão etc. “que pode, em certas circunstâncias históricas, produzir uma ‘maioria silenciosa’ de cidadãos obedientes e de eleitores submissos entre os explorados. Tais constrangimentos não envolvem nem a convicção do consentimento nem a violência da coerção”, completa o autor² (Anderson, 1986: 39).

Ora, refletindo a partir desses termos, diríamos que tais “constrangimentos econômicos”, sempre presentes em maior ou menor grau, de acordo com a conjuntura e com o setor de atividades que se toma como referência, nas bases sociais do movimento sindical –são os trabalhadores assalariados que formam tais bases e que são ameaçados pelo desemprego–, simplesmente não existem, por exemplo, para as bases do MST. Ou seja, o medo das formas típicas de represálias patronais –demissão, desemprego etc.– não pode haver num movimento social, cujas bases são formadas por camponeses sem-terra, desempregados urbanos e trabalhadores subempregados constantemente ameaçados pela mecanização das atividades agrícolas (“bóias-frias”). É óbvio que na “maioria silenciosa” à qual se refere Anderson mesclam-se os constrangimentos econômicos à própria subordinação à ideologia dominante, típica das classes subalternas. As duas coisas, aliás, estão sempre muito próximas, são difíceis de serem discriminadas e uma serve como suporte ou complemento da outra. Mas uma coisa é certa: a ausência dos tais “constrangimentos econômicos” cria condições muito mais propícias para a luta política e ideológica de classes.

A luta pela terra a qualquer preço coloca-se para muitos desses trabalhadores como “última alternativa”, como uma espécie de busca de um “porto seguro” em meio à insegurança do desemprego, do subemprego e da marginalização social, em suma, como um meio, às vezes o único, capaz de apontar para a possibilidade de sustento do trabalhador e o de sua família. À medida que aumentam a marginalização e a exclusão social que atingem, nesses tempos de vigência do neoliberalismo, em cheio as classes subalternas (urbanas e rurais), aumentam as bases sociais do MST –e, de modo geral, as bases sociais dos demais movimentos sociais de luta pela terra– que repõe a essa população marginalizada o sonho do trabalho, da sobrevivência e da reprodução social.

Quando observamos os dados da Tabela 1, entretanto, notamos que no segundo mandato do governo FHC, especialmente a partir do ano de 2001, ocorreu uma diminuição significativa do número de ocupações de terra e do número de famílias nelas envolvidas –de 599 ocupações envolvendo 76.482 famílias, em 1998, temos, em 2001, 194 ocupações envolvendo 26.120 famílias. E mais: ao analisarmos as prioridades do MST em 2001, notamos que o movimento dedicou-se mais à luta contra as plantações de alimentos “transgênicos”, à luta por crédito agrícola e pela renegociação das dívidas dos pequenos agricultores e assentados do que às ocupações de terra propriamente ditas. Isto indica, a nosso ver, uma mudança de postura do movimento. Conscientes da dificuldade de manutenção dos assentamentos rurais, o MST teria optado pela defesa das conquistas já realizadas, diminuindo sobremaneira as ocupações de terra. Neste caso, a seguinte questão surge imediatamente: quais razões poderiam explicar esse recuo do movimento?

No segundo mandato de FHC, a partir de 1999, configurou-se uma estratégia governista de combate ao MST que articulou várias providências interdependentes.

A primeira delas foi restringir as verbas públicas destinadas aos assentamentos –diminuindo, assim o número de famílias assentadas–, encarecer e limitar o financiamento das famílias assentadas e enfraquecer as agências governamentais ligadas à agricultura familiar (INCRA, EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, etc). Essa providência, sem dúvida, tornou menos eficiente a luta pela terra, complicou a viabilidade econômico-financeira dos assentamentos e reduziu a assistência técnica aos assentados, dando argumentos para os críticos do MST e da reforma agrária.

Em segundo lugar, a partir de denúncias realizadas pela grande imprensa, no início do ano 2000, de que haveria desvio de verbas públicas destinadas às cooperativas e aos assentados, para o MST, o governo tomou uma série de medidas repressivas contra o movimento: promoveu o descredenciamento de cooperativas e o cancelamento do projeto Lumiar (de assistência técnica aos assentados), com a demissão de técnicos e a abertura de sindicância no INCRA para apurar pretensos desvios de recursos.

Uma terceira providência adotada pelo governo FHC foi a criminalização das lideranças do MST, com vistas a inibir suas ações e demonstrar à opinião pública que o movimento agia fora da legalidade vigente.

Outras providências: o governo proibiu, através da Medida Provisória Nº 2.109-50, de 27/03/2001, da Medida Provisória Nº 2.183-56, de 24/08/2001, e da Portaria /MDA/ Nº 62, de 2002, a vistoria por dois anos em imóveis ocupados pelos sem-terra (em setembro de 2002 havia 88 imóveis nesta situação, relacionados na página do INCRA na internet), suspendeu vários processos de desapropriação de imóveis ocupados (nesta situação havia, na mesma data, 28 imóveis relacionados) e determinou a exclusão do Programa de Reforma Agrária dos trabalhadores que praticassem “atos de invasão ou esbulho de imóveis rurais” (25 nomes e respectivos documentos de identificação foram relacionados no sítio do INCRA). Ora, essas medidas, sem dúvida, inibiram as ocupações de terra. O número de ocupações levantado pela CPT para o ano de 2001 (194, envolvendo 26.120 famílias), a nosso ver, reflete, em parte, o resultado dessa iniciativa repressiva governamental.

Além dessas medidas, houve ainda a criação do Banco da Terra, através do qual o governo pretendia substituir a desapropriação de terras improdutivas pelo mecanismo de compra e

venda de terras, com recursos do Banco Mundial. Instituído em fevereiro de 1998, pela Lei Complementar 93/1998, iniciou sua operacionalização a partir de outubro de 1999, com o objetivo de financiar, segundo a retórica oficial, aos “pequenos empreendedores” (sic), a compra de imóveis rurais e a implantação de uma infra-estrutura básica na propriedade. Ainda segundo o discurso oficial, uma das grandes vantagens do Banco da Terra seria a flexibilidade, pois é o próprio beneficiário quem escolhia e negociava, diretamente com o vendedor, a propriedade que desejava comprar. De outubro de 1999 a dezembro de 2001, segundo o governo, o Banco da Terra teria beneficiado exatamente 40 mil famílias.

Outra providência adotada pelo governo: no final de 2000, o Ministério do Desenvolvimento Agrário lançou, com uma propaganda intensa na mídia, a Reforma Agrária pelo correio, com o escopo de esvaziar os movimentos sociais no campo. Segundo a propaganda oficial, aqueles que quisessem se cadastrar para receber terras deveriam apenas preencher um formulário disponível nas agências do correio que, em quatro meses, receberiam o título de posse. Não seria mais necessário, dessa forma, ocupar nem se manter acampado para conquistar a terra. O Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo, numa nota de 19/12/2001, fez a seguinte avaliação dessa medida governamental, depois de cerca de um ano de sua implementação: “os dados aos quais tivemos acesso indicam o pré-cadastramento de 574.590 famílias, das quais 103.225 foram entrevistadas e destas só 16.390 pré-selecionadas”³. É importante registrar que o MST estimulou as suas bases a se cadastrarem nos correios para desmontar a farsa governamental. Uma parte dessas famílias pré-cadastradas, portanto, são pertencentes ao MST.

Entretanto, mesmo supondo que todas as cerca de 75 mil famílias espalhadas pelos 585 acampamentos do MST tivessem feito o cadastramento, ainda assim sobriam cerca de 500 mil famílias inscritas, o que é um número muito grande. O impacto desmobilizador dessa iniciativa governamental, pelo menos num primeiro momento, deve ter sido significativo. Por fim, uma última providência governamental: o governo FHC estimulou, sorratamente, a criação de novos movimentos sociais no campo, menos agressivos politicamente e mais dóceis ao seu governo, com o objetivo de conduzir o MST ao isolamento e de criar canais alternativos de interlocução política.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procuramos analisar, nesta exposição, de forma extremamente sucinta, algumas questões relacionadas aos avanços e recuos do MST durante os dois mandatos do governo FHC: o movimento avança no primeiro mandato do governo FHC para, depois, nos anos recentes, passar para a defensiva. Partimos do princípio, aqui, de que as ocupações de terra, ainda que não seja o único, é o principal instrumento de pressão e de luta do MST sobre o governo. E pudemos verificar um recuo expressivo no número de ocupações no ano de 2001. É obvio que os dados sobre ocupações, vistos isoladamente, são insuficientes para permitir que falemos em refluxo do MST no momento atual. Por isso referimo-nos, de passagem e sem condições de aprofundar essa discussão, às principais lutas encaminhadas pelo MST no ano de 2001: luta por crédito agrícola, pela renegociação das dívidas dos pequenos agricultores e contra os “transgênicos”.

Poderíamos dizer, a esta altura, que a luta pela terra no Brasil está numa encruzilhada política. Isto porque não há lugar para a pequena produção agrícola e para os assentamentos rurais no contexto da política agrícola de recorte neoliberal. A prioridade dessa política é a grande exploração agropecuária visando ao mercado externo, enquanto que os demais setores agrícolas, tidos como não-dinâmicos, passam a ser tratados no âmbito das chamadas políticas compensatórias –o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), neste caso, é o melhor exemplo.

O governo, para efeitos de propaganda, assenta trabalhadores sem-terra, por um lado, enquanto conduz milhares de pequenas propriedades à falência pura e simples, por outro. Quando juntamos a esses fatores as medidas adotadas pelo governo em seu segundo mandato, cuja finalidade era reprimir, isolar e desmoralizar o MST, estarão dados alguns

ingredientes capazes de explicar as dificuldades do movimento de luta pela terra no Brasil na conjuntura recente.

Por fim, uma última questão que, embora não a possamos desenvolver adequada e aprofundadamente aqui, merece ser, pelo menos, anunciada: o MST nasceu e consolidou-se numa conjuntura de crise da luta anticapitalista e num momento de ofensiva vitoriosa da burguesia e do imperialismo em escala internacional. Ora, a desvantagem para o campesinato organizado, neste caso, parece óbvia, à medida que ele tem de se ater à luta econômico-reivindicativa nos quadros da ordem capitalista vigente, pois, nessa conjuntura, transformações mais profundas na sociedade parecem estar fora da ordem do dia. A questão, neste caso, é que a ordem capitalista de recorte neoliberal torna essa luta econômico-reivindicativa, em grande medida, inócua. Além disso, a hegemonia neoliberal dificulta a luta política por transformações mais profundas na sociedade, pois submete, total ou parcialmente, parte das forças de esquerda à “ditadura do mercado” e diminui as possibilidades de aliança política no campo das esquerdas –no Brasil, a crescente moderação do discurso e da prática política do Partido dos Trabalhadores (PT) e mesmo do movimento sindical combativo, neste caso, parecem ser bons exemplos. O resultado desse processo é o crescente isolamento político do MST, o que contribuiria, também, para explicar o recuo político desse movimento no momento atual.

A questão fundamental e para a qual não temos uma resposta definitiva é saber se se trata de um recuo passageiro ou de uma inversão da tendência de ascensão política vivida pelo MST durante a década de 1990. A resposta a essa questão está diretamente relacionada aos desdobramentos da conjuntura política atual. A vitória do candidato petista nas eleições presidenciais, por um lado, poderá gerar, entre os sem-terra, expectativas de atendimento às suas reivindicações imediatas. Ora, se tais expectativas forem frustradas e se os mecanismos repressivos utilizados pelo governo FHC contra o MST, forem suspensos, o número de ocupações de terra poderá crescer bastante no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Por outro lado, a nosso ver, mesmo com a vitória petista nas eleições presidenciais, o cenário indica que há poucas possibilidades efetivas de ocorrer uma ruptura radical com o modelo político neoliberal e menos possibilidades ainda de haver transformações estruturais na sociedade brasileira. Isto significa uma grande chance de persistirem, durante o próximo governo, grande parte dos atuais problemas que impedem a viabilidade econômica dos assentamentos e da pequena agricultura familiar. Além disso, nesse cenário, a possibilidade de concretização de um projeto efetivo de reforma agrária no Brasil parece remota. Portanto, a julgar por essas perspectivas, acreditamos que as dificuldades do MST, longe de serem resolvidas, devem continuar.

BIBLIOGRAFIA

Anderson, Perry 1986 “As antinomias de Gramsci”, in Crítica Marxista. A estratégia revolucionária na atualidade (São Paulo: Ed. Jorúês).

Conflitos no Campo-Brasil-2001 (Goiânia: CPT Nacional).

NOTAS

* Mestre em Ciência Política e doutorando em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)-Brasil. Pesquisador do Centro de Estudos Marxistas (Cemarx) da Unicamp.

1 “Acampamentos” são áreas provisórias nas quais os sem-terra se instalam, geralmente localizadas à beira das estradas ou numa área próxima à terra pretendida, onde são construídos barracos improvisados (geralmente de lona preta), que servem de moradia até conseguirem a terra definitiva. Os “assentamentos”, por sua vez, são as terras desapropriadas pelo governo, demarcadas e entregue aos sem-terra. Uma família é considerada “assentada” quando recebe seu lote demarcado com uma infra-estrutura básica (água, luz etc.) e créditos para construir a casa, comprar alimentos e iniciar a produção.

2 Os grifos são nossos.

3 Conforme caderno Conflitos no Campo-Brasil-2001.

FONTES

INCRA-Instituto de Colonização e Reforma Agrária

Leite, Sérgio 1997 “Assentamentos rurais no Brasil: impactos, dimensões e significados”, in Stédile, João Pedro (org.) A reforma agrária e a luta do MST (Petrópolis: Vozes).

Maçano Fernandes, Bernardo 2000 A formação do MST no Brasil (Petrópolis: Vozes).

Bolivia: un país de re-configuraciones por una cultura de pactos políticos y de conflictos

Humberto Vargas R.* y Eduardo Córdova E.**

LOS MOVIMIENTOS CAMPESINOS E INDÍGENAS EN BOLIVIA

La participación de las comunidades campesinas e indígenas en la política es asaz importante en un país con tan bajo desarrollo y tan alta proporción de población rural y nativa como Bolivia¹. Desde el siglo XIX, esta participación acusa una dinámica vigorosa de alianza y conflicto. Son conocidos los pactos establecidos por líderes indígenas con los grupos en el poder a lo largo del siglo, que buscaron el respeto de la tierra ante el avance del despojo y el establecimiento de relaciones serviles. Y son igualmente conocidas las revueltas indígenas y las acciones violentas de los gobiernos en su intento de reprimirlas.

Además de esta característica importante, que involucra a la vez la negación y la negociación, es importante señalar que la participación masiva de los indígenas fue un ingrediente indispensable en el cambio histórico a lo largo de la historia republicana en Bolivia. Así sucedió en la guerra civil de 1899, cuando los ejércitos aymaras definieron la victoria de sus aliados liberales. La Revolución Nacional de 1952 habría sido sin duda distinta sin las movilizaciones que concluyeron en la Reforma Agraria y en la formación de milicias campesinas armadas. De igual manera, los bloqueos campesinos de carreteras contribuyeron decisivamente a la recuperación de la democracia entre 1979 y 1982.

Actualmente, luego de una serie de reformas y movilizaciones que condujeron a los resultados de las elecciones nacionales de 2002 –en las que el candidato de un partido campesino obtuvo el segundo lugar y llegó a disputar el acceso a la presidencia de la república–, los movimientos campesinos se encuentran ya no solamente en las calles o caminos sino también en el Parlamento y en los gobiernos municipales. En este trabajo se revisan los desafíos que entraña esta nueva presencia del campesinado indígena en la política boliviana institucionalizada. Haremos inicialmente una revisión somera de algunos movimientos importantes en la vida republicana. Ello nos permitirá establecer el lugar de las acciones desarrolladas por los indígenas en los distintos ciclos políticos de Bolivia. Posteriormente diseñaremos el escenario en el que actualmente se presentan los movimientos campesinos. Finalmente haremos un leve énfasis en tres temas: el movimiento de los productores de coca, las acciones de protesta llevadas a cabo en abril y septiembre del año 2000, y las elecciones de junio de 2002. La participación de los ejércitos aymaras liderados por el célebre Zárate Willka en alianza con los liberales en la Guerra Civil Federal de 1899 modificó el destino del país durante el medio siglo siguiente. La guerra civil, signada por la multitudinaria revuelta aymara, dio a luz un país en el que la ciudad de La Paz se consolidó como la sede del gobierno, la plata y sus magnates fueron sustituidos por el estaño y sus barones, y, a pesar de las demandas indígenas, la propiedad terrateniente se extendió sin reparo sobre las tierras comunales³. De igual manera, las movilizaciones realizadas por los colonos de hacienda contribuyeron notablemente a la consecución de la Reforma Agraria, que se decretó en 1953, y a la eliminación de la clase terrateniente.

El principal objeto de las demandas campesinas durante esos dos períodos, y hasta la consolidación de la reforma, era la tierra. Luego de la Revolución Nacional que comandó el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y de la Reforma Agraria, el eje de la tierra se fue desplazando hacia la necesidad del establecimiento de organizaciones independientes. Los gobiernos del MNR (1952-1964), en su intento de apuntalar un proceso revolucionario controlado, impusieron la sindicalización del área rural siguiendo el modelo minero, y conformaron las milicias armadas campesinas, cuerpos firmemente vinculados con el MNR que fueron utilizados para enfrentarse con los poderosos sindicatos mineros⁴. En éste período, y durante la vigencia de el Pacto Militar-Campesino (1964-1978), que fue suscrito durante la presidencia del general Barrientos y ratificado por los distintos gobiernos militares, el área rural careció de una organización independiente.

El ascenso de la tendencia katarista a partir de inicios de la década del setenta es el principal esfuerzo realizado por el movimiento campesino aymara por lograr esa independencia, que se

plasmó en la creación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en 1979. La característica del período inaugurado en 1952, que se extendió por más de tres décadas y en Bolivia suele denominarse Estado del '52, fue el enfrentamiento constante entre las Fuerzas Armadas y la Central Obrera Boliviana (COB). Los campesinos fueron tomados como aliados de los militares y como base social de las dictaduras⁶. La crisis de recuperación de la democracia entre 1978 y 1982, período en el que se produjo la más violenta represión militar, fue también escenario de la conformación de la CSUTCB y de las primeras protestas coordinadas entre la COB y los campesinos. La paralización del país a través de huelgas en los centros mineros y las ciudades, y bloqueos de carreteras en el área rural, en noviembre de 1979, logró la caída de un gobierno militar que había llegado cruentamente al poder pocos días antes. Movilizaciones posteriores aportaron significativamente a la instauración de la democracia, fase en la que las demandas de desarrollo rural se hicieron más sólidas.

EL ESTADO Y SUS REFORMAS

En 1982 se estableció uno de los dos rasgos principales que continúan delineando la dinámica política y económica en Bolivia: la democracia. El otro rasgo es la economía de mercado. Una vez recuperada la democracia, el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP) no pudo lograr éxitos en términos de gobernabilidad. Durante su administración, que duró hasta 1985, se dieron una gran cantidad de protestas y conflictos, un bloqueo parlamentario de las iniciativas del ejecutivo, y la más alta de las inflaciones de la historia del país. El siguiente gobierno, liderado por Víctor Paz Estenssoro, decretó el inicio de una nueva política económica de fuertes tintes neoliberales, y empezó la dinámica de coaliciones parlamentarias que respaldan las propuestas del gobierno y le brindan estabilidad⁷.

A partir de entonces los cambios propendieron, en política, a la descentralización (administrativa en el caso de los gobiernos departamentales, política y administrativa en el caso de los gobiernos municipales) y a la participación popular en la gestión local del desarrollo. Igualmente, en el nivel nacional, se realizaron con elección popular cinco cambios de administración sucesivos y los gobiernos se vieron obligados a conformar coaliciones, dando lugar a una democracia pactada, que respaldaran sus decisiones y propuestas desde el Poder Legislativo. Los partidos políticos asumieron el papel mediador que las leyes les reconocen y que antes ejercían los sindicatos encabezados por la hoy débil Central Obrera Boliviana. Entre algunos de los aspectos centrales de la nueva política económica están la eliminación de subvenciones estatales, el despido masivo de trabajadores, en especial del sector minero, y la libre contratación, entre otras. Este proceso se acompañó con la proliferación de unidades económicas familiares "informales" en algunas ciudades. La promulgación del conocido Decreto Supremo 21060, en agosto de 1985, suele citarse como hito de la reforma económica. Ésta se profundizó posteriormente con la privatización de las principales empresas estatales y la reforma del sistema de pensiones⁸.

A partir de este cambio, los campesinos se empobrecieron más. La mayoría de los centros mineros, que constituían una parte importante de su mercado, fueron cerrados, y sus trabajadores fueron despedidos. La liberalización del mercado facilitó la internación de algunos alimentos básicos más competitivos. A eso se sumó el incremento del contrabando y la caída de la productividad agrícola por causas naturales -inundaciones, heladas y sequías- y humanas -la "minifundización" excesiva. Tampoco es despreciable la ausencia de políticas estatales en beneficio del sector rural. Por otro lado, el movimiento obrero también sufrió un proceso de debilitamiento y pérdida de su capacidad de convocatoria y movilización.

Entre los hitos principales de los cambios en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas en este período está una marcha ejecutada por los indígenas de la zona amazónica del país hacia La Paz, en 1990, conducida por la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) con la demanda de reconocimiento de su territorio, sus usos y costumbres, y sobre todo la propiedad colectiva de la tierra. Esta marcha indígena produjo un viraje en cuanto al objeto de las demandas campesinas, en tanto que incorporan un nuevo objeto, el "territorio", con sus determinaciones económicas, culturales y ambientales. Esa década, y sobre todo el período entre 1994 y 1996, será la de mayores cambios en el país.

Los años de 1994 a 1996 marcan con mayor fuerza los cambios producidos, esta vez con la intención deliberada de insertar el país en el concierto del mundo globalizado⁹ y con la conciencia de las amplias desigualdades que existen en Bolivia. Durante la anterior administración de Gonzalo Sánchez de Lozada con el MNR (1993-1997), por primera vez en la historia del país el vicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas, tuvo un reconocido origen aymara: era líder de uno de los partidos kataristas, Movimiento Revolucionario Túpaj Katari de Liberación, MRTKL. En ese lapso, el país sufrió un sacudón, primero con la Reforma de la Constitución Política (CPE) y luego con un paquete de políticas como la Reforma Educativa, la Ley de Participación Popular, la Ley de Capitalización, la Ley de Descentralización Administrativa y la Ley del Servicio Nacional de la Reforma Agraria (INRA), y la reforma de la Ley Electoral, entre otras.

Los aspectos centrales de la Reforma de la Constitución que interesan para los fines del presente artículo están en el reconocimiento del país en su condición multicultural y multilingüe (algunos líderes campesinos sostuvieron que se debía utilizarse el término “plurinacional”). Un segundo aspecto es la incorporación del concepto de “tierras comunitarias de origen” (Art. 171), que tiene un sentido de inclusión puesto que reconoce los usos, recursos, costumbres y formas de gobierno interno de las comunidades originarias, garantizando su identidad, valores, lenguas e instituciones. Estos cambios introducen el reconocimiento de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos de los pueblos indígenas del país. Son parte de un proyecto tácito de construir ciudadanía activa de manera mixta.

La Ley de Reforma educativa es consonante con el reconocimiento a la heterogeneidad étnica, lingüística y regional, en tanto que establece que la enseñanza debe ser bilingüe e intercultural. Esto entraña el fortalecimiento en la construcción de identidades de los diversos grupos. Como expresó el ex vicepresidente, Víctor H. Cárdenas, “la concepción de la pluriculturalidad estaba inscrita en el marco de la educación democrática y de la equidad de género, generación e interculturalidad, al dar igualdad de oportunidades al conjunto de la población boliviana”. Las leyes de descentralización y de participación configuran un país con proceso de descentralización. De ambas leyes, la última es la que ha provocado modificaciones sustantivas en términos políticos, ya que incorpora a los campesinos como actores con posibilidad de ocupar cargos políticos en la administración pública local, y elimina la frontera entre asentamientos rurales y urbanos integrándolos en el ámbito de la jurisdicción municipal. Por tanto, amplía el espacio de la vida política y modifica las relaciones sociedad-Estado, al otorgar a las sociedades locales poder en la toma de decisiones y de vigilancia ciudadana a través del reconocimiento a las organizaciones territoriales, que en el caso de la organización indígena son las comunidades, capitánías, etc., y, en el caso urbano, las juntas vecinales. La puesta en marcha de dicha ley abrió puertas para que nuevos partidos políticos ingresen en los gobiernos municipales. Así lo entendieron algunos líderes campesinos que llegaron a conformar el Instrumento Político de la CSUTCB en 1995. Este hecho resulta importante, al haber sido el inicio de los cambios actuales del sistema de representación política para el sector campesino e indígena del país que han dado la nueva cara que tiene hoy el Congreso Nacional.

Como se señaló, los campesinos perdieron importancia efectiva para el modelo económico, en tanto que no contaron más con el apoyo y la protección estatal, que su productividad disminuyó por catástrofes de origen natural y también por causas humanas como la minifundización de la tierra y el uso de fertilizantes químicos, entre otras. Sin embargo, su presencia política es ahora más notable que en épocas o coyunturas anteriores. ¿Cuál es la razón de este fenómeno aparentemente contradictorio? ¿Cómo se han convertido los campesinos en el núcleo del movimiento popular, supliendo a los sindicatos mineros? Las respuestas tienen que ver, sin duda, con el hecho de que estos movimientos exceden ampliamente la denominación más bien económica de campesinos, e incluyen en sus demandas y acciones elementos políticos y culturales que convocan a otros segmentos de la población. Por otro lado, debe tomarse en cuenta su notable capacidad de movilización.

EL MOVIMIENTO COCALERO¹⁰

El movimiento cocalero está conformado por campesinos que se trasladaron desde diversos puntos del país a la región tropical amazónica del departamento de Cochabamba, conocida como Chapare, en el centro de Bolivia, con la intención de establecer colonias y arraigar su modo de vida a los productos tropicales. Uno de sus motores, sin duda, es la presencia de algunos ex obreros de las minas y campesinos de otras zonas con experiencia en la organización sindical.

Los colonizadores se organizaron en sindicatos que se hicieron cargo colectivamente de las principales decisiones que involucra la vida en comunidad: la distribución de la tierra y la instalación de servicios básicos.

A inicios de la década del ochenta, coincidiendo con la dictadura de militares vinculados con el narcotráfico, se dio el boom de la producción de coca en el Chapare. Entre 1980 y 1981 la hoja de coca aumentó su precio en una proporción muy considerable, cercana a las cien veces. El trópico de Cochabamba atrajo entonces a una multitud de nuevos campesinos provenientes de zonas en las que las condiciones de producción se habían deteriorado por problemas climáticos o por la caída de la productividad agrícola resultante de la minifundización en que acabó la Reforma Agraria. Desde entonces, la coca se convirtió en el cultivo más importante de la región.

La presencia de colonizadores de culturas y ambientes diversos, la dirección de ex mineros o campesinos con experiencia en labores sindicales, la común tarea de develar un difícil medio ambiente, y la adopción de la coca como cultivo básico a partir del boom del narcotráfico, no alcanzan a explicar la importancia de las organizaciones campesinas del Trópico de Cochabamba, que llegaron a conformar un movimiento social de repercusiones de escala nacional¹¹. En este punto es importante la noción de afuera o exterior constitutivo¹². En 1988 se aprobó la ley del régimen de la coca y sustancias controladas (conocida como Ley 1008). En ella, el territorio boliviano se divide en tres grandes zonas: la zona de cultivo tradicional de coca, la zona en transición, y una tercera zona en la cual la producción es penalizada. La zona tradicional corresponde a una parte del territorio del departamento de La Paz, y en ella se acepta el cultivo con caracteres irrestrictos. El Chapare es reconocido como zona en transición, en la que el cultivo no está inicialmente penado pero debe erradicarse. La tercera zona corresponde al resto del país, en el que la producción de coca está penada. En realidad, la Ley 1008 penaliza la condición de productor de coca. Desde su aplicación se ejecutaron programas de erradicación y sustitución de cultivos que no carecieron de rasgos represivos. Los intentos de “erradicación concertada y compensada” y “desarrollo alternativo” fueron siempre acompañados por operativos de “interdicción” en los que las víctimas eran los campesinos. Aparte de este aspecto perverso, la Ley 1008 contradice preceptos constitucionales en tanto que presupone la culpabilidad de los portadores de sustancias controladas. En ese caso, la prisión es inmediata sin juicio, y los presos deben demostrar su inocencia. La población carcelaria inocente se incrementó notablemente entre el año de promulgación de esa ley y el año de su reforma, en 1996. Los organismos represivos empezaron a mostrar estadísticas de operativos y cantidades de prisioneros que intentaban expresar que la lucha contra el narcotráfico era seria y eficiente¹³.

Las organizaciones cocaleras se cohesionaron con el fin de resistir la represión y desarrollaron a partir de ello acciones de política de la identidad. Su discurso se centró en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la coca como fuente de ingresos pero también como “hoja sagrada”, y por último en la defensa de su propia condición de población pobre estigmatizada por las autoridades estadounidenses.

Este tipo de acción política, en el caso de los cocaleros, se desarrolla en primera instancia con los enemigos fácilmente identificables -policías, militares- pero siempre en referencia a los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos, de modo tal que, aún bloqueando una carretera en el Trópico, el horizonte de la acción está en La Paz: ahí se debe concentrar el impacto. Por ello los cocaleros organizaron una serie de marchas a la ciudad de La Paz, con el fin de negociar con el gobierno el respeto de los derechos humanos y la finalización de la erradicación forzosa de cacaes.

Sin embargo, a pesar de esta determinación de oposición y resistencia, los coccaleros decidieron adscribirse a la institucionalidad democrática vigente desde 1982 creando un partido político para intentar llegar a los gobiernos municipales en primera instancia, a representaciones nacionales en el Parlamento en segunda instancia, y al gobierno nacional. La iniciativa de crear un partido campesino surgió en el Trópico, y fue planteada en 1995 a las principales organizaciones campesinas e indígenas del país en un congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). El congreso se llamó 'Tierra, Territorio e Instrumento Político de la CSUTCB'. En él se creó el "instrumento político" denominado Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) y posteriormente Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos.

El instrumento adoptó las siglas de partidos registrados en la Corte Nacional Electoral, primero de la Izquierda Unida y luego del Movimiento al Socialismo (MAS), con la que continúan actualmente. Participó dos veces de elecciones nacionales y otras dos de elecciones municipales. En las nacionales obtuvieron varias diputaciones; en las municipales, el control de los tres municipios del Trópico y otros del departamento de Cochabamba. A manera de hipótesis puede plantearse la siguiente regularidad que tiene que ver con el "éxito" político de las organizaciones de coccaleros en su relación con la opinión pública boliviana. El movimiento adquiere mayor vitalidad mientras más duras son las amenazas del afuera constitutivo. Cuanto más cerca estén los coccaleros del carácter de víctimas, sus movilizaciones serán tanto más vigorosas y contarán con tanto mayor apoyo de la población. Esto se da al menos en el combate al narcotráfico, en la política parlamentaria y en las contiendas electorales.

Los operativos de represión del narcotráfico criminalizan la condición de campesino, y de hecho algunos se hacen solamente para amedrentar a los coccaleros, incrementar su inseguridad y desalentar la participación en las movilizaciones que llevan a cabo las organizaciones. Pese a los actos que acompañan estos operativos -detenciones injustas, muertes y otras violaciones de los derechos humanos- los campesinos continúan apoyándose en sus organizaciones. En el caso de la política parlamentaria, una alianza informal de los partidos más tradicionales expulsó a Evo Morales de la Cámara de Diputados en enero de 2002. Los diputados de estos partidos votaron su desafuero dando validez a una acusación de instigación al crimen. Morales salió del parlamento e inmediatamente se dedicó a promover su candidatura a la presidencia de la república. Al final de la campaña electoral, el embajador estadounidense en Bolivia sugirió públicamente no votar por Morales, ya que la ayuda económica que Estados Unidos presta a Bolivia se vería comprometida.

La votación demostró que la población no hizo caso de esa sugerencia: Evo Morales obtuvo el segundo lugar en la elección nacional y estuvo en posición de disputar la presidencia de la República en la segunda vuelta en el Parlamento.

La característica principal de la coyuntura actual es la adopción de formas de acción enmarcadas en la normatividad democrática. Los movimientos indígenas y campesinos en Bolivia no plantean de entrada una vía al margen de las reglas de la democracia en la intención de satisfacer sus demandas. La lucha armada no es vista como el camino hacia la consecución de sus objetivos. En cambio, su presencia en los gobiernos municipales, en los Consejos Departamentales y en el Parlamento, expresa una adscripción al ordenamiento formal del Estado.

La creación de un instrumento político de expresión campesina subordina sin embargo la acción de los representantes a las decisiones asumidas por las organizaciones sindicales. Esta afirmación tiene sustento en las formas de toma de decisiones de los líderes sindicales que fueron elegidos como autoridades locales. Esto plantea el problema de la relación entre un mandato imperativo por parte en última instancia de las bases, y de la libertad de mandato que necesita la deliberación en los cuerpos legislativos.

Luego de estas breves referencias del movimiento coccalero, revisaremos dos momentos de su participación en los conflictos que tuvieron lugar en Bolivia durante el año 2000, en la administración del fallecido general Hugo Bánzer. En el primero, conocido como "la guerra del

agua” de la ciudad de Cochabamba, tuvo una participación casi tangencial. En el segundo, denominado comúnmente “Septiembre negro”, su papel fue algo más protagonista.

EL ABRIL Y EL SEPTIEMBRE: DOS MOVIMIENTOS SOCIALES

En el caso de la guerra del agua, diversos sectores sociales urbanos y rurales conformaron esta acción colectiva con un alto contenido de solidaridad¹⁴. A instancias de varios segmentos sociales que advirtieron las dificultades que conllevaría la concesión del servicio de agua potable en una zona tan necesitada de este líquido como Cochabamba surgió la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida como el ente que aglutinaría a ese colectivo social compuesto por campesinos regantes, fabriles, maestros, profesionales, ambientalistas, universitarios, sectores pobres urbanos y algunos segmentos de la clase media. También se sumarían los campesinos productores de coca y transportistas. Las diversas acciones colectivas llevadas a cabo a lo largo de tres meses, marchas y bloqueos, no sólo llegaron a paralizar la ciudad sino que también lograron aislarla del resto del país, pues organizaciones campesinas bloquearon las carreteras de interconexión con otras regiones. El objetivo de tales acciones fue evitar la mercantilización del agua con un costo excesivo, en razón de su carácter de bien indispensable y escaso: “bajo esta premisa, luchó para eliminar la amenaza de un contrato y una ley retrógrada y atentatoria y para afirmar el carácter social del agua” (Kruse y Vargas, 2000).

Con esta base el movimiento social interpeló al Estado por una concesión oscura en favor de una empresa trasnacional y por la legislación “acomodada” que acompañó la concesión. Al margen de los resultados de más largo plazo -inicialmente la empresa se retiró y el servicio de dotación de agua volvió a la administración pública con control social- el movimiento logró que casi toda la ciudad protestara unánimemente: por alzas injustificadas de las tarifas, por la violencia de la represión. Esta represión torpe, sobre todo la que se dio en el mes de abril, encontró una cerrada resistencia y contribuyó a la agregación de los diversos segmentos de la sociedad local y regional y al establecimiento de lazos de solidaridad entre ellos. Por otra parte, esta acción colectiva debilitó aún más al gobierno y se convirtió en un estímulo para otras acciones realizadas por fuerzas sociales. Incluso hubo quienes sostenían que había un acuerdo entre algunos políticos oportunistas para que Bánzer dejara la presidencia. Así, mientras en Cochabamba crecía la protesta, el departamento de La Paz también fue escenario de otros movimientos. Un motín de los miembros de un grupo de seguridad de la policía, y el líder de la CSUTCB, Felipe Quispe, el “Mallku”, también protagonizó movilizaciones con campesinos aymaras en una acción de bloqueo de carreteras como señal de apoyo al movimiento social de los cochabambinos.

De otro lado, esa debilidad de los gobernantes, el recuerdo de la dictadura de la década del setenta, y la acción de masas de Cochabamba, abrieron un escenario de confrontación potencial permanente en el que no sólo se buscaba la satisfacción de demandas sociales sino el ajuste de los liderazgos. Entre abril y septiembre de 2000, tomando como premisa el carácter endeble del gobierno, se dieron una serie de movilizaciones de varios sectores: indígenas de las llanuras amazónicas en reclamo del cumplimiento de ofertas gubernamentales en cuanto a la titulación de tierras; la Coordinadora de Defensa del Agua y la asociación de regantes de Cochabamba que amenazaban con reeditar la Guerra del Agua exigiendo la rescisión definitiva del contrato con la empresa concesionaria que había sido expulsada por la movilización; administrativos de la educación, maestros y padres de familia en contra de reformas administrativas.

Fueron precisamente los maestros quienes iniciaron una marcha desde la ciudad de Oruro hacia La Paz en defensa de sus salarios. La Federación de Maestros declaró entonces un paro nacional indefinido, instalando piquetes de huelga de hambre en las principales ciudades. La Coordinadora de Movilizaciones Única Nacional (COMUNAL), formada poco antes por la Coordinadora del Agua, las federaciones de colonizadores del departamento de Cochabamba y otras organizaciones, apoyó al magisterio y convocó al bloqueo de carreteras en todo el país, intentando agregar la mayor cantidad de sectores en movilización. También iniciaron protestas la Central Obrera Boliviana y la CSUTCB. Los dos núcleos duros del proceso fueron el trópico de Cochabamba, donde el liderazgo de Evo Morales es indiscutible, y la zona de Achacachi, en

el altiplano paceño, donde el discurso de los dirigentes de la CSUTCB, sobre todo de Felipe Quispe, el “Mallku”, alcanzó posiciones extremas¹⁵. En ambos lugares el gobierno utilizó al ejército, que intentó restablecer el orden y la libre circulación de carreteras por la vía violenta. Las movilizaciones lograron paralizar el país y afectaron su economía, al punto que incluso algunos empresarios privados realizaron acciones de protesta demandando del gobierno y del movimiento social el cese de las acciones de confrontación. Después de abril y septiembre, las organizaciones campesinas adquirieron conciencia de su fuerza y de sus posibilidades de acción política. Fue también en ese escenario que se planteó la necesidad de establecer el funcionamiento de una Asamblea Constituyente con participación de las distintas organizaciones sociales para “refundar el país”. A partir de ese año el país ya no podría ser el mismo, lo cual se haría patente en el resultado de las elecciones generales de junio de 2002. Ya se conoce el resto de la historia. El MNR ganó las elecciones con un margen muy escaso por encima del segundo. El segundo fue precisamente el instrumento político de las organizaciones cocaleras y campesinas. La bancada indígena y campesina es mayor que en ningún otro momento de la historia del poder legislativo boliviano. El momento plantea varias dudas y desafíos que el país no podrá soslayar: estabilizar un movimiento que no tiene garantías de continuar con el éxito del respaldo popular masivo; definir si éste es un paso hacia el cierre del ciclo histórico que se abrió con la recuperación de la democracia y la instauración de la nueva política económica. ¿Qué se puede esperar en los siguientes años? ¿Habrá mayor inestabilidad? ¿O será más bien que la representación de los sectores más amplios de la sociedad boliviana en el Parlamento compensará con legitimidad las dificultades que se planteen para la estabilidad?

Los parlamentarios campesinos e indígenas tienen clara la idea de “refundar el país” a través de la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Sin embargo, deben dar contenido a esta demanda, que fue manejada en muchos casos como un mito movilizador vacío con la intención de articular las intenciones de la sociedad. En todo caso, al margen de este contenido y de la manera en que se lleve la dinámica oficialismo-oposición en el próximo lustro, los cambios continúan dándose. Y, como sucedió en toda la historia republicana, la presencia de los campesinos e indígenas es indispensable en las grandes modificaciones del país. Líneas arriba se señaló que el campesinado boliviano se había debilitado como consecuencia de la apertura del mercado y el incremento del contrabando de productos alimenticios. Sin embargo, la promulgación de la Ley 1008, que orienta la lucha contra el narcotráfico y penaliza la producción excedentaria de hoja de coca, constituyó un fuerte ingrediente para el crecimiento del movimiento de los campesinos productores de coca al que se adscribirán las organizaciones matrices propias como la CSUTCB, por ejemplo.

Sin duda, el valor que tiene la hoja de coca en la visión andina, pero sobre todo su importancia en la relación de Bolivia con Estados Unidos, es uno de los factores que aportó a la influencia de las organizaciones campesinas. Por otra parte, la inclusión del tema de la interculturalidad y otros relacionados con los pueblos indígenas, como la protección del medio ambiente, en la agenda de discusión internacional, ha dado vigencia a demandas de reconocimiento de las culturas originarias.

Estos factores exógenos, sin embargo, no alcanzan a explicar la importancia que hoy tienen en Bolivia los movimientos campesinos. Las causas de este fenómeno deben buscarse en las características mismas de la heterogeneidad del país, en problemas y conflictos no resueltos desde la época colonial, en las expectativas no cumplidas por la revolución nacional de 1952, y en la situación actual de pobreza y exclusión social que sufre la población rural. A esto deben sumarse la capacidad organizativa y el denso tejido social construido alrededor de la identidad étnica.

A MANERA DE CIERRE

A lo largo del trabajo se enfatizó la importancia de la presencia de los movimientos indígenas y campesinos en la política nacional. La heterogeneidad de estos movimientos impone cautela en esta generalización. En todo caso, el proceso que se está viviendo en el país constituye sin lugar a dudas un momento de incuestionable importancia en tanto que el acceso al poder político en un número significativo y a la vez representativo de la diversidad cultural es un

desafío en términos de lograr las transformaciones estatales que posibiliten la inclusión de un sector que, a pesar de su importancia poblacional histórica, no logró el reconocimiento del resto de la sociedad.

Las demandas de los movimientos indígenas variaron con la historia boliviana. El respeto de las tierras ante la expansión de la hacienda y las relaciones serviles antes de 1952 cedió su lugar a la búsqueda de la independencia organizativa en los períodos posteriores, y a la recuperación de la democracia hacia finales de la década del setenta. Actualmente, el discurso de los líderes campesinos e indígenas se refiere a la autonomía, a la integración y al respeto de las diferencias. Expresa en algunos casos posturas milenaristas y fundamentalistas que intentan recuperar la situación precolonial, y en otros reclama el poder para los sectores mayoritarios de la población nacional.

Las formas de acción de los movimientos indígenas también cambiaron. La amenaza del cerco de la ciudad de La Paz, que sería una repetición del sitio realizado por los grupos aymaras liderados por Túpaj Katari en 1871, siempre presente en la memoria colectiva de los habitantes de la actual sede de gobierno, permanece como la expresión simbólica de la propiedad del espacio por parte de la multitud indígena y del poder que confiere esta condición. Actualmente, a la realización de bloqueos de carreteras, tan importante en los momentos de la recuperación de la democracia, y de las marchas hacia La Paz, que fueron características del actual ciclo histórico, se suma la lucha política dentro del Parlamento y en los gobiernos locales. Esto sitúa al movimiento indígena y campesino –hoy representado por dos partidos políticos con líderes emergentes del sindicalismo y que manifiestan diferencias sustantivas en términos de convivencia intercultural, de visiones ideológicas y también de caminos recorridos, pero comulgan en ciertas formas de liderazgo– en una serie de desafíos en tanto que ambos proclaman la necesidad de transformar el país de manera que responda a visiones relativamente distintas. Mientras uno plantea la exclusión de la minoría blanca, el otro proclama cambios sin exclusión, con el poder en manos de la mayoría.

El conjunto de las consideraciones anotadas a lo largo del trabajo permiten entender que la coincidencia de ambos partidos en la elección Presidencial en el Congreso (los diputados del MIP votaron por el candidato del MAS) puede ser algo apenas circunstancial, y no se sabe cuál será el comportamiento futuro de ambos partidos como fuerzas de oposición a la actual coalición gobernante. Ambos tienen un desafío común: o cruzar la frontera del sindicalismo a una política partidaria que no esté supeditada a los mandatos de la organización, o plantear otro desafío más profundo al sistema político del país, en la medida que los partidos políticos, y con ellos la democracia occidental, podrían modificarse y admitir otras maneras de acción.

BIBLIOGRAFÍA

AA.VV. 2000 Las reformas estructurales en Bolivia (La Paz: Fundación Milenio).

Beck, Ulrich 1998 ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización (Barcelona: Paidós).

Instituto Nacional de Estadística 2002 Mapa de pobreza 2001. Necesidades básicas insatisfechas (La Paz: INE) Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales.

Kruse, Tom y Humberto Vargas 2000 "Las victorias de abril: una historia que aún no concluye", en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) N° 2, Septiembre.

Laserna, Roberto 2001 Los conflictos sociales en el año 2000 (Cochabamba: CERES).

Laserna, Roberto y Miguel Villarroel 1999 29 años de conflicto social (Cochabamba: CERES).

Melucci, Alberto 1991 "La acción colectiva como construcción social", en Estudios Sociales del Colegio de México (México) Vol. IX, mimeo.

PNUD 2001 Informe sobre desarrollo humano, 2001. Poner el adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano (Madrid: PNUD).

Staten, Henry 1984 Wittgenstein and Derrida (Lincoln: University of Nebraska Press).

Touraine, Alain 2002 "The Importance of Social Movements", en Social Movement Studies (Londres) Vol. 1: 89-95, mimeo.

Touraine, Alain 1995 Producción de la sociedad (México: IIS-UNAM).

Wacquant, Loïc 2000 Las cárceles de la miseria (Buenos Aires: Manantial).

NOTAS

* Arquitecto. Investigador y ex director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES).

** Sociólogo. Investigador del CERES.

1 De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (2001), Bolivia ocupa el último lugar entre los países sudamericanos en cuanto a desarrollo, con un Índice de Desarrollo Humano de 0,648. Según los resultados del censo de 2001, el 38% de los 8,3 millones de bolivianos empadronados viven en el área rural. Treinta y nueve de cada 100 habitantes del área urbana son afectados por la pobreza; en el área rural esta proporción asciende a 91 por cada 100 (véase Instituto Nacional de Estadística, 2002). La autoidentificación de los bolivianos como miembros de uno de los alrededor de cuarenta pueblos indígenas alcanza una proporción del 62%. A lo largo de la exposición no haremos énfasis en la distinción entre lo campesino y lo indígena. En Bolivia, ambos aspectos pueden considerarse, en la mayoría de los casos, como posiciones distintas de un mismo sujeto.

2 Estas afirmaciones no tienen el ánimo de hacer simplificaciones o generalizaciones excesivas. Se refieren sobre todo a los grupos quechuas y aymaras que en algún momento tuvieron importancia en la política y la economía de Bolivia. Históricamente los pueblos amazónicos y chaqueños influyeron menos en los centros de poder ubicados en la zona andina del país.

3 Ya en el poder, los liberales abandonaron sus iniciales intenciones federalistas y propugnaron más bien el centralismo de la ciudad de La Paz; afectados por visiones racistas, abandonaron también a sus anteriores aliados indígenas.

4 La importancia de las milicias armadas llegó a ser tal que algunos líderes campesinos las consideraban como uno de los dos elementos que definían la identidad del campesinado en el momento revolucionario. El dirigente cochabambino Miguel Veizaga pudo afirmar: "La tierra es la madre y el fusil es el padre".

5 El katarismo es una tendencia de revalorización cultural que recupera la herencia de Túpaj Katari, el líder aymara que sitió la ciudad de La Paz en 1781 y luego fue condenado a morir descuartizado por cuatro caballos.

6 El pacto no impidió que los gobiernos militares llevaran a cabo acciones represivas violentas en contra de los campesinos. Uno de los hitos de la ruptura del pacto, según se señala habitualmente, es una masacre ejecutada en 1974 en poblaciones rurales del valle de Cochabamba, cuando una protesta campesina motivada por un decreto que rebajaba los precios de los productos agrícolas fue develada con el ingreso del ejército nacional.

7 Un documento elaborado por R. Laserna y M. Villarroel (1999) precisa que durante el gobierno de la UDP el país vivió 1.820 situaciones de conflicto, y es el promedio por mes (53,99) más alto de conflictos durante el período de 1978 a 1998. Sin lugar a dudas la hiperinflación desatada, una de las más altas, fue uno de los detonantes de estos conflictos.

8 Para un examen de las transformaciones del Estado entre 1985 y 1997, cf. los dos volúmenes de AA. VV., 2000.

9 De acuerdo con Ulrich Beck (1998: 15), "el término 'globalización', actualmente omnipresente en toda manifestación pública, no apunta precisamente al final de la política, sino simplemente a una salida de lo político del marco categorial del Estado nacional y del sistema de roles al uso de eso que se ha dado en llamar el quehacer 'político' y 'no-político'". Beck propone un esquema sencillo que distingue los caracteres económicos (globalismo), políticos (globalización) y sociales (globalidad) del fenómeno de la mundialización.

10 Entre los dos movimientos campesinos indígenas más importantes de la Bolivia actual preferimos dirigir las reflexiones hacia éste. El otro, liderado por el dirigente Felipe Quispe, apodado el "Mallku", tal como se denominan las principales autoridades de los pueblos aymaras, expresa posiciones menos pluralistas que el de los cocaleros y exige esfuerzos analíticos que, sumados al interés por el movimiento cocalero, exceden los márgenes estrechos de este trabajo. Su líder fundó un partido, el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), después de una trayectoria dirigencial que incluía la propuesta de retorno a la situación precolonial, la participación en un grupo armado (el Ejército Guerrillero Túpaj Katari) y la dirección de la CSUTCB.

11 Las definiciones de movimiento social son variadas. Las que aquí se adoptan se distinguen por su sencillez, ya que pueden hacerse operativas sin forzar analíticamente ni las categorías ni la realidad que se estudia. Según Touraine, se puede "definir los movimientos sociales, básicamente, como conflictos organizados o como conflictos entre actores organizados sobre el uso social de valores culturales comunes" (Touraine, 2002: 90).

12 De acuerdo con Henry Staten (1984: 16), hay elementos en el contexto que son indispensables para completar la identidad de un grupo. El principio de oposición que Touraine reconoce en los movimientos sociales se refiere a lo mismo, aunque asigna menor importancia a lo externo: "Un movimiento no se organiza más que si puede nombrar a su adversario, pero su acción no presupone esta identificación. El conflicto hace surgir al adversario, forma la conciencia de los actores en presencia" (Touraine, 1995: 251).

13 Los caracteres adoptados por la lucha contra la producción y el tráfico de drogas en Bolivia guardan similitud con las nuevas tendencias represivas del Estado penal del que habla Loïc Wacquant al referirse a la criminalización de la miseria en los "barrios sensibles" de las grandes ciudades de los países desarrollados, Nueva York en primer lugar (Wacquant, 2000).

14 Sobre la noción de solidaridad en vinculación con los movimientos sociales, cf. Melucci (1991).

15 Un comunicado emitido en julio de 2000 por los amautas y mallkus de Omasuyos, en Achacachi, señalaba: "Bolivia no es ninguna solución para nuestros problemas, su gobierno en vez de escuchar nuestras demandas, nos gasifica sin compasión en las calles y en las carreteras y ahora ha sacado todo su aparato bélico para amedrentarnos o matarnos". El mismo Mallku propició y rehuyó el diálogo con el gobierno y llegó a compararse con Túpaj Katari, al declarar que, al igual que al líder del siglo XVIII, él esperaba ser descuartizado, no con caballos, como en esa época, sino con tanques y helicópteros.

Chiapas: nuevos movimientos sociales y nuevos tipos de conflictos

Miguel Álvarez Gándara*

RASGOS DEL MARCO INTERNACIONAL

Desde el 11 de septiembre de 2001 la hegemonía integral del gobierno y la economía norteamericanas pesan de una nueva manera en el mundo, reduciendo los márgenes en que las soberanías nacionales puedan generar alternativas. Los reclamos por un nuevo orden internacional, el fortalecimiento del derecho internacional y de las instituciones multilaterales para garantizar justicia y equilibrio, han quedado rebasados por una nueva situación que replantea todo.

La guerra es ahora una realidad más visible, pues se refiere ya no sólo a las docenas de conflictos armados internos que proliferan por el mundo, sino a una nueva forma de combate frontal y no convencional contra los diferentes usando la coartada del terrorismo. Esta “nueva guerra” involucra en nuevas formas a los estados y a las alianzas del primer mundo, y está íntimamente ligada al despliegue de mecanismos políticos y financieros que consoliden los intereses de los poderosos.

En este marco se han agudizado las resistencias y tensiones, acrecentado las diferencias, ahondado las polarizaciones y diversificando los conflictos sociales. Hoy por hoy la lucha principal de los afectados se ha trasladado al terreno de los derechos humanos, la cultura, la economía solidaria y la defensa de los recursos naturales. Allí es donde se resiste. La resistencia se ha convertido en estrategia y germen de las alternativas que generan los pueblos empobrecidos frente al neoliberalismo. Es a partir del rescate de la identidad y autonomía que se pretende redefinir el sentido de la globalización.

La resistencia recurre, se fundamenta y alimenta de las propias raíces, sobre todo cuando el reto no es adaptarse para sobrevivir, sino defenderse para transformar. A partir del rescate de la identidad, de la recuperación y defensa de la cultura, del fortalecimiento de la lucha por los derechos humanos individuales y colectivos, así como de la generación de nuevas formas democráticas de participación en los asuntos públicos, se han encontrado las maneras de resistir y de sembrar alternativas a la matriz dominante.

Por ello, detrás de la defensa de identidades, autonomías o alternativas, lo que se ha fortalecido y revitalizado es la lucha por la dignidad. En mi opinión, este enfoque es fundamental para entender actualmente a los movimientos sociales, los nuevos conflictos armados y el tipo de paz a construir.

La paz es otra vez, con más urgencia y claridad, una prioritaria tarea mundial. Pero ¿cuál tipo de paz? La paz es hoy también un concepto polarizado que se disputa. Mientras para unos es la imposición y control de una fuerza y su proyecto sobre otros, en la lógica de los pueblos y de la solución a los problemas estructurales de injusticia, la paz es la construcción de condiciones de equidad que resuelvan las causas y no sólo ofrezcan salidas a los efectos y actores de los conflictos armados. La paz es un asunto de justicia, no sólo de fuerzas.

NUEVOS CONFLICTOS

La globalización enmarca y replantea, renueva o redimensiona a los viejos conflictos armados. Además, genera un nuevo tipo de conflictos. En todos los casos se requieren nuevos conceptos y criterios para comprenderlos y para resolver sus causas.

Observando el tipo de movimientos y luchas sociales que se están presentando en el mundo, y más concretamente recorriendo los diversos conflictos armados internos, puede afirmarse que, si bien guardan entre sí enormes diferencias y peculiaridades, no dejan de tener constantes y elementos comunes para explicarlos y resolverlos. Los retos de la guerra y de la paz también se han globalizado.

La paz no es más un problema local del país donde explota militarmente algún conflicto. La paz no es más la búsqueda de salidas políticas particulares para los actores militares o armados, sino la construcción de vías políticas ampliamente participativas para resolver las causas estructurales y políticas que explican que los excluidos sean base social de una rebelión armada. La paz no es la mera ausencia de rebeliones o el mantenimiento formal de la estabilidad política, sino la solución a los conflictos de fondo que se generan por la injusticia de una sociedad.

El verdadero conflicto, cuyas causas deben ser eje de la paz, está detrás y debajo del conflicto armado concreto, y sus fronteras no son las nacionales. Tampoco la génesis y lógica de la violencia es solamente local, pues el uso de la fuerza se alimenta globalmente como derecho e industria de los poderosos. Aunque se exprese a través de conflictos internos, la paz es un problema central y articulado de la agenda mundial.

Junto con viejos conflictos, activos aunque enraizados en etapas nacionales y mundiales que ya pasaron, ha aparecido también un nuevo tipo de conflictos, que ya no se refieren exclusivamente a problemáticas de nacionalidad, territorio, independencia o poder, ni solamente a la generación de condiciones revolucionarias para cambios nacionales. Estos nuevos conflictos, como el de Chiapas, se explican: por la problemática nacional, en el marco de la globalización neoliberal; por la problemática política, aunque no esté en juego la toma armada del poder; por la interacción de un nuevo tipo de actores y movimientos, tanto civiles como políticos; por el impulso de las viejas y nuevas causas nacionales, referidas a derechos colectivos, identidades culturales, crisis estructurales y nuevas metodologías y concepciones de la práctica política; y por la búsqueda de alternativas a los modelos globales dominantes.

Las grandes causas trascienden y aglutinan de diversas maneras a sus múltiples actores concretos, configurándose así procesos plurales y democratizadores que reclaman el reconocimiento de identidades, autonomías y culturas como rasgos de nuevos estados y proyectos de nación, en cuyo diseño se realiza la difícil disputa económica y social. Respecto de estos nuevos conflictos, más complejos, en varios niveles desde lo local hasta lo global, y que abarcan elementos culturales, junto a los políticos, económicos y sociales, me temo que los actores latinoamericanos de la paz no hemos logrado suficiente claridad. No se trata de promover o defender las vías armadas, sino de reconocer que ante los conflictos objetivos ellas son aún viables mediante otras formas. Frente a este reto y riesgo, tampoco hemos valorado ni retomado cabalmente todas las lecciones y dolores de procesos previos, ni hemos reencontrado las causas y soluciones políticas comunes.

En todo caso, viejos, renovados y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe demuestran que, a pesar de la extrema pobreza y la exclusión, y después del inicio de la polarización y la violencia, el principal tipo de luchas y el factor principal que desencadena las rebeliones armadas sigue siendo de carácter político. Por ello, también la política sigue siendo la clave constructora de una solución negociada y procesual. Una salida política rápida limitada a los actores militares ya no es suficiente, pues la paz requiere que la política se desarrolle como un proceso de largo plazo que permita impulsar las tendencias de la reconciliación y la participación de otros actores en la disputa por los cambios de fondo relacionados con las diversas causas del conflicto.

La paz es un proceso mucho más largo y complicado, cuya verdadera solución habrá de lograrse en tanto se convierta en un proceso de transformación nacional. Por ello, la pregunta por la solidez de la paz –basada en la democracia, la justicia y los derechos humanos– lleva a una respuesta en términos de Estado y de maduración de la sociedad misma. Así, para los nuevos conflictos, los organismos movilizados y concientes de la sociedad, con todas sus diversidades, son necesarios para dar rumbo y confluencia a los rasgos políticos, sociales y culturales que requieren la democracia, la justicia y la paz. Además, la participación civil es necesaria para detener las tendencias a la polarización y la violencia, que vive la sociedad por detrás y debajo del conflicto armado, impulsando en cambio las tendencias a la tolerancia y al diálogo.

No cabe duda de que como realidad y concepto la sociedad civil es compleja en sí misma. No obstante, en tanto expresión orgánica de la sociedad amplia, sus organismos conforman un mosaico de voluntades, actores y procesos sociales y ciudadanos que viven una natural diversidad, desde la que es posible impulsar la voluntad política necesaria para realizar los cambios que resuelvan realmente las causas del conflicto.

No se trata de sustituir a las partes o a la sociedad política, pero tampoco de limitar el papel civil al acompañamiento o la solidaridad. Al tomar posición en torno de la paz a construir, los movimientos y organismos sociales y civiles podrán desarrollar su interlocución, pero también consolidarán su autonomía respecto de las partes. Así, serán actores con voz propia, propositiva y comprometida, mientras la paz sea una tarea y proceso propio. Por todo lo anterior, es necesario entender el carácter, diagnóstico, estatus y actores de este nuevo tipo y carácter de los conflictos, a fin de lograr claridad sobre las concepciones, estrategias y procesos de paz y de negociación adecuados para resolver sus causas, incluyendo la problemática de la globalización, la democratización y la regeneración de las dimensiones éticas y culturales.

CHIAPAS: NOVEDADES ACERCA DEL ACTOR SOCIAL Y EL CONFLICTO

El conflicto mexicano es representativo de los nuevos conflictos mundiales y latinoamericanos, no tanto por que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sea un movimiento indígena armado distinto en sus planteamientos a las vanguardias armadas de Cuba o Centroamérica: es sabido que el EZLN no se presenta a sí mismo como quien ha de gobernar al país, ni siquiera plantea el programa alternativo en torno al cual luchar, sino que llama a un espacio común de generación de consensos y alternativas de donde surjan potentes propuestas civiles nacionales. Además, los zapatistas no están convocando a una insurrección general por la vía de las armas, sino a impulsar la articulación política necesaria para crear las condiciones de cambio sustantivo. El zapatismo es un actor político-militar novedoso porque, siendo un movimiento indígena armado, sus planteamientos están más allá de ellos mismos y sus derechos como pueblos indígenas, recogiendo una amplia gama de agendas y demandas de los movimientos sociales nacionales y mundiales.

El conflicto planteado por los indígenas no se limita a la problemática indígena como tal, aunque ciertamente existe. Sin embargo, los reclamos indígenas por el reconocimiento de su carácter de pueblos y culturas plenos tampoco están planteando un rompimiento nacional, a diferencia de los llamados conflictos étnicos tipo ex Yugoslavia, sino una transformación de Estado y sociedad que les dé su lugar y permita su aporte como actores civiles específicos. En el fondo, la novedad la definen las causas del conflicto mexicano, que se refieren, a partir del reconocimiento de los pueblos indios, a la necesidad de cambios en el Estado, la sociedad y sus modelos económico, político y cultural, entendidos como alternativa ante la globalización. El actor no hace al conflicto, sino que éste en su gravedad genera las condiciones del actor armado. Constatamos por tanto que se trata de un tipo de conflicto repetible y multiplicable que puede expresarse a través de diversos movimientos sociales y nuevas formas de lucha armada.

Así, dado el agravamiento de tensiones que generan las actuales hegemonías, debe asumirse que el conflicto chiapaneco representa un tipo de conflictos armados que se pueden reproducir en múltiples lugares y actores en las actuales circunstancias del mundo, y particularmente en América Latina y el Caribe. Ciertamente está cerrada la vía revolucionaria de las armas para tomar directamente el poder e implementar un programa radical de cambios. Sin embargo, habrá que reconocer que la exclusión y la crisis política no han cerrado la viabilidad, expectativas o condiciones de posibilidad para que los movimientos sociales sostengan otro tipo de movimientos armados. No estamos ante la llamada guerrilla clásica, sino ante la puerta que ha quedado abierta para que los excluidos, desde su dignidad y retaguardia, impulsen mediante cuerpos y acciones armadas algunas condiciones de defensa, articulación y movilización política que consideran que de otra manera no lograrían.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE CARACTERIZACIÓN

La opción por una salida política al conflicto que atienda desde su raíz las causas y los efectos generados desde 1994 requiere como primer paso la comprensión de su naturaleza y de la situación actual, estableciendo el tipo de confrontación, sus motivaciones profundas, actores, las lógicas que determinan su desarrollo y sus amenazas implícitas. La consideración realista y plena de este conjunto de factores que caracterizan al conflicto es una condición necesaria para avanzar con mayor claridad, justeza y certeza en la identificación de las vías de solución. Durante el curso del conflicto se ha dado una fuerte disputa por su diagnóstico y caracterización, en la que las partes han asumido posiciones cada vez más cerradas y divergentes, las que también se reflejan en sus diferentes concepciones de negociación y de la paz a construir. La disputa ha sido tan fuerte que puso en crisis la negociación iniciada, y después al conjunto del proceso.

En términos formales, se había logrado una convergencia básica de caracterización que permitió el inicio de los esfuerzos más serios aunque trunco de negociación, el de los llamados Diálogos de Catedral entre febrero y marzo de 1994, y el de la Mesa de San Andrés, del 9 de abril de 1995 hasta su suspensión en enero de 1997.

La concepción oficial y vigente sobre el conflicto, su regulación y su solución, es lo que se establece en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, aprobada el 11 de marzo de 1995 como marco jurídico propiciatorio, en cuyo Artículo 1º se reconoce la existencia de un "conflicto armado", sin abundar en su definición, pero reconociendo su naturaleza político-militar.

Esta ley establece que el EZLN como actor armado es una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas. Aunque se le coloca en una dimensión estatal, se asume que sus causas, y por tanto las soluciones necesarias, son de orden político, social, cultural y económico.

Sin embargo, el gobierno lo califica como "un conflicto de naturaleza política local que ya superó la fase de confrontación armada". Sostiene que su dimensión es regional e involucra múltiples actores locales, que obedece a una grave situación histórica de carencias sociales y marginación de las comunidades indígenas, así como a una intensa conflictividad extra, intra e inter-comunitaria derivada de motivos religiosos, ideológicos y políticos. Su estrategia se establece entonces en el impulso de programas de gasto social y de mecanismos de concertación comunitaria para atender la problemática local. Asimismo, explica la presencia militar como una garantía necesaria para asegurar el orden público, vigilar la frontera, combatir al narcotráfico y garantizar la seguridad nacional en tanto existe una declaración de guerra. En este marco, el conflicto con el EZLN es sólo uno de los componentes del problema. Para el EZLN, en cambio, se trata de un conflicto armado que ha derivado en una guerra de exterminio, dirigida contra las formas de vida y reproducción comunitarias y que opera bajo la forma de una guerra de baja intensidad, desde una visión de Estado que mantiene la lógica militar como factor dominante para imponer su solución. Frente a ésta, el movimiento zapatista define una estrategia de resistencia y de acumulación política de fuerzas, dirigiendo su discurso y acciones contra las fuentes de legitimidad del Estado. Sostiene que sus causas son estructurales y nacionales, y que para resolverlas se requiere de una profunda transformación del Estado y del modelo económico. Enfatiza la lucha por los derechos indígenas como elemento identitario fundamental del movimiento.

Las diferencias son abismales. Además, el conflicto no es estático y ha vivido diversas etapas y transformaciones. Por ello, se hace necesario que otras fuerzas o propuestas distintas de las partes sean capaces de restablecer la convergencia en torno de una caracterización procesual básica para sustentar nuevos esfuerzos de negociación y de paz.

En esta búsqueda de opciones se vuelve la vista a las experiencias en otros países y a las referencias del derecho internacional, que en otros casos ha dinamizado el proceso a partir de establecer el estatus de los conflictos.

Se sabe que el gobierno mexicano se ha negado desde el principio a incorporar los criterios e instrumentos del derecho internacional, en buena parte por su negativa a aceptar las implicaciones del conflicto y reconocer la beligerancia del EZLN. El Protocolo II de los Convenios de Ginebra define desde 1977 como conflicto armado interno a “todo conflicto que se desarrolle en el territorio de un Estado, entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados, que bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, y aplicar el derecho internacional establecido para este tipo de conflicto”.

Si bien hay elementos de esta definición internacional que se ajustan a Chiapas y otros se han transformado en el curso del conflicto, no se recogen algunos rasgos distintivos derivados de su carácter de nuevo tipo de conflicto. En una etapa inicial el conflicto surge y se expresa correspondiendo con estos parámetros, operando prácticamente la lógica internacional para establecer el cese al fuego y las “zonas grises” de seguridad protegidas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Muy pronto la situación evoluciona hacia una rebelión social constreñida a un territorio y controlada militarmente, que bajo una situación de tregua indefinida, sin acciones bélicas o enfrentamientos militares directos, y a pesar de la aparición de nuevas formas de violencia local y paramilitar, adquirió su mayor fuerza e impacto en la incidencia política de alcance nacional e internacional. Luego de casi siete años, la trayectoria del conflicto ha ido revelando causas e incorporando dimensiones, actores e intereses, lo que hace cada vez más difícil su comprensión y su solución.

Este desarrollo cada vez más complejo del proceso requiere construir una visión común del conflicto, identificando sus rasgos, etapas y dinámicas que lo determinan y definen. Este apartado recoge los elementos que se aportaron en este sentido.

EN CHIAPAS, UN NUEVO TIPO DE CONFLICTO

Aunque existe una percepción generalizada de que el conflicto entre el EZLN y el gobierno corresponde a un nuevo tipo de conflicto armado, se constata que no existe hasta hoy un marco teórico–metodológico que adecuadamente tipifique o categorice a esta nueva generación de conflictos. Por lo tanto, una tarea que se desprende de este reconocimiento es la necesidad de abundar en el análisis y sistematización de sus elementos característicos, con el fin de entender y definir correctamente su naturaleza. Se presentan a continuación los principales elementos o rasgos en análisis y reflexión.

RASGOS DE DEFINICIÓN DEL CONFLICTO

El conflicto en Chiapas puede caracterizarse como un conflicto armado interno de nuevo tipo, con base en los rasgos novedosos de definición vistos desde las causas y los actores en juego que se enuncian a continuación.

La fuerza y peso del actor no se dan en función de su acción y capacidad militar, aunque la preservan, sino de la justeza de sus causas y el consenso social en torno a éstas. Desde su surgimiento, el gran poder referencial y comunicativo del actor insurgente permite ubicarlo de manera distinta a los actores armados de otros procesos.

La magnitud, rapidez y amplitud de la articulación de esfuerzos y adhesiones en torno del reconocimiento de las causas justas del conflicto, así como la exigencia nacional del cese al fuego para buscar una vía de solución política, constituyen elementos novedosos de participación social para la configuración de las correlaciones, agendas y actores del proceso. En varios niveles, las causas se reconocen de carácter, alcance y solución histórica y nacional, en agudización enmarcada por la globalización. Se combinan diversas causas a partir de aquellas que se fundan en una problemática estructural de diversa naturaleza (económica, social, política y cultural), integrando las demandas y propuestas de otros actores a lo largo del proceso, e incluyendo los efectos de la violencia que se suman en el propio curso del conflicto.

En torno del conflicto se expresa la disputa central por la legitimidad y transformación de las distintas dimensiones de la vida nacional: económica, política, social, cultural y militar. Sin embargo, el actor no plantea la destrucción del Estado, sino la transformación de éste a través de una profunda reforma política, jurídica, institucional y cultural. El actor tampoco se asume en la pugna por el poder político como vanguardia y portador del nuevo Estado, sino como el vehículo articulador de las aspiraciones y las exigencias sociales y políticas de distintos sectores nacionales.

La acción y discurso del movimiento rebelde asumen e integran distintos elementos: identidad, autonomía y reclamos indígenas, resistencia a la conflictividad local, propuesta civil nacional, y crítica internacional. Así, incorporan diversos elementos identitarios que se expresan desde un movimiento indígena armado que es parte impulsora de un movimiento político amplio. Su proyecto y discurso sostienen elementos utópicos, pero también contienen propuestas de corte reformista para avanzar hacia la consecución de cambios sustantivos. Colocan como ejes de referencia la lucha por la dignidad, la inclusión, los derechos, particularmente de los pueblos indígenas, así como el rechazo al neoliberalismo, logrando incidir de manera significativa en el ámbito internacional.

Sus estrategias implican elementos originales y novedosos que se distinguen de los conflictos tradicionales en América Latina, en tanto han evitado la confrontación armada, optando por una estrategia de resistencia y de acumulación de fuerzas para privilegiar su acción en la esfera política y de opinión pública.

CARACTERÍSTICAS DEL CONFLICTO

Sobre las características del conflicto se han formulado diversos aportes y elementos de análisis. Se trata de un conflicto multidimensional y multicausal.

Desde su inicio, y a lo largo de varias etapas, el conflicto se manifiesta y se disputa en distintas esferas: política, social, económica, cultural y militar, con profundos impactos en cada una de ellas. Si bien su carácter multidimensional es claro, el factor militar predomina aún, sobre todo cuando ha sido el eje central sobre el que se han definido las condiciones, estrategias y posibilidades de acción de la parte gubernamental en los otros ámbitos.

No obstante que para la mayoría de actores y analistas sociales es la lógica militar la que define la concepción y estrategia del Estado, algunos matizan ahora que aunque la lógica militar predomina, actúa determinada por la lógica política. En todo caso, se considera que al garantizar el control territorial y la destrucción del tejido comunitario, el ejército administra y canaliza la violencia –acelerando problemáticas locales y la paramilitarización– para producir la correlación político-social que da base al diseño de las estrategias gubernamentales para las diversas disputas relacionadas con el conflicto, incluidas la negociación, la incidencia en la opinión pública o la diplomacia.

El conflicto incorpora los contenidos de la lucha social y política de diversos ámbitos –comunitario, municipal, regional, estatal, nacional e incluso internacional– siendo uno de sus rasgos más significativos la capacidad de engarzar esos diferentes ámbitos y contenidos en la expresión de los problemas y las alternativas frente a los mismos.

La naturaleza específica del movimiento armado tiene una raíz histórica en anteriores rebeliones chiapanecas que, a pesar de no tener clara la concepción de lo indígena, habían asumido este componente como parte vital de su identidad y demandas.

El conflicto expresa también la crisis de un sistema regional de dominio basado en la estructura agraria, el aplastamiento cultural, la pobreza extrema y el predominio de instituciones políticas autoritarias, represivas y excluyentes. Frente a ello, el conflicto expresa la reconstitución étnica y el desarrollo de los actores emergentes que se configuran desde diversos procesos organizativos y de conciencia para defenderse de los grupos locales integrados a las cadenas del poder político y económico. En esta dimensión se ubica una intensa pugna por las reglas de convivencia política y social, por la tierra, por los recursos públicos, por el ejercicio de derechos

sociales y culturales, así como por el acceso a la justicia, la educación y el desarrollo. De igual manera el conflicto expresa la problemática nacional, producto de un sistema profundamente desigual e injusto. Hace visible y sensible, para el conjunto de la sociedad mexicana, la situación económica y política de los pueblos indígenas y de otros sectores excluidos. Al asumirse ésta como intolerable, se logra un amplio consenso social en torno a las causas. En este sentido, se alcanza desde el primer momento una proyección y dinámica nacional que vincula agendas y actores en torno a la necesidad de impulsar transformaciones de fondo que resuelvan esta condición de exclusión política, económica y cultural. En el vínculo de lo local y lo nacional es importante reconocer el hecho de que la oligarquía chiapaneca está fuertemente imbricada con sectores de la clase política nacional. Dicha alianza no permite pensar en una solución que prescindiera de cambios que afecten las bases del apoyo político y del control sobre recursos que son pieza del enclave de poder político y económico regional. En este sentido, aún los problemas locales del conflicto tienen un impacto de carácter nacional en la medida en que están ligados a intereses estratégicos nacionales. Una solución real del conflicto tendría que asumir por lo menos el sacrificio del bloque conservador que se ha articulado en torno a un sistema regional de dominio útil a grupos de poder económico y político del país.

Por otro lado, el zapatismo insiste siempre en que el conflicto tiene también raíz en el neoliberalismo y sus implicaciones políticas, éticas, económicas y culturales, afirmando que la creciente dependencia económica y política del Estado mexicano refleja el peso y control del modelo dominante mundial, al que debe confrontarse. Al hacerlo desde sus muy especiales capacidades discursivas y de comunicación, el zapatismo pudo convertirse rápidamente en una representación simbólica de esta lucha y en un referente para quienes desde otros países cuestionan los impactos de este modelo y plantean nuevas alternativas frente al mismo. Por ello, ha generado numerosos procesos de empatía y solidaridad en el ámbito internacional, sobre todo entre movimientos políticos y civiles del propio primer mundo.

El conflicto es multicausal porque expresa un diversificado conjunto de factores de distinta naturaleza y nivel que logran una integralidad de causas de carácter estructural. Ello hace que sea difícil definir al conflicto mexicano, pues no sólo se refiere a la problemática nacional sino que está inscrito de frente a la globalización y el neoliberalismo.

De acuerdo a algunas de las tipologías que se han elaborado para caracterizar a los nuevos conflictos en el mundo en función de sus causas, se pueden ubicar cinco tipos de conflictos que se corresponden y se combinan en el caso mexicano, según se detalla a continuación:

- Conflicto de legitimidad: tiene como causa la crisis de legitimidad y representación del régimen. Surge como consecuencia de la crisis de legitimidad del Estado y de la ausencia de participación y representación políticas en las decisiones públicas y en la distribución del bienestar. Se ubica frente a un sistema político autoritario y excluyente, carente de espacios para la expresión e interlocución de actores políticos y sociales no institucionales, que vive una profunda crisis de credibilidad y representación. Plantea un cuestionamiento ético profundo a la estructura y dinámica institucional, así como a la ausencia de un proyecto colectivo sustentado en el bien común. Se establece como disputa por la responsabilidad y el derecho moral de gobernar para los excluidos.

- Conflicto por el fracaso del Estado: tiene como causas las condiciones económicas y sociales profundamente desiguales y excluyentes para la mayoría de la población, así como la débil capacidad de respuesta social del Estado. Se trata de un conflicto estructural que tiene como base las relaciones de poder económico y político, cuyos rasgos de dominación, polarización y exclusión se han profundizado cada vez más. Esta situación constituye la base objetiva para el surgimiento del conflicto y de su amplio respaldo social. Los conflictos de este tipo han sido clasificados bajo distintas denominaciones, y a ellos corresponde una gran cantidad de las guerras internas que hoy vive el mundo: conflicto por la incapacidad del Estado, provocado por la ausencia de un ejercicio gubernamental socialmente efectivo y la incapacidad de proporcionar una seguridad humana mínima para todos los individuos y comunidades (pobreza, ausencia de estructuras estatales, proliferación de armas ligeras); conflicto de carácter socioeconómico, por la ausencia de democracia e igualdad en la distribución de tierra, recursos, servicios y beneficios; conflicto de desarrollo, como consecuencia del abismo integral entre los ricos y las mayorías empobrecidas.

- Conflicto por identidad: tiene sus causas en la defensa de las identidades sociales y culturales de sectores excluidos de la población, que exigen tener un lugar digno en la sociedad. Como consecuencia de la búsqueda de la protección de la propia identidad, en sus raíces hay diferencias étnicas y culturales.

- Conflicto por la formación del Estado: implica a regiones o naciones situadas en el territorio de un Estado que luchan para lograr un mayor grado de autonomía o una secesión. Dado que la etnicidad, la identidad comunitaria y la religión juegan un papel importante en este tipo de conflictos, se les llama también conflictos étnicos o culturales. Esta última caracterización, aunque la secesión no se corresponde con los planteamientos zapatistas, ha sido uno de los recursos argumentales del gobierno federal para sustentar su incumplimiento a los Acuerdos de San Andrés y el desmantelamiento de los municipios autónomos zapatistas. Igualmente, estos argumentos fueron retomados por el Congreso para aprobar una Reforma Constitucional que no recoge los acuerdos firmados. Por el otro lado, el zapatismo y los movimientos indígenas plantean una Reforma de Estado que redistribuya el poder político en el conjunto del territorio nacional y en las diferentes instancias de poder público, en la que las autonomías implican la fórmula de integración mediante el establecimiento de una nueva relación entre el Estado los pueblos indígenas y la sociedad en el marco del Estado nacional. Se sitúa aquí uno de los elementos centrales no resueltos del debate en torno al carácter de las causas y las rutas de solución.

- Conflicto contra la globalización o contra el neoliberalismo, como se entiende a aquellas luchas y actores referidos y articulados a la exigencia de cambios en los modelos mundiales dominantes.

En suma, el conflicto que vive México en Chiapas asume diversos tipos de causas y características que no se corresponden con la tipología tradicional ni en cuanto a la base objetiva que explica el surgimiento del conflicto ni en las exigencias planteadas a lo largo de la contienda. Sus planteamientos se refieren pues a la necesaria modificación de las relaciones de poder económico, político, social y cultural que hoy prevalecen en el país con esquemas profundamente desiguales e injustos impulsados por la globalización neoliberal, en que desde la vía de las armas se participa en la disputa por la legitimidad y la exigencia de una reforma del Estado para el pleno ejercicio de derechos individuales y colectivos, enarbolando la dignidad y la inclusión como los ejes orientadores del cambio necesario.

Por su tipo actor el zapatismo se ha definido como una rebelión o sublevación étnica-política-social. El EZLN es actor de nuevo tipo que representa un complejo sistema de causas, identidades y medios con formas de movimiento político/militar—movimiento social/indígena— y movimiento político de proyecto alternativo, determinado recíprocamente entre las condiciones que generan al actor y el proceso que lo va redefiniendo en el curso del conflicto. El zapatismo no tiene un solo carácter. Dado su origen multicausal, ha ido adquiriendo diversos elementos identitarios. Es un nuevo modelo de proceso revolucionario que cruza y pasa por encima de la división clasista y de los gestores del bienestar inmediato, asumiendo un proyecto utópico que construye una gran cantidad de puentes y puntos de convergencia. Tiene una visión nacional y mundial que engarza lo local con lo global e incorpora la dimensión de lo moral y lo ético como un aspecto central, planteando desde ahí una disputa por la razón histórica, cultural y moral.

Su identidad se va configurando centralmente por lo indígena, que si bien tiene sus peculiaridades, se da en el marco de una ola continental de movimientos indígenas que reclaman su ciudadanía con base en sus derechos como pueblos.

De igual manera, el zapatismo se fue convirtiendo en un vehículo -reflejo, transmisión, símbolo- que expresa y articula diversas acciones y propuestas de sectores sociales y civiles, reconociendo en la sociedad civil un papel y peso significativo en la solución de las causas y del conflicto armado mismo.

Estratégicamente el EZLN aparece como un movimiento diferente: no es guerrilla tradicional, no tiene un discurso marxista ortodoxo, surge como una combinación muy novedosa por sus

planteamientos revolucionarios e indígenas y por su posición de optar muy pronto por la salida política. No plantea la destrucción, sino la transformación del Estado. El uso de las armas tiene un sentido político, y su eje no es la victoria militar o la toma del poder, sino la dignidad entendida como la lucha por los derechos sociales, la defensa de la identidad, la justicia y sobre todo la dignidad. La violencia que oponen al régimen se dirige más a desarticular los factores de la violencia estructural del sistema que a la aniquilación física del adversario. Ha convertido su representación simbólica y capacidades mediáticas en pieza fundamental de la disputa por la legitimidad entre el Estado y el movimiento.

El EZLN reconoce en su propia definición la existencia de tres movimientos que conforman uno solo: un movimiento político-militar, un movimiento social-indígena y un movimiento civil zapatista, mucho más amplio, que incluye a grandes sectores de la sociedad civil en la perspectiva de los cambios necesarios en el país y en el mundo. Estos movimientos no se sustituyen entre sí, sino que se complementan y sintetizan, enfatizando alguno de los distintos elementos identitarios de acuerdo a las situaciones cambiantes del proceso.

De acuerdo con el tipo de confrontación, el conflicto se determina por una lógica de poder que enfrenta dos concepciones y proyectos de nación. La manera en que las partes han acumulado y utilizado sus recursos políticos y de fuerza ha sido distinta en las diferentes etapas y fases del proceso.

Las estrategias de confrontación, si bien abarcan distintas dimensiones sociales y políticas, tienen dos ejes centrales y constantes: la disputa nacional por el consenso social y la razón moral respecto a las causas, el carácter y alcance de las soluciones que se demandan y requieren; y la permanencia y dinámica de los aparatos duros del Estado para presionar al acotamiento político-militar del conflicto.

Estas dos variables han sido fundamentales en el desarrollo de otros terrenos de confrontación: en la contienda política por representación e incidencia en las distintas coyunturas del proceso; en los diversos procesos de diálogo y negociación; en el ámbito de la opinión pública nacional e internacional; en las tareas de solidaridad y ayuda humanitaria; y en los esfuerzos por mantener un clima de respeto a los derechos humanos y a la justicia.

Si bien la dimensión bélica ha sido el factor constante y el elemento determinante en el curso del conflicto, el centro primario de la confrontación ha sido la intensa pugna entre el Estado y el movimiento zapatista por la legitimidad. Ello ha evitado que el conflicto derive en nuevos enfrentamientos armados directos, pues iniciar abiertamente hostilidades tendría un alto costo político para ambas partes.

Se plantea que el Estado no ha formulado un diagnóstico completo y realista del conflicto, del movimiento zapatista, de la problemática y aspiraciones que éste articula y sintetiza, ni ha construido una visión de solución final, y que esta carencia determina el resultado limitado y luego el fracaso del proceso de diálogo y negociación en sus distintos intentos.

En tanto no asume el carácter estructural del conflicto, la dimensión nacional y profunda de sus causas, y la capacidad referencial del EZLN para diversos sectores de la sociedad mexicana y particularmente para los pueblos indígenas, el gobierno federal ha optado por un esquema de achicamiento y de desgaste, procurando imponer soluciones a partir de sus diversas estructuras de poder, particularmente el uso de la fuerza.

La pretensión gubernamental de tratar al conflicto como un problema regional, de carácter político-social e incluso religioso, cuyas motivaciones obedecen a deficiencias en la distribución del bienestar y de los mecanismos de interlocución, mantiene al proceso en una ruta que sólo ha hecho más complejas y difíciles las posibilidades de una solución verdadera. El rápido viraje estratégico del EZLN hacia la ponderación de la lucha política e ideológica, dentro y fuera de los marcos políticos institucionales de cambio y manteniendo una resistencia armada sin enfrentamientos bélicos en los territorios bajo su influencia, así como el fortalecimiento de su capacidad discursiva y de comunicación contra las fuentes de legitimidad del Estado, establecen una disputa no sólo en términos de causas y proyectos, sino de modos de confrontación y vías de solución.

DEBATE

Resaltamos algunos de los aspectos centrales que forman parte del debate acerca del carácter del conflicto.

Respecto del status militar y tipo de guerra, aunque hay consenso en cuanto al hecho de que el 1 de enero de 1994 se reveló en Chiapas la existencia de un conflicto armado interno de nuevo tipo, se abren diversas posturas acerca del actual status militar, las etapas y la manera en que ha operado la lógica militar.

Aunque la mayoría de los analistas y actores civiles cercanos al conflicto consideran que todavía hay un estado de guerra, existen diferencias respecto a su caracterización y magnitud. Así, existen diversas definiciones de la situación: guerra de baja intensidad, guerra contra-insurgente, guerra de ocupación, guerra de exterminio, guerra irregular, genocidio, etc. En todo caso, los puntos de mayor convergencia se encuentran en la identificación de los medios y efectos de la estrategia militar. Ésta se reconoce por el proceso intensivo y extensivo de militarización; por la creciente paramilitarización que hoy actúa impunemente y abarca grandes zonas del estado; por la represión policiaca, tanto selectiva como masiva, dirigida particularmente contra bases civiles del zapatismo, del perredismo y de organizaciones sociales independientes; por el desmantelamiento de las condiciones sociales y económicas de las comunidades indígenas en tanto se consideran espacios de sustento y reproducción del movimiento. Esta estrategia tiene una expresión muy importante en la disputa por el territorio y las diversas maneras en que se asume el control del mismo.

Los costos humanos se van dando en términos de importantes procesos de polarización y desplazamiento social, un alto nivel de conflictividad y tensión local, la ruptura del tejido social, la diversificación de la violencia y la creación de la inseguridad y del miedo mediante hostigamiento, persecución, retén, aprehensión y, en suma, pérdida de condiciones y vidas humanas.

Se coincide de manera general en que la visión reduccionista del conflicto determina la selección de objetivos y medios estratégicos del Estado, y por tanto su incapacidad para construir hasta ahora una solución política de largo plazo, depositando en sus componentes de fuerza militar, paramilitar y policiaca la lógica de solución, completada en la fragmentación del conflicto y la aplicación de programas focales de gasto social.

Finalmente, como hemos señalado, la mayoría de actores sociales y civiles piensan que lo militar ha sido el eje de la estrategia gubernamental orientada al control coercitivo y al acotamiento político del conflicto, desde donde se pretende establecer condiciones para imponer una salida que evite transformaciones sociales, económicas y políticas de fondo, reduciendo al máximo los costos al Estado. Sin embargo, otra interpretación reconoce que sí existe el conflicto armado, y aún una guerra sui generis, pero considera que ha pesado más lo civil y político por encima de lo militar. Queda establecido este debate de fondo. Respecto de las dimensiones, implicaciones y actores sociales del conflicto, en la trayectoria del conflicto y proceso de paz se han planteado diversas coyunturas y ámbitos de confrontación política.

En la percepción de amplios sectores nacionales, desde el inicio del conflicto el EZLN logra constituirse como representación simbólica de múltiples elementos de descontento social, centralmente de los derechos indígenas, cuya rebelión descubre para la sociedad entera la situación de miseria y exclusión de los pueblos indios, así como de la pobreza estructural de millones de mexicanos, en ese momento oculta por el TLC y el triunfalismo gubernamental. Este impacto inicial propició un sentimiento de simpatía en la sociedad nacional, que ante la probada injusticia asumió el imperativo moral de corregirla y resolverla, llegando incluso a justificar como inevitable al propio alzamiento armado.

Entonces, la correlación de fuerzas sociales y políticas tomó cuerpo en torno al tipo de solución, es decir, por una salida pacífica y pactada que atendiera las causas y evitara la continuación del enfrentamiento armado. Diversos movimientos sociales se adhieren al actor y

sus causas, aunque el elemento catalizador más amplio fue la necesidad de detener la guerra y de generar un proceso serio de negociación.

Este consenso social que legitimó causas y exigió soluciones mediante el diálogo se convirtió en el eje fundamental de una solución política, y por tanto en un elemento estratégico de disputa entre las partes. Esto explica que tanto el gobierno federal como el EZLN trasladaran sus visiones, expectativas y recursos estratégicos a la conquista del consenso social, dando lugar a una confrontación política compleja que se ha reflejado en la opinión pública, la colaboración internacional, las elecciones, las políticas de alianzas y relaciones, la acción local, etcétera.

Las partes han disputado política y socialmente este consenso pero con muy distintas actitudes militares. Mientras que el EZLN frenó su actividad militar y convirtió sus armas en signo de dignidad y resistencia, el gobierno federal continuó, diversificó y amplificó la acción de las fuerzas armadas para desgastar al zapatismo, reducir la simpatía nacional a sus reclamos, y construir el tipo de solución limitada que actualmente ofrece.

En un proceso tendiente a la acumulación de fuerzas en torno a la agenda y la vía de solución, el EZLN ha lanzado distintas convocatorias para constituir una gran alianza nacional; iniciativas para impulsar una organización amplia de carácter civil; foros temáticos nacionales e internacionales para discutir la postura de negociación hacia el proyecto de cambio necesario; y como propuestas a los movimientos indígenas, sociales o académicos, intelectuales, comunicadores y personalidades a fin de fortalecer el sustento del proyecto y la legitimidad de su movimiento.

El gobierno ha disputado en todos los terrenos una mayor base social, opinión pública y apoyos internacionales, generando sus propias alianzas a todo nivel mediante el uso de una amplia gama de recursos que van desde la creación de nuevos interlocutores sobre la problemática, la distribución de fondos públicos en las comunidades y diversas campañas publicitarias, hasta la intensa información, cabildeo y diplomacia internacional.

En cuanto a la lucha por el poder político y las contiendas electorales, el EZLN asume una postura estratégica que rechaza su participación directa en la pugna por los espacios institucionales de representación política y el ejercicio del gobierno, promoviendo la conformación de los municipios autónomos y otras estructuras de representación local alternativas. Ante la redefinición constante de sus relaciones y alianzas, en este transcurso se han dado encuentros y desencuentros del zapatismo con actores políticos, sociales y civiles afines.

A lo largo del conflicto se han incorporado nuevos actores e intereses y se han generado conflictos secundarios y tensiones que lo hacen cada vez más difícil de abordar. La cuestión agraria, la distribución de recursos públicos, la conformación del mapa gubernamental en Chiapas tanto en el ejercicio del poder público local como en las legislaturas, la recomposición de representaciones e interlocuciones, la polarización comunitaria, las víctimas del conflicto, las nuevas modalidades de la violencia, son algunos de los elementos que se agregan y disputan, haciendo cada vez más compleja la situación y la construcción del proceso de paz. Esta confrontación expresa la lucha por las condiciones de sobrevivencia y reproducción, básicamente por el territorio, pero también por otros intereses económicos y políticos, entre una oligarquía local que se resiste a perder privilegios, y los actores civiles y sociales emergentes, que han elevado substantivamente sus aspiraciones y exigencias.

En suma, el conflicto asume rasgos que establecen su carácter político-militar, y por tanto su tratamiento y visión tiene que considerar una solución que defina una salida política también a lo militar, en tanto esta lógica ha determinado el curso del proceso, producido los mayores obstáculos a una solución negociada, y provocado altos costos humanos y sociales. El conflicto tiene por sus causas y reivindicaciones un carácter estructural, que implica profundos cambios jurídicos, institucionales, económicos, políticos y culturales de definición nacional. Por tanto, el diseño de vías y soluciones políticas debe contemplar las transformaciones estructurales necesarias que respondan a estas causas y motivaciones. Su dimensión es nacional en tanto la expresión de los problemas, demandas y consensos tiene

un alcance nacional. Si bien su expresión orgánica y militar está acotada localmente, su nivel de impacto y adhesión social se distribuye en todo el territorio del país. La identidad, discurso y estrategias del actor armado lo definen como un movimiento diferente al de otros actores insurgentes, estableciendo marcos de confrontación con peso y modalidades distintas a otros conflictos y procesos. De igual manera su relación con sectores civiles, sociales y políticos del país plantea un nuevo tipo de alianzas y métodos que lo constituyen en un actor referencial para múltiples actores y propuestas. En este sentido se plantea que se trata de un conflicto armado interno de nuevo tipo, y bajo esta concepción se hace necesario abundar en el diagnóstico que nos permita replantear las tareas estratégicas para la paz.

En suma, la disyuntiva del caso mexicano es dramática. Atrincherado en los viejos esquemas contrainsurgentes y el derecho del poder para defender un modelo dominante, el actual Estado mexicano no quiere entender que se requiere adelantar la búsqueda de opciones políticas de fondo, comenzando por el reconocimiento a los pueblos indígenas y sus derechos colectivos, y propiciando la amplia participación de otros actores políticos y sociales.

Si lo importante es la causa y el sujeto social en rebelión, y no el tamaño del accionar militar que la levanta, Chiapas es importante no sólo por su número de muertos, sino por sus graves rasgos e implicaciones para conflictos similares. El proceso mexicano es relevante exactamente por la disputa para vincular la paz con las agendas sociales, particularmente desde los pueblos indígenas en los marcos de la transición política y la economía global.

LA PAZ COMO RETO Y TAREA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Toda concepción de la negociación y de la paz responde a una previa caracterización y diagnóstico. Por ello, el nuevo tipo de conflictos no puede ser comprendido ni resuelto en la lógica de los conflictos orientados a la toma armada del poder.

Simplificando, en muy diversos procesos explícitos de paz se han desarrollado dos grandes etapas: una primera de lógica militar en la que las partes construían escenarios deseables a partir de medir frontalmente sus capacidades militares; y una segunda en lógica de negociación política que cosecharía lo ganado militarmente, y que se podría abrir en la medida en que se agotara, madurara o empatara la lógica y etapa militar, es decir, una vez que para las partes la negociación política fuera ya la mejor vía para resolver favorablemente el conflicto. Sin embargo, la racionalidad de los nuevos conflictos no radica en las estrategias de confrontación, sino en sus causas. Por ello, la clave de su solución no puede ni debe estar en que se midan hasta agotarse las capacidades militares. Las causas no pueden depender del tamaño del actor militar que se levante, ni la negociación política debe quedar atrapada en la medición coyuntural de fuerzas y correlaciones. Esta es una limitación grave para la paz, sobre todo cuando en medio de la crisis de las estructuras y sociedades políticas los gobiernos y ejércitos nacionales como parte del conflicto actúan en lógica autoritaria de Estado desplegando su fuerza de manera desproporcionada. De otra manera, los estados democráticos habrían de promover en vez de obstaculizar los cambios necesarios, asumiendo que las causas justas y los movimientos sociales son materia y sujeto principal de paz. Más allá de las partes del conflicto armado, las claves están en las causas, pre-militares, y en los actores y procesos necesarios para resolverlas dentro de un proceso de construcción de nuevas condiciones políticas, post-militares. Además, se ha visto que, aún contando con acuerdos, los cambios más difíciles se definirán y disputarán en los terrenos de la lucha política institucional y legal, por lo que los procesos de paz y de negociación no deben diseñarse solamente como expresión de las capacidades militares de las partes, o sea del presente hacia el pasado, sino en función de esa nueva etapa de confrontación política en la que se define realmente el peso y grado de cambio que el país pueda vivir contando con la voluntad y los acuerdos de las partes.

Por tanto, la naturaleza y solución de los nuevos conflictos armados están relacionadas con la solución a la crisis de las sociedades políticas, y están por tanto vinculadas a la participación y propuestas de los movimientos y actores sociales y civiles como actores plenos de la paz, como lo son ya de la democracia, los derechos humanos y la justicia.

Si para los nuevos conflictos armados lo importante es la causa y no el tamaño militar, entonces los actores de la solución no son sólo los de la guerra, sino todos aquellos actores políticos, económicos, sociales, eclesiales, etc. necesarios para resolver precisamente las causas del conflicto.

Así, los nuevos conflictos implican nuevas dinámicas y corresponsabilidades políticas, pues en adelante no se requerirá de tomar las armas en la medida en que la política sea vía eficaz de transformaciones. El problema es que al estar en crisis las sociedades políticas en términos de su débil credibilidad y representatividad, y siendo los actuales partidos políticos factores del modelo político a transformar, corresponderá a los movimientos y actores sociales y civiles la tarea de propiciar los elementos de una estrategia de paz con democracia, más allá de lo que pueda surgir de la disputa y equilibrio entre las partes armadas o los partidos. Las nuevas concepciones, estrategias y metodologías para el impulso del proceso de paz tienen como reto particular el lograr la gradual formación e incorporación de todos los movimientos y actores sociales y civiles, y con ellos de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales necesarias para construir un nuevo Estado pluriétnico y pluricultural capaz de un nuevo pacto político, económico y social.

Existe una enorme serie de retos teóricos y conceptuales, estratégicos y programáticos. El punto está en cómo vincular a la paz con las otras agendas y actores sociales y políticos que procuran la justicia. Los movimientos sociales, por su identidad, carácter y vínculo con las causas, son de nuevo hoy la fuerza de alternativa y articulación.

NOTAS

* Director de SERAPAZ, México.

1 Agradezco al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales la organización de este importante seminario regional en el que participé a partir del trabajo de paz en México, y particularmente con base en mi labor como Secretario Ejecutivo de la desaparecida Comisión Nacional de Intermediación, combinando reflexiones generales y nacionales.

Estado y movimientos étnicos en Ecuador

Francisco Rhon Dávila*

INTRODUCCIÓN

Contemporáneamente con las debacles de las economías de América Latina, visibilizadas en la llamada crisis de la deuda en 1982, son observables un conjunto de demandas y acciones públicas que defienden derechos étnicos al mismo tiempo que promueven la igualdad y la eliminación de toda forma de racismo. Muchas de estas movilizaciones y manifestaciones son observables ya hacia finales de la década del setenta, en la que, al igual que en la del sesenta, predominaron los movimientos campesinos en lucha por la Reforma Agraria.

La década perdida, según la CEPAL, con la que se potencia la inducción de la región en una globalización no deseada, y por lo tanto forzada, constituye también el momento de quiebra de modelos de transnacionalización y/o acumulaciones nacionales de capital, lo cual pone en situaciones de debilidad, en muchos casos estructural, a los actores inherentes a tales procesos: las incipientes burguesías nacionales, pero sobre todo a la clase trabajadora. Se produce una crisis de representación política.

Es en este espacio que emergen nuevos actores sociales y políticos, como es el caso de los indígenas que lograron resistir con éxito a la destrucción de su ethos cultural que trató de imponerles la dominación colonial, la cual se prolongará en el nuevo régimen de las repúblicas independientes. Estos nuevos actores, que las democracias existentes no fueron capaces de incorporar, manteniendo por el contrario prácticas e ideologías racistas y segregacionistas, exigen a la vez que demandas específicas, desde su condición de marginalizados-oprimidos, nuevas formas de reconocimiento y de representación.

La audiencia y espacio de opinión logrados por los movimientos étnicos se han visto favorecidos por la acción de organismos y la opinión pública internacionales, que han provisto tanto apoyo financiero como presencia en foros internacionales en los que se han legitimado, presionando desde esos espacios a los poderes de sus países en pos de la solución de sus demandas.

Estas demandas, con algunas variaciones, se condensan en dos proyectos: el desarrollo y las reformas políticas. Así, se cuestionan las ventajas que sobre ellos han tenido los no indígenas, su marginalización, y desde estas demandas de políticas sociales se jerarquizan demandas de políticas sociales, se jerarquizan demandas hacia los derechos políticos y civiles que suponen sustanciales transformaciones en los sistemas político-institucionales para la realización de sociedades multiculturales y sobre todo plurinacionales.

En este sentido, como lo señala Hernán Ibarra (2002), "Se puede entender que las demandas étnicas tienen un componente de 'reformismo radical'; la de impulsar reformas dentro de la institucionalidad para cuestionarla".

En palabras de Marcelo Córdoba, dirigente indígena, presidente del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), organismo del estado ecuatoriano: "el movimiento indígena ecuatoriano es un elemento importante en cuanto a la construcción de la ciudadanía porque desde el levantamiento de 1990 los dos grandes temas reivindicados por los indígenas son los derechos y el desarrollo"¹.

En resumen, los movimientos étnicos, y particularmente el ecuatoriano, aparecen en una coyuntura histórica particular signada por la crisis económica y política. Confluyen demandas por acciones de desarrollo, principalmente hacia el desarrollo rural, tenencia y acceso a la tierra, oportunidades en el mercado, con propuestas políticas de reorganización y democratización del Estado, en el marco de los programas de ajuste estructural implementados en la región, cuyos resultados, según datos y expresiones de la CEPAL, son magros y decepcionantes.

Para el caso de los indígenas ecuatorianos, una población estimada entre el 11 y el 13% de la población nacional, de doce millones de habitantes según el último censo de 2001 (lamentablemente, por razones inexplicables, no se cuenta con datos precisos), el 75% de ésta se halla en situación de pobreza. En el Ecuador la pobreza tiene rostro indígena, la crisis y los sucesivos programas de ajuste estructural han significado tanto el deterioro de su tradicional pobreza como el transparentamiento de que es la sociedad la que los empobrece. Como señala Andrés Guerrero (2001[b]): “Las políticas neoliberales transgreden los principios de la legitimidad del sistema político ciudadano; el Estado mata en forma arbitraria y sin justicia al ‘dejar morir’ a los indígenas”.

LA RELACIÓN INDÍGENAS-ESTADO

Como es sabido, la dominación y explotación colonial se afincaron básicamente en la extracción de renta, en especies o dinero, y en el uso de la fuerza de trabajo para la producción hacendaria. Esta institucionalidad de antiguo régimen prosiguió durante más de ciento treinta años en la fundada república del Ecuador. En 1857 se elimina el tributo indígena como una obligación fiscal, al mismo tiempo que se desvirtúa el concepto legal del ‘protector’, asumido por el Estado. Sin embargo, la noción de raza prevaleciente establecerá la diferencia tanto entre los distintos grupos étnicos nativos como con el conjunto de los blancos y mestizos. De hecho, si bien la eliminación del tributo y del protectorado implicaría una igualdad de ciudadanos, la distinción de raza se opondrá a cualquier forma igualitaria, negando por lo tanto la condición de ciudadanos a los indígenas, y fortaleciendo a la vez la jerarquía de dominación. Hacia 1920, con la aparición de un discurso indigenista, se reivindica al indio como el sustento de la nacionalidad ecuatoriana, impulsándose políticas que privilegiaban la educación. Con la expedición de la ley de comunas en 1937 se origina una actitud protectora desde el Estado a la organización comunal, incorporándose a éstas al ordenamiento jurídico administrativo del Estado. Para estos pensadores y las políticas desarrolladas, el problema indígena es ante todo un problema de falta de integración a la sociedad nacional.

Con la constitución de 1979, al reconocerse el voto a los analfabetos, cuya población mayoritaria era indígena, se abre un amplio espacio para la participación electoral de los indígenas, proceso que será importante en la constitución posterior del partido Pachacutik y de sus éxitos electorales, sobre todo a nivel local. Otro hecho trascendental en la misma época será el reconocimiento, en el Plan Nacional de Alfabetización, de la lengua quichua. Este reconocimiento inicial será posteriormente afirmado con la creación, hacia 1994, de la Dirección Nacional de Educación Bilingüe, y el reconocimiento en la constitución de 1998 de las lenguas nativas.

DESARROLLO DEL MOVIMIENTO INDÍGENA

El surgimiento de las organizaciones étnicas, entre las que se destaca la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), en la década del ochenta, propondrá una nueva definición del indio. Una autodefinition que, además de los elementos culturales, la lengua, los rituales, incluirá la participación organizada, el sentido de pertenencia a una comunidad, así como los derechos sociales, particularmente respecto al agro, de los que son sujetos. Las iglesias -particularmente la católica- apoyaron este proceso organizativo. Las luchas indígenas, así como los procesos de modernización del agro, propiciaron la reforma agraria de 1964 y la posterior de 1973. Tales reformas, sin embargo, más allá de eliminar las relaciones precarias, particularmente el huasipungaje², si bien implicaron un importante avance para la organización del campesinado indígena, no supusieron una redistribución de la tierra. Se trata entonces de reformas agrarias frustradas e inconclusas, asunto sobre el que volverán los levantamientos indígenas de la década del noventa.

El levantamiento indígena de junio de 1990 es el momento fundacional del movimiento étnico ecuatoriano. Las acciones de bloqueos de carreteras, manifestaciones en ciudades, tomas de iglesias y otros actos impactaron en el conjunto de la sociedad. Los indígenas emitieron una propuesta contenida en dieciséis puntos, entre los que están la declaración del Ecuador como

Estado plurinacional, la solución de los conflictos de tierras, las condonaciones de deudas con la Banca de Fomento y la dirección del proceso de educación bilingüe. También se hicieron extensivas demandas específicas sobre maltrato y discriminación en las oficinas públicas. Este levantamiento coincide con el gobierno de la Izquierda Democrática, un partido de centroizquierda cuya opción y propuesta política se vieron sobrepasadas por el carácter de las demandas.

Una cuestión observable en este proceso es la transformación de los campesinos genéricos, que es como el Estado había identificado a los indígenas tradicionalmente, en indios con identidades específicas.

El levantamiento indígena de 1990 tiene como trasfondo un conflicto étnico al mismo tiempo que un conflicto agrario. Es un momento en el cual se produce un avance cualitativo de los indígenas hacia la búsqueda de sus derechos. Las demandas y pliegos petitorios implicarán por un lado un reconocimiento al Estado como interlocutor, al mismo tiempo que se afirman los indígenas como colectividad. El poner sobre la mesa la temática étnica pone en cuestión al Estado nación en medio de una crisis de la ideología oficial del mestizaje. En 1994 se produce un nuevo levantamiento con énfasis en la cuestión agraria, pues se trataba de la defensa de los derechos a las tierras comunales, que concluye con un acuerdo patentado en el código agrario, el cual, si bien establece el respeto a las tierras de comunidad, elimina totalmente cualquier posibilidad de reforma agraria.

Hechos más recientes, como el levantamiento -para algunos, alzamiento- de los indígenas el 21 de enero de 2000 que culminaría con la destitución del presidente Mahuad, volverían a mostrar la fuerza y cohesión del movimiento indígena, así como su convocatoria a otros sectores sociales, particularmente los pobres urbanos. La demanda central, en contra del modelo de dolarización a imponerse, no tendrá éxito, como tampoco el intento de lograr una apertura al sistema de poder existente. Un nuevo alzamiento o levantamiento, en febrero de 2001, concluirá con el establecimiento de una serie de mesas de negociación que no han tenido mayor éxito ni resonancia.

En todo caso, el pronunciamiento de los indígenas para negociar políticas de orden general bajo el lema “nada sólo para los indios” no logrará el aporte y participación efectiva de otros sectores, como los obreros por ejemplo, de manera que este “nada sólo para los indios”, más que un grito convocante, sonará a un eco auto-escuchado, en tanto se produce en la ausencia de propuestas de la otra parte de la sociedad.

Como resultado de una larga negociación en la Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la nueva constitución en junio de 1998, se introdujeron algunas reformas correspondientes a las demandas del movimiento indígena alrededor de la temática de las nacionalidades, aunque de un modo muy parcial. En el Art. 1 se reconoce que el Estado es pluricultural y pluriétnico, aunque en el Art. 83 se enuncia muy ambiguamente el concepto de nacionalidad: “los pueblos indígenas que se autodefinen como nacionalidades ancestrales y los pueblos negros o afroecuatorianos, forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible”.

LAS GRANDES CUESTIONES

Los ejes concentradores de la movilización y propuestas indígenas, el desarrollo y la reforma política del estado, han tenido diversos momentos, como valor de cambio en las negociaciones con el Estado, de paso el único interlocutor, así como de controversia, incluso de divergencias notables al interior de las organizaciones y del movimiento indígena.

Como se mencionó, la versión más generalizada del Estado en su relación con los indígenas es la de concebirlas como campesinos. El mismo discurso indígena, de vuelta a la pachamama y revalorización de las culturas ancestrales, abre espacios de negociación, cooptados y asumidos por el Estado.

En 1995 se crea, con apoyo del Banco Mundial, el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE), diseñado para apoyar financieramente a

pequeños proyectos productivos y al fortalecimiento de organizaciones de base entre los indígenas y negros del país. El proyecto, que se halla en ejecución en su segunda fase, obliga a la conformación de las llamadas organizaciones de segundo grado, muchas de éstas distintas a las que conforman las bases de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). La Unidad Ejecutora es un espacio independiente de las organizaciones y actúa con parámetros técnicos según los acuerdos con el Banco Mundial.

Este interesante programa, que parte de diagnósticos participativos, enfrenta sin embargo dos problemas fundamentales. El primero, una fuerte oposición de la intelectualidad indígena y de los más importantes dirigentes, por considerar que las acciones y los montos de los recursos, así como el organismo financiador, no se corresponden con el discurso y el debate político de la organización. Textualmente, en el Boletín ICCI-RIMAY (2001) del Instituto Científico de Culturas Indígenas, que aglutina una parte de la intelectualidad y de la dirigencia indígena, se dice lo siguiente: "La enorme cantidad de recursos que posee esta institución la convierten en una amenaza permanente para el movimiento indígena ecuatoriano. La visión modernizante y apegada a los parámetros neoliberales de la cual son portadores los tecno-burócratas de esta institución se convierten en un riesgo cotidiano para el proyecto político de las organizaciones indígenas y en una fuente de conflictos permanentes. Pero, no se trata del choque entre dos visiones distintas de la realidad, sino de la confrontación entre dos proyectos históricos distintos".

Otro problema que confronta la propuesta agrarista de desarrollo indígena tiene que ver con el proceso de descomunalización de las comunidades andinas, donde es observable un vaciamiento de la comuna tradicional como espacio de hábitat y reproducción social, ampliándose los espacios de reproducción hacia ámbitos locales, incluyendo áreas urbanas. Un mayor relacionamiento de la comunidad indígena con la sociedad capitalista, con la que se asienta y retroalimenta la noción de propiedad e individualidad, así como la pérdida de fertilidad de los suelos y el crecimiento demográfico que imposibilitan asegurar, en términos de Claude Meillassoux, "la restitución de la energía humana", son las causas principales de este proceso de descomunalización, aunque al mismo tiempo la conciencia sobre la pérdida del valor simbólico de la ancestral comunidad motiva la repuesta política indígena alrededor de demandas más amplias.

La descomunalización, junto con la desarticulación de la familia indígena y las fugas migratorias, son una expresión y efecto locales de los procesos de exclusión y desarticulación globales.

En lo que respecta a la reforma política, en 1994 la CONAIE presentó una propuesta de reforma constitucional para que se legisle respecto de que el Ecuador es un "estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe, que reconoce, protege, respeta y desarrolla su diversidad cultural".

La misma propuesta incluía otros asuntos, como el hecho de declarar a la educación oficial como "laica, intercultural, bilingüe", proponiéndose también que en las jurisdicciones territoriales de los pueblos indígenas de entre sus miembros, se elegirá un representante ante el Congreso Nacional y gobiernos seccionales, a través de un proceso eleccionario interno y exclusivo para los pueblos indígenas; el Estado debería garantizar una representación indígena, ante el Congreso y los gobiernos locales, equivalente a un 30% del total de la representación. Este planteamiento tiene implícita la profunda reforma política concebida dentro del esquema de una democracia participativa.

La autonomía étnica, el hecho de que las comunidades indígenas son autónomas y sus autoridades ejercen funciones de administración y tienen jurisdicción tanto normativa como procesal, era otra de las reformas propuestas por la CONAIE que supone la institucionalización de la legalidad del derecho étnico consuetudinario. La cuestión de los territorios étnicos es altamente controversial, tanto para los intelectuales y dirigentes indígenas como para los sectores de poder. Para estos, la sola mención del territorio étnico es asimilada como la creación de estados paralelos.

La territorialidad que bien puede ser operativa en los territorios étnicos de la amazonía y la

costa, donde existen grandes extensiones de dominio territorial de los grupos étnicos, confronta problemas en la región andino-serrana, en donde el dominio territorial está atravesado y es compartido con otros grupos sociales así como estructurado en múltiples formas de propiedad y gestión de los recursos. Esta problemática es reconocida por la intelectualidad y dirigencia indígena en el siguiente texto: “Las nacionalidades de la amazonía más que una pertenencia a la tierra bajo dimensiones económicas, vislumbran a su entorno como un territorio que debe estar bajo su control. Su noción básica será justamente la noción de territorio, un concepto cultural fundamental para definir una nación”. Párrafos antes, en el mismo documento, se señala que para los indígenas serranos “la lucha por la tierra elemento central de su cosmovisión, era sobre todo una reivindicación de tipo económico”.

Este reconocimiento de dos historicidades les lleva a afirmar: “ahora bien, el encuentro de estos dos procesos históricos, implica una serie de rupturas y transformaciones; de estas rupturas pueden desprenderse dos de las categorías políticas más importantes que se han generado en el Ecuador contemporáneo, aquella de la pluriculturalidad y la interculturalidad” (ICCI-RIMAY, 2002).

Como se observa a partir de lo expuesto, si bien se reconoce la presencia de dos concepciones societales sobre la tierra y los territorios, no se define lo que se entendería por territorialidades en la región serrana, y por ende acerca de la existencia de nacionalidades en esta área geográfica. La cuestión parece estar en que la definición y la temática de la plurinacionalidad conllevan a una confusión sobre el uso del concepto de nacionalidad. Como señala Ibarra, “las organizaciones indígenas han venido utilizando la denominación de nacionalidad indígena para referirse al conjunto de los pueblos indígenas agrupados en la CONAIE” (Ibarra, 2002).

La definición usada por la CONAIE se corresponde más con la versión occidental de la constitución de los estados nación, que alude a una sociedad unida por vínculos de lengua, cultura y territorio. En esta concepción, la nacionalidad constituye el fundamento del Estado nación. Sin embargo, como se ha mencionado, la geografía y la ocupación territorial de las comunidades y etnias indígenas son variadas y diversas, siendo la territorialidad más visible en la amazonía y difícilmente definida en la región serrana, que es la que concentra la mayor parte de la población indígena del país.

La complejidad de estas definiciones de territorialidades es reconocida en el Boletín del ICCI-RIMAY (2002: 4), en los siguientes términos: “Para poder organizar a la CONAIE desde la noción de nacionalidad y pueblo, es necesario un proceso de reconstrucción de esas nacionalidades y pueblos”.

Tanto en Ecuador como en otros países de América Latina, la discusión de la autonomía étnica conlleva el reconocimiento de esa autonomía con un estatuto específico y su institucionalización en las constituciones políticas de los estados. Además, como lo señala Ibarra (2002): “El principio básico que se halla en juego es el de la autodeterminación, entendido como la capacidad de los grupos étnicos por decidir sobre sus asuntos”.

A MANERA DE CONCLUSIONES

Una de las cuestiones interesantes de las organizaciones étnicas en el Ecuador es el hecho de haber conformado una amplia red organizativa a nivel local que alcanza grados de centralización tanto regional como nacional y que tiene en la CONAIE a su portavoz unificador, aunque esto tiene el riesgo de monopolizar la representación.

Otro aspecto de interés que no es sólo particular a las organizaciones étnicas ecuatorianas, sino que se presenta en otros países como México y Bolivia, por ejemplo, es la formación de una intelectualidad indígena y de nuevas formas de liderazgo capaces de articular un discurso, de potencializar la subjetividad identitaria, así como de liderar organizaciones, muchas de las cuales en el sentido técnico se pueden considerar como modernas. Es evidente que el movimiento indígena ha jugado un importante rol en la oposición al ajuste estructural, en la articulación a otros actores demandantes y opuestos al neoliberalismo: una situación en la que

empatan las demandas étnicas con el cuestionamiento a la estructura social y un interés propositivo en redefiniciones del carácter del sistema y del funcionamiento mismo de la democracia.

Los temas pendientes y de mayor y álgido debate, como es el caso de las autonomías y/o constitución de un Estado plurinacional, se enmarcan y tienen relación con el grado de profundidad y amplitud de las reformas políticas, particularmente de las reformas constitucionales, en las que se reconozca plenamente la diferencia a partir de un Estatuto de los Pueblos Indígenas en tanto sujetos de derechos colectivos. Como se ha visto en el plano declarativo, la constitución ecuatoriana de 1998 reconoce la multiculturalidad.

Dada la condición de campesinos de la gran parte de la población indígena, la cuestión agraria del desarrollo rural seguirá siendo el enlace entre las demandas locales y las propuestas nacionales, así como también materia, como lo ha sido, de acuerdos y manejo político. En todo caso, la cuestión de acceso a la tierra es un asunto pendiente.

Algo a tomar en cuenta es el hecho de que una cultura nacional ya no puede ser vista ni como la sumatoria de diversidades ni como hechos que se explican en una cultura nacional. Como bien señala José Sánchez Parga (1998), "El imperativo tanto como la tarea es hoy no ya pensar las culturas particulares regionales desde la cultura nacional sino a la inversa ésta desde aquellas".

Todo esto porque preocupa la necesidad de dotar a la plurinacionalidad de un contenido conceptual que sobrepase su valor instrumental-coyuntural. A saber, la reivindicación de las nacionalidades, entendida en la ecuación cultura-territorios, cobra fuerza en las luchas anticoloniales y de liberación nacional. Es en ese contexto que se explican y adquieren valor, y es por ello que el planteamiento provoca equívocos, tendencias y suspicacias.

En la actual coyuntura histórica, y más allá, en el ánimo y conciencia de los sujetos-actores, ¿están presentes luchas anticoloniales y/o de liberación nacional? De ser así, no hay mucho que discernir, aunque sí que debatir, sobre cómo acumular fuerzas y ganar la batalla, en el campo que la correlación de fuerzas establezca y que define, también, los actores y los contrincantes.

De no ser así, cobra valor lo conceptual, que definimos por nación-nacionalidad, y cuál es el ámbito en el que este ejerce sus derechos y en última instancia su soberanía. Bien puede explicitarse que no se trata de soberanías sino de autonomías, pero esto también debe ser definido y explicado.

¿Serán esas culturas regionales, en constante proceso de cambio interno y de encuentro con otras, la base de tales naciones o autonomías? Quizás, en el entendido de que crean, fortalecen y reproducen identidades. Es evidente que lo identitario es la base para avanzar en propuestas de desarrollo, si no me identifico, cómo y por qué participo, apporto, someto mi individualidad al bien colectivo.

En un país como el nuestro, en el que las culturas y las identidades se mezclan, se tensionan, conviven, el problema de la territorialidad es algo complejo. Habrá que definirlo, establecer los límites, si se habla de territorios físicos, así como el tipo de institucionalidad que los soporta. En este entorno se puede caer en peligrosos esquematismos de autoritarismo cultural – cultocratismos- que conllevan a situaciones fascistas.

Parece entonces que la entrada desde la categoría interculturalidad puede aportar en mucho a definir sobre el concepto de plurinacionalidad, urgiendo su estudio y debate. Dado que el tema y la aplicación de la categoría suponen un espacio universo analítico, será necesario definir teórica y operacionalmente tal espacio. Varios hechos y/o escenarios deben ser considerados.

Más allá de si la globalización es o no algo reciente y de aplicabilidad a la mundialización de la economía de mercado, el hecho cierto es que nos encontramos ante una impresionante circulación, de inusitada rapidez y volatilidad, de la información y las imágenes, y de

acumulación de saberes tecnológicos, que influyen en las percepciones, conocimientos y valores; que se interponen a las decisiones de los estados naciones, restándoles capacidad de definir el destino de sus economías. Esto es ya un dato, como también lo es el que las reivindicaciones democráticas tienden más a resolverse en lo local que en lo nacional. Tienen la gran ventaja de volver más plástica, visible y operativa a la democracia. Tienen o podrían tener la desventaja de concitar toda la atención y energía en lo particular-local, abstrayendo las interrelaciones y hegemonizaciones del capitalismo mundializado. Tal peligro de abstracción conlleva una perversión suicida para las culturas y las economías. Hay algo de ello en lo *small is beautiful*.

Otro escenario tiene que ver con la construcción de la democracia en el actual estado ecuatoriano, y en la constitución de ciudadanos -en plural- en la que tal democracia debe fundarse para desbloquear la actual situación, definida por Julio Echeverría (1997). El pasaje de comunero a ciudadano sin perder pertenencia étnica es un tema crucial, como lo es, en la perspectiva de las nacionalidades, el establecer la relación entre los derechos individuales, que caracterizan a los ciudadanos, con los derechos colectivos. Hay tela para cortar en algunos trabajos como el de Jorge León (1994).

Otro escenario se relaciona con los procesos de descentralización. Bien entendidos, se trataría de potenciar acumulaciones locales -de capitales, capital social, capital humano- significativas, capaces de tener un efecto de locomotora sobre las otras formas de economía, en pos de permitir su desarrollo y por ende el desarrollo local. Aquí, las potencialidades de las culturas local-regional tienen mucho que decir, y es posible que en última instancia sean las identidades las que definan, como en el caso catalán en España, la construcción de esos ámbitos para una descentralización real y efectiva.

Hay que recordar, sin embargo, que lo catalán fue posible en tanto estuvo acompañado de un importante poder económico en manos catalanas -capitalista, por cierto. Es en este escenario en el que se plantean las autonomías o las circunscripciones étnicas. Estas últimas, más que hacer énfasis en la geografía física de los límites territoriales, proponen ámbitos de reproducción cultural, económica -de mercados- que sobrepasan las divisiones político-administrativas de los estados. En esta perspectiva lo local bien podría ser lo regional. Hay mucho trabajo por hacer en esta línea.

Por último, está el escenario propuesto por las tecnoburocracias, no necesariamente peyorativo, de los organismos multilaterales como la OIT y el Banco Mundial. Imprimiendo una reforma desde arriba, ofrecen ventajas en tanto abren espacios y concitan al debate. Sin embargo, entre otros problemas, llevan implícitos relativismos conceptuales que pueden diluir asuntos de fondo, como los requerimientos hacia un nuevo orden económico mundial. Las posibilidades del movimiento indígena, así como de los proyectos alternativos, se complejizan ante una sociedad en la que el capital simbólico se ha erosionado, perdiendo valor identitario como nación, con lo que se abre un interrogante sobre a quién se interpreta. Como señala Teodoro Bustamante (2001): "Hoy en día sospecho que seguimos buscando mitos que nos expliquen la realidad sino que simplemente se acomoden a nuestras necesidades subjetivas".

Preciso es advertir que, ese discurso sobre el otro, en el sentido de Levy Strauss, opta, desde los analistas, a tomar distancias hacia un costado, con el consiguiente riesgo, como señala Andrés Guerrero (2001[a]), de que: "En los análisis se esfumará la historia que nos constituye: el hecho de que, como individuos, somos productos de destinos relacionales (N. Elías) en una sociedad a la vez colonial y republicana, de indios y ciudadanos".

BIBLIOGRAFÍA

Bustamante, Teodoro 2001 "Fuerza y límites de los símbolos", en *Iconos* (Quito: FLACSO) N° 10, Abril: 19.

Echeverría, Julio 1997 *Democracia bloqueada: Teoría y crisis del sistema político ecuatoriano* (Quito: Letras).

Guerrero, Andrés 2001[a] "La frontera étnica en el espacio de la crítica", en Iconos (Quito: FLACSO) N° 11, Julio: 94.

Guerrero, Andrés 2001[b] "Los linchamientos en las comunidades indígenas", en Ecuador Debate (Quito) N° 53, Agosto.

Ibarra, Hernán 2002 Los movimientos étnicos y la redefinición de las relaciones Indígenas-Estado en Ecuador y México (Quito: CAAP) Abril, mimeo.

ICC-RIMAY 2002 "Construcción Política y reconstrucción histórica. Los nuevos desafíos de la CONAIE", en Boletín ICCI "RIMAY" (Quito) Año III, N° 31, Octubre.

ICCI-RIMAY 2001 "Banco Mundial y PRODEPINE: Hacia un neoliberalismo étnico?", en Boletín ICCI "RIMAY" (Quito) Año III, N° 25, Abril.

León Trujillo, Jorge 1994 De campesinos a ciudadanos diferentes: el levantamiento indígena (Quito: Ediciones ABYA YALA/CEDIME).

Sánchez Parga, José 1998 La cultura entre un fin de un siglo y umbral de un milenio (Quito: CAAP) mimeo.

Zúñiga García, Nieves 2002 Observatorio de conflictos (Madrid: CIP/Fundación Hogar del Empleado) Febrero. Serie Indigenismo-Ecuador.

NOTAS

* Director Ejecutivo del Centro Andino de Acción Popular (CAAP) Quito, Ecuador.

1 Tomado de la entrevista realizada en noviembre de 2001 por Nieves Zúñiga García (2002).

2 N. de la E.: el huasipungaje es un tipo de hacienda de forma semi-feudales, en donde el campesino (huasipungero) trabajaba para el hacendado a cambio del usufructo de un pequeño terreno (huasipungo).

FUENTES

Boletín ICCI-RIMAY 2002 (Quito) N° 34, Enero; N° 35, Febrero; N° 36, Marzo.

Boletín ICCI-RIMAY 2001(Quito) N° 23, Febrero.

CONAIE 1994 Proyectos de Reforma a la constitución política del Ecuador.

Ecuador Debate 1999 (Quito) N° 48, Diciembre. Etnicidades e identificaciones.

Ecuador Debate 1996 (Quito) N° 38, Agosto. Racismo e identidades.

Ibarra, Hernán 1991 "La identidad devaluada de los (modern indians)", en Indios. Una visión del levantamiento indígena de 1990 (Quito: ILDIS/ ABYA YALA).

Martínez, Luciano 2002[a] "Desarrollo Rural y pueblos indígenas: aproximación al caso ecuatoriano", en Políticas, instrumentos y experiencias de desarrollo rural en América Latina y Europa (Madrid: FODEPAL-AECI).

Martínez, Luciano 2002[b] Economía política de las comunidades indígenas (Quito: ABYA YALA/FLACSO/ILDIS).

Sánchez Parga, José 2002 Crisis en torno al Quilotoa: mujer, cultura y comunidad (Quito: CAAP).

Sánchez Parga, José 1996 Población y pobreza indígenas (Quito: CAAP).

CAPÍTULO 3

Militarización social y criminalización de la pobreza. Los casos de Colombia, Guatemala y Bolivia

Colombia: entre la democracia y el autoritarismo **Jaime Zuluaga Nieto***

INTRODUCCIÓN

La situación colombiana se caracteriza por la presencia de un grave conflicto armado interno, múltiples formas de violencia, el narcotráfico y la existencia de un Estado pequeño, pobre y débil. Además, su economía atraviesa por una fuerte fase recesiva que, entre otros efectos, ha provocado un sensible aumento de la pobreza.

Como resultado del conflicto armado, el país atraviesa por una grave crisis humanitaria que se manifiesta en los 2.900.000 desplazados, los 3.500 secuestros anuales, dos desapariciones forzadas por día y los 8 mil homicidios anuales por causas político-sociales.

Junto con esto, tiene una de las más altas tasas de criminalidad en el mundo, un poco más de 60 homicidios por cada 100 mil habitantes, y en los últimos años atravesó por un acelerado proceso de desinstitucionalización. El Estado se ha revelado incapaz de cumplir adecuadamente con dos de sus funciones básicas: justicia y seguridad.

La complejidad de la situación colombiana ha dado origen en los medios académicos a una nueva categoría, “colombianización”, con la cual se pretende, como lo señala Eduardo Pizarro, describir una situación en la cual la presencia de múltiples formas de violencia y la incapacidad del Estado para garantizar un mínimo de orden y seguridad derivan en un acentuado proceso de erosión institucional.

En una situación como la colombiana se entiende por qué la seguridad es uno de los problemas más sentidos por la población, así no sea el más grave. De allí que ésta se haya convertido en uno de los objetivos centrales de las políticas del presidente Alvaro Uribe, que inició su gobierno en agosto de 2002.

Pero el problema no es nuevo, aunque es ahora más severo que nunca antes. La búsqueda de la seguridad ha sido uno de los objetivos de las políticas públicas desde hace décadas. En 1978, durante la administración Turbay Ayala (1978-1982) se expidió un controvertido Estatuto de Seguridad que le otorgó a las Fuerzas Armadas funciones judiciales y consagró una serie de disposiciones que abrieron la compuerta para la violación de los derechos humanos mediante las detenciones arbitrarias, las torturas y la represión selectiva. La lucha contra el Estatuto de Seguridad y las políticas represivas que lo acompañaron dieron origen al movimiento por la defensa de los derechos humanos¹. Conviene aclarar que a lo largo del siglo XX, y amparados en la antigua Constitución de 1886, los gobiernos recurrieron a la figura del estado de sitio, con lo cual dispusieron de facultades extraordinarias para dictar normas de excepción que limitaron ampliamente algunos derechos fundamentales. Durante décadas, desde la década del cuarenta, el estado de sitio fue lo “normal”, y la situación de excepcionalidad se mantuvo de forma casi permanente, lo cual por una parte limitó las posibilidades de expresión de los conflictos sociales, económicos y políticos, y por otra parte instituyó políticas represivas basadas en disposiciones extraordinarias para encarar las situaciones de conflicto propias del desarrollo de la vida política de la sociedad.

En 1991, gracias a un inédito proceso constituyente ligado a las exitosas negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla del M19, fue posible la abolición de la Constitución de 1886 y la adopción de una nueva que consagró el estado social de derecho y la democracia participativa. En la Asamblea que adoptó la nueva Constitución participaron por primera vez sectores tradicionalmente excluidos de la vida política nacional tales como las minorías políticas, los indígenas, los afrocolombianos, las mujeres, e incluso ex guerrilleros incorporados mediante los acuerdos de paz a la vida política legal. La Constitución del '91 eliminó la figura del estado de sitio, y a cambio de ella consagró la del 'estado de conmoción', de carácter temporal, a la

cual se debe recurrir cuando emerjan factores que amenazan la democracia y el estado social de derecho. Este fue un avance significativo para dotar a la democracia colombiana de instrumentos de excepción para afrontar las amenazas que surgieran contra ella.

La búsqueda de la seguridad ha planteado desde hace décadas el dilema entre la construcción de un orden democrático y la construcción de un orden autoritario. Estas son dos visiones contrapuestas de organización de la sociedad, como también de la construcción del orden. En una democracia el orden público y la seguridad descansan en el ciudadano, sus libertades, derechos y deberes, y son ellos en última instancia los que definen las funciones y políticas públicas para garantizar el orden y la seguridad. En un Estado autoritario el énfasis es puesto en la defensa de las instituciones estatales, sobre el supuesto de que ellas encarnan el bien común. Debemos decir que la Constitución del '91 optó claramente por la construcción de un orden democrático. De ahí el carácter temporal de los estados de conmoción y su finalidad: defender la democracia y el estado social de derecho.

En la coyuntura actual ha adquirido relevancia el dilema entre la construcción de un orden democrático y la construcción de un orden autoritario, dada la complejidad y gravedad de la situación y la política de restablecimiento de la autoridad pregonada por el presidente Uribe. Nos encontramos en una guerra en escalamiento, con las violencias política y común desbordadas e interactuando, un gran poder del narcotráfico que ha penetrado diferentes esferas de la sociedad, y elevados niveles de impunidad.

A este complejo panorama se suma la fuerte recesión por la que atraviesa la economía desde 1998, que interrumpió el continuado crecimiento de la economía colombiana durante la segunda mitad del siglo XX. El modelo económico de corte neoliberal y la recesión a él asociada han provocado el agravamiento de la situación de pobreza y exclusión. Hoy los niveles de pobreza son los de quince años atrás, y los indicadores de desarrollo humano se han deteriorado. La tasa de desempleo llegó al 18% a fines de 2002, aunque en los últimos meses ha descendido. La inequidad se ha acentuado, y lo grave es que ha venido aumentando de manera sostenida en las dos últimas décadas, tanto en los períodos de crecimiento de la economía como en los de decrecimiento. El problema no es que la economía crezca o no: el problema es el modelo de desarrollo. Y ante esta situación, en lugar de plantearse un cambio en el modelo, lo que la nueva administración se ha propuesto es un severo ajuste para restablecer los equilibrios macroeconómicos y superar el déficit de las finanzas públicas mediante la reducción del gasto público (con la excepción del gasto en Defensa), reforma laboral regresiva, reforma pensional, y reforma tributaria basada fundamentalmente en el aumento y la extensión del IVA. Con este conjunto de medidas se ha afectado negativamente la capacidad de consumo de los sectores medios y populares y se han agudizado las tensiones sociales.

DE LA "SEGURIDAD DEMOCRÁTICA" A LA MILITARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

El actual presidente ha enfatizado la necesidad de restaurar la autoridad y garantizar la seguridad democrática, para "que no asesinen al sindicalista ni secuestren al empresario". En declaraciones a un periodista mexicano señaló que no pretende "instaurar un Estado policiaco ni una versión de la doctrina de seguridad nacional para marcar a los marxistas. Lo que buscamos es una política de seguridad democrática". Ya en el Manifiesto Democrático² señaló que la "la seguridad será democrática. Para proteger a todos, al trabajador, al empresario, al campesino, al sindicalista, al maestro, frente a cualquier agresor". Y para lograr ese objetivo se propuso enaltecer la profesión de soldado y policía, incrementar el pie de fuerza y además convertirse en "el primer soldado de la nación"³.

Destaco de la concepción de seguridad del actual presidente dos aspectos: su carácter democrático parece residir en el hecho de ser una seguridad para todos, y su naturaleza es esencialmente militar y policiva.

No hay ninguna duda sobre la importancia que la seguridad tiene para la existencia y funcionamiento de la sociedad. Es más, puede afirmarse que ésta es un valor fundante de la sociedad que se encuentra en el origen mismo del derecho en la medida en que éste es, como

dice Sigmund Freud (1982), “el poder de una comunidad” ejercido en oposición a “la violencia del único”, o, expresado en otros términos, es la fuerza de todos contra uno. Sin seguridad y derecho no es posible el desarrollo de la convivencia ni la existencia de la justicia, elementos indispensables para el funcionamiento pacífico de las sociedades.

Seguridad y derecho nos remiten entonces a la existencia de reglas que sirven para regular las relaciones interpersonales así como las relaciones entre las personas y el Estado. Presupone un pacto social, fundante del orden legítimo y sobre la base del cual opera la autoridad del gobernante.

Pero una concepción moderna de seguridad, de seguridad para el ciudadano, es de carácter multidimensional: no se reduce a lo militar y policivo solamente. La seguridad para el ciudadano es un bien público, se fundamenta en una cultura de la convivencia basada en la solidaridad, el respeto a las diferencias, la tolerancia, y en la garantía de acceso a las riquezas de la sociedad que hacen posible la existencia en condiciones de bienestar. Esto es, debe garantizar las posibilidades de desarrollo humano, social y económico a partir de criterios de justicia social y equidad distributiva, y para ello es indispensable que se desarrolle en el marco de una democracia integral –económica, social, política– incluyente. Existe pues una relación intrínseca entre seguridad y democracia que hace que éstas interactúen y estén mutuamente condicionadas en su existencia: la seguridad es un elemento esencial para la democracia, la democracia es esencial para la seguridad en una sociedad. El fortalecimiento de la seguridad no debe ir en detrimento de la democracia. La profundización de la democracia no atenta contra la seguridad. Y entiéndase bien que plantear lo que podemos llamar seguridad democrática en esta forma integral no excluye, sino que por el contrario supone, el ejercicio de la capacidad coercitiva del Estado para garantizar la vigencia de los derechos y el respeto a la ley. No es cuestión exclusivamente de “restablecer el ejercicio de la autoridad” como con tanta vehemencia insiste el presidente Uribe.

LAS HERRAMIENTAS GUBERNAMENTALES DE LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

El presidente Uribe se ha caracterizado durante los primeros meses de su gestión por la aplicación rigurosa de muchos de los puntos enunciados en su Manifiesto Democrático. Además de ser una prueba de coherencia entre lo ofrecido durante la campaña electoral y lo realizado en el ejercicio gubernamental, ha sido un factor positivo para que la sociedad recupere la confianza, la credibilidad en el gobernante, en un país tanto tiempo escéptico respecto del ejercicio de la política. Es evidente que en materia de seguridad el presidente está cumpliendo lo que prometió.

Veamos algunas de sus promesas y sus ejecuciones. Prometió en su Manifiesto la creación de una Red de Informantes: “Todos apoyaremos a la fuerza pública, básicamente con información. Empezaremos con un millón de ciudadanos. Sin paramilitarismo. Con frentes locales de seguridad en los barrios y el comercio. Redes de vigilantes en carreteras y campos. Todos coordinados por la fuerza pública que, con esta ayuda, será más eficaz y totalmente transparente. Un millón de buenos ciudadanos, amantes de la tranquilidad y promotores de la convivencia”⁴.

La red de informantes está operando. Se estima que ha desbordado ampliamente el millón de lo que el presidente llamara “buenos ciudadanos” y, a juzgar por indicadores tales como los comunicados de las fuerzas militares y de policía en sus operaciones contra la insurgencia, parte de los éxitos reportados obedecen a la eficacia de lo que ahora se llama “red de cooperantes”. El establecimiento de esta red de informantes generó críticas por parte de algunos sectores, especialmente organizaciones de derechos humanos, organizaciones sindicales, de indígenas, de mujeres e iniciativas de paz. Sobre el sentido de esas críticas volveré más adelante.

Prometió “Concertar con transportadores y taxistas para vincularlos a la seguridad de calles y carreteras. Cada carretera tendrá un coronel del Ejército o de la Policía responsable de su seguridad”⁵. Este es un punto particularmente sensible para muchos sectores de Colombia. En la creciente degradación del conflicto colombiano, las guerrillas han recurrido en los últimos

años al establecimiento de retenes ilegales en muchas de las carreteras del país y procedido a secuestrar masivamente a centenares de personas. Esta práctica, violatoria del derecho internacional humanitario, ha generado una fuerte sensación de inseguridad y estimulado en algunos sectores una conducta que podríamos denominar “auto-secuestro”, pues muchas personas se abstienen de salir de las ciudades o de transitar algunas carreteras por temor a caer en lo que el humor colombiano ha llamado “pescas milagrosas”. El presidente cumplió su promesa y, aunque se sabe poco de la concertación con transportadores, lo cierto es que estableció un programa llamado “Vive Colombia, viaja por ella” orientado a recuperar las carreteras mediante fuerte presencia de la fuerza pública para garantizar en oportunidades especiales, como es el caso de los “puentes”⁶, el libre tránsito por algunas carreteras. Son días en los cuales salen de algunas ciudades caravanas de vehículos escoltados por militares y policías. El resultado ha sido una manifiesta reactivación de la circulación en muchas de las carreteras del país.

También prometió pagar los informes que recibiera de la ciudadanía. En efecto, el Manifiesto Democrático dice “El lunes será el ‘Día de la Recompensa’ que pagará el Gobierno a los ciudadanos que en la semana anterior hubieran ayudado a la fuerza pública a evitar un acto terrorista y capturar al responsable. A liberar un secuestrado y capturar al secuestrador. Se respetará la reserva de identidad y se exigirá visto bueno de las autoridades competentes”. Este programa, inicialmente promocionado a través de la televisión, fue duramente criticado por diversos sectores por sus implicaciones éticas, hasta el punto que se suspendió su promoción televisiva pero se mantuvo su ejecución. El sistema de recompensas por informes va en contra del principio de solidaridad en el cual debe basarse la cooperación libre y espontánea entre el ciudadano y las autoridades.

La críticas que se han formulado a estas tres medidas gubernamentales parten de reconocer que nos encontramos en un contexto de guerra interna en la que hay partes en conflicto –la fuerza pública, los grupos paramilitares y las organizaciones insurgentes–, lo que obliga a reconocer la distinción consagrada por el derecho internacional humanitario entre combatientes y no combatientes, al respeto a la población civil y a su derecho a no involucrarse en el conflicto. Estas medidas involucran a la población civil en el conflicto, la hacen “tomar partido” y la convierten de facto en “objetivo militar”. Además acentúan los procesos de desgarramiento del tejido social al fundamentar las relaciones interpersonales en la sospecha al próximo, instituyen la desconfianza en las relaciones interpersonales en lugar de fomentar la solidaridad, y hacen del interés por la recompensa el fundamento de la cooperación con las autoridades, destruyendo así el principio de responsabilidad ciudadana.

Además de éstas que he llamado herramientas, el Manifiesto Democrático contiene otras propuestas: “Un país sin droga. Apoyar y mejorar el Plan Colombia. Que incluya interceptación aérea para que no salgan aviones con coca y regresen con armas. Pediré la extensión del Plan para evitar el terrorismo, el secuestro, las masacres, las tomas de municipios”. Consecuente con esta posición, el presidente ha solicitado la continuación y ampliación de la “ayuda” norteamericana, ha intensificado de manera significativa el programa de fumigaciones aéreas de altos costos para la población y el medio ambiente y, aunque proponía acuerdos con decenas de miles de familias para la erradicación de la coca, éstos no se han celebrado. Se mantiene así la equivocada política de fumigaciones y se fortalece la injerencia de Estados Unidos. Un primer balance de la intensificación de las fumigaciones señala una reducción significativa de cultivos en el Putumayo, y en general en el área cultivada. Son sin embargo numerosos los reclamos de las comunidades, incluso de gobiernos departamentales, por los efectos nocivos de las fumigaciones para los campesinos.

El gobierno se ha propuesto avanzar en la profesionalización de las fuerzas armadas y aumentar el pie de fuerza del ejército en 30 mil hombres. Creó una nueva modalidad de soldados, los llamados “soldados campesinos”, que se incorporan al Ejército sin desvincularse de sus comunidades. Esta medida tiene implicaciones preocupantes porque liga a las familias al conflicto, dado que los “soldados campesinos” no residen en cuarteles sino que lo siguen haciendo en sus propios hogares. Es una manera más barata y más rápida de incrementar la fuerza pública, pero que va en detrimento del objetivo de su profesionalización.

Adicionalmente, el gobierno recurrió a la declaratoria del Estado de Conmoción Interior como

respuesta a los graves atentados realizados por las guerrillas de las FARC-EP el día de la toma de posesión del nuevo presidente. En uso de las facultades que le confiere el estado de conmoción, el presidente expidió dos decretos. Uno de ellos creó un impuesto del 1,2% sobre el patrimonio líquido de los contribuyentes obligados a declarar renta, gravamen con el que recaudó alrededor de 2,5 billones de pesos destinados a financiar el mayor gasto militar que demanda la política de reingeniería y crecimiento de las fuerzas armadas. Mediante el otro decreto le confirió funciones judiciales a la fuerza pública, autorizó allanamientos y capturas sin orden judicial, instituyó la posibilidad de la detención sobre la base de sospechas de que se tiene la intención de cometer un delito, y se agilizaron los trámites para la interceptación de comunicaciones telefónicas. En aplicación de este decreto se crearon zonas de rehabilitación y consolidación en Arauca y el Sur de Bolívar, que quedaron bajo control militar y en las cuales se restringen aún más derechos como el de movilización, amén de que se establece la posibilidad de expulsión de extranjeros, como ya se ha venido practicando.

Como se colige de su contenido, este último decreto se dirige más contra la población civil que contra los grupos armados ilegales, y recorta derechos fundamentales de los ciudadanos invocando su defensa. Al fin y al cabo, los derechos y libertades que se limitan son los de los ciudadanos que desarrollan sus actividades en el campo legal, y no los de quienes por su accionar están de hecho en la ilegalidad y con las armas en la mano. Es un decreto que además fue declarado parcialmente inexecutable por la Corte Constitucional en lo relativo a la atribución de funciones judiciales a las fuerzas armadas y en la vigencia de las zonas de rehabilitación y consolidación.

Todas estas medidas y programas han tenido por efecto una creciente militarización de la vida nacional que se trasluce en las frecuentes intervenciones del presidente ante las fuerzas militares invocando la abnegación y patriotismo de los soldados para salvar a la patria de la amenaza del terrorismo. Las redes de informantes, los “soldados campesinos”, son otras tantas medidas que tienden a involucrar a la población civil en el conflicto, contribuyen a la polarización de la sociedad y alimentan el clima favorable a la guerra que se ha dado desde la ruptura de los diálogos entre el gobierno nacional y las FARC-EP el 20 de febrero de 2002.

LA NUEVA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

En las bases del Plan Nacional de Desarrollo se encuentra una formulación más elaborada de la política de seguridad del gobierno. Allí se afirma que la “Seguridad Democrática comprende el ejercicio de una autoridad efectiva, que sigue las reglas, contiene y disuade a los violentos y está comprometida con el respeto a los derechos humanos y la protección y promoción de los valores, la pluralidad y las instituciones democráticas. Así entendida, la Seguridad Democrática trasciende el concepto tradicional de seguridad ligado exclusivamente a la capacidad del Estado para coartar y penalizar a aquellos individuos que transgreden las normas de convivencia en sociedad. En última instancia, la política de Seguridad Democrática busca la construcción de un orden social que proteja y beneficie a los ciudadanos en sus diferentes espacios y ámbitos, asegure la viabilidad de la democracia y afiance la legitimidad del Estado” (DNP, 2003).

Esta política se desagrega en una serie de programas específicos. Primero, el control del territorio y la defensa de la soberanía nacional, que comprende el fortalecimiento de la fuerza pública, la inteligencia y la capacidad disuasiva; promoción de la cooperación ciudadana a través de las redes de cooperantes y el programa de recompensas; protección a la infraestructura económica; seguridad urbana; seguridad vial y comunicaciones para la seguridad democrática. Segundo, el combate al problema de las drogas ilícitas y al crimen organizado. Tercero, el fortalecimiento del servicio de justicia. Cuarto, el desarrollo de zonas deprimidas y de conflicto con programas productivos, desarrollo de infraestructura, fortalecimiento institucional y comunitario y programas de desarrollo y paz. Quinto, la protección y promoción de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Sexto, el fortalecimiento de la convivencia y los valores. Y por último, la dimensión internacional, que comprende relaciones bilaterales y multilaterales y cooperación entre otros programas.

En esa misma dirección se desarrolla el documento del Ministerio de Defensa Política de Defensa y Seguridad Democrática (2003), en cuya elaboración final se recogen observaciones y críticas hechas por diversos sectores a su versión inicial. Este documento reafirma que la seguridad depende de la capacidad de la fuerza pública para ejercer la coerción, así como de la capacidad del gobierno para cumplir con las obligaciones constitucionales del Estado, de la pronta administración de justicia y del Congreso para legislar sobre seguridad. Es decir, la seguridad depende del adecuado funcionamiento del Estado y se entiende “como la protección del ciudadano y de la democracia por parte del Estado, con la cooperación solidaria y el compromiso de toda la sociedad” (ibidem). Este enunciado es conceptualmente mucho más acertado. Y aunque no alcanza el carácter de una concepción integral de la seguridad, va más allá del simple “restablecimiento de la autoridad” y del ejercicio de la función coercitiva por parte del Estado. Ahora bien, ¿cuáles son las amenazas a la seguridad de las cuales es necesario proteger al ciudadano y a la democracia? Según el mismo documento, estas amenazas son por orden el terrorismo, el negocio de las drogas ilícitas, las finanzas ilícitas, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el secuestro y la extorsión, y el homicidio. Terrorismo y narcotráfico son los dos ejes articuladores de las otras amenazas, más bien efecto de las anteriores.

Con su estrategia de seguridad democrática el gobierno pretende recuperar la gobernabilidad democrática, cambiar la correlación de fuerzas con la guerrilla (cfr. Pizarro, 2003) y desmontar el narcotráfico atacando los cultivos y las finanzas ilícitas. Aunque no descarta la posibilidad de negociación con las guerrillas con mediación internacional, es claro que no existe una política de paz basada en la solución negociada. La paz, de alcanzarse, será por la vía de la confrontación y la derrota de las guerrillas.

Asumiendo la lógica de la política de seguridad formulada por el gobierno, ¿es pertinente preguntarse si con ella se trata efectivamente de la protección del ciudadano y de la democracia? Veamos.

DEL DICHO AL HECHO

Según el gobierno, la primera de las amenazas contra los ciudadanos y la democracia es el terrorismo. Pero ¿qué entiende éste por terrorismo? Después de los hechos del 11 de septiembre, ‘terrorismo’ se ha convertido en un concepto “valija”, que se utiliza abusivamente para caracterizar cualquier hecho de violencia que ocurre en la sociedad. Es precisamente así como lo define el Manifiesto Democrático de Álvaro Uribe: “hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo”⁷. Consecuente con este planteamiento, para el presidente Uribe las organizaciones guerrilleras son organizaciones terroristas articuladas al narcotráfico, por lo que no se puede hablar de conflicto interno armado. “Aquí no hay un conflicto”, ha afirmado reiteradamente; lo que hay son unas bandas terroristas contra el Estado y la sociedad. De esta posición se derivan varias consecuencias. La primera de ellas es que no se puede hablar de partes en el conflicto, de actores del conflicto. Se trata de la lucha del Estado contra organizaciones de delincuentes. La segunda es que no puede haber “neutralidad” de ningún sector. Se está del lado del Estado, o del lado de los delincuentes y terroristas. Finalmente, no cabe la distinción entre combatientes y población no combatiente, como claramente lo sostuvo el presidente ante las ONGs de derechos humanos e iniciativas de paz que se reunieron con él en el mes de junio de 2003. Por eso la exigencia de que la población toda se comprometa con el Estado y sus fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo. Desconocer la distinción entre combatientes y no combatientes es eliminar de cuajo la base sobre la que se sustenta la aplicación del derecho internacional humanitario, y en particular sus normas de protección a la población no combatiente. A juicio del presidente, lo que le compete a la población es cerrar filas en torno a las fuerzas armadas y cooperar con ellas para derrotar al terrorismo.

Esta concepción explica por qué, con el pretexto de ganarle la batalla al terrorismo, se intenta desmontar algunas de las conquistas democráticas más importantes consagradas en la Constitución de 1991. El gobierno se ha comprometido con un ambicioso proyecto de reforma constitucional y legal que busca desmontar la acción de tutela, reducir competencias de la

Corte Constitucional, modificar el equilibrio entre los poderes públicos a favor del Ejecutivo, y sacar adelante un nuevo estatuto antiterrorista.

La acción de tutela fue establecida por el Constituyente de 1991 y rápidamente se convirtió en uno de los instrumentos básicos de defensa de los derechos fundamentales, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. De las más de 800 mil tutelas que se han interpuesto desde su creación, alrededor del 80% ha versado sobre derechos económicos y sociales en materias como salud, educación, vivienda y trabajo, entre otros. Son justamente las tutelas sobre derechos económicos y sociales las que el gobierno propone eliminar, así como “esterilizarlas” para que las sentencias no produzcan efectos económicos sobre los presupuestos locales, territoriales o nacionales. Ante la crisis del sistema de justicia, las altas tasas de impunidad y el precario funcionamiento de las instituciones, la tutela se ha convertido en el instrumento más importante de que dispone el ciudadano común y corriente para que se ejerza justicia en el país.

La Constitución de 1991 debilitó el régimen presidencialista imperante en Colombia y buscó establecer un sano equilibrio entre los poderes públicos, para lo cual, entre otras medidas, creó la Corte Constitucional como la institución garante del respeto y aplicación de la Constitución y el Consejo Superior de la Judicatura para garantizar un manejo administrativo autónomo de la rama judicial. La Corte Constitucional ha proferido sentencias de gran valor en defensa de los principios constitucionales, que muchas veces han obligado a rectificar políticas públicas que iban en contravía de los derechos establecidos por la Constitución. La reforma constitucional propuesta por el gobierno busca reformar la Corte y debilitar el principio de control de constitucionalidad, como en el caso de los decretos de Conmoción Interior, sobre los cuales ejercería un control meramente procedimental. Propone además la supresión del Consejo Superior de la Judicatura y en su lugar crear un organismo con presencia del Ministerio del Interior y de Justicia, con lo que debilita la autonomía de la rama judicial. Se trata de romper el equilibrio entre los poderes públicos a favor del ejecutivo y volver a esa especie de “monarquía constitucional” que se había establecido en virtud de la Constitución de 1886.

Por último, el gobierno presentó, y está a punto de ser aprobado por el Congreso, un proyecto de ley de estatuto antiterrorista que revive las normas que en el pasado la Corte Constitucional declaró inexecutable. De nuevo aspira a otorgar funciones de policía a las fuerzas militares, en abierta oposición a las recomendaciones que en la materia ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2003): “...insta [al Gobierno y al Congreso] a no introducir en el ordenamiento jurídico colombiano normas que faculten a los miembros de las fuerzas militares para ejercer funciones de policía judicial, ni otras que sean incompatibles con la independencia de la justicia”.

Con la reforma a la tutela y a la Corte Constitucional se desmontarían dos de las más importantes conquistas democráticas consagradas en la Constitución de 1991. Y con el estatuto antiterrorista se limitarían severamente derechos fundamentales para dar paso a una creciente militarización en el ejercicio de la coerción estatal. Son las instituciones democráticas las afectadas con estos proyectos que tienden a fortalecer los rasgos autoritarios del régimen político colombiano. Si la política de seguridad se orienta a la defensa y viabilidad de la democracia, los pasos que está dando el gobierno nos conducen en dirección contraria. Desconocer la condición de no combatientes de la inmensa mayoría de los colombianos y pretender volverlos informantes de la fuerza pública en una situación de guerra interna no es la forma más adecuada de defensa de los ciudadanos.

El énfasis está en lo militar y se manifiesta en la voluntad por sacar adelante estas reformas por parte del gobierno, con la ausencia de una política de paz y de una política social orientada a mejorar las condiciones de existencia de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

NO HAY POLÍTICA DE PAZ

A diferencia del presidente Pastrana (1998-2002), que hizo de la política de paz negociada su programa bandera y al mismo tiempo avanzó en la reestructuración y fortalecimiento de las fuerzas armadas, el presidente Uribe no tiene una política de paz, aún cuando no descarte una

negociación con las guerrillas (cfr. Pizarro, 2003). En los hechos su programa de seguridad democrática se orienta al fortalecimiento de las fuerzas militares y de policía y al involucramiento de la población civil en el conflicto a través de los mecanismos de información y cooperación con la fuerza pública, es decir, a la profundización e intensificación de la guerra con el propósito de derrotar a las guerrillas.

“O negocian o los derrotamos”, afirma, y ha planteado la posibilidad de la negociación con las guerrillas, a las que llama terroristas, sobre la base del cese de hostilidades y de una negociación orientada exclusivamente a su desmovilización apoyada en la mediación de las Naciones Unidas. Se niega de plano a aceptar la posibilidad de una agenda de discusiones sobre reformas económicas, políticas y sociales tal como fue acordada en el pasado con las FARC-EP en San Vicente del Caguán durante la administración Pastrana, o como fue propuesta por el ELN para la realización de la Convención Nacional por la Democracia. Puede decirse que la política del gobierno en este campo es la rendición de las guerrillas y su incorporación a la vida legal.

Pero si el gobierno carece de una política de paz, lo mismo puede decirse de las guerrillas. Las FARC-EP han amenazado con extender la guerra a las ciudades, exigen el canje de prisioneros y demandan el despeje de dos departamentos, Caquetá y Putumayo, para iniciar negociaciones sobre la base de una agenda similar a la acordada en San Vicente del Caguán. Por su parte, el ELN, que sostuvo inicialmente conversaciones con la oficina del Alto Comisionado para la Paz, ha señalado que no es posible negociar con un gobierno que sostiene una política de guerra y en lo económico y social afecta los intereses de los sectores populares.

Tal como están planteadas las cosas no parecen existir posibilidades de avanzar en la solución negociada del conflicto durante este gobierno. Para expresarlo en otros términos, los tiempos son de confrontación entre las guerrillas y el gobierno, y es previsible que marchemos hacia una intensificación de la confrontación. De hecho, en el primer semestre del presente año las acciones se han incrementado, aunque la magnitud de cada uno de los enfrentamientos es menor.

Pero si la perspectiva con las guerrillas es de confrontación, con los grupos paramilitares, especialmente con los liderados por las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC– comandadas por Carlos Castaño, es de negociación. Desde el inicio se abrió esta posibilidad cuando este sector del paramilitarismo manifestó su disposición a negociar con un gobierno que tenía una política de seguridad capaz de enfrentar la amenaza insurgente. Castaño reconoció que dado el compromiso de las fuerzas armadas para recuperar el territorio y derrotar la insurgencia, “ellos sobran”, ya que su función había sido la de llenar los vacíos que dejaba la acción de la fuerza pública en la lucha contra la insurgencia. Estas negociaciones avanzan y plantean no pocos problemas. ¿Qué tipo de negociación y con quién, si los paramilitares siempre se han declarado defensores del Estado? ¿Con quién la tregua que han planteado? ¿Con las Fuerzas Armadas? Si ellos no combaten a las fuerzas armadas sino a la insurgencia, y asesinan pobladores indefensos considerados auxiliares de la guerrilla. ¿Se los puede considerar delincuentes políticos para que puedan ser beneficiados con amnistías o indultos, si no están en rebelión contra el Estado? ¿Cómo hacer con la solicitud de extradición de algunos de sus dirigentes por parte de Estados Unidos? ¿Cómo hacer para resolver la cuestión del narcotráfico ligado al paramilitarismo? No es fácil para el gobierno el camino de esta negociación, y diversos sectores, nacionales y extranjeros, han planteado que cualquier negociación de los paramilitares no puede dejar en la impunidad los crímenes de guerra y lesa humanidad que han cometido, que se requiere develar y desmontar el aparato de relaciones con sectores del Estado, de las fuerzas armadas y de la sociedad que los ha apoyado, y que en todo caso no se puede dejar de lado la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. El balance entre justicia e impunidad, inherente a toda negociación de paz, adquiere en este caso una significación especial por dos aspectos: porque sienta un precedente para una futura y eventual negociación con las guerrillas, y porque la comunidad y la justicia internacionales estarán atentas a este proceso.

LA POLÍTICA SOCIAL Y LA DEFENSA DEL CIUDADANO: LA GUERRA SOCIAL

Al hacer un balance de su gestión el presidente Uribe reconoce que el gran déficit que presenta es lo social. Y aunque considero que el déficit comprende otros aspectos, estimo que el presidente tiene razón al aceptar que su gobierno no ha avanzado en lo social. Al paso que se impone una concepción militarista de la seguridad, el gobierno adelanta simultáneamente lo que se puede considerar una “guerra social”. La política social ha girado en torno a tres ejes. La reforma laboral, que flexibilizó aún más la relación laboral, debilitó la contratación a término fijo y propició el trabajo temporal. Además se orientó a reducir costos laborales para los empresarios, recortando los ingresos de los trabajadores al eliminar horas extra mediante la ampliación de la jornada laboral diurna y la supresión de los recargos dominicales. Redujo igualmente las indemnizaciones por despidos injustos, estimulando de esa manera la inestabilidad laboral. El resultado esperado de esta reducción de costos laborales era el aumento del empleo, lo que no se ha logrado. Pero sí se logró reducir de manera sensible el ingreso de los trabajadores más pobres. El otro eje es la política pensional. Siguiendo el modelo chileno se redujeron los montos de las pensiones y se aumentaron los tiempos de cotización y la edad de jubilación. Avanza además un proyecto para gravar las pensiones. Estas medidas afectan a la población de más bajos ingresos: el 80% de las pensiones en Colombia están por debajo de dos salarios mínimos. Por último, la reforma tributaria basada en el aumento y extensión de IVA, impuesto esencialmente regresivo y que afecta proporcionalmente más a los sectores de más bajos ingresos. Adicionalmente, el gobierno se ha comprometido con un referendo que incluye entre sus puntos la congelación por dos años de los sueldos de los trabajadores al servicio del Estado.

Esta “guerra social” ha agravado la situación de los sectores medios y populares. Se sostienen y acentúan las tendencias al aumento de la inequidad, la pobreza y la indigencia. Hasta el influyente diario El Tiempo, el más importante del país, sostiene que “las cifras en este frente – que tiene que ver con nuestra guerra– son bien inquietantes. La tasa de pobreza –una de las más altas del Continente– es de 67%. La inequidad en la distribución del ingreso crece. Las grandes ciudades se parecen cada vez más a privilegiados jardines rodeados de desérticos cinturones de miseria. De los 12,2 millones de campesinos, 10,6 millones son pobres y 176 mil niños entre los 7 y 11 años trabajan, muchos en condiciones infrahumanas. La inversión social ha venido en picada a partir de 1997. La cantidad de pobres volvió a niveles de 1994 y los índices de violencia intrafamiliar van en aumento, al tiempo que crecen enfermedades como el sarampión, la tos ferina, la malaria y el dengue. La cobertura escolar entre el 30% más pobre de la población ha bajado” (El Tiempo, 2003).

Pero no se puede desconocer que, a pesar de esta situación, y a juzgar por las encuestas de los grandes medios de comunicación, el gobierno de Uribe goza de una gran popularidad, sobre todo entre sectores altos y medios de la población. Además ha logrado, a base de alianzas, formar mayorías en el Congreso para sacar sin mayores contratiempos su plataforma legislativa. Sin duda el cansancio con la guerra y con los abusos de guerrillas y paramilitares ha llevado a amplios sectores de la sociedad a saludar como positivas las medidas de seguridad en el campo policivo y militar, y por esa vía neutralizar parcialmente a los sectores inconformes con la política social. Tal vez eso ayuda a explicar por qué ha sido tan débil la respuesta a las medidas que en lo social ha adoptado el gobierno.

Pero no todo es aceptación. El movimiento sindical, liderado por el sector de los trabajadores del Estado, se ha revelado contra una política social que le ha declarado la “guerra social” a los trabajadores y se orienta a cargar los costos de la recesión y del desequilibrio macroeconómico sobre sus espaldas. Tres paros nacionales de los trabajadores estatales desde que se inició la nueva administración así lo atestiguan. La confrontación entre los trabajadores y el gobierno apenas comienza a insinuarse.

CONCLUSIÓN

Como se desprende de este enunciado y análisis de la política de seguridad democrática impulsada por el gobierno de Alvaro Uribe Vélez, es claro que se trata de una concepción unidimensional de la seguridad, que enfatiza en lo militar y policivo y deja de lado las dimensiones que tienen que ver con una política verdaderamente democrática que debe

garantizar una seguridad integral –seguridad social, en salud, alimentaria, ambiental, etc.- que haga posible el bienestar de la población. Estamos en un proceso de militarización de la sociedad y de subordinación de las libertades a la necesidad del fortalecimiento de las instituciones del Estado. Poco dicen estas medidas de la necesidad de profundas reformas a unas fuerzas armadas que aún siguen cuestionadas por las violaciones a los derechos humanos, en las que algunos sectores están sindicados por complicidad activa o pasiva con los grupos paramilitares y en las que todavía se producen escándalos como resultado de la corrupción inducida por el narcotráfico. Se plantea la necesidad de fortalecer la justicia al paso que se proponen reformas orientadas a debilitar las instituciones que funcionan, como la tutela, para alterar el equilibrio entre las ramas del poder público limitando las funciones de control constitucional de la Corte Constitucional, o reducir la autonomía de la rama judicial para fortalecer el poder del Ejecutivo. Son insuficientes los programas orientados a la relegitimación del Estado y de sus instituciones para que su poder se funde en la confianza ciudadana y no simplemente en la capacidad represiva.

En lo económico y social, los costos de la recesión y de los desequilibrios macroeconómicos pretenden cargarse en proporción apreciable sobre los trabajadores y la clase media, agravando las condiciones de pobreza e inequidad. El paraguas político que constituye el respaldo con que cuenta el gobierno puede debilitarse si no logra en el mediano plazo resultados contundentes en la lucha contrainsurgente, y si no reduce los niveles de violencia, recupera la economía y reduce la pobreza. El año 2003 puede ser decisivo para el futuro de este experimento que escala la guerra y profundiza el fracasado recetario del FMI en nombre de la seguridad de los ciudadanos y su mejor-estar. Es un año de prueba para la sociedad colombiana, que debe optar entre un sendero que se insinúa con claros rasgos autoritarios o reencontrar el camino de la construcción democrática y la justicia social.

BIBLIOGRAFÍA

DNP-Departamento Nacional de Planeación 2003 “Brindar seguridad democrática”, en Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 (Bogotá: DNP) Cap. I: 16.

El Tiempo (Bogotá) 7 de agosto, 1-14. Editorial.

Freud, Sigmund 1982 Por qué la guerra (Buenos Aires: Amorrortu) Obras Completas.

Ministerio de Defensa 2003 Política de Defensa y Seguridad Democrática (Bogotá) junio. Documento de la Presidencia de la República.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2003 Recomendaciones para Colombia 2003 (Bogotá) marzo.

Pizarro L., Eduardo 2003 Hacia un nuevo enfoque: la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez (Bogotá).

NOTAS

* Profesor Emérito Universidad Nacional de Colombia. Miembro Comité Directivo de CLACSO.

1 Desde esa época se creó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, y Colombia atrajo la atención de la comunidad internacional y en particular de las organizaciones de derechos humanos. El deterioro de la situación de derechos humanos condujo a la creación, durante la administración de Virgilio Barco (1986-1990), de una Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. A pesar de que desde entonces los diferentes gobiernos se han declarado comprometidos con la defensa de los derechos humanos, la situación no ha cesado de agravarse.

2 Manifiesto Democrático. 100 puntos Álvaro Uribe Vélez, Cap. 1. “La Colombia que quiero” es el documento de campaña que recoge la propuesta de programa de gobierno formulada por Uribe.

3 Para una mejor comprensión de la concepción de seguridad democrática propuesta por Álvaro Uribe, transcribo los puntos correspondientes del Manifiesto Democrático: “28. Enalteceré la profesión de soldado y policía. Que la comunidad los valore y respete. Que ellos se esmeren por merecer respeto y admiración. Que reciban formación técnica y su esfuerzo sea premiado con becas de estudio y altas calificaciones. Con más policías y soldados nuestra fuerza pública sufrirá menos bajas, será más respetada y el pueblo vivirá más tranquilo”. “30. El Presidente dirigirá el orden público como corresponde en una sociedad democrática en la cual la fuerza pública respeta a los gobernantes de elección popular. En la Gobernación de Antioquia fui el primer policía del Departamento. En la Presidencia seré el primer soldado de la Nación, dedicado día y noche a recuperar la tranquilidad de todos los colombianos. Al final de esa Gobernación el secuestro había descendido en 60%, las carreteras eran transitables y el homicidio había bajado 20%. Los empresarios pudieron volver a trabajar en Urabá, regresó la tranquilidad para los trabajadores y cesaron las masacres”.

4 Punto 38 del Manifiesto Democrático.

5 Punto 39 del Manifiesto Democrático.

6 En Colombia se llama “puentes” a los fines de semana que enlazan con un día festivo los lunes o viernes.

7 Ver Manifiesto Democrático.

Militarización, crimen y poder invisible en Guatemala: el retorno del centauro

Carlos Figueroa Ibarra*

INTRODUCCIÓN

En las dos últimas décadas del siglo XX se observó en América Latina el eclipse de las dictaduras militares. En buena parte de la región surgieron sistemas de democracia representativa en los cuales pudieron verse algunas novedades: la disminución sustancial de la cuota de poder de las fuerzas armadas, las elecciones no fraudulentas, la desaparición parcial del terrorismo de Estado, las posibilidades de la rotación electoral, la gradual sustitución de la cultura del terror por la cultura democrática. Los centroamericanos, y en particular los guatemaltecos, no podemos sino valorar la diferencia que hay entre una dictadura militar de carácter terrorista y una naciente institucionalidad de carácter democrático. Entre 1960 y 1996 en Guatemala fueron asesinadas entre 150 y 160 mil personas, y entre 40 y 45 mil más fueron desaparecidas. Las cifras en El Salvador y Nicaragua llegaron a decenas de miles. Al constatar los graves problemas que enfrentan las nacientes democracias políticas, entre ellos la polarización social, se escuchan voces que desestiman los precarios logros democráticos: como si no hubiese diferencia entre un régimen que aplicó de manera sistemática el terrorismo de Estado y otro que no lo hace, como si no hubiese diferencia entre un régimen que se articulaba en torno a los intereses de una dinastía y otro que expresa la vigencia de una república democrática.

Pero esta valoración no debe llevarnos a la complacencia. A pesar del desmantelamiento de las dictaduras militares propias de la segunda mitad del siglo XX, la nueva institucionalidad democrática que se observa en Centroamérica transcurre con gran precariedad, e incluso con hechos que la desvirtúan: la dominación estadounidense, la subalternidad de su economía, los atavismos autoritarios, los poderes invisibles, los vacíos estatales llenados muchas veces de manera perversa, el neoliberalismo que profundiza la polarización social y la pobreza extrema. Todos ellos son factores que caminan en sentido contrario a lo que es la democracia en su definición mínima: el conjunto de reglas, valores e instituciones que garantizan la existencia de la ciudadanía. Más aún, son fuente y nuevo contexto de la violencia que hoy vive América Latina.

Este trabajo pretende explorar brevemente algunos de tales temas para Centroamérica, y en particular para el caso de Guatemala.

MISERIA Y VIOLENCIA DELINCUENCIAL

En Centroamérica los estallidos revolucionarios se observaron en un momento en el cual el planeta estaba caminando en sentido inverso. Cuando los sandinistas entraron a Managua en el contexto de la revolución triunfante, en Gran Bretaña Margaret Thatcher iniciaba su gobierno, y Ronald Reagan estaba por llegar a la Casa Blanca. El mundo observaría la marea conservadora construida al calor de la crisis del estado de bienestar, de la debacle del socialismo real y de la implantación de un modelo de acumulación capitalista que desmontaba al anterior. Los resultados pueden verse en los saldos de los estallidos revolucionarios: las dictaduras militares fueron desmanteladas, pero los índices de pobreza y de injusticia social son mayores ahora que cuando la región observó la convulsión revolucionaria. El caso de Guatemala resulta particularmente desgarrador: si en 1980, cuando recién comenzaba el estallido revolucionario, la pobreza apenas sobrepasaba el 70%, siete años después llegaba casi al 83% y los analistas concluían que se había convertido en la "sociedad de la quinta parte", refiriéndose al porcentaje de menos del 20% que escapaba a la pobreza (FLACSO-IICA, 1991). En Centroamérica, como en el resto de Latinoamérica, la pobreza engendrada por el patrón de acumulación capitalista que se ha venido implantando desde mediados de la década del setenta es hoy uno de los factores que desvirtúa e incluso pone en peligro a las precarias democracias.

Ciertamente hay diferencias. En Costa Rica la pobreza alcanza apenas a un 20% de la

población, mientras en Honduras llega a casi el 75%. En el caso guatemalteco, las cifras del Banco Mundial, a principios de la década del noventa, eran estremecedoras. En las ciudades la pobreza afectaba al 57% de la población, mientras que la extrema pobreza -incapacidad de obtener la canasta básica de bienes y servicios- lo hacía con el 34%. Según estudios realizados en 1997, más del 20% de los habitantes de la ciudad de Guatemala (250 mil personas) vivían en extrema precariedad. En el último lustro del siglo XX, en las áreas marginales, la pobreza ascendía a 85% y la extrema pobreza a 44%. En el campo, nuevamente los datos del Banco Mundial indican que la pobreza afectaba al 86% de la población mientras que la extrema pobreza lo hacía con el 72%.

Los mismos funcionarios públicos aceptaban que la pobreza era rural, indígena y femenina. En una sociedad en la cual existe un 60% de población de origen maya, las desigualdades de clase se profundizan cuando se entrelazan con la opresión étnica y el racismo. Campesinos, pueblos mayas y mujeres resultan ser los más afectados por la concentración de la tierra, los bajos salarios y el desempleo. Tanto la pobreza como la extrema pobreza son más frecuentes en las zonas rurales y en la población indígena, de la cual en 1989 el 93% vivía en condiciones de pobreza y el 91% de extrema pobreza. En la población no indígena las proporciones correspondientes en aquel año eran de 66% y 45% respectivamente. Según datos de la sección estadounidense de UNICEF, más del 50% de los niños mayas están desnutridos, y una cuarta parte de ellos sufre anemia. Y una encuesta realizada en 1996 revelaba que en las áreas marginales el 21% de los jefes de familia eran mujeres. A mediados de 2001 los medios de información dieron la noticia de que tres municipios del oriental departamento de Chiquimula y una etnia -los chortís- en el oriente del país estaban al borde de la extinción por la hambruna. Entre enero y junio, en toda el área se habían registrado 421 casos de desnutrición infantil, y 41 personas -entre ellas 12 niños- habían muerto de hambre. Otros datos indican que aproximadamente 103 municipios, una tercera parte del total, estaban en las vísperas de llegar a la misma situación¹.

CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA Y AUTORITARISMO DE MASAS

La constatación de la pobreza en Centroamérica y en América Latina nos obliga a dilucidar si ésta la que genera la inseguridad en la región. Por ser un subcontinente agobiado por la miseria, también se convirtió en las décadas del ochenta y noventa en la segunda región con más violencia delincuencia en el mundo: en 1994 su tasa de homicidios alcanzó 28,4 por cada 100 mil habitantes, después del África subsahariana, que en 1990 tenía una tasa por arriba de 40 por cada 100 mil habitantes (Dammert, 2001: 3-4). En Guatemala, según un reporte, en 1994 la tasa estimada de mortalidad por homicidios en mayores de quince años era similar o mayor a la del África subsahariana: 47 por cada 100 mil habitantes.

La pobreza no genera necesariamente delincuencia, y el riesgo de una afirmación en sentido contrario es la criminalización de la pobreza. Sin embargo, es importante decir que la pobreza, unida a otros factores, siempre es un excelente caldo de cultivo para la criminalidad. Sea en el ámbito de la delincuencia común o en el del crimen organizado, la pobreza es uno de los factores sin los cuales ambos hechos no se explican. En efecto, el crimen organizado recluta sus infanterías entre los jóvenes que viven en la pobreza. En el contexto de una sociedad con poco espacio de movilidad social, por las escasas e inestables oportunidades de trabajo, el crimen organizado de mediana y gran envergadura tiene sus agentes operativos en ex policías y sus cuadros medios en los jóvenes provenientes de los barrios pobres o de áreas marginales. El crimen se convierte en un recurso que da poder, que brinda satisfactores materiales; y si el joven logra sobrevivir, acaso una situación holgada en la vida adulta.

Esta afirmación es válida para toda América Latina, para Centroamérica y en particular para Guatemala. Un dato de 1994, cuando declinaba el conflicto interno, tal vez pueda ilustrar la situación del país en la década de los noventa: el 39% de muertes de personas entre 20 y 24 años era debido a heridas con armas de fuego y punzocortantes (Palma Ramos, s/f: 4). Aparte de esto, las maras o bandas juveniles son una realidad importante en las ciudades centroamericanas. En la ciudad en Guatemala forman parte inseparable del pasaje urbano. La deportación de jóvenes indocumentados provenientes de las grandes ciudades

estadounidenses ha llevado a las ciudades salvadoreñas la indumentaria, los pañuelos, las identidades y los nombres de las gangs que operan en las primeras.

De lo dicho se concluye que las ciudades son el otro ámbito privilegiado de la violencia delincriminal. En el último lustro del siglo XX, el 35% de los delitos violentos en Guatemala se cometían en la capital del país, que tenía el 10% de la población total. Según datos del PNUD, sólo en un lapso bianual la violencia delincriminal aumentó en dicha ciudad capital en un 14% (ibid.). El aumento de la población que habita en las áreas marginales, la pobreza rampante que en ellas se vive, el deterioro de los servicios, el hecho de que un boyante crimen organizado y las policías corruptas hagan de las urbes un espacio privilegiado para generar y realizar sus ganancias, la más fácil disolución de las relaciones de solidaridad en un espacio que no es propicio para la comunidad, la polarización social acentuada en las últimas dos décadas, todo ello genera una cultura de la violencia.

Acaso éstas sean las razones para que la ciudad, sobre todo la gran ciudad, se convierta en un sitio de significativo peligro. Guatemala y Centroamérica no son la excepción de lo que se ve en otros países de Latinoamérica: esa suerte de apartheid, en el que las áreas burguesas o de clase media acomodada se aíslan con verjas, rehenes y policías privadas del resto del casco urbano.

El aumento desmedido de la delincuencia común también tiene otras consecuencias. Genera en las urbes un clima de inseguridad e indignación que fácilmente se convierte en apelación al autoritarismo y al simplismo de las medidas punitivas. En Guatemala este sentimiento ha sido parte del capital político del general Efraín Ríos Montt. Buena parte de las clases medias urbanas añoran aquella época en que no había delincuencia, y si la había era frenada por un hombre fuerte que con mano de hierro controlaba el caos social. En el imaginario guatemalteco ese hombre fuerte sigue siendo identificado con Jorge Ubico, el último dictador de las viejas dictaduras. Y al cultivar la imagen de un hombre austero, honesto y enérgico Ríos Montt ha reencarnado esa añoranza, la cual forma parte de su sólido liderazgo. En el contexto de expansión de la miseria y la pobreza, buena parte de la población también es vulnerable al clientelismo y sensible al discurso populista que enarbolan el presidente Alfonso Portillo y el propio Ríos Montt y su partido.

VACÍOS ESTATALES Y JUSTICIA POR MANO PROPIA

Al parecer, en el Estado latinoamericano la capacidad represiva coexiste con los notorios vacíos estatales. Éstos comienzan con el notorio déficit de legitimidad que muchos estados, algunos más, otros menos, tienen ante vastos sectores de la sociedad civil. En efecto, la corrupción, la impunidad de la que gozan los funcionarios estatales y la ineficiencia en la administración de justicia desprestigian a la política y a los políticos, y restan espacio a una gobernabilidad democrática.

Las ausencias estatales parecen ser resueltas de distinta manera según la clase o sector social que las viven. Las clases medias y altas han acudido a las empresas de seguridad privada para garantizar la seguridad de barrios y countries; los sectores medios menos afortunados contratan una "vigilancia privada informal" que en Venezuela es denominada guachimanismo (Romero Salazar, 2001); y en diversas ciudades de América Latina las noticias también dan cuenta de la organización autónoma de los vecinos de barrios populares para efectuar rondas nocturnas que los resguarden de la delincuencia.

En el campo, una de las manifestaciones más importantes de la justicia por mano propia ha sido el linchamiento. En México, Guatemala, El Salvador, Haití, Brasil, Venezuela y otros países se trata de un acontecimiento más o menos frecuente. Al menos en los primeros dos países el linchamiento tiene su espacio privilegiado en lo rural y lo comunitario. En el caso guatemalteco, fuentes periodísticas informaron que entre 1994 y 1999 240 presuntos delincuentes habían sido linchados (La Jornada, 1999). Se ha estimado que los linchamientos han ocurrido en el 60% del territorio guatemalteco, y que el campo ha sido su principal escenario: el 90% de los linchamientos se produjo en áreas rurales, y el 75% en el seno de las comunidades indígenas del país (IIJ/URL, 2000: 6).

El examen de los linchamientos sugiere que éstos deben verse como formas de protesta social más que como acciones delictivas. En el linchamiento, como en el motín, la ira provocada por el ordenamiento social se desencadena más o menos espontáneamente sobre el enemigo más próximo, y a menudo éste resulta ser la autoridad más cercana. La justicia por mano propia es la ocupación del vacío estatal que ya hemos mencionado. Como en algún momento lo dijo el anterior procurador de los derechos humanos en Guatemala: “Yo creía que se debían [los linchamientos] a la guerra, por las masacres y el genocidio, pero ahora estoy seguro que se deben a la justicia, que es inoperante y lenta” (La Jornada, 1999).

Al menos en el caso de Guatemala, la explicación resulta incompleta si sólo se queda ahí. Como dice Carmen Aída Ibarra, analista guatemalteca, la cultura del terror y de la violencia también cumple su papel: “Los códigos éticos de los guatemaltecos son de autoritarismo y violencia... además la guerra de 36 años tocó la mente y el corazón de los guatemaltecos. La violencia se convirtió en algo normal, la vida perdió valor” (La Jornada, 1999). Sin embargo, acaso haya que indagar todavía más allá de esta afirmación. Y quizás lo que aparece como vacío estatal en realidad sea la presencia de la maquinaria contrainsurgente que actúa de manera subrepticia. Gustavo Meoño (2002), director de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, sostiene que cada vez son más frecuentes los casos de linchamientos de personas que se atreven a desafiar la impunidad, y que el papel de instigadores de los ex-comisionados militares y patrulleros civiles es una constante en los mismos.

CRIMEN ORGANIZADO Y PODER INVISIBLE

Como es sabido, el problema de la delincuencia no es tan simple. Para empezar, la forma de delincuencia más importante, el crimen organizado, tiene a sus protagonistas en las altas esferas de la sociedad y su explicación en el traslado de la lógica del capital –la búsqueda de la máxima ganancia– a los ámbitos de la ilegalidad. Y en este tema el asunto del narcotráfico se vuelve referencia obligada, pues ha afectado notablemente la política, la economía y la vida cotidiana en la región.

Centroamérica es una de las vías de paso entre Colombia, Perú y Bolivia, probablemente una de las áreas más importantes de producción de estupefacientes, y Estados Unidos es su mercado más vigoroso. Cálculos de la agencia antidrogas de este país, la DEA, en 1988, estimaban que el monto de toneladas de cocaína exportada de América hacia Estados Unidos pasó de entre 14 y 19 toneladas en 1976 a 45 en 1982, y que los ingresos hacia Colombia por el tráfico ilícito aumentaron de 1.500 en 1980 a 2.500/3.000 millones de dólares en 1985 (Dinges, 1990: 123-124). Entre 1994 y 1998 la política antidrogas estadounidense había reducido drásticamente el cultivo de coca en Perú y Bolivia, lo que ocasionó su desplazamiento hacia Colombia. Dicho país exportaba 400 toneladas de cocaína anualmente, lo cual representaba un monto de 50 mil millones de dólares. El 98% de esta suma se lavaba en los sistemas financieros estadounidense y europeo, y entre 2.500 y 3 mil millones de dólares retornaban al país, esto es, el triple de las exportaciones de café y un monto superior a las de petróleo. Colombia, al pasar de un 20% de la superficie mundial de cultivo de coca en 1990 al 67% en 2000, se convirtió en el mayor productor y exportador de cocaína (Estrada Álvarez, 2001: 48; Caycedo Turriago, 2001: 189-192; Rocha García, 2001: 4-6)2.

Puede conjeturarse que son notables los efectos de este vertiginoso crecimiento de la producción y circulación de estupefacientes en Centroamérica. En Guatemala, según ha afirmado uno de los voceros de la embajada estadounidense, se calcula que atraviesan el territorio nacional unas 150 toneladas de estupefacientes al año. Esta es una cifra notable si la comparamos con la producción anual de cocaína en Colombia. En medios oficiales se calcula que el propietario o poseedor de una finca en la que existen condiciones para aterrizaje de aviones pequeños puede cobrar entre 50 y 80 mil dólares por cada descenso de avionetas cargadas de droga3. Las propias cifras oficiales indican que el decomiso de droga en los puertos del país ha bajado notablemente desde 1999. Sin embargo, algún analista ha planteado que desde 1997 Guatemala ha pasado de ser puente y bodega a productor y fábrica. Ha sido reportada la producción de amapola en el suroccidente del país, la producción de heroína, y la fabricación de opio y su exportación a laboratorios que funcionan en México

(Leffert, 1997). De ser cierto lo anterior, probablemente estaríamos asistiendo a un proceso ilícito de acumulación de capital con un ritmo de crecimiento vertiginoso. Ya hoy, en el país, en el ámbito de la lucha política, probablemente el poder invisible sea el decisivo en buena parte de la toma de decisiones. El mundo del capital se ha dividido, en términos de lucha por el poder, en lo que se ha llamado el capital tradicional y el capital emergente. Acaso simplificando lo que sucede en realidad, el último ha sido asociado a las más diversas formas ilícitas de acumulación.

Es necesario resaltar que en el contexto de crecimiento rampante del crimen organizado y la delincuencia común, en Guatemala el aparato de la guerra sucia no ha sido desmantelado. Más aún, los oficiales que un tiempo fueron los más connotados en el ramo de la inteligencia contrainsurgente tienen una red de lealtades recíprocas que es conocida como La Cofradía (Vela, 2001). La Cofradía es, a principios del siglo XXI, uno de los grupos de poder invisible más influyentes del país, y sus fronteras con el crimen organizado son difusas. Hay que tener presente, como ha denunciado recientemente Gustavo Meoño, director de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, que “todos los oficiales que hoy ostentan el grado de coronel y los nuevos generales, eran subtenientes y tenientes entre 1981 y 1983 durante los peores años de la tierra arrasada y el genocidio. O sea que estamos hablando de los autores materiales de esos atroces crímenes contra la humanidad. Resulta, por lo tanto, muy comprensible un compromiso de impunidad entre el principal autor intelectual (Ríos Montt) y los ejecutores materiales de aquellos delitos de lesa humanidad” (Meoño, 2002).

MILITARIZACIÓN E IMPUNIDAD EN GUATEMALA

Los resultados de los conflictos en Guatemala y El Salvador fueron ambiguos. Insurgencias y ejércitos se vieron obligados a negociar por la presión internacional y porque finalmente no ganaban ni perdían de manera tajante en el campo de batalla. En el caso guatemalteco esta ambigüedad parece ser mucho más pronunciada. Las fuerzas armadas lograron frenar el avance contrainsurgente entre 1982 y 1983 a costa de las 440 masacres de aldeas, los 16 mil muertos y desaparecidos, los 90 mil refugiados en México, y el millón de desplazados internos (Figueroa Ibarra, 1991: 186, 204, 232).

No obstante, esa enorme inversión en terrorismo de estado tuvo un costo para las dictaduras militares, en particular para el ejército. Las fuerzas armadas salieron desprestigiadas del conflicto, y pudiera decirse que derrotadas políticamente. En lo externo gozaron y gozan de una fama bien merecida en lo que se refiere a violaciones a los derechos humanos. En lo interno dicha fama los acompañó también, además del desgaste explicable provocado por el ejercicio del poder durante más de tres décadas. Desde el inicio de los gobiernos civiles en 1986 las fuerzas armadas en Guatemala sufrieron acotamientos, siendo el más importante de ellos el ejercicio del Poder Ejecutivo. Pero también gozaron del privilegio que ya ha sido mencionado: la impunidad.

La impunidad en relación a los crímenes cometidos en los años de la guerra sucia y los que ahora se cometen en relación a las formas ilícitas de acumulación se ha convertido en imperante. Las organizaciones sociales, en particular las vinculadas a los derechos humanos, así como sus activistas y los periodistas beligerantes, se han convertido en enemigos peligrosos. Las amenazas de muerte hechas de la más diversa forma han empezado a proliferar. Algunos de los textos de estas amenazas tienen el mismo estilo procaz de redacción que se pudo observar en las que redactaba La Mano Blanca en la década del sesenta, pero el lema de “comunista vista, comunista muerto” ha sido sustituido por el de “activista visto, activista muerto”⁴. Allanamientos de locales hechos por grupos clandestinos, robo de computadoras en las cuales se concentra información valiosa para la denuncia y persecución de violadores de derechos humanos, secuestros y golpizas a activistas, y de cuando en cuando asesinatos y desapariciones forzadas, son la realidad creciente en el país.

Al parecer, el proceso de acotamiento al ejército se ha interrumpido en los últimos dos años. El gobierno actual ha sido señalado de tener una alianza con las fuerzas armadas, en las que el papel del general Ríos Montt se ha vuelto significativo. Quien encabezara el gobierno más cruento en la historia del país en materia de ejecuciones extrajudiciales, masacres y

desapariciones forzadas, es hoy el jefe indiscutible del partido en el gobierno, presidente del poder legislativo, padre del general Enrique Ríos Sosa, hoy jefe del Estado Mayor de la Defensa, cargo que lo coloca en la senda que lleva al Ministerio de la Defensa. Pero independientemente del liderazgo de Efraín Ríos Montt, lo que hay que resaltar es la recuperación del terreno perdido por el ejército en el contexto del proceso que llevó a los acuerdos de paz firmados en 1996. Un hecho significativo es la adecuación en el discurso por parte de las fuerzas armadas. En sus intervenciones, los altos mandos del ejército hablan de una institución sensible a las cuestiones de género, de etnia, y se auto-presentan como un ejército respetuoso de la institucionalidad democrática y del derecho a la vida.

Más importantes aún son las medidas que las fuerzas armadas han tomado para expandir sus relaciones con la sociedad civil. Ejemplo de ello es la celebración anual de una “fiesta de la reconciliación” en alguna de las tantas bases militares existentes en el país. El alter ego en estas fiestas son las cofradías indígenas, en particular aquella que rige en el lugar en donde se encuentra la base que hace la celebración. Pero al parecer la apuesta del ejército, de los veteranos de la guerra contrainsurgente que temen perder la impunidad, y del gobierno actual que pretende la continuidad, está en la estructura organizativa de lo que fueron las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).

Éstas fueron instauradas desde las postrimerías del gobierno de Lucas García (1978-1982), cuando alcanzaron la cifra de 12 mil efectivos. Sin embargo, fue durante el gobierno de Ríos Montt (1982-1983) que adquirieron envergadura de masas, para llegar a sumar en el gobierno de Mejía Vítores (1983-1986) la cifra de un millón de personas (Figueroa Ibarra, 1991: 235-236). Con los acuerdos de paz, las PAC formalmente desaparecieron. No obstante, se mantuvo y se mantiene la red organizativa sustentada en lealtades hacia jefes militares y la institución militar, los privilegios hacia los más beligerantes participantes de las patrullas, y el control del poder local por parte de ellos.

Hoy las PAC se han convertido en un dispositivo que según cálculos conservadores agrupa a 350 mil personas y que ha sido usado electoralmente en diversas oportunidades: en un plebiscito para rechazar las reformas que hubieran expresado en la Constitución la esencia de los acuerdos de paz, y en las pasadas elecciones presidenciales. Hoy el gobierno ha legitimado su actuación al convertirlas en el vehículo para negociar resarcimientos por los efectos que en ellas ocasionó el conflicto interno. En otras palabras, con la ayuda del ejército, el gobierno ha institucionalizado el clientelismo y la mediación prebendal con fines electorales.

El gobierno de Alfonso Portillo ha beneficiado a las fuerzas armadas en términos presupuestarios. La Misión de Verificación de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), en un informe de mayo de 2002, denunció que el ejército guatemalteco mantiene un control territorial y poblacional correspondiente a los tiempos de la lucha contrainsurgente, y que los gastos militares han sobrepasado el límite del porcentaje del PIB establecido en los Acuerdos de Paz. Similares denuncias hizo la diputada de oposición Nineth Montenegro cuando afirmó que el número de efectivos del ejército aumentó en vez de disminuir tal como lo estipulan los Acuerdos de Paz, y que el presupuesto del ejército creció en 2001 a 1.148 millones de quetzales (unos 150 millones de dólares) a través de transferencias que afectan, entre otros, a los presupuestos de los ministerios de Salud y Agricultura. Lo mismo ha venido ocurriendo en el año 2002, en que si bien el presupuesto militar creció a 1.188 millones de quetzales, ha seguido aumentando constantemente en virtud de las transferencias (Meoño, 2002).

EL RETORNO DEL CENTAURO

Durante el período en que el general Efraín Ríos Montt ocupó la presidencia de Guatemala (1982-1983), la contrainsurgencia dio un vuelco significativo. El genocidio en campos y ciudades fue acompañado de un discurso reformista y de enfrentamiento con la cúspide de la clase dominante guatemalteca. Pareciera que el gobierno de Ríos Montt recordaba lo planteado por Maquiavelo: que el príncipe debería ser como un centauro, mitad bestia, mitad humano⁵.

El proyecto de Ríos Montt contempló el uso despiadado de la violencia combinado con

medidas que expandieran al Estado en el seno de la sociedad civil. El uso del protestantismo reaccionario, la creación de una central sindical oficialista, los planes de creación de un partido político de lenguaje populista y la expansión de las Patrullas de Autodefensa Civil formaron parte de los dispositivos pensados en aquel momento para lograr tales fines. Pero este proyecto se vio frustrado con su derrocamiento en agosto de 1983.

Hoy el general Ríos Montt ha vuelto, y su proyecto está en marcha: el terror despunta de nuevo, su partido –el Frente Republicano Guatemalteco– controla los tres poderes del Estado y mueve porciones significativas del electorado, la fraseología antioligárquica y populista es una constante, una fracción emergente del capital con fronteras difusas con el poder invisible sustenta dicho discurso, y las Patrullas de Autodefensa Civil vuelven a expandirse en buena parte del territorio nacional.

¿Acaso presenciamos el retorno del centauro?

BIBLIOGRAFÍA

Caycedo Turriago, Jaime 2001 “Una guerra social de la globalización”, en Estrada Álvarez, Jairo Plan Colombia. Ensayos Críticos (Bogotá: Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional de Colombia).

Dammert, Lucía 2001 Violencia criminal en la Argentina de los '90. Diagnósticos y desafíos (Washington DC) 6 a 8 Septiembre. Ponencia presentada en Latin American Studies Association (LASA).

Dinges, John 1990 Our man in Panama. The shrewd rise and brutal fall of Manuel Noriega (Random House).

Estrada Álvarez, Jairo 2001 “Elementos de economía política”, en Estrada Álvarez, Jairo Plan Colombia. Ensayos Críticos (Bogotá: Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Nacional de Colombia).

Figueroa Ibarra, Carlos 1991 El recurso del miedo. Ensayo sobre Estado y terror en Guatemala (San José, Costa Rica: Editorial Universitaria Centroamericana-EDUCA).

FLACSO-IICA 1991 Centroamérica en cifras (San José, Costa Rica).

Guatemaltecos de Verdad 2002 ¡A los enemigos de la patria! (Guatemala) Junio, mimeo.

IJJ/URL Instituto de Investigaciones Jurídicas/Universidad Rafael Landívar 2000 Una aproximación a la “barbarie” de los linchamientos en Guatemala (Guatemala) Julio.

Leffert, Mike 1997 “Guatemala: el narcotráfico y el ejército de posguerra”, en AA.VV. Centroamérica, gobernabilidad y narcotráfico (Guatemala CA: Transnational Institute y Fundación Henrich Boll)

Meoño, Gustavo 2002 Fractura en la transición (Fundación Rigoberta Menchú Tum) 31 de agosto, mimeo.

Palma Ramos, Dañillo A. (s/f) La violencia delincencial en Guatemala: un enfoque coyuntural (Guatemala CA: Universidad Rafael Landívar, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales).

Rocha García, Ricardo 2001 Narcotráfico y la economía de Colombia: una mirada a las políticas (Colombia) mimeo.

Romero Salazar, Alexis 2001 La vigilancia privada informal: una respuesta de las clases media a la violencia delincencial (Antigua Guatemala) 29 de octubre-2 de noviembre. Ponencia presentada en el XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS).

Valdes, Alberto y Tom Wiems s/f Pobreza rural en América Latina y el Caribe Vela, Manolo 2001 Guatemala: democratización y servicios de inteligencia (Antigua Guatemala) 29 de octubre-2 de noviembre. Ponencia presentada en el XXIII Congreso ALAS.

La Jornada 1999 (México DF) 15 de septiembre: 80.

NOTAS

* Sociólogo de origen guatemalteco. Profesor investigador en el Postgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

1 Los datos sobre pobreza que se ha mencionado en este epígrafe pueden encontrarse en las siguientes fuentes: La Prensa on the Web ; La Bolsa.com ; Alberto Valdes y Tom Wiems Pobreza Rural en América Latina y el Caribe ; INFOCOM .

2 He aquí los motivos por los cuales el analista colombiano Jaime Caycedo Zurriago (2001: 189) aventura la categoría de narcocapitalismo.

3 Información proporcionada al autor por un asesor del Ministerio de Gobernación del Gobierno de Guatemala (julio de 2002).

4 Un ejemplo conspicuo de estos textos aterrizantes es el difundido a mediados de 2002. Guatemaltecos de Verdad (2002).

5 El autor ha ensayado la metáfora maquiaveliana del centauro para el análisis del proyecto de Ríos Montt en Figueroa Ibarra, 1991: Cap. V).

El Plan Dignidad y el militarismo en Bolivia. El caso del Trópico de Cochabamba

Fernando Salazar Ortuño*

INTRODUCCIÓN

El presente artículo pretende hacer una reflexión en torno a la participación militar en la problemática de erradicación de cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba-Bolivia, la cual responde a las condicionantes y presión de intereses norteamericanos, cuyo concepto de intervención es el de generar una “guerra de baja intensidad” que se traduce en una participación militar directa en la problemática de la “producción de coca y desarrollo de la región”. El resultado de esta política se traduce en la estigmatización y tipificación de los productores de coca como narcotraficantes, narcoguerrilleros y narcoterroristas, contra quienes se arremeten acciones inhumanas y violentas -asesinatos, torturas, secuestros- que violan todos los derechos humanos y garantías constitucionales de hombres, mujeres y niños campesinos del Chapare. Estos hechos quedan en la impunidad.

Es importante también resaltar la extensión de esta práctica autoritaria del “neo-militarismo” en la democracia formal de Bolivia, que es cada vez más extensa en contra de las protestas y movimientos sociales, y cuyo fin es imponer por la fuerza políticas públicas condicionantes del gobierno norteamericano, transnacionales, de intereses privados y de grupos de corrupción. En todos estos casos la impunidad también reina entre los que ordenan y los que ejercen la violencia, llevándonos a un serio riesgo de institucionalizar una cultura política de militarización en contra de organizaciones sociales de sociedad civil, lo cual daría como resultado la configuración de un nuevo sistema político de gobierno, que es el de la democracia formal militarizada en Bolivia.

ANTECEDENTES

La penalización de cultivos de coca y su consumo tiene origen en diversas resoluciones de organismos multilaterales que fueron influenciadas en gran medida por intereses de Estados Unidos, que condicionaba su apoyo financiero -certificación¹- al cumplimiento de una política de estado que consistía en la erradicación y sustitución de los cultivos de coca de Bolivia, lo cual en términos operativos implicaba tomar una opción militar para enfrentar una guerra contra los campesinos productores de coca en dicho país.

En gran medida los dictámenes norteamericanos sobre erradicación de coca fueron tomados como vanguardia en el período de dictaduras militares (1971-1982) que emprendieron una lucha contra los campesinos productores de coca a través de tareas de fiscalización de la producción e interdicción² (Poveda et al., 1991).

Los resultados de las dictaduras trajeron consigo uno de los episodios más sangrientos de la historia, caracterizado por la represión brutal contra las organizaciones sociales a través de grupos paramilitares y militares, como el de la nefasta Operación Cóndor (Mesa et al., 2001), los “novios de la muerte” dirigidos por Klaus Altman Barbie, las “águilas negras”, y otros, los cuales también llegaron a formar parte de mafias y carteles de narcotráfico en Bolivia (Morato Morales, 1987) que financiaron incluso el golpe militar de 1980 (Echazú Albarado, 1988), llegaron a ser protegidos por el propio poder ejecutivo (Mesa et al., 2001: 729) e incorporando a altas esferas militares³ que pasaban desde el mismo presidente, ministros y muchos de la jerarquía castrense (Aguilo, 1991).

Con el retorno de la democracia en 1982, el país se encontraba prácticamente en bancarrota y en proceso de hiperinflación, al mismo tiempo que continuaban operando mafias del

narcotráfico con participación en altas esferas de poder político, militar y policial. Nuevamente la presión norteamericana pudo más que la soberanía nacional y el diálogo, aplicándose políticas que tendían cada vez más hacia la militarización en la guerra contra la coca. La “opción militar” se inicia en agosto de 1984, mediante la participación de quinientos efectivos del ejército nacional, para destruir laboratorios de producción de cocaína y arrestar narcotraficantes (Painter, 1994: 91-113). Para julio de 1986 se da una presencia militar norteamericana directa en operativos mediante la acción Blast Frunce con 160 marines norteamericanos, equipados con seis helicópteros, que condujeron campañas contra operaciones de narcotraficantes durante tres meses (Ibidem).

Un siguiente paso fue la aprobación del documento Santa Fe II entre países productores de coca y Estados Unidos, en el que se define una estrategia para América Latina en la década del noventa ante los tres peligros fundamentales identificados, la subversión comunista, el terrorismo y el narcotráfico, por la cual el gobierno estadounidense propone la implementación de un programa que estimule la sustitución de coca (13 de agosto de 1988). Este programa sería el Anexo II (9 de mayo de 1990) que definía el apoyo económico de Estados Unidos de 33,23 millones de dólares a las Fuerzas Armadas de Bolivia, para la gestión 1990, destinado a operaciones antidrogas⁴.

La implementación de la militarización se daría en abril de 1991, cuando el ejército norteamericano envió 56 instructores militares para iniciar un curso de entrenamiento de diez semanas para 500 miembros del Batallón Manchego en Montero. En octubre de ese mismo año, otros 50 consejeros norteamericanos arribaron al país para entrenar durante doce semanas al Batallón Jordán de Riberalta, con cerca de 400 miembros. El entrenamiento consistía en acción de “conflictos de baja intensidad” y “contra el tráfico de drogas”. En otras palabras, era dirigido a una guerra de baja intensidad a ser aplicada en contra de las organizaciones de productores de coca del Trópico de Cochabamba.

La opción militar asumida por Estados Unidos y los gobiernos democráticos generó casos de continuidad de prácticas de las dictaduras y su relación con el narcotráfico, como el descubrimiento de la fábrica de cocaína más grande encontrada en Huanchaca (5 de septiembre de 1986), cuya investigación quedó interrumpida en el parlamento pese al asesinato de un diputado, Edmundo Salazar, que investigaba el caso. Posteriormente se denunciaría que Huanchaca financiaba los operativos de los Contras en Nicaragua que luchaban contra el gobierno sandinista (Rodas Morales, 1996). Años más tarde se presentarían otros escándalos políticos que demostraban la directa conexión de algunos políticos de élite de partidos gobernantes involucrados con el narcotráfico, como es el caso del “narcoavión” que involucraba a dirigentes del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), luego surgirían los “narcovideos” (1988) que comprometían a dirigentes de Acción Democrática Nacionalista (ADN), y finalmente se dio la crisis de los “narcovínculos” que vinculaban al ex presidente Jaime Paz Zamora y altos dirigentes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) (Del Granado, 1994[a]; [b]).

En síntesis, la doble moral norteamericana en el tratamiento del tema de drogas, así como el retorno del militarismo en el tema de erradicación de cultivos de coca y lucha contra el narcotráfico, era sujeta a críticas y rechazo, ya que se veían los hechos de impunidad de la mafia militar y la participación de algunas altas esferas de la clase política con el narcotráfico. Por tanto, los mecanismos de represión militar contra los productores de coca constituían también un peligro para la propia democracia y los movimientos y organizaciones sociales que denunciaban actos de corrupción, negociados y prebendas, ya que la militarización contra la coca también podía extenderse a otros espacios sociales. Sin embargo, el fundamentalismo norteamericano de imponer la fuerza militar frente al debate democrático fue el que se impuso (WOLA, 1992).

EL PLAN DIGNIDAD Y EL MILITARISMO EN BOLIVIA (1997-2002)

La presencia y el accionar militar en gobiernos democráticos tienen su máxima expresión en el gobierno democrático del ex dictador Hugo Bánzer Suárez (1997-2002), que llegan al poder en alianza de una mega-coalición de ocho partidos políticos, cuyo gobierno se caracteriza por la carencia de un programa de gobierno, recesión económica, corrupción y violación extrema de los derechos humanos mediante el uso ampliado de la militarización contra las protestas, movimientos sociales y los productores de coca en el Chapare.

En cuanto a su política de erradicación de cultivos de coca, se implementó la estrategia boliviana de lucha contra el narcotráfico conocida como Plan Dignidad (Ministerio Nacional de Defensa, 1999[a]; [b])⁵. Este plan consta de cuatro pilares: prevención, desarrollo alternativo, interdicción y erradicación de plantaciones ilegales de coca excedentarias –38.000 has (Id, 1999[b]: 10). Para su implementación se conformó el Concejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALID) que bajo dirección de la Presidencia de la República incluía a los ministerios de Gobierno (policía), Finanzas, Defensa Nacional (fuerzas armadas), Agricultura (ganadería y desarrollo rural) y Salud. En síntesis, se tenía comprometido a todo el aparato estatal en la ejecución de este plan, cuya tarea central de erradicación recaería en el Ministerio de Agricultura.

Para este fin se fijó un presupuesto de 900 millones de dólares⁶ destinados a la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) (Id, 1999[b]) que estaría integrada por el ejército, la fuerza aérea, la armada, los cuerpos de élite de la policía Unidad Móvil para el Patrullaje Rural “Leopardos” (UMOPRA) y policía ecológica, y reforzada además con una fuerza militar de mercenarios denominada Fuerza Expedicionaria. Toda esta fuerza militar contaba con la participación directa de asesores y agregados militares responsables de la planificación, entrenamiento, supervisión y fiscalización de la “guerra contra la coca”. En términos operativos, el Plan Dignidad consideraba en términos de propuesta: la construcción de un cuartel para la FTC (para 2.160 hombres) y ampliación de centro responsable de la erradicación de coca DIRECO⁷ con un costo de 1.620.000 dólares (Id, 1999[b]: 17); equipamiento de DIRECO, UNAGRODI y UNICARDI, y acceso a sistema de información digital y satelital, con un presupuesto de 1.980.000 dólares (Id, 1999[b]: 17-18); difusión de información acerca de los beneficios de la erradicación con 800 mil dólares; transporte, combustible, alimentación, equipamiento militar a la FTC, con 89,54 millones de dólares (Id, 1999[b]: 21- 23); compensación comunitaria a ser implementada de 1999 a 2001, con un presupuesto de 26,70 millones de dólares (Id, 1999[b]: 22).

IMPLEMENTACIÓN MILITAR DEL PLAN DIGNIDAD

Los datos presentados a continuación corresponden al accionar militar en el cumplimiento de las metas del Plan Dignidad, cuyas fuentes de información se basan en un análisis de documentación oficial⁸, revisión hemerográfica, entrevistados que pidieron no ser identificados, y observación en el área de acción. Intentando mantener la lógica de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), a continuación se presentará un análisis de su justificación, doctrina y modus operandi en las tareas de erradicación de cultivos de coca⁹.

JUSTIFICACIÓN

Para las FTC, su accionar se basa en los siguientes criterios de justificación.

1988	El combate al narcotráfico
1988	Colombianización Evitar que el narcotráfico incorpore a campesinos productores de coca, lo cual nos convertiría en una Colombia
1989	Coca no es cocaína y narcovínculos
1994	Certificación, espada de Damocles
1994	Erradicación forzosa
1996	Emboscada a UMOPAR

Consigna de “coca o muerte”, y amenaza de que el Chapare será una nueva versión de Chiapas.

1997Comités de Autodefensa - Formación político sindical - Movimiento andino

Advierten también entre sus antecedentes que es un error considerar que coca no es cocaína, y quienes no están de acuerdo son personas que defienden el narcotráfico y a los narcotraficantes -como por ejemplo activistas defensores de los derechos humanos¹⁰, dirigentes, políticos...- y por tanto son también enemigos que tienen intereses personales que pueden estar vinculados en casos de narcotráfico, como fue el caso de los involucrados en narcovínculos. Sin embargo, no mencionan ni hacen referencia a la participación de las dictaduras militares en temas de narcotráfico. Por el contrario, identifican prácticamente a todas las organizaciones civiles como enemigos contra quienes se tiene que dar una lucha a “cualquier costo”.

MARCO JURÍDICO PARA LA CREACIÓN DE LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA (FTC)

“Los efectivos de las FF.AA. integrantes de la FTC, durante el cumplimiento de las operaciones asignadas, se encontraban amparados bajo los instrumentos Jurídicos Legales, como la Constitución Política del Estado en su Art. 208 concordante con la Ley Orgánica de las FF.AA., en su Art. 8, Art. 15 y Art. 57 inc. g, h, j, Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Peligrosas (1008) en el Título VI Art. 133, 134 Y 135; el Anexo 3 (actualmente sección ‘C’). No obstante, la Constitución Política del Estado primero garantiza el respeto a los derechos humanos, y no reconoce ninguna fuerza armada irregular (500 soldados mercenarios de la Fuerza de Expedicionarios bajo mando de oficiales de la Narcotic Agency Section [NAS] de los Estados Unidos). Como tampoco en la Ley 1008, se menciona la erradicación forzosa; sólo la erradicación compensada y paralela a la sustitución de la economía de la coca por productos que den similar o mayor rendimiento que el cultivo de coca.

PLAN CERO

“En fecha 2 de abril de 1998, el Ejército pone en ejecución el PLAN ‘CERO’; se organiza la Fuerza de Tarea Conjunta al mando del Cmte. de la Séptima División, para encarar las operaciones de erradicación de los cultivos de hoja de coca; con un Estado Mayor”. El marco de operación de la FTC es el Plan Cero definido por el gobierno y la embajada norteamericana, siendo el rol de la FTC el de erradicar los cultivos de hoja de coca en el Trópico de Cochabamba, sin ningún tipo de diferenciación. Para ello cuenta con un Comandante y Estado Mayor específico.

CREACIÓN Y FUNCIONES DE LA FTC

“Las directivas del COMANDO EN JEFE N° 32/98 del 201200-NOV-98 Dispone: Crear una FTC en el CHAPARE, con un Estado Mayor Coordinador en los campos de interés,

conformado por OO.SUP. y SUB del Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval, integrada además por miembros de la Policía Nacional, con vinculación directa al COMANDO EN JEFE, COMANDOS DE FUERZA y EL DPTO. III EMC., DEL EJERCITO, a través del CENTRO DE OPERACIONES TÁCTICAS DEL EJERCITO (COTE)”.

El 20 de noviembre de 1998 se crea la FTC, conformada por oficiales superiores, suboficiales, soldados y policías del ejército, fuerza aérea, fuerza naval y policía nacional, siendo las funciones específicas el crear y adaptar operaciones tácticas para erradicación y demandar requerimientos de apoyo logístico, todas sujetas a un comando de mando.

Como incentivo a la tropa de las FTC se dio una calificación de servicio en frontera y a la asignación de un bono extra pagado por la NAS norteamericana, de 840 Bs. para instructores (140 USD), 600 Bs. (100 USD) para soldados, y 600 Bs. (100 USD) para policías. El monto de incentivo que implica este plus alcanza anualmente a 3.271.520 dólares aproximadamente.

PERSONAL

Sobre la cantidad de efectivos total participantes en la FTC, ésta alcanzó a un número variable compuesto desde 2.600 hombres hasta 1.72911. No contamos con acceso del número exacto de efectivos en 2001 y 2002, pero en general podemos decir que entre personal nacional y norteamericano involucrado en las operaciones y apoyo logístico (consejeros, administradores, servicios alimentación) el número superó los 3 mil hombres en acción.

PERSONAL EXTRANJERO

El Plan Renacer, ejecutado por la FTC en su misión de erradicación de cultivos de coca, contó también con personal de apoyo civil y militar del ejército de Estados Unidos, cuyo alcance fue el siguiente: “En forma trimestral en las gestiones 1999 y 2000 se recibió el apoyo de equipos del 7mo. Grupo de FF.EE. de los EE.UU. de Norteamérica. El número de personal extranjero que apoyó a la FTC fue variable de 7 a 10 personas y de un modo general de las siguientes especialidades: paramédicos, explosivos, armeros, franco tiradores y comunicaciones”. Se debe destacar que la capacitación de miembros de la FTC en temas de explosivos y especialización de unidades especiales de francotiradores es permanente, y resulta revelador que una de las principales tareas del personal militar norteamericano que tiene su base en el Trópico de Cochabamba es ser responsable de estos rubros.

DOCTRINA MILITAR CONTRA LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS

Para la lógica militar de la FTC la organización sindical campesina de productores del Chapare es mala y delictiva, siendo un fin complementario al de la erradicación el acabar con el sindicalismo. De ello se desprende la actitud inhumana de represión que se tiene contra todo dirigente campesino de los productores de coca, ya que se les ve como a los culpables del narcotráfico y la situación de violencia en contra del país.

“Al organizarse la FTC el 2 de abril de 1998, empezó la erradicación con una serie de incidentes derivados de la oposición de los campesinos aleccionados por sus dirigentes cocaleros, quienes velando por sus intereses y alentados por el narcotráfico, buscaron el enfrentamiento con las fuerzas militares y policiales, con el consiguiente resultado de muertos y heridos...”.

Acusan a los dirigentes de los productores de coca como responsable directos de las muertes de los campesinos, ya que ellos serían quienes los engañan y obligan a cometer delitos.

APOYO LOGÍSTICO

La dotación de infraestructura y apoyo logístico se encuentra a cargo de la NAS norteamericana y del gobierno, de acuerdo a convenios bilaterales que tuvieron una asignación aproximada por año de 7.011.494 dólares distribuidos entre vehículos, combustible, horas de vuelo de helicópteros, uniformes, tiendas de campaña, equipo personal, atención médica y medicamentos, botas y misceláneas (Ministerio Nacional de Defensa, 1999[b]: 30).

ACCIÓN CÍVICA

Otro de los puntos donde vale la pena detenerse es las tareas de “acción cívica” que cumplen las FF.AA. en el Trópico, y recientemente también las unidades de la Policía Nacional. El concepto de acción cívica repite los principios de “balas y arroz” del Vietnam o “rifles y frijoles” de las dictaduras militares que existieron en Latinoamérica, mediante el cual las fuerzas de operación primero bombardean o disparan a la población civil, y luego la socorren con alimentos. Algunas características de las tareas de acción cívica aplicadas en el Trópico de Cochabamba se enumeran a continuación.

Recolección de información

“... que los equipos de trabajos antes de iniciar las operaciones de acción cívica buscarán informaciones referidas a: organizaciones sindicales de la región, grupos de activistas, personalidades importantes en la zona, tráfico de armas y explosivos, actitud de los pobladores de la región, presencia de agitadores de dudosa actividad”.

La recolección de información que se realiza durante las tareas de acción cívica es pieza clave de acceso a datos que luego serán utilizados en contra de la propia organización, dirigentes y personas influyentes de la población.

Obras comunitarias

Entre las obras comunitarias están los trabajos de ripiado y limpieza de caminos vecinales, parques, plazas y escuelas. Respecto de los trabajos de salud, se realizan campañas de vacunación, atención odontológica y médica, así como distribución de ropas y vituallas en algunas poblaciones inundadas. Se da prioridad también al trabajo en las escuelas, ya que como afirma la experiencia de acción cívica “a los niños se les conquista con una pastilla”, y mediante ello son objeto de fácil de acceso a información.

INTELIGENCIA

En cuanto a la concepción de servicios de inteligencia que implementó la FTC en el Trópico de Cochabamba, convierten a la región en un centro de guerra combinado una guerra de baja intensidad con una guerra psicológica. El objetivo de esta tarea es la identificación y seguimiento de dirigentes y personas que apoyan a las organizaciones de productores de coca, así como a su desplazamiento, acoso e incluso eliminación¹².

Poco o nada se tiene escrito sobre el alcance de las redes de inteligencia montadas por la FTC en el Trópico de Cochabamba, pero es evidente que existen dos grandes centros de operación, uno dirigido directamente por fuentes de la NAS, DEA y CIA norteamericanas, y el otro por instancias de la FTC. En ambos casos el modus operandi consiste en: infiltrar a sus agentes en organizaciones de productores de coca; incorporar a informantes en algunas localidades priorizadas por las agencias, pudiendo ser estos dirigentes menores, comerciantes, profesores u otros; hacer seguimiento a los medios de comunicación local, departamental y nacional; enviar periodistas contratados por las agencias a entrevistar dirigentes y visitar las zonas; enviar a estudiantes o investigadores de la universidad o centros de investigación a zonas de prioridad de las agencias; recopilar información mediante envío de su personal a reuniones de

organizaciones de campesinos; incorporación de pobladores que tienen procesos con la ley (narcotráfico u otros) mediante dotación de libertad a cambio de información; torturar a pobladores y dirigentes detenidos y secuestrados; recopilar información mediante técnicos que trabajan en agencias de desarrollo alternativo (esto es ampliamente denunciado por las organizaciones campesinas).

El uso de la información es por demás útil en cuanto a prevención y acciones que realizan las FTC en su tarea de erradicación, acción cívica, prevenir bloqueos de caminos y hacer un seguimiento de las actividades sindicales.

Desarrollo Alternativo

Las FTC cuestionan a los programas de desarrollo alternativo, considerando que “El fracaso del desarrollo alternativo ha sido la corrupción, el gobierno debe eliminar este mal sancionando a los responsables, asimismo debe buscar ayuda Internacional para invertir en el desarrollo alternativo y reactivar la economía del CHAPARE creando industrias con fines de exportación, liberados de impuestos, buscar mercados, fomentar la ganadería, la agricultura y toda inversión en esta zona, asimismo debe construir caminos, escuelas, hospitales etc. La 9na Div. debe coadyuvar en el desarrollo de la región, capacitando a los soldados del trópico sobre el desarrollo alternativo, realizando operaciones psicológicas para cambiar la mentalidad de los chapareños”.

A claras luces, la FTC demuestra la posición militar de ampliar sus funciones hacia actividades de desarrollo, resultando incoherente y contradictorio pretender dar formación a los soldados que reprimen en el Chapare para que ellos sean los agentes de cambio.

CONCLUSIONES

Tras un recorrido por las últimas dos décadas de la participación militar en el tema de erradicación de cultivos de coca, considero que quedan muchos más vacíos que respuestas sobre el real alcance de esta participación. Sin embargo, considero que, al margen de tener una claridad del contexto político y social internacional y nacional que hace al tema, es importante realizar un análisis del accionar concreto desde la propia visión militar, siguiendo su lógica, doctrina ideológica y operaciones.

Asimismo, me atrevo a concluir que la democracia boliviana, caracterizada como gobierno unitario representativo, no es más que una democracia cargada por prácticas personalistas, verticales y muchas veces autoritarias, la cual somete para sus fines -aplicación de sus planes y propuestas- al poder legislativo mediante pactos políticos que reducen el debate parlamentario al cuoteo y accionar de levantar la mano y aplicar un rodillo del oficialismo, y al poder judicial mediante el cuoteo de magistrados que actúan en función a dictámenes de sus partidos y del oficialismo. Resulta también evidente que, frente a las voces contestatarias de sectores y organizaciones sociales, se institucionalizó la aplicación de la violencia de las fuerzas armadas, vale decir, su uso para acallar a o acabar con los enemigos internos de los gobiernos.

El accionar de las fuerzas armadas en los conflictos sociales significa en realidad la militarización contra los movimientos sociales, vale decir el retorno de las prácticas militares de los años de dictadura -asesinatos, violaciones, torturas, persecuciones, desapariciones, control y vigilancia, intimidación- que toman nuevamente cuerpo en plena democracia. Y lo más grave es que éstas son encubiertas, justificadas e incluso aplaudidas por muchos niveles y poderes del estado, resultando así una permisibilidad del accionar del militarismo contra los propios principios de la democracia, lo cual implica en la práctica el surgimiento de espacios de cogobierno democrático-militar, o dicho de otra manera, el surgimiento de un cogobierno entre las autoridades democráticas y el militarismo que hoy por hoy controlan el aparato estatal en beneficio de una élite política, militar y de intereses financieros transnacionales que hacen al neo-corporativismo.

Por otro lado, resulta también muy preocupante la actitud de complacencia o indiferencia de organismos multilaterales respecto de esta práctica democrática-militarizada. La cual tiende en muchos casos a legitimizar hechos de violencia militar contra la población civil (OEA en el caso de Amayapanpa y Capasirca, Guerra del Agua, Febrero Negro de 2003) y que en definitiva va en contra de todo principio internacional de defensa de los derechos humanos. Sin embargo, cabe manifestar que pese al intento de imposición de un nuevo tipo de militarismo la sociedad civil viene también generando nuevas perspectivas contestatarias que disputan espacios de poder local (municipal), regional (departamentos) y nacional (parlamento). Tal es el caso del éxito del partido de los productores de coca del Trópico de Cochabamba, Movimiento al Socialismo (MAS), que logró aglutinar a otras organizaciones campesinas y sectores urbanos del país para ocupar un segundo lugar en las elecciones nacionales de 2002 (Molina, 2002).

En esta dinámica de accionar tradicional de la política (democrática-militar) y las aspiraciones de los movimientos sociales (cocaleros, campesinos sin tierra, pueblos indígenas, desocupados, prestatarios, etc.) se tiende a una salida que implique una redefinición de prácticas de hechura política a través de diálogos y concertaciones que reencaucen los instrumentos democráticos, o en caso extremo se tiende a una eliminación de las conquistas democráticas y de la democracia en sí a favor de un resurgimiento encubierto y directo del militarismo en Bolivia a través de un nuevo sistema de gobierno cual es el militarista-democrático.

BIBLIOGRAFÍA

Aguilo, Federico 1993 Nunca más para Bolivia (Cochabamba: Colorgraf Rodríguez/APDHB-IESE/UMSS) 384.

Aguilo, Federico 1991 "Militarización: imposición exterior y fracaso interior", en Pueblo y Cultura (Cochabamba) N° 289, 28 de marzo, 14-15.

Cortez, Roger 1987 "Para una propuesta nacional sobre la coca y el coca-tráfico", en Comité Cívico de Cochabamba Foro nacional sobre la problemática coca-cocaína (Cochabamba: Aron).

Del Granado, Juan 1994[a] Contra la corrupción y la impunidad, caso narcovíncuos (La Paz).

Del Granado, Juan 1994[b] Vinculación de dirigentes del MIR con el narcotráfico (La Paz) Informe dictamen a la Honorable Cámara de Diputados.

Echazú Albarado, Jorge 1988 El militarismo boliviano, la anti-historia de Bolivia (La Paz: s.e.).

Fuerza de Tarea Conjunta 2002 Trabajamos por la dignidad de Bolivia y por la salud del mundo (La Paz) N° 1.

LAB-Latin America Bureau 1985 Narcotráfico y política II. Bolivia 1982-1985 (Madrid: LAB-iepala).

LAB-Latin America Bureau 1982 Narcotráfico y política. Militarismo y mafia en Bolivia (Madrid: LAB-iepala).

Llorente S., Scha 1999 El silencio es cómplice, los derechos humanos en el Trópico de Cochabamba y la guerra contra las drogas (La Paz: Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo).

Mesa et al. 2001 Historia de Bolivia (La Paz: Gisbert).

Ministerio Nacional de Defensa 1999[a] Dignity plan, technical sectorial document: alternative development, bolivian strategy for the fight against drug traffic 1998-2002 (La Paz: EDOBOL).

Ministerio Nacional de Defensa 1999[b] Dignity plan, technical sectorial document: reduction and eradication, bolivian strategy for the fight against drug traffic 1998-2002 (La Paz: EDOBOL).

Molina, Fernando 2002 El misterioso voto, en Cuarto Poder (Cochabamba) N° 64, 7-23. Lo que aprendimos de las elecciones 2002.

Morato Morales, Johnny 1987 "Propuesta sobre la coca-cocaína del Partido Socialista 1", en Comité Cívico de Cochabamba Foro nacional sobre la problemática coca-cocaína (Cochabamba: Aron).

Oporto Ordoñez, Víctor 2002 Triunfo de los vilipendiados (La Paz: Ediciones Centro de Investigaciones de Trabajo Social).

Painter, James 1994 "Bolivia & coca, a study in dependency", in Studies on the impact of the illegal drug trade (London: V. I. LaMond Tullis Series Editor).

Poveda et al. 1991 Militarización y narcotráfico (Cochabamba) Recopilación de documentos. Rodas Morales, Hugo 1996 Huanchaca, modelo político-empresarial de la cocaína en Bolivia (La Paz: Plural).

Sabat Lara, Federico 1992 "El Chapare, un polvorín que puede estallar en cualquier momento", en Opinión (Cochabamba) 13 de junio, 5.

Schneider, Patricio 1998 "Ejército contra cocaleros: vientos de guerra en el Chapare", en Brecha (Montevideo) N° 650, 15 de mayo.

Soberon Garrida, Ricardo 1997 "Corrupción, narcotráfico y fuerzas armadas: una aproximación para América Latina", en Crimen uniformado, entre la corrupción y la impunidad (Cochabamba: Acción Andina-CEDIB) 1-11. Serie de Documentos Narcotráfico y Democracia.

Unidad de Policía Ecológica 2002 Unidad de policía ecológica, 1995-2001. Policía nacional, dirección nacional de la policía forestal y preservación del medio ambiente (Cochabamba: Poligráf).

Vadillo, Alcides 1991 Militarización de la lucha contra el narcotráfico", en Tupambaé (Santa Cruz) N° 115, 22 de septiembre, 20-21.

WOLA-Washington Office on Latin America 1992 A fundamental y flawed strategy: The U.S. "war on drugs" in Bolivia (Washington: WOLA) 18 de septiembre.

NOTAS

* Sociólogo, investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos (IESE), Universidad Mayor de San Simón (UMSS) Cochabamba-Bolivia.

1 Ley Pública de los Estados Unidos 99 570, del 27 de septiembre de 1986.

2 Decreto Supremo N° 11.245 Ley de Sustancias Peligrosas del 20 de diciembre de 1973.

3 Una amplia lista de jefes militares involucrados en narcotráfico es presentada en LAB-iepala (1982; 1985).

4 Resaltar que en 1989 la asistencia económica de Estados Unidos para el ejército fue de 5,8 millones, vale decir que para 1990 se incrementó este presupuesto seis veces más (Painter, 1994).

5 Decreto Supremo N° 24.963 del 20 de febrero de 1998.

6 Se contemplan además otros 160 millones de dólares, destinados a la implementación de programas de desarrollo alternativo. Estos montos fueron cubiertos en gran parte por Estados Unidos con aportes de contraparte del gobierno boliviano.

7 Dirección de Reconversión de la Coca (DIRECO), que cuenta con un brazo agronómico, Unidad Agrícola de DIRECO (UNAGRODI) y un brazo cartográfico, Unidad de Cartografía de DIRECO UNICARDI) dependiente del Ministerio de Agricultura.

8 Una de estas fuentes es la revista de la Fuerza de Tarea Conjunta Trabajamos por la dignidad de Bolivia y por la salud del mundo (2002), único documento de difusión pública restringida que da a conocer las participación de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el Plan Dignidad.

9 Las citas entrecomilladas corresponden a copia exacta de documentos oficiales.

10 Entre los mayores defensores de derechos humanos en el Trópico de Cochabamba se encuentran la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos quienes hacen continuas denuncias sobre los asesinatos, torturas, secuestros y detenciones ilegales (Llorente S., 1999).

11 Los efectivos para las FTC por gestión fueron: 2.600 hombres en 1998, 1.990 hombres en 1999, 1.729 hombres en 2000, siendo aún desconocido el número para 2001, 2002 y 2003.

12 Fue el caso del dirigente ejecutivo de la Federación de Colonizadores de Chimoré Casimiro Huanca, que en diciembre del año 2000 fue asesinado a sangre fría por militares dentro de la sede de la Federación, y otros dirigentes heridos y flagelados, incluyendo al Alcalde, sin que a la fecha se haya podido iniciar ningún proceso ordinario.

CAPÍTULO 4

Los movimientos sociales y la protesta en Argentina

La protesta agrorrrural en la Argentina**

Norma Giarracca*

INTRODUCCIÓN

Durante la década que va de 1991 a 2001, la mayoría de las regiones de la Argentina registró una fuerte expansión de la conflictividad social. A los reclamos históricos de un “interior” postergado en la etapa “modernizadora” se sumaban las nuevas demandas originadas por la aplicación de las políticas neoliberales que restringían y anulaban derechos sociales de la población. Con algunas excepciones, que veremos más adelante, las protestas se originaron por la pérdida de derechos sociales activada por las políticas de corte neoliberal. En efecto, el rasgo más significativo de la protesta de los noventa fue el tipo de reclamo que la caracterizó. Las demandas de las miles de protestas sociales registradas en la década están fuertemente orientadas a preservar derechos sociales adquiridos durante el siglo XX (condiciones de trabajo, salarios dignos, educación pública, etc.), preservar pequeños patrimonios familiares (como en los casos de pequeños y medianos empresarios agrarios o industriales amenazados por las deudas), demandar un ingreso mínimo frente a la pérdida del trabajo remunerado (la lucha de los desocupados), etcétera. En general son protestas de “defensa” y “preservación” frente al avance de las políticas “expropiatorias” del neoliberalismo, y en muy pocas ocasiones estas acciones colectivas estuvieron relacionadas con la expansión de nuevos derechos o con la conquista de nuevos espacios políticos o ciudadanos.

Para mostrar algunos aspectos de la protesta de la década en el interior del país tomaremos el año 1999, para el que contamos con un mapa completo de las distintas regiones (respecto del resto de la década contamos con una base de datos por muestreos regionales, ver Giarracca, 2001). La base, con registros de periódicos provinciales, se construyó tomando dos criterios: que las acciones las desarrollaran sujetos agrarios (campesinos, agricultores en general, trabajadores agrarios o agroindustriales) en cualquier territorio del país incluida la Ciudad de Buenos Aires; y acciones de protesta de otros sujetos sociales en territorios de bajo nivel de urbanización, hasta las llamadas ciudades intermedias. Este último criterio se tomó sobre el supuesto de que en tales ciudades la influencia de las crisis de los sectores agrarios y extractivos tuvo consecuencias sociales de gran consideración. Estas pequeñas ciudades, además, desarrollaron muchos aspectos que las acercan a la “nueva ruralidad”. Son asentamientos de productores y mano de obra agraria, sus servicios están dirigidos al campo, etcétera.

La protesta de 1999, de carácter agrorrrural, se enmarca en la protesta nacional de toda la década y forma parte de lo que conceptualizamos como un “ciclo de protesta” (Tarrow, 1997) que finaliza con los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí comienza, a nuestro juicio, otra etapa, donde la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires son los territorios que juegan como centros de atención mientras que el interior entra en un período de transición. Tanto las nuevas condiciones de producción por la devaluación, como los nuevos discursos y prácticas políticas generados a partir del 19 y 20 de diciembre, sitúan al interior en forma diferenciada, y por ahora sólo pueden arriesgarse hipótesis al respecto.

Durante toda la década el país estuvo atravesado por una serie de protestas sociales dirigidas básicamente al Estado en sus manifestaciones nacionales, provinciales y municipales. Recordemos que a partir de 1991 se había puesto en marcha el Plan de Convertibilidad que ataba el peso nacional al dólar y que fue acompañado por la desregulación total de la economía, un proceso muy amplio de privatizaciones de las empresas públicas de servicios y de extracción de petróleo, y un fuerte proceso de flexibilización de las condiciones de trabajo. Si bien las protestas se hacen sistemáticas y se tornan de rutina en el interior, todo el territorio

nacional es el gran escenario, y la ciudad capital presencia protestas propias y recibe las ajenas como el lugar significado por el poder estatal de la Nación.

Haremos una rápida caracterización de la protesta nacional de la década en base a los datos generados por la Consultora de Investigación Social Independiente (CISI) que registró todo el período. De esos datos podemos concluir que la cantidad de “expresiones de conflictos” registrada durante toda la década sobrepasó los 1.000 anuales.

En efecto, estos datos demuestran que de 1.004 casos en 1991 se pasó al pico máximo de la década, 2.121, en 1995 (año de la reelección de Carlos Menem), siendo 1996 el año de registro más bajo, y luego se dibuja una curva ascendente hasta trepar cerca de 2.000 expresiones de protesta en los últimos años de la década. El informe nos dice que estos conflictos comenzaron con un gran peso de los gremios y sindicatos y luego fueron virando a actores sociales no agremiados (“vecinos”, “desocupados”, etc.). Las “huelgas” fueron acotadas aunque con paros generales más largos (pasaron de 24 a 48 hs). De las grandes movilizaciones se pasó a la toma de calles, puentes, rutas, caravanas de protesta, y en la década aparecieron las nuevas “formas de protesta” como “escraches”, “encadenamientos” y “actos simbólicos”. En términos gremiales, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) aparece después de 1996 como un actor importante, y el conflicto se desplaza, siempre en términos cuantitativos, del Gran Buenos Aires y Córdoba a la Capital Federal y Jujuy. Un aspecto importante del trabajo del CISI es que más del 90% de las “expresiones de conflictos” tuvo un carácter pacífico y, además, que el 93% no registra ninguna respuesta del demandado (Gonda, 2000).

LA PROTESTA EN EL INTERIOR DEL PAÍS

El interior del país sufrió las consecuencias de la política de corte neoliberal muy tempranamente. Pueblos enteros vieron cómo sus pobladores se quedaban sin trabajo por las privatizaciones de la empresa petrolera (Yacimientos Petrolíferos Fiscales). Las nuevas condiciones para la agricultura deshabilitaban la integración de la pequeña y mediana explotación agraria que había caracterizado a la agricultura argentina durante todo el siglo XX. Desaparecían pequeños productores, los medianos se endeudaban y corrían el riesgo de perder sus tierras, se cambiaba el paisaje agrario dando lugar a la producción de soja en gran escala con la introducción de las semillas transgénicas y la técnica de “siembra directa”. Comienza para el campo argentino el período en que las decisiones de producción, de las opciones tecnológicas (y por tanto los problemas de sustentabilidad y cuidado de los recursos naturales) y las divisas de exportación quedan en manos de las grandes transnacionales como Monsanto, Novartis, etc. (ver Teubal y Rodríguez, 2002).

Estas imágenes agrarias de pequeños y medianos productores arrinconados, campesinos expulsados por nuevos inversores, trabajadores rurales y semi-urbanos de pequeños poblados desocupados, coexistían con los problemas derivados del cambio de funciones del Estado nacional y el traspaso de la educación, la salud, etc. a la responsabilidad provincial o municipal. En efecto, los problemas de la educación pública, los bajos salarios pagados a los maestros, el deterioro de los presupuestos para la salud y el mantenimiento de las infraestructuras de caminos y puentes se agravaron, y llevaron a los poblados y pequeñas ciudades del interior a situaciones desconocidas por las actuales generaciones. El problema de las inundaciones en la región agraria más rica del país completó el panorama (véase *Le Monde Diplomatique*, 2001). En el interior, mientras comenzaba el incremento de la producción de cereales en todas las regiones -sobre todo la soja- reemplazando a cultivos tradicionales como las hortalizas o el algodón en manos de pequeñas y medianas explotaciones, la población empezaba a sentir las peores consecuencias del modelo neoliberal por un lado y por otro las exigencias de las transnacionales de convertir al país en un país monoprodutor de soja a gran escala. Las respuestas fueron múltiples, incluyendo formas de adaptación a las nuevas condiciones, la toma de préstamos para “ampliar escalas de producción”, la pluriactividad, nuevas formas de cooperativas, los pequeños “pool de siembra”, etcétera. Pero paralelamente a esto los distintos sectores comenzaron a manifestarse en el espacio público en una clara expresión de rechazo a esta difusa y compleja política. Así, después de paros y marchas regionales, en 1993 los pequeños y medianos productores de todo el país marcharon hacia la Ciudad de Buenos Aires

mostrando el estado en que estaba el campo que los tenía como sujetos sociales de importancia. Un año después estos sectores vuelven a marchar con todo el interior en lo que se conoció como la Marcha Federal.

Un momento muy importante para la protesta agrorural fue la aparición de las Mujeres Agropecuarias en Lucha en 1995, dando la pelea para no perder sus tierras hipotecadas por deudas contraídas algunos años atrás. La metodología de lucha fue simple: cantar el himno nacional, rezar, impedir que el acto judicial se llevara a cabo. Pararon en estos años alrededor de 500 remates, y se expandieron por todo el país. Fueron las primeras en instalar el problema del sector financiero en el país, y en los primeros años lograron simpatías de muchos sectores pero poca repercusión en los gremios de los pequeños y medianos productores como es la Federación Agraria².

En efecto, mientras los pequeños y medianos agricultores comenzaban a darse cuenta de que no tenían salida y de que no era una cuestión sólo de ellos y de sus familias, las viejas corporaciones del agro intentaban de una u otra forma mostrar que se trataba de una nueva “modernización” que requería un aumento en la escala de producción y “un esfuerzo” de los agricultores. La situación derivó en que en la Federación Agraria surgiera una corriente interna, Chacareros Federados, más cercana a las Mujeres Agropecuarias en Lucha que a la conducción de la Federación misma. Por otro lado, las grandes corporaciones, como la Sociedad Rural Argentina, entraron en los procesos de privatización de puertos y ferrocarriles como socios privilegiados del modelo.

En 1996 se realizó el primer “corte de ruta” en la provincia sureña de Neuquén, en las localidades de Cutral-Có y Plaza Huinul, lugar donde YPF había reducido su planta debido al proceso de privatizaciones. Los cortes de ruta se repitieron en 1997, cuando matan a la joven Teresa Rodríguez, de 24 años. De este conflicto derivan la protesta docente de carácter nacional conocida como “Carpa Blanca” y los cortes de ruta en las localidades de Tartagal y General Moscón, en la provincia norteña de Salta. Las luchas de estas localidades tienen un sentido muy similar a las del sur, pero se les suman otros actores sociales -trabajadores estatales, poblaciones indígenas, trabajadores rurales, etc.- y son mucho más extendidas en el tiempo. En efecto, hubo cortes de ruta en Salta en 1997, 1999, 2000, 2001 y 2002. En noviembre de 2000 los policías mataron al obrero desocupado Aníbal Verón y en 2001 murieron otras dos personas. Los desocupados obtienen planes sociales de bajos montos con los que comienzan proyectos de tipo productivos comunitarios, sin abandonar la lucha hasta el día de hoy.

Los años de elecciones nacionales fueron momentos de recrudescimientos de las protestas en general: 1995, con la reelección de Carlos Menem, fue un año pico de protestas nacionales. En octubre de 1999 hubo nuevamente elecciones presidenciales y durante todo el año se registra un gran número de protestas. Las conceptualizadas como “agrorurales” suman alrededor de 6003. El marco general que desarrollamos en estas páginas permite comprender la diversidad de actores que se reconocen en las protestas de 1999 (Cuadro 1). En efecto, podemos observar que aún cuando los productores agrarios protagonizaron la tercera parte de las acciones, se registraron desocupados, vecinos y habitantes y aborígenes junto con los trabajadores rurales y agroindustriales.

Cuadro 1
 Protestas agrorurales según sujeto de la acción en Argentina – 1999

Sujetos de la Acción	Porcentaje
Productores agrarios	32,4
Trabajadores municipales o provinciales	12,8
Vecinos y habitantes	12,5
Trabajadores rurales o de agroindustrias	10,6
Desocupados	5,8
Familiares (de reclusos, de víctimas de delitos)	4,5
Aborígenes	3,7
Otros (docentes, usuarios, reclusos, albañiles, jubilados)	17,7
TOTAL	100 (602)

Fuente: banco de datos del Grupo de Estudios Rurales.

Consecuente con esta diversidad de actores es la diversidad en los repertorios de protesta (Cuadro 2). Podemos observar que junto a las clásicas movilizaciones o paros agrarios (el de julio de ese año fue muy importante), encontramos cortes de rutas/calles/puentes, ocupación de espacios públicos o edificios, paros de remate. Los cortes de ruta forman parte del repertorio de acciones del interior del país. Fueron utilizados en la gran protesta de los chacareros en 1912, conocida como Grito de Alcorta, y fueron acciones habituales de las Ligas Agrarias que en la década del setenta movilizaron a campesinos y chacareros.

Cuadro 2
 Protestas agrorurales según formas de acción en Argentina – 1999

Formas de Acción	Porcentajes
Movilizaciones	19,5
Cortes de rutas/calles/puentes	17,2
Presentación de cartas, documentos, intimaciones, Solicitadas y comunicados de prensa	17,5
Ocupación de espacios públicos o edificios	11,4
Asambleas, plenarios, reuniones	11,3
Paro agrario	2,8
Paro de remates	2,0
Otros (paros, repudios, acciones judiciales, actos, desobediencia civil, abrazo)	18,3
TOTALES	100 (600)

Fuente: banco de datos del Grupo de Estudios Rurales.

Es interesante comprobar que cuando cruzamos “sujetos de la acción” con “formas de la acción” observamos que cada sujeto utiliza un amplio repertorio de acciones, tanto las que forman parte de sus tradiciones de lucha (acciones modulares) como las nuevas formas aparecidas en los últimos tiempos. Así, por ejemplo, vemos que los productores agrarios utilizan el paro o las movilizaciones pero también los cortes de ruta/calles /puentes que aparecen asociados a los desocupados (Cuadro 3). Los aborígenes están más acostumbrados a presentar sus reclamos por escrito pero también han realizado marchas y cortes de ruta (Cuadro 7).

Cuadro 3

Protestas agrorurales de productores agrarios según forma de acción en Argentina – 1999

Forma de acción	Porcentaje
Movilizaciones	17,2
Cortes de rutas/calles/puentes	19,8
Asambleas, plenarios, reuniones	19,3
Presentación de cartas, documentos, intimaciones, solicitadas y comunicados de prensa	21,9
Paro agrario	8,3
Paro de remates	4,2
Otros (acciones judiciales, paros no agrarios, ocupaciones públicas)	9,4
TOTAL	100 (192)

Fuente: banco de datos del Grupo de Estudios Rurales.

Cuadro 4

Protestas agrorurales de productores agrarios según tipo de reclamo en Argentina – 1999

Reclamo	Porcentaje
Políticas económicas y defensa de economías regionales	76,7
Lucha por la tierra y/o la vivienda	4,7
Políticas públicas	6,7
Cuestiones ambientales	0,5
DD.HH./Justicia	0,5
Demandas laborales / falta de trabajo	4,7
Deficiencias en servicios públicos	1,0
Otros	5,2
TOTAL	100 (193)

Fuente: banco de datos del Grupo de Estudios Rurales.

Cuadro 5
Protestas agrorurales de trabajadores agrarios y agroindustriales según forma de acción en Argentina – 1999

Forma de acción	Porcentaje
Movilizaciones	12,5
Cortes de ruta y/o calles	26,6
Ocupación de espacios públicos o edificios	23,5
Asambleas, plenarios, reuniones	7,8
Presentación de cartas, documentos, solicitadas y comunicados de prensa	12,5
Paro y estado de alerta sindical	10,9
Otros	6,3
TOTAL	100 (64)

Fuente: banco de datos del Grupo de Estudios Rurales.

Cuadro 6
Protestas agrorurales de trabajadores rurales y agroindustriales según tipo de reclamo en Argentina – 1999

Reclamo	Porcentaje
Políticas económicas y defensa de economías regionales	7,8
Demandas laborales / falta de trabajo	90,6
Lucha por la tierra y la vivienda	1,6
TOTAL	100 (64)

Fuente: banco de datos del Grupo de Estudios Rurales.

Cuadro 7
Protestas agrorurales de aborígenes según forma de acción en Argentina – 1999

Forma de acción	Porcentaje
Movilizaciones	18,2
Cortes de ruta y/o calles	9,1
Asambleas, plenarios, reuniones	13,6
Presentación de cartas, documentos, solicitadas y comunicados de prensa	40,9
Acto	9,1
Otras (ocupación de edificio y acciones judiciales)	9,0
TOTAL	100 (22)

Fuente: banco de datos del Grupo de Estudios Rurales.

Cuadro 8

Protestas agrorurales aborígenes según tipo de reclamo en Argentina – 1999

Reclamo	Porcentaje
Políticas de educación y salud	4,5
Derechos aborígenes	31,8
Lucha por la tierra y/o la vivienda	59,1
Políticas públicas	4,5
TOTAL	100 (22)

Fuente: banco de datos del Grupo de Estudios Rurales.

Encontramos una clara diferenciación en el tipo de reclamo: los productores agrarios se concentran en aquellos que se basan en políticas económicas y defensas de las economías regionales, mientras que los aborígenes se concentran en la búsqueda de sus derechos y la lucha por la tierra (Cuadros 4 y 8). Los cortes de rutas y otros espacios públicos concentran casi la mitad de las formas de protesta de los trabajadores agrarios y agroindustriales, quienes además piden por salarios y condiciones de trabajo (Cuadros 5 y 6).

La lucha por la tierra fue un reclamo que atravesó no sólo el año en estudio sino toda la década. Pero en esta Argentina agraria heterogénea la tierra contiene un sentido polisémico: tiene diversos significados para los distintos actores sociales. La tierra es un aspecto esencial de sus cosmovisiones para las poblaciones indígenas mapuches o kollas, por ejemplo. El mapuche y el kolla se sienten pertenecientes a la tierra, y piden básicamente una reparación histórica a través de las leyes de recuperación de campos que pertenecieron a sus ancestros. Para los campesinos, por ejemplo para el Movimiento Campesino Santiagueño, la tierra forma parte de sus herramientas básicas de trabajo, y luchan por acceder a ella. Mientras tanto, las Mujeres Agropecuarias en Lucha, que accedieron a la tierra por herencia de sus padres o abuelos, generalmente colonos europeos, sus campos significan patrimonios familiares, y luchan por no perderlos. Podríamos agregar a esta polisemia que para el terrateniente la tierra es una mercancía como cualquier otra.

La lucha por la tierra se combinó en estos espacios agrorurales de la Argentina con la lucha por el trabajo, la vivienda, la salud, derechos adquiridos en los procesos democratizadores del siglo XX y en riesgo de perderse hacia el final de éste. Cuando la ciudadanía está en peligro, la protesta va en aumento.

Por último querría señalar una protesta de la década que a mi modo de ver tuvo contenidos y formatos semejantes a las nuevas protestas que se dan a partir de 2001. Se trata de la lucha por la recuperación de la empresa de aguas y servicios de cloacas de Tucumán, privatizada en 1995. Cuando el consorcio francés-español Aguas del Aconquija se hizo cargo, la gente de los poblados del Sur de Tucumán comenzó a manifestarse contra la privatización por considerarla un acto corrupto más del gobierno provincial, y decididamente no aceptó el aumento de las tarifas. Tuvieron como herramienta fundamental la desobediencia civil, instrumentando el 'no pago' de los servicios a la transnacional. Lograron en 1998 la retirada de la empresa, y en estos días la protesta aún atrae la atención internacional (véase el largo artículo que le dedicó el New York Times de este año) (Giarracca y Del Pozo, 2002).

ALGUNAS REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSIÓN

La década que va de 1991 a 2001 se caracterizó por una fuerte protesta social entendida como irrupciones conflictivas, que se inscriben en el espacio público a partir de demandas concretas y que necesitan de la acción y del discurso para adquirir visibilidad. La protesta necesita de una constelación de actores: los que intervienen, aquél a quien se demanda, y terceros que

intervienen a favor o en contra. Los medios de comunicación juegan un papel de mucha importancia, tanto como actor interviniente que permite visibilidad como articulando a los otros actores (Giarracca y colaboradores, 2001).

La protesta de la década tiene como característica importante el peso de los actores del interior del país, el viraje de los actores de tipo gremial a los de tipo social, la naturaleza pacífica de los sujetos de la acción, y el incremento constante de la respuesta de las fuerzas policiales, que termina en el fatal diciembre de 20014.

Nosotros solemos enunciar que la protesta de la década “finaliza en un comienzo”, marcando de este modo el carácter de acontecimiento del 19 y 20 de diciembre. No podríamos comprender lo que ocurrió en tal fecha si no tomamos en cuenta la década precedente. No obstante, lo que aconteció en diciembre sólo guarda un “parecido de familia” con las protestas anteriores. Con esto queremos sostener que nada ni nadie podía predecir que tal acontecimiento pudiera ocurrir en base a los sucesos y protestas de la década. Lo que aconteció el 19 y 20 tiene un carácter singular: se configura como una acción colectiva particular, que es la desobediencia civil al estado de sitio, y por otro lado, o tal vez por ello mismo, abrió un espacio en el que se produjo una falla en el proceso de representación. Aunque inmediatamente la mayoría de los actores sociales conocidos intentó reconstruir la inconsistencia, volver a la representación, el acontecimiento marca un antes y un después, y muy poco podemos decir hoy acerca de él.

El interior se ubicó más como expectante que como activo miembro del acontecimiento. Sacando algunas capitales de provincia como Córdoba y Neuquén, pocas fueron las manifestaciones del interior, o por lo menos no tuvieron la misma visibilidad y fuerza que las de la ciudad capital y Buenos Aires. La demanda “que se vayan todos, que no quede ni uno sólo”, arriesgamos, tiene un sentido distinto para el centro del acontecimiento y para los “márgenes del castillo” (Colombo, 2002). En sociedades donde la gente se conoce mucho más que en un partido del Gran Buenos Aires, el repudio directo a la clase política y al sistema de representación se complica, considerando que la reproducción material de sus habitantes se inscribe en una fuerte dependencia con respecto a los planes sociales y las redes de clientelismo de los punteros políticos, no sólo de intendentes y gobernadores sino de diputados provinciales y nacionales.

Se abre así un gran desafío para quienes seguimos las protestas del interior: abordar en qué medida y con qué sentidos las provincias experimentaron esos acontecimientos. Esto tiene mucha importancia para lo que seguirá ocurriendo5.

Las acciones de protesta en 2002, según el CISI, se incrementaron a niveles mayores a los registrados en la década. También aparecieron nuevos modos de representación social y política, como las asambleas vecinales, y adquirieron mayor relevancia algunas de las organizaciones de piqueteros (la Coordinadora Anibal Verón). El gran debate del año giró alrededor del Estado, sus poderes, los partidos políticos como herramientas posibles para esa nueva política. La tensión que genera la participación o no en el proceso electoral que se abrió es una muestra cabal de esto. Los partidos políticos, la CTA, los movimientos sociales ligados a los primeros, sostienen posiciones que van siempre en la dirección de las elecciones: desde el llamado a una Asamblea General Constituyente hasta la simple participación con “el mejor candidato posible”. Simultáneamente, otros movimientos sociales, como la Coordinadora Anibal Verón, algunas asambleas y muchas pequeñas organizaciones ligadas a la protesta antiglobalización (Intergaláctica, por ejemplo), sostienen posiciones de radicalidad política al margen del sistema de representación.

En síntesis, desde 2002 surgen nuevas configuraciones sociales, nuevas formas de pensar la política en rupturas impensables hace sólo unos años atrás. El desafío, para nosotros, es pensar cómo se traducen estas novedades del centro del país en los distintos territorios del interior con sus propias historias de lucha y sus propias tradiciones políticas.

BIBLIOGRAFÍA

Colombo, Ariel 2002 Estas rebeliones .

Giarracca, Norma y colaboradores 2001 La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país (Buenos Aires: Alianza Editorial).

Giarracca, Norma y Miguel Teubal 2001 "Crisis and Agrarian protest in Argentina. The Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha", en Latin American Perspectives (EE.UU.: Sage Publications) Vol. 28, Nº 6.

Giarracca N. y Del Pozo, N. 2002 "To make water...Water privatization and social Protest in Tucumán, Argentina", in Barnett, Vivienne et al. Swimming Against The Current: Integrated water resource management and gender in Latin America (EE.UU.), en prensa.

Gonda, Alejandro 2000 El Conflicto Social dentro del plan de convertibilidad. Argentina 1991-2001 (CISI) Informe.

Tarrow, Sidney 1997 El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política (Madrid: Alianza Universidad).

Teubal Miguel y Javier Rodríguez 2002 Agro y alimentación en la globalización. Una perspectiva crítica (Buenos Aires: La Colmena).

NOTAS

* Profesora-investigadora del Instituto Gino Germani, Coordinadora del Grupo de Estudios Rurales, Universidad de Buenos Aires. Coordinadora durante 1997 y 2002 del Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural de CLACSO.

**Con la colaboración de Pablo Lapegna y Ana M. Weinstock¹.

1 Miembros del Grupo de Estudios Rurales, Instituto Gino Germani, UBA. Ayudantes de investigación en el proyecto "Violencia y Ciudadanía" que compara las protestas agrorurales de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay para 1999. Los datos presentados en este trabajo fueron generados en el marco de dicha investigación.

2 Estos argumentos sobre la escala de producción pueden encontrarse explicitados hasta el cansancio en los suplementos rurales de los principales diarios capitalinos. Hasta el día de hoy no resulta fácil oponerse a ellos por lo que significó la idea de progreso agropecuario en la sociedad argentina. Sin embargo, la tecnología adoptada es importada de países cuyos promedios de superficie de las unidades de explotación son varias veces menores a los del país. Pero el dispositivo comunicacional funcionó por muchos años, y una vez más son mujeres las que vinieron a cuestionar aquello instalado en el sentido común.

3 Nuestras cifras no son comparable con las que otorga el CISI por razones metodológicas. La consultora toma como unidad de análisis "formas de acción", independientemente de los "sujetos de la acción". Nosotros tomamos "sujetos", y si se trata de un mismo sujeto, aún cuando desarrolle varias formas de acción, lo contabilizamos como un registro. El gran valor de contar con los datos de CISI se basa en la permanencia del registro en el tiempo y la compatibilidad de las conceptualizaciones.

4 Recordemos que de casos aislados de muertos por la represión en Neuquén y Tierra del Fuego se pasa a un incremento constante y sostenido durante el gobierno de la Alianza, comenzando a los pocos días de asumir con la represión en Corrientes, hasta la masacre del 19 y 20 de diciembre.

5 En la última semana de setiembre una manifestación multitudinaria en Tucumán levantó la consigna "que se vayan todos". Semanas después se llevó a cabo otra en Jujuy que despertó una fuerte represión.

FUENTES

CISI Consultora de Investigaciones Sociales Independientes.

Banco de Datos del Grupo de Estudios Rurales. Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Le Monde Diplomatique 2001 (Buenos Aires) Año III, Nº 30, diciembre. El país empantanado.
New York Times 2002 (New York) 26 de agosto.

Argentina, diciembre de 2001: hito en el proceso de luchas populares

Nicolás Iñigo Carrera* y María Celia Cotarelo**

Los hechos de diciembre constituyen un acontecimiento insoslayable en el análisis de la lucha social en la Argentina actual. En el marco de la agudización de las disputas en la cúpula de la burguesía se desarrolló la lucha de los excluidos del poder político. Durante una semana, todas las clases, fracciones de clase y capas sociales se movilizaron y participaron, en uno u otro sentido.

La insurrección espontánea del 19 y 20 de diciembre, que se conoce como “Argentinazo”¹, no sólo plantea el problema de su conceptualización (relación con un cuerpo teórico) sino también el de su localización en el proceso histórico argentino.

En este trabajo presentamos sus rasgos principales e intentamos delimitar el hecho, el ciclo de enfrentamientos sociales del que es parte, y el período en que se inscribe, para finalmente interrogarnos por su condición de hito, analizando el momento posterior.

DESCRIPCIÓN DEL HECHO²

Las protestas de diciembre fueron en lo inmediato la respuesta a las medidas económicas anunciadas por el ministro Cavallo, que incluyeron la limitación de la cantidad de dinero que podía retirarse de los bancos. Dado que poco antes se había establecido que todas las transacciones económicas, incluido el pago de todos los salarios, debía hacerse a través de cuentas bancarias, esta medida recibió un repudio generalizado, no sólo de los “ahorristas de clase media”, como plantea una mirada autocentrada en la pequeña burguesía, sino también de organizaciones sindicales como la Confederación General del Trabajo (CGT) llamada “disidente” (secretaría general Moyano), la CGT llamada “oficialista” (secretaría general Daer), y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). La organización empresaria Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias (CAME) resolvió llevar a cabo un apagón de protesta, bocinazos y cacerolazos. Ambas CGT declararon la huelga general para el 13 de diciembre reclamando la libre disponibilidad de los salarios y la restitución del sistema de asignaciones familiares. La CTA decidió sumarse a la huelga general. Moyano organizó una marcha frente al Congreso a la que no adhirió la CGT-Daer, que temía que fuera visto como un acto político destinado a derrocar al gobierno radical. Dirigentes de esa CGT, en cambio, exigieron la renuncia de Cavallo como condición para llevar adelante una “concertación económica y social” propuesta por el gobierno.

El 12 de diciembre se realizaron los cacerolazos y bocinazos convocados por la CAME, a los que se sumaron espontáneamente vecinos, principalmente de la pequeña burguesía, incluyendo sus fracciones asalariadas. Las movilizaciones organizadas por la CGT-Moyano y por la CTA, más bien reducidas en sus actos centrales pero con gran difusión en todo el territorio nacional, precedieron a la huelga general del día 13, que tuvo un acatamiento de más del 80%. En su transcurso, desocupados cortaron rutas y calles en Tucumán, Jujuy y la Ciudad de Buenos Aires, y pequeños patrones agropecuarios lo hicieron en Río Negro. Asalariados estatales manifestaron por las calles y apedrearon bancos y un diario en Córdoba; manifestantes irrumpieron en el edificio de la municipalidad en Pergamino; y asalariados estatales y desocupados manifestaron, apedrearon e intentaron incendiar edificios públicos, bancos, empresas extranjeras y un diario en Neuquén, dando lugar a cinco horas de lucha callejera con la policía.

La misma noche del 13 comenzaron los saqueos en supermercados y otros comercios de Mendoza³. Al día siguiente se repitieron allí y en Rosario (Santa Fe), y los días siguientes en Concordia, Concepción del Uruguay y Gualguaychú (Entre Ríos), Avellaneda, Quilmes, San Martín, Boulogne, San Miguel, Ciudadela, Moreno, Lanús y Lomas de Zamora (Gran Buenos Aires), la Capital Federal, San Juan, Santiago del Estero, Neuquén, Mendoza, Córdoba y Cipolletti (Río Negro), hasta alcanzar, según estimaciones periodísticas, la cifra de 800 a 1.000.

El 19 los saqueos se generalizaron a casi todo el país, con particular peso en el Gran Buenos Aires (GBA). En varios se produjeron choques con la policía y tiroteos.

Aunque los discursos y análisis lo tienen cada vez menos presente, las acciones callejeras de esos días no se limitaron a saqueos: hubo ocupación pacífica de edificios públicos (el 14 en La Plata docentes tomaron el Banco de la Provincia de Buenos Aires), ataque a sedes gubernamentales con lucha callejera con la policía (el 19 en la municipalidad de Córdoba y en la legislatura en La Plata), y cortes de ruta que se extendieron durante días en todo el país (el 19 estaban cortadas todas las rutas de Jujuy, Entre Ríos y Chaco y el sur de la provincia de Tucumán).

En respuesta, el gobierno nacional decretó el estado de sitio (suspensión de garantías constitucionales), ordenó el acuartelamiento de las fuerzas armadas del estado, que obedecieron la orden pero informaron públicamente que no intervendrían, y llamó a la calma por medio de un discurso presidencial. Estas medidas desataron la movilización y manifestación (cacerolazo), principalmente de la pequeña burguesía asalariada y no asalariada, con concentraciones en muchos puntos de las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, La Plata y otras, en la noche del 19, al grito de “que se vayan” el gobierno y “los políticos”. El ministro Cavallo presentó su renuncia y pocas horas después debió abandonar furtivamente su domicilio.

El 20 de diciembre, mientras continuaban los saqueos en Rosario, Junín, Capital, GBA, Corrientes, Salta, Paraná, Comodoro Rivadavia, y las manifestaciones en Chaco, La Plata y Mar del Plata, hubo lucha callejera en Córdoba, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Mendoza, Neuquén, Tucumán, Rosario, Paraná y GBA. Pero la acción principal la constituyó el combate callejero desarrollado en el centro político de la Ciudad de Buenos Aires: la policía atacó a los pocos manifestantes que quedaban de la noche anterior, y la respuesta fue una concentración popular sobre la Plaza de Mayo. Cuando se trató de impedirla, se generalizó la lucha callejera entre las masas y la policía. A las 19 horas renunció el presidente de la Rúa, que sólo pudo abandonar la Casa de Gobierno en helicóptero, frente a la multitud embravecida.

DELIMITACIÓN TEMPORAL DEL HECHO

Para delimitar el hecho consideramos la concentración en el tiempo de las formas de la rebelión social en la Argentina actual, y encontramos que todas las formas que tomó en los doce años posteriores a la revuelta de 1989 se dieron simultáneamente en los nueve días comprendidos entre el 12 y el 20 de diciembre de 2001. El hecho investigado constituye pues un proceso que en lo inmediato debe remontarse a las movilizaciones convocadas por las centrales obreras y organizaciones de pequeños y medianos empresarios, que continúa en la huelga general, cortes de rutas, saqueos, manifestaciones y lucha callejera, ataques a edificios públicos, bancos y empresas privatizadas, cacerolazos, hasta culminar en la insurrección espontánea. Los sujetos activados fueron, al comienzo, los trabajadores, ocupados y desocupados, que protagonizan la huelga general con movilización. Después, la mayor parte de las acciones fueron llevadas a cabo por las capas más pobres del proletariado (saqueos) y fracciones de pequeña burguesía asalariada y no asalariada (cacerolazos).

El movimiento se desarrolló desde las manifestaciones y huelgas convocadas desde el sistema institucional hasta una situación de masas descorporativizadas con disposición al enfrentamiento; desde la oposición a políticas de gobierno hasta la oposición al gobierno, al conjunto del sistema institucional político incluyendo a los beneficiarios e impulsores de las políticas aplicadas desde 1976; desde la huelga general como articuladora de las luchas, papel que cumplió en los últimos años (Iñigo Carrera, 2001), hasta su superación por otra forma que la subsume.

EL CICLO DE ENFRENTAMIENTOS SOCIALES

La delimitación temporal del hecho remite a un ciclo de enfrentamientos sociales. En él están contenidas todas las formas de la rebelión desarrolladas desde 1989: revuelta, motín, huelga

general, lucha callejera, toma y defensa con barricadas de una posición. Este ciclo ¿comienza con los hechos de Corrientes en diciembre de 1994? ¿Se remonta a los hechos de Cutral-Có de 1997 y tiene continuidad en los enfrentamientos sociales en que va surgiendo y desarrollándose el llamado “movimiento piquetero”? ¿O se inicia en el motín de Santiago del Estero de diciembre de 1993? (Cotarelo, 1999).

El comienzo de la década del noventa corresponde a un momento descendente en los procesos de lucha social (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2000; Iñigo Carrera, 2001). Justamente la revuelta de 1989-1990 es conceptualizada como tal en tanto no constituye lucha (Iñigo Carrera et al., 1995), y la sigue el momento en que la política de la oligarquía financiera logra construir consenso, aislando los focos de resistencia⁵. Tanto la revuelta como el motín de Santiago del Estero y otros similares ocurridos desde diciembre de 1993 se presentan como formas primitivas de la rebelión social, propias de crisis sociales en las que “el comienzo de un nuevo ciclo de luchas sociales traería aparejada la reaparición de las formas más elementales y primitivas [...] en que se manifiestan los explotados” (Iñigo Carrera y Cotarelo, 1997: 121-122). El ciclo se desarrolla desde formas espontáneas a formas sistemáticas de lucha, y se va conformando una fuerza social, cualquiera sea su grado de constitución, desde las estructuras económico-sociales caracterizadas por la presencia de población agrícola, de superpoblación inserta en el empleo estatal o de capitalismo en enclaves, hacia el centro del capitalismo argentino. El proceso tiene sus hitos en el motín de Santiago del Estero (1993), la lucha callejera en varias capitales provinciales (1995), la toma y defensa de una posición con barricadas⁶ en CutralCó-Plaza Huincul (1996 y 1997), Jujuy y General Mosconi (1997), Corrientes (1999), Tartagal-General Mosconi (2000 y 2001), GBA (2001). En ese proceso las huelgas generales, jornadas y marchas de protesta (como la Marcha Federal en 1994), y las Jornadas Piqueteras en 2001, constituyen momentos de articulación nacional.

Tanto el desarrollo de las formas de lucha como el proceso de formación de fuerza social indican que la insurrección de diciembre se encuentra dentro del ciclo de enfrentamientos sociales que comienza en diciembre de 1993 y que recorre desde el motín hasta la insurrección y de lo local a lo nacional, culminando cuando, con el estallido de la crisis económica, una de cuyas manifestaciones fue la desaparición del dinero, todas las fracciones y capas sociales se movilizan en forma simultánea y en todo el territorio nacional. El desarrollo de este ciclo no es lineal y contiene momentos ascendentes y descendentes (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2000)⁷.

PERÍODO

La delimitación del ciclo de enfrentamientos sociales nos lleva al problema de en qué medida y en qué sentido los hechos de diciembre de 2001 constituyen un hito en el proceso de la lucha social en la Argentina.

En la década del cincuenta cambió la dirección de la expansión del capitalismo argentino, que pasó a hacerlo principalmente en profundidad. En 1969 emergió en la lucha callejera de masas una fuerza social dirigida por el proletariado. El desarrollo del proceso histórico condujo a una radicalización de los enfrentamientos sociales, y la lucha alcanzó su momento militar. Después de un fallido intento en 1975, contenido por la movilización de los obreros, la fuerza social liderada por la oligarquía financiera logró imponer su política a partir de 1976, mediante el uso de la fuerza material del estado y la toma del gobierno por el golpe militar. Ni la resistencia popular, ni la derrota en la guerra por las Malvinas en 1982, ni el reemplazo de los cuadros militares por los políticos en 1983, modificaron el dominio de la oligarquía financiera ni lo fundamental de su política, que tuvo como resultante un proceso de centralización de la riqueza mientras crecieron el pauperismo y la proletarianización de grandes masas de población (Iñigo Carrera y Podestá, 1997). Por el contrario, después de las hiperinflaciones de 1989 y 1990, esa política logró volverse hegemónica, aunque no sin resistencias. La “paz” se alteró cuando la lucha al interior de la oligarquía financiera generó condiciones para la crisis de diciembre de 2001, pero resulta prematuro afirmar que la iniciativa haya cambiado de bando y se haya cerrado el período contrarrevolucionario iniciado a mediados de la década del setenta.

DESPUÉS DE LA INSURRECCIÓN ESPONTÁNEA

Se mantuvieron movilizados principalmente los trabajadores desocupados organizados y fracciones de pequeña burguesía asalariada y no asalariada, bajo las figuras del “piquetero”, el “asambleísta”, el “ahorrista”, el “obrero de fábrica recuperada”. Pero es necesario analizar quiénes fueron los sujetos sociales de la rebelión en la pasada década: ¿los “excluidos”, la clase obrera, u otras fracciones sociales no proletarias?

Si el término “excluidos”, con su fuerte carga de imprecisión teórica e indefinición empírica⁸, debe ser descartado porque no permite delimitar de quién estamos hablando, el concepto de clase obrera⁹ sólo puede ser utilizado como resultado del análisis. Durante el ciclo de enfrentamientos de 1993 a 2001 el principal protagonista de la rebelión fueron los trabajadores asalariados: la mayor parte de las acciones de protesta fueron realizadas por asalariados ocupados. Incluso los cortes de calles y rutas, atribuidos generalmente a los trabajadores desocupados, fueron utilizados principalmente por asalariados ocupados y pequeños propietarios hasta 2001¹⁰. Sólo en ese año los desocupados superaron en cantidad de cortes de rutas a los asalariados ocupados, cuando la consolidación de las organizaciones de desocupados conformó el llamado movimiento piquetero. También se activó en esos años la pequeña burguesía –pequeños propietarios, vecinos, estudiantes– que ocupó el primer lugar en la cantidad de cortes realizados entre 1997 y 1999 y en el primer cuatrimestre de 2001. Correspondiéndose con quién es el sujeto principal de la rebelión, debe señalarse que fue la organización sindical –comisiones internas, sindicatos, seccionales, sindicatos de rama, centrales sindicales– la principal convocante a las acciones, incluso si se centra la observación en los cortes de ruta¹¹. Además, la huelga general con movilización (ocasionalmente las marchas convocadas por organizaciones sindicales) fue el instrumento que permitió articular las acciones a nivel nacional, al menos hasta 2001: la rebelión excedió sus manifestaciones locales sólo cuando se produjeron huelgas generales con movilización. En 2001 esa capacidad la tuvo también el movimiento de los desocupados y los pobres en algunas de las llamadas Jornadas Piqueteras, pero no debe olvidarse que los hechos de diciembre de 2001 comenzaron con la huelga general y movilizaciones convocadas por las centrales sindicales y organizaciones empresarias, aunque después de la huelga general la mayor parte de las acciones fueron llevadas a cabo por las capas más pobres del proletariado (saqueos) y fracciones de pequeña burguesía asalariada y no asalariada (cacerolazos).

Si se tiene presente este atributo de la rebelión, se hace observable la tregua establecida por esa fracción de la clase obrera después de la insurrección de diciembre, en la que no participó como tal aunque muchos asalariados hayan integrado las manifestaciones de esos días y hayan intervenido en el combate callejero. En medio de “la mayor crisis de nuestra historia” las direcciones sindicales reclamaron que no hubiera inflación ni despidos, pero más o menos explícitamente promovieron la gobernabilidad, el diálogo y la búsqueda de una concertación económica y social. El gobierno prohibió los despidos, lo que no impidió que en la primera mitad del año hubiera 329.500 (Clarín, 2002[b]), y que el índice oficial de desocupación abierta alcanzara el record de 21,6% (extraoficialmente, el mismo gobierno la estimaba superior a 23%) mientras los precios subían 30,5% o más si se considera la canasta básica. Aunque con fuertes tensiones, la tregua se mantuvo incluso después de abril, cuando a pesar del cambio de ministros continuó la negociación con el FMI, que las centrales sindicales criticaban reclamando que “los costos de la crisis” los pagaran los exportadores y los bancos. Los intentos de la CGT-Moyano por mantener la confrontación con una huelga general y movilización el 22 de mayo, que produjo la fractura de esa central y su mayor aislamiento político, y de la CTA, junto con la Corriente Clasista y Combativa (CCC), con un paro el 29 de mayo que tampoco tuvo adhesión masiva, son indicadores de que la mayoría de los trabajadores no estuvo dispuesta a romper la tregua.

La CGT-Daer concentró su presión en obtener un aumento para los asalariados con convenio laboral; no lo recibieron los asalariados estatales, rurales y domésticos, ni los trabajadores “en negro” y los desocupados.

Pero la tregua no se limitó a los trabajadores sindicalizados. Los desocupados y los pobres¹², incluidos los organizados en casi todas las vertientes del movimiento piquetero, recibieron subsidios para jefes y jefas de hogar desocupados¹³, con lo que se expandió la base social de

la tregua a buena parte de la población excedente para las necesidades del capital. Señalar la tregua no significa desconocer que fracciones sociales expresadas en asambleas y organizaciones piqueteras se mantuvieron movilizadas, que hubo lucha económico-práctica de los asalariados y que, como en toda tregua, se produjeron choques y escaramuzas con la fuerza armada del gobierno. El pueblo mostró su mayor fuerza en las movilizaciones que siguieron a la muerte de dos militantes de organizaciones de desocupados en Avellaneda, el 26 de junio, cuando el régimen pasó abiertamente a la ofensiva contra las organizaciones populares.

La oligarquía financiera, aunque perdió consenso en la sociedad y afloraron los conflictos que venían insinuándose a su interior desde años atrás –siguiendo diversas líneas de confrontación entre capitales más ligados a la producción o a la circulación, al mercado interno o a la exportación, de capitales locales o extranjeros, más concentrados y menos concentrados–, logró defender sus posiciones y fue recuperando otras, en disputa desde diciembre. Así, por ejemplo, se mantuvo la cuestionada ley de flexibilización laboral, fracasó el enjuiciamiento a la Corte Suprema de Justicia y se licuaron deudas de las grandes empresas. Mientras tanto, intentó recomponer su unidad alrededor de la defensa de la propiedad privada como valor absoluto¹⁴ y sus cuadros ideológicos prepararon su ofensiva, anunciada de distintas maneras desde que la crisis económica y social comenzó a mostrar su magnitud a mediados de 2001. Como parte de esa ofensiva puede mencionarse la criminalización de la protesta social¹⁵, el reclamo de utilización de las fuerzas armadas del estado para recuperar el control de las calles frente a piqueteros y manifestantes, y cierta pública nostalgia por el orden instaurado en 1976 aunque, ahora sí, manteniendo las formas legales¹⁶.

La movilización popular que siguió al enfrentamiento social de junio de 2002 en Avellaneda tuvo como resultado inesperado la convocatoria adelantada de las elecciones presidenciales. Aunque la movilización de los pobres por reivindicaciones inmediatas continuó, imperceptiblemente todo fue siendo canalizado hacia la disputa electoral, y el ciclo de enfrentamientos parece recorrer nuevamente un momento descendente.

Aunque nada es igual a antes de diciembre de 2001, resulta prematuro plantear que se ha cerrado el período contrarrevolucionario iniciado a mediados de la década del setenta.

BIBLIOGRAFÍA

Clarín 2002[a] (Buenos Aires) 4 de septiembre.

Clarín 2002[b] (Buenos Aires) 2 de julio.

Cotarelo, María Celia 1999 El motín de Santiago del Estero (Buenos Aires: PIMSA).

Helbling, Carlos Conrado 2002 “A qué jugamos”, en La Nación (Buenos Aires) 9 de julio.

Iñigo Carrera, Nicolás 2001 Las huelgas generales. Argentina 1983-2001 (Buenos Aires: PIMSA).

Iñigo Carrera, Nicolás et al. 1995 La Revuelta. Argentina 1989/90 (Buenos Aires: PIMSA).

Iñigo Carrera, Nicolás y María Celia Cotarelo 2002 “19 y 20 de diciembre de 2001: análisis y conceptualización de un momento en la constitución de una relación de fuerzas política”, en De la dictadura financiera a la democracia popular Rosario. Grupo de Trabajo Hacer la Historia.

Iñigo Carrera, Nicolás y María Celia Cotarelo 2000 La protesta social en los '90. Aproximación a una periodización (Buenos Aires: PIMSA).

Iñigo Carrera, Nicolás y María Celia Cotarelo 1997 Revuelta, motín y huelga en la Argentina actual (Buenos Aires: PIMSA).

Iñigo Carrera, Nicolás y Jorge Podestá 1997 Las nuevas condiciones en la disposición de fuerzas objetiva (Buenos Aires: PIMSA).

La Nación 2002 (Buenos Aires) 1° de junio.

La Nación 2001 (Buenos Aires) 17 de junio.

Marx, Karl 1973 (1867) El Capital (México: Fondo de Cultura Económica) Libro 1, Capítulo 23.

NOTAS

* Profesor en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Investigador del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA).

** Profesora en Historia (UBA), Directora del PIMSA.

1 El nombre de “Argentinazo” resulta una aproximación que constituye al hecho en amalgama y ariete ideológico de una fuerza popular, porque lo entronca con uno de los momentos más altos de las luchas de masas en la historia argentina al evocar los rasgos de combate callejero vinculándolo con los “azos” de 1969. Al mismo tiempo, señala acertadamente su forma “nacional”. Sin embargo, “Argentinazo” carece de universalidad, y el sufijo “azo” es utilizado sin precisión para denominar hechos que tienen el rasgo común de las acciones callejeras pero que son distintos entre sí si se atiende a los intereses y protagonistas y a los procesos históricos de los que forman parte. Por eso la conceptualización como “insurrección espontánea” (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2002).

2 La descripción se hizo con información de los diarios Clarín, La Nación, Crónica, El Popular, Página 12, Ámbito Financiero, La Prensa, El Libertador (Corrientes), La Gaceta de Tucumán, Río Negro, El Día (La Plata), La Mañana del Sur (Neuquén), El Zonda (San Juan), La Voz del Interior (Córdoba), La Capital (Rosario), Los Andes (Mendoza), La Nueva Provincia (Bahía Blanca), El Diario (Paraná), Rosario/12, La Voz del Chaco.

3 Aunque la sospecha de que los saqueos encubrirían un complot justicialista para desplazar al gobierno dio lugar a una investigación judicial, no ocurrió lo mismo con la invitación contenida en La Nación a que amas de casa “recorran nuestras avenidas, las plazas de provincia, se encuentren en la Plaza de Mayo, armadas de cacerolas”, en defensa del orden y contra el “vacío de poder” (Helbling, 2002).

4 El 17 de diciembre de 1999 se produjo un enfrentamiento entre la fuerza armada del gobierno nacional y las masas que defendían la toma del puente General Belgrano, entre Corrientes y Chaco. En noviembre de 2000 y mayo de 2001 se produjeron enfrentamientos similares en Tartagal y General Mosconi (Salta).

5 Las huelgas y movilizaciones de obreros ferroviarios, mineros de Hipasam, siderúrgicos de Somisa, telefónicos, y la Plaza del No, convocada por organizaciones y partidos políticos en 1990.

6 Bajo la figura del corte de ruta constituyen la toma de una posición que es defendida frente a la gendarmería; son piquetes masivos, los reclamos incluyen metas generales y reclamos específicos variados, expresándose más de una fracción social; surge una organización en asamblea y formas de democracia directa, lo que conlleva la desinstitucionalización; se desarrollan en el tiempo y surgen divisiones entre quienes aceptan negociar y quienes no.

7 El desarrollo del ciclo de luchas sociales se expresó también en el terreno electoral: en el momento ascendente (1993-1997) tendieron a aumentar la abstención electoral y el voto en blanco. Ambos disminuyeron en el momento descendente (1997-1999), y en las elecciones presidenciales de 1999 aproximadamente el 90% de los votantes apoyó programas políticos que prometían mantener y profundizar la política de la oligarquía financiera. La abstención y el voto en blanco volvieron a aumentar en las siguientes elecciones legislativas (octubre de 2001) en que el llamado “voto bronca” alcanzó magnitudes inéditas.

8 “Exclusión” remite a campos de relaciones sociales muy diversos, en “un sistema que deja

afuera”. Pero el grado de desarrollo del capitalismo argentino imposibilita la existencia de excluidos del conjunto de las determinaciones de la actividad económica. 9 Utilizamos el concepto clase obrera en su clásica acepción de expropiados de condiciones materiales de existencia que sólo pueden reproducir su vida mediante el salario, lo obtengan o no (Marx, 1973).

10 La siguiente distribución muestra los resultados de cuatro mediciones que hemos realizado en nuestra investigación.

Cuadro 1

Cortes de ruta o calle distribuidos según quién los realiza (%)

	I	II	III	IV
Asalariados ocupados	35,3	22,8	19,1	19,0
Asalariados desocupados	15,4	4,0	28,4	32,6
Asalariados ocupados y desocupados	3,2	4,9	11,3	34,8
Asalariados y Pequeña Burguesía	6,4	3,0	-	-
Pequeña Burguesía	16,7	56,7	33,3	2,7
Otros y sin datos	23,0	8,5	7,8	10,9
Total	100 (156)	100 (529)	100 (204)	100 (184)

I: diciembre 1993 a agosto 1997 (momento ascendente iniciado con el motín de Santiago del Estero; II: septiembre 1997 a octubre 1999 (momento descendente que siguió a la huelga general de septiembre de 1996 y los “cortes” de 1997); III: enero a abril 2001. IV: julio 2001 (corresponden al momento ascendente iniciado en diciembre de 1999). Tanto en la medición I como en la II los asalariados ocupados lo son, en primer término, los de empresas privadas. Fuente: elaboración propia.

11 Hasta 1999 las organizaciones empresarias (31,7%) y las sindicales (24,8%) fueron dominantes en la convocatoria de los cortes de ruta y calle; entre enero y abril de 2001 el primer lugar correspondió a “espontáneos” (23,6%), seguido por las corrientes político-sindicales (21,6%) y las organizaciones sindicales (21,1%); en julio de 2001 el primer lugar correspondió a organizaciones sindicales (34,8%) seguidas por las corrientes político sindicales y organizaciones de desocupados (26,1).

12 El concepto de pobres refiere a aquellos que, expropiados de sus condiciones materiales de existencia, no logran reproducir su vida en las condiciones sociales normales, mediante el salario.

13 Administrados, en parte (128.000 planes sobre un total de 1.977.999), por las mismas organizaciones “piqueteras” (Clarín, 2002[a]: 19).

14 El 28 de mayo de 2002 la cúpula del capitalismo argentino se unificó en la Asociación Empresaria Argentina. Su objetivo explícito es la defensa del principio de la propiedad privada porque percibe un estado de ánimo desfavorable al empresariado, el rechazo a las empresas privatizadas y una revaloración de su estatización. “[...] no se dedicarán a defender intereses sectoriales, sino las bases mismas del sistema capitalista” (La Nación, 2002: 8).

15 Más de 2.500 participantes en protestas están procesados y pueden ser condenados. Entre ellos fueron apresados y enjuiciados el dirigente Raúl Castells, más de cien manifestantes en San Salvador de Jujuy (septiembre de 2002), sentenciada en Bariloche en agosto de 2002 Marina Schiffrin (docente condenada por participar de un corte de ruta); muertos por la policía Kosteki y Santillán en Avellaneda (26 de junio de 2002).

16 Ver por ejemplo los discursos del presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (junio 2001), del presidente de la Sociedad Rural Argentina en la inauguración de la Exposición Rural (2001 y 2002), de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) el 19 de junio de 2002, y los múltiples editoriales y notas publicadas por el diario La Nación desde 2001 (por ejemplo el de Mariano Grondona el 17 de junio de 2001) clamando por el “orden” (y la propiedad privada) como valores absolutos.

Empresas recuperadas: otra respuesta de trabajadores en situación de conflicto laboral

Gloria Rodríguez

Nuestra intención es aportar a la reflexión y análisis de las formas de expresión y organización de la protesta social a través de la comunicación de una experiencia de toma de instalaciones de una empresa supermercadista que declaró la quiebra, y la posterior puesta en marcha de la empresa por parte sus trabajadores, en la ciudad de Rosario. Este caso forma parte del fenómeno de recuperación de empresas, y nos interesa atender los modos de participación, organización y decisión llevados adelante por la Comisión de Acción Gremial de empleados de comercio en su lucha por la instalación de un mercado comunitario.

Las profundas transformaciones operadas en la estructura económica en general han afectado nuestro particular objeto de estudio, el mundo del trabajo, lo que nos exige analizar las transformaciones operadas en las respuestas gremiales construidas por los trabajadores. De ahí que resulta fundamental profundizar tanto en la observación de la trama de relaciones sociales donde se insertan los trabajadores en situación de conflicto laboral, como en la escucha de la producción de nuevos sentidos –altamente afectados por el vaciamiento ideológico– como forma de contribuir a la caracterización de las respuestas gremiales y las modalidades de participación sindical.

Si la globalización ha generado ajuste, flexibilización y reducción del estado paliativo, también ha creado desajustes sociales, rebeliones y respuestas de distintas características que constituyen formas peculiares de la lucha de clases originadas en este proceso de concentración de capital.

La protesta social en Rosario expresa las profundas conmociones provocadas por la última reestructuración capitalista que, buscando la recomposición de la tasa de ganancia con políticas neoliberales, redefine las relaciones capital-trabajo. Estas transformaciones se vieron acompañadas por cambios culturales, expresados en hábitos, rutinizaciones y creencias que se sustentan en nuevos contenidos del sentido común. La promoción de este nuevo sentido común logró internalizar en la población un profundo rechazo a la corrupción, fundamentalmente política y sindical, invisibilizando la corrupción empresarial, fuente de financiamiento de todas las otras. En este mismo proceso se barrió con el sindicalismo y, junto a él, la importancia de la organización sindical. Esta lógica neoliberal y privatizadora impulsó además la promoción de dirigentes sindicales que introdujeron el estilo empresarial en sus organizaciones, contribuyendo al desamparo de los trabajadores.

Así, el desprestigio social del sindicalismo se sumó al desposicionamiento objetivo de las entidades gremiales generado durante el proceso de desindustrialización. Las instituciones gremiales se encontraron debilitadas políticamente debido a los cambios estructurales habidos en los procesos de producción, que redujeron su incidencia en las políticas nacionales. Pero también debieron su debilidad al profundo divorcio establecido con los trabajadores, enmudeciendo frente a las políticas de ajuste, conducta que ha redundado en el descreimiento de sus afiliados¹.

En este contexto emerge la cuestión de la posibilidad de superar la orfandad en que se encuentra la clase trabajadora, ya sea por debilitamiento, traición o impotencia de las organizaciones gremiales que otrora la contenía. Y empleamos el término contención en el doble sentido de inclusión morigeradora de asimetrías, y de sofreno de comportamientos explosivos.

Sin embargo, es saludable recordar que los cambios en el sistema vienen acompañados por nuevas posibilidades de lucha: en efecto, la otra cara de la orfandad bien puede ser vista como oportunidad para la clase de volver a organizarse con independencia política y a través de prácticas superadoras. Más aún, vuelve a ser pertinente una discusión clásica en el marco de la democracia sindical: si aceptamos que estamos en sociedades autoritarias, educados en la delegación y trabajando con organizaciones cuyo funcionamiento requiere una gran estructura

burocrática, el problema no consiste en cómo la burocracia es posible, sino en cómo es posible una experiencia democrática (Lipset et al., 1956).

Es por eso que observamos con atención el caso de una comisión de acción gremial altamente participativa, desarrollada en el seno de un gremio con fuerte tradición delegativa y donde la recuperación de una empresa abandonada por su dueño forma parte de las estrategias políticas diseñadas por los propios trabajadores.

EL CONTEXTO LOCAL

Rosario es uno de los nucleamientos urbanos más importantes de la Argentina. Ciudad industrial, comercial y estrechamente vinculada a la actividad agrícola pampeana a través del puerto, fue el hogar de una poderosa clase trabajadora que protagonizó acciones colectivas de distinto carácter a través de su historia. El proceso de desindustrialización iniciado en tiempos de la dictadura militar (1976) cambió la fachada urbana, mostrando los rostros de una población jaqueada por la presión de un índice de desocupación que supera el 20%. Durante el gobierno del presidente De la Rúa, casi todas las huelgas generales convocadas por las centrales obreras² tuvieron la característica de paro activo con movilización y protagonismo de los trabajadores. La existencia de una multisectorial que reúne a las distintas centrales de trabajadores, junto con gremios independientes y otros sectores populares, posibilitó la coordinación de acciones conjuntas. A partir del 20 de diciembre de 2001 la situación ha cambiado y el protagonismo se ha desplazado hacia los grupos piqueteros demandando fundamentalmente subsidios para jefas y jefes de hogar desocupados, las asambleas barriales, y algunas experiencias novedosas de recuperación de empresas en manos de los trabajadores, desligadas de las conducciones tradicionales, de las cuales la de la ocupación y creación del mercado comunitario es una saliente expresión.

LA LUCHA POR LOS PUESTOS DE TRABAJO: PROYECTO ALTERNATIVO DE REACTIVACIÓN

Durante los últimos años la concentración de capitales y la sucesión de quiebras empresariales en el ámbito de la actividad supermercadista tuvo como resultado inmediato la pérdida de cientos de puestos de trabajo debido a las políticas de reducción de personal o bien de recambio del mismo en procura de trabajadores sin experiencia sindical.

El caso que nos ocupa se agudiza a partir de la quiebra de una cadena regional de supermercados que deja a sus trabajadores en la calle. Para impedir el vaciamiento, es ocupado un importante local céntrico de la firma. Luego de sostener la protesta con reclamos formales, manifestaciones y cortes de calles que acompañaron la ocupación, se generó la propuesta de constituir un Mercado Comunitario (sociedad del Estado) administrado por un ente compuesto por representantes de los gobiernos provincial y municipal, con el respaldo de amplios sectores sindicales, políticos, religiosos, corrientes universitarias, el Honorable Concejo Deliberante³ de la ciudad y, fundamentalmente, la simpatía de la población. La protesta en este momento se dirigía hacia el Estado en sus niveles nacional, provincial y municipal, demandando su intervención.

El predio "tomado" ya había sido objeto de ocupación cuando pertenecía a la Cooperativa El Hogar Obrero, que entró en quiebra en 1990. En esa ocasión los trabajadores ocuparon el local durante meses y sostuvieron el conflicto hasta lograr el traspaso empresarial y la conservación de los puestos de trabajo (Rodríguez, 2001). En buena parte, los trabajadores que protagonizaron ambas quiebras fueron los mismos y la dirección gremial del conflicto también, dando lugar a la activación de la memoria histórica.

Después de más de un año de lucha y ante la inacción de los entes gubernamentales, el 6 de septiembre de 2002 los trabajadores abrieron el Centro de Comercialización, Trabajo y Servicios, donde se comercializan productos de otros lugares tomados, como Milhojas y Grisinópolis, de las huertas comunitarias y de los pequeños productores regionales, afirmando una lógica social distante de la mera rentabilidad capitalista (Meiksins Wood, 2001: 83). El día

de la inauguración hubo un acto donde los vecinos del centro, donde está el local, acercaron plantas y augurios, y se hicieron presentes organizaciones gremiales, políticas y estudiantiles. Al día siguiente, el escritor Osvaldo Bayer, ante la presencia de 800 personas, dio inicio a un ciclo de charlas sobre la ética del movimiento obrero.

Es destacable la estrategia de la Comisión de Acción Gremial de hilvanar una serie de actividades tendientes a no aislar el conflicto. Tal vez la más importante de ellas sea la constitución del sitio como un lugar de encuentro social, promovido mediante la activación de un Centro Cultural y la posibilidad de la instalación de un comedor universitario en acuerdo con la Universidad Nacional de Rosario. La población se apropió del centro cultural, considerándolo un espacio social, desatendiendo el carácter formalmente ilegal de su funcionamiento. En este propósito se ha desarrollado un comportamiento que tiende a la más amplia unidad y compromiso con el conjunto de la sociedad para la consecución del objetivo más anhelado: la recuperación del trabajo, que hoy simboliza un empuje para la clase trabajadora y para quienes comienzan a trazar un sendero de cómo organizar democráticamente un conflicto.

Al cumplirse un año de la toma se han señalados cuatro elementos fundamentales: la existencia de trabajadores dispuestos a resistir; el desarrollo de prácticas democráticas en la toma de decisiones; la presencia de un sindicato que acompaña la lucha; el saber rodearse de la más amplia solidaridad sin discriminación alguna.

El tema de la solidaridad no sólo garantiza la presencia, el apoyo hacia otros sectores en lucha, sino que se constituye en un recurso importante de seguridad. En este momento en que está en auge la criminalización de la protesta, con la policía en constante acecho para desalojar el local y apresar a los dirigentes acusados de usurpación, el hecho de que el sitio esté permanentemente ocupado con actividades culturales, políticas, recreativas, a las que se les ofrece el espacio solidariamente, es el mejor elemento de protección de los trabajadores y de la toma. En el Centro Cultural de La Toma se realizan las más variadas actividades –reunión de asambleas barriales, presentación de libros, obras de teatro y arte plástico, encuentros de agrupaciones políticas y gremiales, reuniones de la multisectorial, cursos varios, gimnasia, idiomas, etc.– al amparo de los trabajadores, y a su vez las actividades amparan a éstos de la arremetida oficial.

DESANDANDO EL VACIAMIENTO IDEOLÓGICO

La ocupación y recuperación del supermercado fue conducida por la Comisión de Acción Gremial de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario. Esta comisión de activistas surge en 1999, cuando los conflictos con los supermercados se sucedían ininterrumpidamente, y se fue fraguando en la lucha por la vigencia de la ley de Descanso Dominical. Las prácticas gremiales desarrolladas por esta comisión cambian la rutina delegativa de los trabajadores mercantiles, quienes comienzan a apropiarse de sus propias experiencias y a resolver protagónicamente los conflictos.

Como correlato de estas prácticas se generó un espacio de debate sobre la lucha donde se observa la acumulación de experiencias jalonadas por fracasos que tienen como causa principal la lucha ideológica que los activistas deben dar con el conjunto de los trabajadores. Un dirigente del conflicto relataba lo siguiente en el aniversario de la toma: “En el 2000, en el Encuentro Regional Ciencias Sociales y Sindicalismo, planteábamos la nueva situación ante la que se presentan las luchas: la desocupación es selectiva, quienes quedan trabajando son los más pro-patronales. Debemos tener una visión profunda de lo que es el antiburocratismo. Descubrimos que muchos compañeros odian a la burocracia pero no a la patronal” (Rodríguez et al., 2000).

Esto los llevó a construir un nucleamiento focalizado en dos puntos, anti-patronal y profundamente democrático, donde la ocupación del supermercado es una batalla más que pone en acto la importancia del objetivo fundamental: organizar el cuerpo de delegados de todo el gremio.

Esta tarea es ardua porque no supone sólo superar las diferencias entre agrupaciones

antiburocráticas, sino algo más profundo, que es la pelea contra el vaciamiento ideológico o, como dicen los propios trabajadores “la principal lucha que tuvimos no fue con Nucci⁴, que apareció enseguida, sino con la cabeza de los compañeros”, y la pelea por la organización del movimiento obrero regional como forma de garantizar la coordinación de las luchas. Para ello se proponen discutir tozudamente con todos, aún con quienes confían en la patronal o en el Ministerio de Trabajo, partiendo del estado de desideologización radical en que se encuentran y tomando como una cruzada la tarea de la educación sustentada en la práctica democrática y consecuente de lucha contra la patronal.

NUEVAS PRÁCTICAS, NUEVOS HÁBITOS, NUEVAS RUTINAS

Rutinas, hábitos y ritualidades otorgan consistencia a la agrupación. Los delegados y activistas se reúnen “religiosamente” todas las semanas, se organizan cursos con la difusión previa del tema garantizando una activa participación, y se desarrollan actividades⁵ que les permiten reflexionar fértilmente sobre sus propios procesos.

Los hábitos se consolidan promoviendo la participación en la movilización, la difusión de demandas, llevando la solidaridad a otros sectores en lucha e incorporando cada vez más miembros en la discusión y decisión de las actividades. Hechos significativos son la discusión de problemas internacionales, porque la mayoría trabaja en empresas multinacionales, o la conmemoración del 1ro de mayo, donde anualmente se entona La Internacional enfatizando que se trata de un día de lucha, conquistado con sangre obrera. Recordamos que es un gremio que agrupa 28 mil afiliados, el más numeroso de los que nuclean la actividad privada en la ciudad. Es decir, no estamos hablando de un caso marginal. Estos nuevos activistas han desarrollado un proceso de implicación, ya no con los procesos productivos o de gestión impuestos por las nuevas formas de organización del trabajo, sino con el proceso de producción de prácticas gremiales.

Esta implicación, esta cohesión, se ve galvanizada en una ritualidad (aplausos a los delegados electos, el orgullo de ser elegido, el esfuerzo altruista, etc.) que da marco a la promoción del valor de ser delegado, de ser activista gremial. El ritual aparece como una suerte de compensación moral al esfuerzo de ser activista.

Establecer hábitos, dar continuidad y valor a las actividades, y mantener una presencia continua, otorgan un marco de contención de clase que suple a las viejas estructuras. Esto es sumamente importante si pensamos que las “situaciones críticas” (Giddens, 1995), como las generadas por la desocupación, destruyen las rutinas produciéndose un despojo de las respuestas socializadas que otorgan predecibilidad a la vida social. Si hay alternativas que aporten sensación de futuridad, entonces se pueden ensayar respuestas proyectivas. Las respuestas proyectivas encuentran anclaje en prácticas, hábitos y ritualidades que nos pueden estar hablando de la posible constitución de una “cultura obrera distinta” (James, 1993).

Relatamos una experiencia no porque sostengamos la irreductibilidad de las particularidades, sino porque: los compañeros que me antecedieron trataron muy convenientemente el marco general del proceso; es importante encontrar lo contextual en las prácticas y representaciones concretas; el carácter de la investigación procura, a partir de trabajos empíricos, conocer la problemática local incorporando desde la antropología cultural, la historia social y la ciencia política, preguntas acerca del modo cómo fueron esos procesos y cómo han operado sobre las prácticas, la memoria, las actitudes y tradiciones de los sujetos; porque investigadores y sujetos de investigación pertenecemos a la misma sociedad, y por lo tanto el conflicto supera la condición de preocupación metodológica para constituirse una cuestión social. Sostenía Santiago Wallace (1994: 234) que “lo que está en la base es un proceso de producción de conocimiento de la construcción de una relación social con el otro, de una profunda interacción que es al mismo tiempo experiencia con el grupo y participación en las experiencias del grupo”.

BIBLIOGRAFÍA

Giddens, Anthony 1995 La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración (Buenos Aires: Amorrortu).

James, Daniel 1993 "El olvido oficial es muy poderoso en la Argentina", en Todo es Historia (Buenos Aires) N° 314, Setiembre. Dossier Gremialismo y Política.

Meiksins Wood, Ellen 2001 "Trabajo, clase y estado en el capitalismo global" en Seoane, José y Emilio Taddei (comps.) Resistencias Mundiales [De Seattle a Porto Alegre] (Buenos Aires: CLACSO).

Rodríguez, Gloria 2001 "Un 'Rosario' de conflictos. La conflictividad social en clave local", en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) N° 5, Septiembre.

Rodríguez, Gloria et al. 2000 Actas del Primer Encuentro Regional Ciencias Sociales y Sindicalismo (Rosario: CEHO).

Wallace, Santiago 1994 "El proceso de trabajo cervecero. Una mirada desde los riesgos", en Berrotarán, Patricia y Pablo Pozzi (comps.) Estudios inconformistas sobre la clase obrera argentina (1955-1989) (Buenos Aires: Ediciones Letra Buena).

NOTAS

* Antropóloga. Profesora Titular/investigadora de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Directora del Departamento de Antropología Sociocultural, Escuela de Antropología (UNR). Coordinadora del Área Antropología y Trabajo del CEHO (Centro de Estudios de Historia Obrera).

1 Desde mediados de la década del treinta y con mayor fuerza durante las dos primeras presidencias de Perón, surgió una fuerte clase obrera industrial, la más concentrada de Latinoamérica. Durante las décadas del sesenta y setenta esa situación se reforzó, dando lugar a un numeroso proletariado industrial concentrado que reflejaba el proceso "fondista". Como correlato de esta base social, existía una poderosísima burocracia sindical. Dirigentes como Vador, Framini, Taccone, Coria, etc., hacían temblar gobiernos con sus amenazas de "planes de lucha". Esta realidad cambia a partir del proceso de desindustrialización de Martínez de Hoz, durante el Proceso, y con el Plan de Convertibilidad. Hoy es todo un símbolo que muchas fábricas se hayan convertido en supermercados, mientras que los obreros que trabajaban en ellas han pasado a integrar la legión de desocupados, cuentapropistas o jubilados.

2 Confederación General del Trabajo (CGT) y CGT Rebelde, ambas en proceso de unificación, y Central de los Trabajadores Argentinos (CTA).

3 "El Honorable Concejo Deliberante expresa su respaldo a las gestiones que llevan adelante los trabajadores del Supermercado Tigre (Tucumán 1349) con el objetivo de sostener sus puestos de trabajo y concretar un emprendimiento económico que dé respuesta a sus necesidades. Antesalas, 24 de septiembre del 2001."

4 Juan Nucci era el Secretario General de la CGT Rebelde de Rosario.

5 Estas actividades consisten en actos; paros; movilizaciones convocando a todos los sectores gremiales y populares; charlas sobre salud y legislación laboral; cine-debate; cursos sobre historia del movimiento obrero argentino; convocatorias a la participación de intelectuales y profesionales; participación solidaria en los conflictos de otros gremios o sectores populares; participación en las convocatorias realizadas desde instituciones académicas de la universidad o agrupaciones universitarias y, lo que ha sido el instrumento más importante, la generación del Centro Cultural de La Toma.

Protesta social y representación en las provincias argentinas: Neuquén en la última década

Orietta Favaro

En un contexto donde EE.UU. practica su condición de imperio con el nuevo concepto de guerra preventiva, en el que el capitalismo frenado durante setenta años comienza a devorar todo lo que se mueve a su alrededor intentando resolver su crisis mediante la destrucción de las democracias y las economías competidoras, en América Latina soplan aires alentadores, porque se agrandan y multiplican las protestas y emergen viejos y nuevos actores en heterogéneos movimientos sociales (Gabetta, 2003: 3).

En Argentina, durante la década del noventa, las acciones de protestas llevadas a cabo por una variedad de actores en el contexto de un modelo de valorización financiera reclaman la mayor intervención del Estado como si éste fuera algo ajeno al modelo vigente. Los resultados de esa política son la desigualdad, la pobreza, la polarización social, la degradación de la educación y la salud. La instancia nacional, nuevamente, tiene la capacidad de regular el conflicto dentro del espacio institucional y restituir "el orden" (Barbetta, 2002: 149).

La protesta social tiene orígenes diversos, pero el punto de partida es la desarticulación del mundo del trabajo, situación que trae aparejada, entre otras cuestiones, el retiro del Estado de su función de reasignación de recursos y ejecutor de una política de bienestar y la descentralización de la salud y la educación (Lobato, 2002: 164). Ahora bien, la mayoría de las protestas no se localizan en las fábricas o en espacios públicos, como las plazas de las principales ciudades del litoral-pampa húmeda, sino que por una parte se concretan en la ruta, en la calle, frente a las instituciones de gobierno, porque se las considera como tradicional e ilegítima expresión de la representación política y de los sectores dirigentes que la sostienen. Por otra, cada vez más se dan acciones en ciudades y localidades del interior del país, emergiendo diferencias no sólo entre los actores de la protesta sino también en las estrategias utilizadas. Se pide por trabajo, por justicia, por salud, por educación, por la propiedad. A veces, estos actores se cruzan con los sujetos de las tradicionales centrales sindicales. En las provincias argentinas la protesta social adquiere características y magnitud diferentes. En el caso de Neuquén, en el norte de la patagonia argentina, el nivel de conflictividad social se traduce en una serie de protestas de distinto tipo. Entre ellas es importante mencionar las manifestaciones callejeras de los desocupados, las marchas por los derechos humanos, los cortes de ruta por distintos actores, ocupados o desocupados, y la administración obrera de la fábrica Zanon y de la compañía de transporte El Petróleo. Los reclamos son tanto por las sucesivas políticas de ajuste que ponen entre paréntesis los derechos adquiridos como otros derechos, que se negocian y disputan.

Si bien las protestas en general están direccionadas, como ya se dijo en otro lugar (Favaro, 2002: 110-121), por Asociación de Trabajadores del Estado/Central de los Trabajadores Argentinos (ATE/CTA) y potenciadas por el rol del estado en la generación del empleo público, esa conflictividad ahora parece reconocer otra configuración, más compleja, basada en el protagonismo y la combatividad desarrollada por otros sectores agrupados en la naciente Coordinadora Regional del Alto Valle, encabezada, entre otros actores sociales, por el sindicato ceramista. En este dinámico contexto se da un caso de administración obrera de una fábrica que por la magnitud de la empresa, la presencia inquietante de su conducción gremial al seno del sindicalismo regional, la solidaridad generada alrededor de otros conflictos locales o nacionales, la fuerza puesta en acción por los obreros en sus diversas estrategias elaboradas para sostener el conflicto, la resistencia y apelación durante dos años a la justicia, revela por sí solo la significatividad para instalar en los medios académicos y científicos el tema de la resistencia de los obreros de la cerámica Zanon (Favaro y Aiziczon, 2003: 2-3).

En la provincia circulan una serie de relatos que van forjando y fortaleciendo la imagen de Neuquén como un lugar cuya especificidad está marcada por la capacidad de lucha y movilización de un sector importante de la sociedad, organizado en diferentes colectivos sociales. Estos relatos encuentran su fundamento en el modo particular en que se vivió y resistió los duros años de la dictadura, momento a partir del cual comienza a gestarse una

dinámica muy específica en la sociedad neuquina, y las alianzas estratégicas de los distintos actores en diferentes momentos se presentan como la base de su capacidad de movilización y reacción (Mombello, 2000: 2). En ese sentido, la apelación a la memoria de esta historia local, aunque fragmentaria, actúa como matriz sobre la que se interpretan tanto los hechos como las articulaciones del presente. Del mismo modo las múltiples lecturas del pasado reciente pueden producir el efecto tanto de legitimar como de deslegitimar las acciones de los distintos colectivos sociales. A nivel local la memoria de la represión gravita fuertemente en las narrativas de los actores sociales más importantes, representados por sindicatos y gremios, la Iglesia católica y los organismos de derechos humanos. Estos colectivos cuentan con una historia importante gestada en los años de la última dictadura militar. Por aquel tiempo desarticulada toda forma de organización social, militantes gremiales y también político-partidarios se suman e integran con los organismos de derechos humanos, los que tienen un alto grado de protagonismo y contaron con el amparo y respaldo de la Institución. La cabeza de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) local fundada en 1976 era la autoridad máxima dentro de una diócesis: Jaime De Nevares. Este respaldo resulta fundamental para la reorganización y sostenimiento de las redes solidarias fragmentadas y violentadas por la dictadura de 1976 (Mombello, 2000: 1-3).

Es importante destacar en los últimos años el rol de la universidad en la generación de otros ámbitos de discusión, análisis y agitación cultural, que se traduce en el sostenimiento y concreción de cátedras libres tales como la de Derechos Humanos, la Ernesto "Che" Guevara, la Don Jaime Francisco de Nevares y la de Estudios Sindicales Agustín Tosco. La propuesta también se visualiza en la serie de cursos de capacitación y talleres de reflexión sistematizados en el marco del programa La Universidad en el Barrio¹. Por otra parte, en el ámbito de la casa de estudios se desarrollan los encuentros de Cultura, Sociedad y Política con talleres, conferencias y debates sobre identidad, justicia, movimientos sociales, representación política, desigualdad, democracia, en los que participan representantes de la reflexión crítica nacional y sectores involucrados de la comunidad. Conjuntamente con la CTA, la Secretaría de Extensión organiza en el ámbito de la universidad los Encuentros Regionales que preparan y se articulan con los Encuentros Nacionales por un Nuevo Pensamiento en la Argentina.

Gran parte de las movilizaciones y luchas en las calles² tienen como referencia a las organizaciones sindicales, ya que los partidos mayoritarios, a excepción de las agrupaciones de izquierda, se encuentran ausentes e incapacitados para rediseñar sus vínculos con los nuevos referentes sociales. En este sentido, son los gremios estatales nucleados en ATE los que muestran la mayor capacidad de resistencia y poder de convocatoria³. Aunque en el plano ideológico no puede plantearse homogeneidad en su dirigencia, sus acciones concretas muestran una consecuente presencia en la reivindicación y luchas por la defensa de sus derechos sectoriales y una destacada participación en los diferentes manifestaciones de protesta que se despliegan no sólo en la capital sino también el interior de la provincia. Sin descalificar las tradicionales formas de contestación social o sólo subrayar la novedad de otras, la lucha parece girar alrededor de los "sin": sin trabajo, sin vivienda, sin tierra, sin cobertura social, sin... (Quintar, 1997: 1-11). En esta categoría colocamos a los excluidos de sus derechos civiles y sociales básicos. Son los desocupados o los beneficiados por programas de empleos transitorios (Servicios comunitarios, Trabajar, "Forestar"). Se trata de un nuevo asistencialismo, contracara del modelo de acumulación de capital vigente, y es el problema central de la sociedad. A fines de 1995, durante la última parte de la anterior gestión del gobernador Sobisch, se pone en marcha el plan de subsidios a los desocupados con la ley 2128, una especie de seguro de desempleo cuya instrumentación genera renovados conflictos por la depuración de padrones y suspensión o restricción coyuntural de fondos. Los cortes de calles, mecanismo usado toda vez que se suspende el subsidio, en algunas oportunidades son utilizados como instrumento de presión por los vecinalistas a cambio de anotar a los involucrados en las listas de espera. En estos casos los referentes barriales para determinar el criterio de inclusión de beneficiarios incentivan los actos de protestas⁴. No obstante, cabe recordar que el piquete y los cortes que tienen su antecedente en el Santiagazo de '93 hacen sus primeros pasos en Neuquén cuando los obreros despedidos de la represa Piedra del Anquilla cortan la ruta nacional en el área de la localidad de Senillosa cercana a la capital neuquina. Este es un momento clave del conflicto social y la puesta en marcha de los piquetes como consecuencia de la privatización de YPF en áreas petroleras de Cutral Co y Plaza Huinul, con los resultados por todos conocidos.

En este orden, un interesante ejemplo de confluencia de intereses es la conflictividad derivada de la movilización en defensa de la educación pública y gratuita. Se inicia en 1995 con la toma por casi tres semanas de la Universidad Nacional del Comahue en resistencia a la sanción y aplicación de la Ley de Educación Superior. Continúa con las huelgas docentes de 1996 y 1997 enmarcadas en el proceso de desalarización –los sueldos fueron reducidos por encima de las normas legales y jurídicas⁵– y el rechazo a los intentos de aplicación de la Ley Federal de Educación⁶. Estas acciones alcanzan un significativo consenso en la sociedad, donde padres y estudiantes acompañan el reclamo docente y confluyen en cortes parciales de calles y de rutas hasta llegar al corte de la ruta 22, a la altura del puente carretero que une Neuquén con Río Negro, y la ruta 7, que lo comunica con Centenario. Esta movilización, que cuenta con el apoyo de la población, prácticamente aísla a la ciudad de Neuquén por tres días, y se potencia al incorporarse parte de la comunidad cutralquense que venía de la experiencia de la primera “pueblada” y que en esta oportunidad sostiene un enfrentamiento violento con gendarmería nacional. El desalojo del puente, y la represión generalizada en las localidades petroleras por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, motivan nuevas reacciones. En varias localidades de la provincia se renuevan marchas y actos de protesta donde están presentes representantes de diversos sectores de la comunidad que repudian la modalidad de resolución del conflicto (Favaro et al., 1997: 13-27).

Neuquén está gobernada por un partido provincial hace cuarenta años. Esto se produce no sólo por la vocación de poder del Movimiento Popular Neuquino (MPN) sino también por el rol que acepta desempeñar la oposición, por lo menos la legislativa. El estado desarrolló hace más de dos décadas políticas de bienestar social, atendiendo prioritariamente la salud, la educación y la vivienda. Ello fue posible por las ventajas comparativas de la instancia local en la negociación con el poder central, en concepto de coparticipación, de aportes no reintegrables, y, fundamentalmente a partir de los años ochenta, de regalías hidrocarburíferas. La magnitud de la renta petrolera hace que hoy Neuquén, posiblemente en forma similar a otros estados petroleros, no se vea totalmente perjudicado por la ruptura de la convertibilidad. En efecto, en el contexto de la devaluación es una subinstancia beneficiada en parte porque sus ingresos se mantuvieron dolarizados (regalías por venta de petróleo y gas al exterior) o crecieron a un ritmo mayor (regalías por venta de combustible al mercado interno), mientras que los gastos se mantienen en los porcentajes pesificados. Además tiene los emprendimientos de Planta Mega (que separa gas seco de los líquidos que se transportan a Bahía Blanca), Destilería de Plaza Huincul (que procesa 120 mil m³ de petróleo mensual), Planta de Metanol (que utiliza hasta 1 millón de m³ por día), y la destilería de Fox Petrol en Senillosa (que procesa gasolina y obtiene combustibles y solventes). Y en el contexto de un fuerte debate se encuentra la puesta en marcha de Chihuidos II, a cargo del grupo Pescarmona, y la posible adquisición por parte del estado provincial de El Chocón. Actualmente es la sexta provincia exportadora luego de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Chubut y Santa Cruz. El año pasado exportó por más de mil millones de dólares, de los cuales el 92% es en petróleo y destilados. Tiene a Chile como el primer socio comercial que se lleva el 56% del total exportado por Neuquén, y luego le sigue Brasil, con el 20%. Por todo ello las regalías son más de la mitad del presupuesto provincial, hoy unos 600 millones sobre 1.100-1.300 de presupuesto. Actualmente las regalías solas cubren el 100% del salario estatal de más de 37.000 empleados provinciales.

No obstante, la reafirmación del modelo de expansión de sectores extractivos, con los que la renta queda fuera de la región, sumando al estancamiento de los productores y de las PYMES, provocan una compleja situación social a pesar de lo impresionantes que pueden lucir indicadores como el PBG provincial, que pasa del 22,1% en 1985 al 44,11% en 1995 y 66% en la actualidad. A pesar del crecimiento, la consecuencia social de este modelo es, entre otras, la pobreza estructural, con aumento de tasas de desempleo (1990: 6,6% y 2002: 20,9%) y subempleo (1990: 6,5% y 2002: 14,7%, datos del conglomerado urbano más importante, la capital y alrededores). El INDEC señala que estos conglomerados cada vez suman más pobres e indigentes, y en los últimos meses los Planes Jefes y Jefas de Hogar pasaron de 7.200 a 20.500 beneficiarios⁷. Siguen produciéndose migraciones desde el interior provincial y de otras provincias que aumentan la toma de tierras y asentamientos ilegales. Por lo tanto, es una provincia rica con población pobre, sin conseguir reconvertir a la economía estructurada alrededor de la renta estatal que otorga las regalías hidrocarburíferas. Esta situación se

reconoce también como fruto de las políticas nacionales, más aún teniendo en cuenta la fuerte incidencia del Estado nacional en este espacio y la vigencia de la ley de hidrocarburos de 1967.

UNA MARCA REGISTRADA: EL CASO DE ZANON

“Si les damos la fábrica ¿qué nos queda? Ser un desocupado más, mendigar subsidios, no poder llevar dignamente el pan a nuestras familias... No la vamos a entregar. Vamos a resistir” .
Raúl Godoy, secretario del sindicato

Son varios los casos actuales para ejemplificar la protesta social y de ocupación de fábricas. Entre los más difundidos podemos mencionar la Panificación Cinco, La Baskonia, Ingenio La Esperanza, Palmar, Roby, Brukman⁸, Fricader⁹, Zanon, etcétera. Algunas eligen el camino de la cooperativa, otras la gestión obrera y reclaman la estatización. Este es el caso de Zanon en Neuquén.

Los dueños de la cerámica son Luis Zanon y Luigi Zanon, padre e hijo, presidente el primero y vice el segundo en la empresa. Luis Zanon, de 82 años, llegó de Italia a los 28 años para instalar el parque de diversiones Ital Park, ubicado en una zona central de la ciudad de Buenos Aires, que funciona hasta la década del noventa cuando se produce un accidente que provoca la muerte de una joven de quince años¹⁰. Vinculado al menemismo, Zanon compra acciones en las privatizaciones de Aerolíneas y en los canales de televisión.

Durante la dictadura y la gestión de Martínez de Hoz, en el marco de la promoción industrial de 1977, que otorga subsidios y promociones a la instalación o crecimiento de plantas industriales, establece una empresa en Neuquén (1978-1979) con una inversión según sus propias afirmaciones de cien millones de pesos de la época. La fábrica funciona hasta hace aproximadamente dos años, cuando los dueños aplican rebajas salariales y despiden a cien obreros. Estos los acusan de “vaciamiento”, y cuando se dejan de pagar salarios comienza una huelga de 34 días y la ocupación del puente que une la provincia de Neuquén con la de Río Negro. La jugada más importante que hacen los dueños es apagar los hornos aduciendo que “era peligroso que los obreros los manejen sin supervisión”.

Los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) patrocinan a los trabajadores e inician una acción de amparo planteando que la empresa había hecho un “lock out ofensivo”. Así, los ceramistas ponen en marcha la fábrica a pesar de las presiones y acciones concretas de los dueños.

Los obreros de Zanon comienzan a recibir el apoyo de la comunidad neuquina y la solidaridad de diferentes organizaciones políticas y sociales –la banda de rock Bersuit Vergarabat, intelectuales como Petras y Bayer, asambleas barriales (las pocas que funcionan en Neuquén)¹¹, la CTA, el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD)– y comparten una estrategia común con Brukman.

Venden lo que producen, crean nuevos diseños, por ejemplo “El Obrero” que viene en cuatro colores y la línea “Mapuche”, con provisión de la materia prima por parte de los mapuches). Luego de 13 meses de gestión obrera preservando 270 puestos de trabajo, que este año incrementan a 310, con una producción que según los obreros supera los 100 mil m² por mes de cerámico y se comercializa a través del sello Rebelde y Esperanza, que pertenece a las Madres de Plaza de Mayo –diecisiete de ellas acompañaron con fuerza a los obreros en el intento de desalojo producido a comienzos de abril–, los trabajadores asignan 248 mil pesos en sueldos. Pagan el costo del transporte de los operarios que en su mayoría viven en Centenario, localidad cercana a la capital neuquina, el gas y la electricidad para mantener activos a los hornos, y adquieren los insumos. La empresa está trabajando en un 15% de su capacidad de producción. Los obreros presentan a la legislatura neuquina un proyecto de ley elaborado con los técnicos de la Universidad Nacional del Comahue para estatizar la cerámica. El objetivo es que el gobierno neuquino se haga cargo de la empresa, habida cuenta de la deuda que ésta mantiene con la provincia¹².

La deuda declarada por los empresarios de la Cerámica Zanon es de 75 millones de pesos/dólares y sus principales acreedores son bancos nacionales y extranjeros y el gobierno de la provincia, fuerte proveedor de fondos y subsidios a la empresa¹³. No obstante, los Zanon critican fuertemente al gobernador Sobisch porque "Publica páginas en los diarios anunciando inversiones y seguridad jurídica, pero nuestra planta está ocupada" (Río Negro, 2002[b]). La provincia viene comprando cerámicos, pagando sueldos atrasados y contribuyendo de algún modo a no involucrar a la policía de la provincia cuando la Jueza Norma Poza autoriza a los síndicos a tomar posesión y realizar un inventario de la planta.

En definitiva, el desalojo no se produce por la fuerte, consistente y solidaria participación de la sociedad neuquina, incluso de los trabajadores de la Cerámica Stefanni y Cerámica Neuquén, quienes paralizan sus fábricas para asistir y apoyar a Zanon. Se logra acordar nuevamente con la justicia un acta en la que quedan plasmados una vez más los argumentos de los obreros para mantener su fuente de trabajo, que es remitida a la justicia federal. De todos modos el futuro continúa incierto, pero éste es un triunfo más que muestra el tejido social construido por los ceramistas¹⁴, y también es alentador luego de lo sucedido con los obreros de Sasetru, en Sarandí, Avellaneda¹⁵.

Otro caso de administración de la empresa: se trata de los 48 empleados de la empresa de transporte El Petróleo que deciden no engrosar los índices de desocupación en Neuquén y forman una cooperativa para rescatar su fuente de trabajo. La empresa funcionó durante cuatro décadas y estuvo identificada con la realidad provincial, pues su base se encuentra en Cutral Co, área del petróleo neuquino y sede, junto con Plaza Huinca, de las puebladas de '96 y '97. Dicen los entrevistados: "La conformación de la cooperativa llevó mucho trabajo: asambleas, reuniones con los compañeros, juntar la gente, buscar asesoramiento... Después hicimos las elecciones de las autoridades y se conformó el consejo de administración... Tuvimos el apoyo de la CTA, que nos dieron una mano cuando estábamos solos, pero igualmente no dependemos de ningún sindicato. Ahora la cooperativa se maneja sola, con la asesoría de un contador y un abogado" (Scatizza y Barraza, 2003: 14-15).

No cobran sueldos. Todo se invierte en la cooperativa. Reciben la solidaridad de los habitantes de las dos localidades petroleras, quienes los proveen de bolsas de comida, y el estado provincial los ayuda con los 150\$ de subsidio. Tienen cuatro unidades que prestan servicio urbano, y piensan incorporar nuevas unidades e intentar cubrir media y larga distancia (Zapala/Neuquén; San Martín de los Andes/Neuquén y llegar hasta La Pampa) (Ibíd). En síntesis, las protestas aumentan o disminuyen en función de los cambios que hacen al sistema político más permeable o receptivo a las demandas de los grupos particulares. Si bien las elecciones nacionales no coinciden con las de esta provincia, el escenario electoral está presente y, aunque la ciudadanía tiene varias opciones, al no lograr unificar el repudio a la dirigencia tradicional, se desvanece el saldo en términos políticos del vigoroso estado de movilización "contestataria" (Bilbao, 2003: 4). En este contexto se inscriben las protestas laborales, con demandas puntuales que complejizan y complican la protesta sindical, contra la política económica del gobierno. Son protestas contra el sistema político que procesa el ajuste estructural, y por ello el fuerte contenido antipolítico de las acciones, en las que se denuncian y repudian los sistemas políticos locales y rechazan los partidos y organizaciones sindicales tradicionales.

Los interrogantes que nos planteamos son: ¿cuáles son los nuevos significados de la ciudadanía que se articula en las protestas? ¿Se alterará a largo plazo el significado tradicional de la ciudadanía social? (Farinetti, 2002: 137). ¿O se están escurriendo enfoques, estrategias, espacios de poder? Cada partido tiene su propia estructura de desocupados, faltan actores centrales en la fisura social de 2001, no hay líderes que expresen estas protestas en su intento de devenir en movimientos y organicen su articulación ¿No será que se articula rápidamente la clase dominante (Seoane, 2002: 42) porque no se pudo edificar una fuerza política de envergadura social sobre heterogéneos sectores sociales? (Bilbao, 2003: 4).

Neuquén, una provincia rica con muchos pobres, ofrece un escenario de la crisis, con fenómenos particulares como la administración obrera de una fábrica y movilización social y una población siempre dispuesta a plantear el conflicto. Esta sociedad heterogénea, con una

franja importante de sectores medios aunque en movilidad descendente, no elige cómo protestar, sino que protesta con los medios que tiene a su alcance y prueba lo que tiene eficacia, real o simbólica, aprendiendo a actuar colectivamente a pesar de los atropellos del poder.

BIBLIOGRAFÍA

AA.VV. 2002 “La protesta social en perspectiva”, en *Entrepasados. Revista de Historia* (Buenos Aires) N° 22.

Auyero, Javier 2002 “Los cambios en el repertorio de la protesta social en la Argentina”, en *Desarrollo Económico* (Buenos Aires) N° 166.

Barbetta, Pablo 2002 “Algunos sentidos de la protesta social del 19 y 20 de diciembre”, en *Entrepasados. Revista de Historia* (Buenos Aires) N° 22.

Bilbao, Luis 2003 “La alternativa política que no fue”, en *Le Monde Diplomatique* (Buenos Aires) N° 46.

Delamata, Gabriela 2002 “De los ‘estallidos’ provinciales a la generalización de las protestas en Argentina”, en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 182.

Farinetti, Marina 2002 “La conflictividad social después del movimiento obrero”, en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 182.

Favaro, Orietta et al. 1997 “La conflictividad social en Neuquén. El movimiento cutralquense y los nuevos sujetos sociales”, en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 148.

Favaro, Orietta 2002 “Neuquén. La sociedad y el conflicto”, en *Realidad Económica* (Buenos Aires) N° 185.

Favaro, Orietta y Aiziczon, Fernando 2003 “Al filo de la cornisa. La resistencia obrera en la fábrica Zanon. Neuquén”, en *Realidad Económica* (Buenos Aires), en prensa.

Gabetta, Carlos 2003 “Economía de guerra”, en *Le Monde Diplomatique* (Buenos Aires) N° 45.

La Mañana del Sur 2003 (Neuquén) varios números.

La Mañana del Sur 2002 (Neuquén) varios números.

La Mañana del Sur 2000 (Neuquén) 18 de octubre.

Lobato, Mirta Zaida 2002 “Lo nuevo y lo viejo en la protesta social”, en *Entrepasados. Revista de Historia* (Buenos Aires) N° 22.

Mayer, Adriana 2002 “A pesar del boicot empresario crece la experiencia autogestionaria. Zanon sin dueños se presenta en sociedad”, en *Página 12* (Buenos Aires) 17 de junio.

Mombello, Laura 2000 *Violencia y derecho. Acerca de las formas de hacer política en Neuquén: propuestas para un debate* (Mar del Plata) mimeo. Ponencia presentada en IV Congreso Argentino de Antropología Social “Identidad disciplinaria y campos de aplicación”.

Quintar, Aída 1997 *Los excluidos como protagonistas políticos en la Argentina contemporánea* (Buenos Aires) mimeo. Ponencia presentada en Seminario Taller UBA-CEUR “Ciudades y Regiones en la Argentina de los ‘90 ¿quiénes ganan y quiénes pierden en el proceso de ajuste?”.

Río Negro 2003 (Roca) Abril, varios números.

Río Negro 2002[a] (Roca) Diciembre, varios números.

Río Negro 2002[b] (Roca) 15 de junio.

Scatizza, Pablo y Barraza, Fernando 2003 "Trabajadores por naturaleza", en La Mañana del Sur (Neuquén) 23 de marzo.

Seoane, José 2002 "Argentina: la configuración de las disputas sociales ante la crisis", en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) N° 7, Junio.

NOTAS

* Doctora en Historia. Profesora Titular de Historia Argentina Contemporánea e Investigadora de la Universidad Nacional del Comahue y del Centro de Estudios Históricos de Estado, Política y Cultura (CEHEPYC), Neuquén, Argentina.

1 Ambas actividades dependen de la Secretaría de Extensión de la Universidad, siendo sede y ejecutora de la segunda la Facultad de Humanidades.

2 Las marchas, los cortes de calles con quema de cubiertas y el estallido de bombas de estruendo de estatales y docentes son un paisaje habitual en la localidad neuquina.
3 Con motivo del tratamiento de distintas leyes que intentan profundizar el ajuste, los gremios estatales logran movilizar distintas agrupaciones sociales y políticas hacia la sede del poder legislativo, provocando por un lado la interrupción de las sesiones, y por otro paralizando el centro de la ciudad. En algunas oportunidades la radicalización de la lucha excede el reclamo original, registrándose hechos de violencia y fuerte represión policial.

4 "Para poder cobrar 160 pesos hay que demostrar capacidad de lucha. Se da prioridad al vecino que lucha, porque si hay 400 anotados en lista y se movilizan 50... ¿A quién le damos prioridad?" (La Mañana del Sur, 2000).

5 Hay que tener en cuenta que en Neuquén existía un plus del 40% por zona desfavorable que en el marco del ajuste fue reducido a la mitad. A partir de 1995, este tema nuclea la demanda de los estatales y es permanentemente reivindicado en todas las protestas. En el actual contexto electoral, el gobierno local decide el reintegro del 20% de zona desfavorable que había formado parte de su campaña en 1999, recorte realizado durante la última gestión de Felipe Sapag en el marco de la crisis fiscal de la provincia.

6 Los reiterados reclamos y el enfrentamiento entre el gremio docente y las autoridades de educación en la provincia dan lugar a la suspensión de la aplicación de la Ley Federal por un decreto del Poder Ejecutivo en septiembre de 2000.

7 Los subsidios de los Planes Jefes y Jefas de Hogar son el instrumento por medio del cual el gobierno nacional intenta mostrar una reducción del desempleo. Así, el INDEC recientemente ratifica un 18% de desocupación en el conglomerado Neuquén que incluye una localidad vecina a la capital, Plottier. Los desocupados y subocupados, de este modo, suman un número de personas (41.000) equivalente a la población de otras dos localidades neuquinas, conocidas por los hechos de '96 y '97: Cutral Co y Plaza Huincul (Río Negro, 2002[a]: 2-3).

8 Al momento de escribir este artículo la policía desaloja la planta textil Brukman, que se encuentra en el barrio porteño de Once, luego de noches de mucha tensión y con la presencia de representantes de los distintos sectores intentando negociar la continuación de esta fábrica, autogestionada por sus 57 trabajadores. La empresa de Jacobo Brukman, que abandona la textil con la crisis económica, es recuperada por los trabajadores (2001), quienes continuaron con la producción de prendas.

9 La planta frigorífica Fricader de J. J. Gómez en Río Negro se encuentra funcionando por los trabajadores en el marco de continuas gestiones con autoridades provinciales y nacionales y la idea de los operarios de convertirla en cooperativa.

10 En agosto de 1990 un carrito se desprende de su soporte y provoca la muerte de Roxana

Alaimo y heridas a Karina Benítez. Luego de unos meses el parque es clausurado por el entonces intendente de Buenos Aires, Carlos Grosso. Se tarda seis años para lograr la condena civil, y la justicia determina que la empresa debe indemnizar a la madre de la joven con cien mil dólares.

11 Contrariamente a algunas ciudades, en particular Buenos Aires, en Neuquén, casi no hay asambleas barriales fuera de las que organiza el partido provincial, ni marchas de cacerolas. El MPN provincial controla, por ejemplo, en la ciudad capital, todas las comisiones vecinales de los principales barrios. El clientelismo se postula como dominante en el mundo popular de los barrios más pobres de los alrededores del casco urbano de Neuquén.

12 Del expediente del concurso preventivo surge que Zanon tiene 500 acreedores, entre los que figuran el abogado Luis Moreno Ocampo y el Banco Interfinanzas Internacional, con sede en las islas Caymán, que les prestó 20 millones de dólares.

13 Según el informe de Alberto Croceri elaborado para el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP) de la provincia de Neuquén, se le otorgan a la empresa 5.700.000 pesos antes de la devaluación (Río Negro, 2003: 14-15).

14 Los obreros de Zanon tienen el apoyo de Naomi Klein, quien visitó la empresa recientemente. Se trata de la autora del libro *No Logo*, que se transforma en el texto de cabecera de los grupos antiglobalización. Esta periodista y activista comprometida con la democracia participativa y alineada contra las multinacionales comenta que “Zanon es conocida internacionalmente como símbolo y ejemplo de un movimiento nuevo”.

15 Los obreros de Sasetru ponen a producir la empresa luego de 19 años de permanecer cerrada. Hacen fideos para los comedores y cuentan con el apoyo de los concejales de Avellaneda, que por una ordenanza les permiten producir como cooperativa, y progresivamente pasan a ser dueños de la maquinaria. No obstante, como se sabe, el 26 de marzo de 2002 800 efectivos policiales, helicópteros y gases lacrimógenos, desalojaron la planta.

CAPÍTULO 5

Debates metodológicos sobre los estudios de conflicto y movimientos sociales

Algunos ejes teóricos-metodológicos en el estudio del conflicto social

Inés Izaguirre*

Ubicaré contextualmente mi postura metodológica. La recuperación de niveles aceptables de tasas de ganancia y de acumulación en la economía capitalista mundial desde la década del ochenta (Dumenil y Levy, 2000) que en varios países de América Latina fueron precedidos por procesos de fuertes dictaduras militares con el consiguiente retroceso de los movimientos obreros y de izquierda, unido a la simultaneidad de las caídas de varios regímenes socialistas, y a la penetración del capital en nuevos y vastos territorios (Astarita, 2001), configuran lo que podríamos llamar una nueva, y por lo tanto no conocida en todas sus dimensiones, etapa de expansión del capitalismo a nivel mundial.

Si decimos que se trata de una nueva crisis de expansión capitalista no conocida en todas sus dimensiones, habrá que prestar mucha atención a los ejes de su desarrollo, caracterizado por: el predominio del capital financiero especulativo sobre el capital productivo, con una magnitud de concentración de capital históricamente inédita; el desarrollo de formas hegemónicas de dominación despóticas, correlativas del alto grado de concentración y centralización del capital, si bien desde el 11 de septiembre de 2001 ha comenzado a insinuarse una fractura en su interior, que en nuestro país se ha hecho nítida a partir del 20 de diciembre; la intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo y crecimiento de la superpoblación relativa a niveles desconocidos hasta ahora, que se ha traducido en el empeoramiento de las condiciones de vida de las masas trabajadoras y explotadas; la intensificación y extensión de las contradicciones del modo de producción, en el cual, en relación a la economía planetaria, los grandes territorios de África y América Latina resultan –en promedio– los más perjudicados; el crecimiento absoluto y relativo de la población mundial, que en las dos décadas que van del '70 al '90, creció un 50 % en términos absolutos, en tanto la población urbana de las regiones menos desarrolladas se duplicó.

Definido así el contexto de nuestra problemática, sabemos que el incremento del conflicto social en el territorio latinoamericano desde mediados de la década del noventa tiene una base objetiva, donde se hacen presentes por primera vez sectores sociales cuya existencia sólo aparecía en las categorizaciones censales.

El primer eje sobre el que entiendo debe situarse cualquier análisis del conflicto social es la revalorización y desarrollo del cuerpo teórico del marxismo, que históricamente ha sido el primero en dar cuenta del movimiento de la sociedad capitalista y el único capaz de construir desde el conflicto un lugar de observación crítico, con el cual producir conocimiento. Esta mirada exige hoy incorporar el conocimiento de los avances teórico-empíricos de otras ciencias que, proviniendo de otros campos del conocimiento, permiten iluminar y desarrollar las enunciaciones generales de la teoría. Esta incorporación de conocimiento es particularmente necesaria en el caso de la teoría de la lucha de clases, que tiene desarrollos importantes incluidos los de Marx¹, Engels, Lenin, y Gramsci, pero permanece todavía demasiado próxima a la materia investigada.

En este punto cabe precisar que cuando hablamos de clases, no hacemos referencia a conjuntos clasificatorios de individuos que pueden agruparse estadísticamente a partir de un conjunto de variables, si bien estos agrupamientos nos pueden dar una aproximación a la estructura de las clases (en sí) en un país y en un momento determinados. Un abordaje metodológico fundado en los principios básicos de la teoría remite a las clases como conjuntos humanos que, ubicados en posiciones distintas en las relaciones de propiedad, luchan entre sí y al interior de sí, entre fracciones, en función de intereses de todo tipo –económicos, políticos, teóricos, culturales en sentido amplio–; se alían entre sí y con fracciones de otras clases, o sea que la confrontación siempre se da entre alianzas que constituyen fuerzas sociales; que esas alianzas producen alineamientos, construyen poder y permiten el proceso de toma de

conciencia acerca de sí mismas y de sus antagonistas. En síntesis, las clases se constituyen permanentemente en sus luchas, en sus confrontaciones, o como diría Marx, se hacen clases para sí. De allí que ese deba ser nuestro observable principal, y de allí también que la teoría se llame de la "lucha de clases", no de las clases, y que los análisis clásicos del marxismo siempre refieran a procesos de lucha. Como se trata de relaciones sociales que nos atraviesan absolutamente a todos, lo sepamos o no, y dado que no estamos habituados a pensarnos en términos de relaciones sociales sino en términos clasificatorios, una de las dificultades que deberemos sortear es aprender a leer las confrontaciones de todo tipo como parte del proceso general de la lucha de clases (Cfr. Marín, 1982: Cap. 2-5).

El estudio del movimiento, la lucha y la confrontación siempre ha sido complejo, porque la influencia positivista en el campo del conocimiento en ciencias sociales se ha expresado muchas veces como el preciosismo de una contabilidad sin sujeto, o sea sin identidad social, y asincrónica –el mero predominio del número de individuos, sin historia– con la ventaja no menor de que evitaba por una parte el criterio de autoridad, que constriñó durante siglos la construcción de conocimiento científico, y rechazaba asimismo la enunciación ensayística de fenómenos cuyo soporte de sentido era alternativamente ideológico o dogmático. Pero al mismo tiempo impedía reconocer el contenido de las luchas, o sea los intereses de los sujetos concretos que confrontaban. Así como hace cinco siglos el poder de la Iglesia se ubicó en un lugar de autoridad indiscutida e indiscutible respecto de las ciencias de la naturaleza no humana, y costó sangre, guerras y siglos de sujeción intelectual y moral revertir ese dominio, la expansión capitalista financiera en años recientes requirió desde mediados de la década del setenta de la derrota, el retroceso o la cooptación objetiva de las izquierdas en el mundo, y en general de las clases subordinadas en la sociedad. Esta situación se ha expresado en el campo político-académico de las ciencias sociales con diversas variantes de maccarthysmo, es decir con la negación, la persecución, la devaluación y hasta el silencio de los que se animaron a disputar aquel poder. En este último caso ha sido la expresión residual de una confrontación mundial que duró cuarenta y cinco años, la llamada guerra fría, en la que el marxismo sintetizaba conceptualmente la figura del enemigo para las burguesías mundiales y transnacionales y constituyó el trazado de las fronteras ideológicas entre el supuesto mundo libre y el resto, y que, en países como Argentina produjo una verdadera guerra contrainsurgente con miles de muertos y desaparecidos².

El segundo eje que considero necesario reivindicar en la misma dirección del anterior, es la historicidad de los procesos sociales, de la que afortunadamente se ha hablado mucho y bien en este Seminario. A fuer de parecer una obviedad, se trata de una dimensión epistemológica del conocimiento de lo social y de la producción y reproducción de lo social, de la que no siempre el investigador tiene plena conciencia. Para quienes analizamos conflictos sociales, la historicidad supone distintos tipos de análisis: desde la consideración de la estructura social objetiva y subjetiva que constituyó a las distintas fracciones sociales y sujetos que luchan hoy, y que pueden tener una inserción similar en el proceso productivo, incluso como población sobrante, y no obstante tener comportamientos divergentes de difícil explicación, salvo que se tenga en cuenta que se constituyeron en procesos distintos, en confrontaciones distintas. Por la otra, la consideración de esas subjetividades diferentes que, según haya sido aquel proceso social, estarán en distintos estadios de constitución de su autonomía.

En este terreno se asienta el problema teórico-metodológico de la periodización de los conflictos sociales, que constituye en sí mismo una de las dimensiones explicativas del cambio social. En síntesis, tratar de entender el momento social que atravesamos, implica conocer su génesis.

El tercer eje que, teniendo en cuenta los anteriores, es esencial al análisis de la conflictividad social mirado desde la perspectiva de las fracciones subordinadas, remite a su relación con el orden social dominante.

En una primera matriz de doble entrada, encabezada por el tipo de fracciones en lucha, deberíamos distinguir entre las luchas contra el despotismo de un régimen dominante o hegemónico, que limita, excluye, reprime, y en las que cada fracción busca en forma permanente crear las condiciones de igualdad en la toma de decisiones para todos y cada uno y que denominaremos luchas democráticas; y las luchas que buscan cambiar el orden

social que produce y reproduce la desigualdad y las diferencias o sea cambiar las condiciones por las que una parte de la especie humana somete y expropia a la otra, a las que llamaremos luchas anticapitalistas, revolucionarias o socialistas.

La complejización de esta matriz puede ser muy alta. Primero, cuando se combinan estos dos tipos de lucha con los tres ámbitos clásicos de las luchas de clases: económico, político y teórico-cultural-ideológico. Segundo, cuando hay divergencia entre las acciones de las fracciones o movimientos que llevan adelante por ejemplo un tipo de lucha democrática y la conciencia de esos mismos grupos sobre sus acciones, que creen por ejemplo, estar haciendo la revolución. Esta contradicción entre las acciones objetivas y la subjetividad de quienes las llevan adelante produce confrontaciones que a veces son difíciles de explicar. Tercero, la situación inversa, cuando las fracciones que luchan, no son necesariamente las más subordinadas, e incluso pueden ser objetivamente revolucionarias pero tienen una conciencia parcial o deformada del resultado de sus acciones, y sus metas sólo emergen en el análisis de la trayectoria de sus alineamientos.

Tenemos así una matriz de doce casilleros o posibilidades de tipos y ámbitos de las luchas de las diversas fracciones subordinadas, en su dimensión objetiva y subjetiva, en el proceso de constitución de su autonomía, cada una de las cuales merece un abordaje específico, pero teniendo en cuenta que un mismo proceso de lucha tiene necesariamente valores en cada uno de los casilleros, y que en cada caso habrá que encontrar los observables e indicadores³.

Cuadro 1

Matriz de tipos de luchas de las fracciones subordinadas y su relación con el orden social dominante

Tipos de Luchas	Luchas democráticas por la igualdad en la toma de decisiones		Luchas socialistas por el cambio del orden social que reproduce la desigualdad	
	Acciones objetivas	Representaciones subjetivas	Acciones objetivas	Representaciones subjetivas
Lucha económica	1	2	3	4
Lucha política	5	6	7	8
Lucha teórica, cultural, ideológica	9	10	11	12

Fuente: elaboración propia.

Es importante advertir que para tener conciencia de la lucha por la igualdad es necesario que los hombres hayan incorporado las estructuras lógicas, epistemológicas y afectivas que hacen posible percibir a los otros como iguales. Este es el nivel en que se hacen visibles y posibles las relaciones de cooperación, en el marxismo y también en la epistemología genética. En este estadio sociogenético comienza a ser posible concebir y objetivar las luchas como luchas de clases, y, a nivel del individuo, o sea en la psicogénesis, es posible el proceso de construcción del juicio moral. No de una moral heterónoma, de subordinación a la autoridad o de infantilización, sino de autonomía. (Marín, 1995) Es un estadio de descentramiento. El juicio moral sólo es posible entre iguales, nos muestra Piaget (1984), y es el mismo estadio en que

se hace posible el pensamiento crítico, que nace siempre de la discusión entre iguales. En ambos casos es central la existencia de reglas: “la lógica es la moral de la inteligencia. La moral es la lógica de la acción”. Claro que, recordemos, el pensamiento siempre está retrasado respecto de la acción. Se puede ser autónomo en la práctica, en las acciones, y heterónimo todavía en la conciencia de ellas.

Siempre hay un desfase entre lo que se ha aprendido en la acción y la conciencia de ese aprendizaje. Hay cosas, situaciones, conductas propias y de los otros, que se han aprendido en la experiencia, pero a las que les falta la etapa reflexiva, que las transforma en conocimiento⁴. Un cuarto eje teórico-metodológico refiere a la necesidad de incorporar en el análisis del conflicto social en un territorio dado, el modelo de la guerra entre fuerzas sociales, o sea entre alianzas sociales en pugna, que está en la base de la teoría de la lucha de clases. Esto es independiente de que las confrontaciones se produzcan con armas materiales o morales. Aclaro en este punto que las confrontaciones sociales nunca se dan entre sujetos “desarmados”.

Estoy hablando de un modelo epistemológico donde la confrontación es la condición necesaria para el aprendizaje de sí mismo y del otro, no sólo del enemigo sino también de los aliados, los pares, los iguales, o sea para la toma de conciencia. Como había anticipado la teoría de Marx, y como ha verificado la epistemología genética en las últimas décadas del siglo XX, ese aprendizaje que confronta las ideas con la práctica, la teoría con la acción, se transforma en conciencia o sea en conocimiento, cuando se produce la reflexión posterior a las acciones. Esta localización teórica no es ingenua, ni dogmática.

Cuando hace tan sólo ocho años planteé en una reunión académica que el proceso de aniquilamiento habido en Argentina formaba parte de una guerra (Izaguire, 1995) no local ni nacional, sino de clases, una guerra civil contra una gran parte de la sociedad movilizada que luchaba por cambiar el orden social, confronté prácticamente con la mayor parte del público: unos porque afirmaban que lo que había ocurrido en Argentina era un genocidio que de un lado tenía a los monstruos de las FFAA y del otro simples ciudadanos aterrados, o que lo que había habido era una cacería y no una guerra; otros porque decían que lo que había habido era una guerra pero no civil, ni de clases, sino de aparatos armados –teoría de los dos demonios– y finalmente, muchos miembros de los organismos de derechos humanos decían que la teoría de la guerra estaba sustentada por los militares, y ellos, por razones políticas, no podían hacer lo mismo. Único argumento práctico, no teórico, que pude aceptar, aunque no estábamos hablando del mismo tipo de confrontación.

Hoy, afortunadamente, muchos han aceptado la pertinencia del concepto. Se trata también de un desarrollo en nuestros propios aprendizajes. Aquí debo señalar que la negación del tema de la guerra es un obstáculo ideológico, no epistemológico –Piaget lo llamará ideas tenaces (1984)– del cual son responsables las burguesías del mundo. Como dice Juan Carlos Marín, la burguesía niega y anatematiza la guerra, pero la hace. La guerra, devaluada ideológicamente y en la realidad, resulta algo malo para el sentido común dominante, por eso el poder se empeña en aparecer como que siempre lleva adelante la paz.

La imagen de la guerra negada está llena de representaciones que no tienen nada que ver con las guerras que conocemos. En general son representaciones muy antiguas de las guerras napoleónicas, combates a campo abierto con ejército de ambos lados. La censura no sólo llega al concepto de guerra. También alcanza a los que han reflexionado sobre ella: si uno menciona a Clausewitz, el máximo teórico burgués de la guerra, es mal mirado. Una vez que uno se despoja de esos prejuicios descubre la enorme utilidad del concepto de guerra en el análisis del conflicto social y de la lucha de clases. Descubre cuánto le aporta en la medición de esos fenómenos –quien inicia el conflicto, contra quien lo hace, con qué instrumentos, con cuántos cuerpos, qué cuerpos son, qué aliados gana o pierde, qué metas explícita, bajo qué consignas, en cuánto tiempo, en qué lugar, y finalmente qué resultados objetivos logra y con qué discurso los evalúan sus conductores. Descubrimos también cómo nos permite primero construir los datos, luego ordenarlos, periodizarlos y finalmente dibujar su trayectoria, es decir, descubrir la estrategia de los contendientes.

Esta confrontación, que es parte de la lucha de clases, no es la guerra de que nos hablaba la

burguesía. La guerra como actividad que precede y/o sigue a la política era un asunto entre iguales (Clausewitz, 1983, Foucault, 1992). En cambio, el enemigo de clase para la burguesía no es un igual. Es un otro in-humanizado, cosificado. Tengo la impresión de que a partir del 11 de septiembre de 2001 esta relación social entre desiguales se ha universalizado y naturalizado en el discurso del poder.

No sólo ha sido silenciado el discurso de la democracia, incluso de la “democracia de mercado”, sino que cada día se usan menos eufemismos para encubrir el ejercicio del poder despótico: su precariedad conceptual es tal que casi corresponde a un estadio primitivo de pensamiento mágico, con el Bien absoluto del lado del imperio y el Mal absoluto del lado del polivalente enemigo terrorista, llámese narcotráfico, armamento, petróleo, movimientos antiglobalización o gobiernos con propósitos de autonomía. En síntesis el neoliberalismo de guerra (como lo llama González Casanova, 2002) está dejando cada vez menos espacio real para la política y casi ninguno para la democracia. Es cierto que George W. Bush tiene dificultades para convencer al mundo y a sus propios ciudadanos de su mensaje militarista totalitario. Como dijimos antes, la guerra tiene mala prensa. Y los mismos procesos tecnológicos que facilitaron la gran concentración financiera permiten un rápido aprendizaje por parte de los “otros” acerca del carácter del poder opresor.

Todo indica que el capitalismo ha iniciado su crisis global, pero eso no significa que vaya a estallar ni que desaparezca rápidamente, como prefiguran algunas imágenes del campo de la izquierda, construidas más desde el deseo que desde la razón. Nosotros no podemos darnos el lujo de retroceder en el conocimiento al estadio del pensamiento mágico. Más bien debemos prepararnos para una larga lucha, cuyo resultado no está garantizado.

Para terminar diría que hay un quinto eje metodológico que debemos tener en cuenta cuando hablamos del conflicto social en nuestros países, y es la escala de los fenómenos de que estamos hablando: a cuántos afecta, en relación a qué totalidad, con qué densidad, en qué tiempos. Las leyes sociales no funcionan de la misma manera en situaciones de escala muy diversa. En estos tres días de seminario, en que hemos recorrido las luchas recientes en nuestros países, hemos comparado a veces situaciones en poblaciones que llegan escasamente a los 3 millones de habitantes, con otras que exceden veinte, cuarenta o sesenta veces esa cifra, o bien refieren a espacios y densidades muy diferentes. Las poblaciones, los tiempos y los espacios son magnitudes del orden de lo social que deben ser tenidas en cuenta. La cualidad de lo social en la realidad y en nuestra percepción, cambia por ejemplo con la posibilidad de visibilizar un mismo hecho muchas veces a lo largo de un mismo día o en un mismo espacio. Hace ya cinco siglos que el capitalismo comenzó a crear esas condiciones de observabilidad de ciertos fenómenos, y sigue haciéndolo. Nuestros instrumentos cognoscitivos son las estructuras lógico matemáticas presentes en cada sujeto, que nos permiten realizar operaciones con los observables de la realidad, mediadas por la acción, o práctica (Piaget y García, 1984), y que son reforzadas por la afectividad con que fueron incorporadas. Lo que restringe esa posibilidad de conocimiento para las fracciones subordinadas es el poder. De allí que la lucha contra la ignorancia en sus diversas formas —el silencio, el secreto, la banalidad y el fetichismo— forme parte de la lucha democrática por el conocimiento para todos, que sólo es posible en una relación de igualdad y autonomía.

Esa articulación entre las condiciones de la realidad y las estructuras del sujeto están en la base del descubrimiento de la ley del valor. El valor existe en la producción pero se objetiva y se realiza en el cambio: es una relación de fuerzas: fuerza de trabajo vivo/ fuerza de trabajo muerto (Marx, 1998). Y esa objetivación depende del número de veces que se produce y reproduce la relación de cambio entre equivalentes, que al ser mucho más frecuente, hace posible descubrir el cambio entre no equivalentes, cuya ocurrencia es mucho menos visible. Pero el valor existe también en la confrontación, que es una operación lógica —y una práctica— donde medimos (el valor de) nuestras fuerzas. El estudio del conflicto social nos ofrece una buena oportunidad para avanzar en este conocimiento.

BIBLIOGRAFÍA

Astarita, Rolando 2001 "Un análisis crítico sobre la tesis de las ondas largas", en Cuadernos del Sur (Buenos Aires) N° 32, Noviembre.

Clausewitz, Karl von 1983 De la guerra (Buenos Aires: Solar) Cap. I y II.

Coronil, Fernando 2000 "Naturaleza del poscolonialismo: del eurocentrismo al globocentrismo", en Lander, Edgardo (compilador) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (Buenos Aires: CLACSO/UNESCO) 87-111.

Dumenil, Gerard y Dominique Levy 2000 "El capitalismo contemporáneo, el neoliberalismo", en Kohen et al. Marx 2000. Claves de la Teoría Crítica (Buenos Aires) 43-60.

Foucault, Michel 1992 Genealogía del racismo (Buenos Aires-Montevideo: Altamira-Nordan).

González Casanova, Pablo 2002 "Neoliberalismo de guerra y pensamiento crítico", en La Jornada (México DF) 23 de septiembre

Izaguirre, Inés 1995 Pensar la guerra: Obstáculos para la reflexión sobre los enfrentamientos en la Argentina de los '70 (Rosario: FHyA-UNR).

Marín, Juan Carlos 1995 Conversaciones sobre el poder (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani) Cap. 1 y 4.

Marín, Juan Carlos 1982 La noción de polaridad en los procesos de formación y realización de poder (Buenos Aires: Cuadernos de CICSO) N° 8, Serie Teoría.

Marx, Karl 1998 (1867) El Capital (México: Ed. Siglo XXI) Tomo I, Cap. 1 a 4.

Piaget, Jean 1984 El criterio moral en el niño (Barcelona: Ed. Martínez Roca) Cap. III.

Piaget, Jean y Rolando García 1984 Psicogénesis e historia de la ciencia (México: Siglo XXI) Prefacio, Introducción y Cap. IX y X.

NOTAS

* Socióloga, Docente e Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires/CONICET.

1 Personalmente creo que el rigor y la claridad del análisis del 18 Brumario no ha sido superado, más aún si se piensa que se trata de un proceso que se estaba analizando al mismo tiempo que se desarrollaba. Se trata de un análisis empírico riguroso, aunque todavía permanece muy próximo a la realidad investigada.

2 Mirando desde Chiapas, como señala el Subcomandante Marcos, para el Tercer Mundo la guerra fría no fue sólo una estrategia política que culmina en 1989 con la caída de la URSS, sino una guerra caliente, librada en sus territorios y que él denomina III Guerra mundial, distribuida en 149 guerras localizadas que produjeron 23 millones de muertos (Coronil, 2000: 95).

3 Esta distinción entre ambos tipos de lucha es sumamente útil para el análisis de los llamados movimientos sociales: éstos siempre se mueven en el terreno de las luchas democráticas.

4 Desde el punto de vista del poder, en cambio, la flexibilidad de las fracciones dominantes o hegemónicas para absorber o responder a estos avances de autonomía de las fracciones subordinadas con el mínimo costo político y social suele denominarse gobernabilidad.

5 Día del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York.

A geograficidade do social: uma contribuição para o debate metodológico sobre estudos de conflito e movimentos sociais na América Latina

Carlos Walter Porto Gonçalves

ALGUMAS ADVERTÊNCIAS PRELIMINARES ACERCA DO TRABALHO INTERDISCIPLINAR

Uma das maiores dificuldades para os trabalhos de investigação de natureza interdisciplinar é superar a própria linguagem que nos constitui enquanto comunidades específicas de conhecimento como a geografia, a antropologia, a politologia, a sociologia, a economia e demais. Na constituição desses diferentes “territórios de conhecimento” conformaram-se verdadeiras “barreiras alfandegárias” com seus territórios de poder enquanto tais. O positivismo cuidou que cada fronteira, com a área específica de seu objeto de estudo, fosse delimitada de modo mais preciso e rigidamente possível. Vários autores (Santiago Castro Gómez, Aníbal Quijano, Edgardo Lander, Carlos Walter Porto Gonçalves entre tantos outros) vêm destacando que as ciências sociais são instituídas por e instituintes da sociedade contemporânea¹ e, assim, a superação da divisão do trabalho científico, tal como ela se apresenta, faz parte da luta pela superação das contradições dessa mesma sociedade.

Daí a importância dos trabalhos que se colocam para além das disciplinaridades instituídas. Observe-se que importantes contribuições teóricas para a compreensão dos processos sociais foram dadas por intelectuais que, a rigor, não cabem nessa divisão do trabalho científico, como Marx e Engels, Antonio Gramsci, Paulo Freire, Mariátegui, entre tantos e muitos outros, até porque, parafrazeando o próprio Marx, esses intelectuais não estavam simplesmente interpretando o mundo, mas tentando transformá-lo.

O que se procura aqui, considerando essas dificuldades e essas possibilidades, é contribuir para uma aproximação comum das ciências sociais desde a geografia.

DA GEOGRAFICIDADE DO SOCIAL

Há razões historicamente compreensíveis para a recusa de um diálogo mais próximo entre a geografia e as ciências sociais em sentido estrito, sobretudo para os cientistas do social que se colocam de um ponto de vista crítico. Embora o determinismo naturalista não seja uma invenção propriamente dos geógrafos, vide Montesquieu, encontrou na geografia um campo onde germinou tão amplamente que o que era inicialmente determinismo naturalista tornou-se, com o tempo, determinismo geográfico. Essa redução naturalista tem sido um dos principais obstáculos ao necessário diálogo entre essas disciplinas. Há outros, é claro, como o privilégio dado ao tempo em relação ao espaço na tradição do pensamento ocidental que colonizou corações e mentes (Porto Gonçalves, 2002), assim como a instrumentalização do saber geográfico pelo colonialismo e pelo imperialismo por meio da geopolítica.

Várias foram as conseqüências desse divórcio entre a geografia e as ciências sociais, entre os quais destaco, por sua importância nas questões que hoje se apresentam para superar os impasses teóricos e políticos que atravessamos: não termos conseguido dar uma solução adequada ao significado da natureza no devir social, prisioneiros que ficamos de um pensamento eurocêntrico onde natureza e sociedade são termos que se excluem reciprocamente ou são pensados numa relação de causalidade unilateral seja da natureza para a sociedade (naturalismo), seja da sociedade para a natureza (antropocentrismo); e ignorarmos a dimensão espacial, na sua materialidade historicamente constituída. Enfim, não consideramos devidamente a geograficidade do social.

Essa geograficidade deve começar, portanto, considerando o espaço geográfico enquanto dimensão constitutiva do social, recuperando, inclusive mas não exclusivamente, a natureza no corpo da análise sociológica (Coronil, 1997; 2000). A recuperação do espaço geográfico e da natureza na análise social deve, todavia, considerar todo o legado crítico das ciências sociais ao naturalismo bem característico do darwinismo social de corte spenceriano, inclusive nas suas atualizações mais recentes, como a sociobiologia. Assim, acautelemo-nos, o esforço

necessário para recuperar a natureza e o espaço geográfico² na análise social deve se manter longe de qualquer redução naturalista.

Partimos do pressuposto de que não existe sociedade a-geográfica assim como não existe espaço geográfico a-histórico. Assim como todo o espaço geográfico está impregnado de historicidade, a história está, sempre, impregnada de geograficidade. “A expressão, por certo, causa um certo estranhamento, embora seja natural dizer-se que o espaço que vivemos está impregnado de história. É como se fosse natural falar da historicidade do espaço geográfico e não de uma geograficidade da história. Poderíamos, à guisa de provocação epistemológica, afirmar que se a história se faz geografia é porque, de alguma forma, a geografia é uma necessidade histórica e, assim, uma condição de sua existência que, como tal, exerce uma coação que, aqui, deve ser tomada ao pé da letra, ou seja, como algo que co-age, que age com, é co-agente” (Porto Gonçalves, 2002). Afinal, o espaço geográfico é constituído pela relação que os diferentes seres estabelecem entre si na sua materialidade. A centralidade que a espécie humana adquire na conformação do espaço geográfico decorre, entre outras razões, desse atributo natural de a espécie humana ser a natureza tomando consciência de si própria. Somos, assim, uma corporeidade que existimos por meio da imaginação, do imaginário, da representação, animal simbólico que somos. A geograficidade é uma dimensão necessária de toda sociedade. É preciso considerar toda a riqueza dessa expressão na medida que se trata de “pensar el espacio en términos que integren su significado socialmente construido con sus propiedades formales y materiales” (Coronil, 1997: 28).

Toda sociedade é um modo próprio de estar-junto (proxemia) e esse estar-junto é, ao mesmo tempo, simbólico e material. Nomear e fazer são atributos distintos, mas indissociáveis, de nossa espécie. No entanto, há a possibilidade, sempre presente, de se falar (nomear) sobre o mundo como se não fôssemos do mundo, desse mundo. A relação com os demais seres da natureza é uma condição de existência de toda sociedade e nenhuma sociedade animal, inclusive a humana, pode prescindir dessa condicionalidade.

Nossas limitações biológicas³, como a de dependermos de estruturas de proteção primárias, como a família, até que possamos ganhar maior autonomia que, diga-se de passagem, nunca é absoluta, nos faz sermos sociais, e o fazemos enquanto espécie humana de um modo sempre próprio, diferente, mesmo sendo da mesma espécie biológica. Diferença radical que faz da diversidade sociocultural um dos maiores atributos da espécie humana e, pode-se dizer, patrimônio da humanidade enquanto tal.

A geografia ganha aqui uma qualidade importante na medida que a diferença, esses diferentes modos próprios de estar-juntos –diferentes modos de nomear/fazer– investem o mundo de significações, emprestam sentido à vida, sem o que o mundo não é mundo. A espécie humana não só bebe água como diz água, ritualiza-a, sacraliza-a, idolatra-a, estetiza-a, cientifica-a. Nossa corporeidade biológica nos impele a buscar fora de nós mesmos o alimento, inclusive a água. Deste modo, o trabalho, o fazer, se impõe, embora não façamos a água, o ar, a terra, o fogo sem os quais não somos, não vivemos. A palavra água não sacia a sede, assim como o conhecimento científico-tecnológico, ou qualquer outro conhecimento, não faz o petróleo, o carvão, a água, a fotossíntese⁴.

A materialidade do espaço geográfico é, sempre, sign-ificada, de-sign-ada, posto que é, sempre, apropriada, até mesmo pela palavra. Os homens só se apropriam do que faz sentido para suas vidas e esse sentido é, sempre, criação social, e não das coisas em si e por si mesmas. Afinal, dar nomes próprios já é se apropriar e, assim, partilhar em comum um espaço de existência, um espaço de significações, uma comunidade de destino. O que se oferece à apropriação –o espaço-que-aí-está– implica que haja uma ação no sentido de se apropriar dele que, por sua vez, depende da correlação de forças entre os agentes. Não olvidemos que o espaço-que-aí-está enquanto espaço objetivado –habitat– está, também, in-corporado habitando os corpos de cada um e de todos –habitus (Bourdieu, 1989).

Deste modo, é admissível que uma sociedade que constitui suas relações por meio do racismo, tenha em sua geografia lugares e espaços com as marcas dessa distinção social: no caso brasileiro, a população negra é francamente majoritária nos presídios e absolutamente

minoritária na universidades; se uma sociedade se constitui com base em relações de gênero assimétricas, os diferentes gêneros não frequentarão os mesmos espaços da mesma forma: as mulheres sabem, numa sociedade machista, que não podem frequentar qualquer lugar da cidade a qualquer hora do dia; se uma sociedade se constitui a partir de relações de produção que canalizam o excedente (que bem pode ser a mais valia) para um dos pólos da relação, sua geografia acusará “bairros ricos” e “bairros pobres” ou “países pobres” e “países ricos”. É importante assinalar que essas diferentes configurações espaciais se constituem em espaços de conformação das subjetividades de cada qual.

Enfim, há toda uma série de sujeitos sociais cuja compreensão da sua própria natureza sociológica implica considerar o espaço e a natureza –os camponeses, os indígenas, os afrodescendentes (com seus palenques, na Colômbia e na Venezuela, e seus quilombos no Brasil), os ecologistas, os moradores, os jovens-da-periferia (hip hop)⁵, para não dizer do próprio operariado, cuja constituição enquanto classe social teve muito a ver com os bairros proletários enquanto espaços de conformação da subjetividade (Porto Gonçalves, 1998). O próprio Estado Moderno pressupõe o espaço geográfico por meio do território.

SOCIEDADE E (É) TERRITÓRIO

Sociedade e espaço não são dimensões que se excluem ou que se precedem lógica ou ontologicamente. Uma sociedade não se organiza primeiro para depois constituir o seu espaço geográfico ou vice-versa. Toda sociedade ao se constituir enquanto tal constitui seu espaço geográfico e este “... es tanto el producto de, como la condición de posibilidad de las relaciones sociales. Como una relación social, el espacio es también una relación natural entre sociedad y naturaleza a través de la cual la sociedad mientras se produce a sí misma transforma y se apropia de la naturaleza” (Coronil, 1997: 28).

Toda sociedade ao se constituir a si mesma constitui seu espaço conformando, assim, seu território. Deste modo, o território não é uma substância externa, nem tampouco uma base sobre a qual a sociedade se erige, como queria Hegel. Ao contrário, o território é constituído pela sociedade no próprio processo em que tece o conjunto das suas relações sociais e de poder⁶.

Assim, é preciso considerar, sempre, a tríade –Território, Territorialidade e Territorialização. Um mesmo espaço apropriado e constituído por uma determinada sociedade contém, sempre, territorialidades distintas (Porto Gonçalves, 2001[b]).

Antonio Gramsci, em seu seminal artigo A Questão Meridional, desenvolveu o conceito de “bloco histórico” tendo um claro sentido geográfico ou, se se preferir, regional, e melhor seria chamá-lo “blocos regionais (historicamente construídos) de poder”, para compreender a formação do Estado Italiano a partir da aliança entre o Bloco Histórico (de poder) do Norte e o Bloco Histórico (de poder) do Sul, numa circunstância histórica particular da história geográfica italiana. O Estado, observe-se, não é um ente superestrutural que prescinde de um território. A dimensão territorial salta à vista nos dias que correm, exatamente quando se vê que o Estado (territorial) entra em processo de redefinição com o realinhamento dos diferentes grupos/classes/estamentos que se fizerem por meio dessa territorialidade que é o Estado Nacional. Aníbal Quijano (2000[a]) tem chamado a atenção para o fato de que hoje estamos diante de Estados que des-nacionalizam e se des-democratizam⁷, sobretudo na América Latina, ao serem capturados por setores/grupos/classes que se fazem por meio de uma outra territorialidade que não o Estado-Nação nesta quadra histórica onde se constitui um novo padrão de poder mundial (Império/Imperialismo).

É interessante observarmos as análises que Quijano faz dos Estados na América Latina e Caribe onde destaca que, desde o início, os elementos da colonialidade se mantiveram mesmo com o fim do colonialismo, na medida que uma minoria branca é que se controla o poder no interior das diferentes formações dos estados nacionais. Mais interessante ainda é quando verificamos, ainda em companhia de Aníbal Quijano, que após um curto período de ampliação da participação de outros e maiores setores da sociedade, entre 1930 a 1970 (com as variações anteriores da Argentina, Uruguai e Chile), se vê, nos anos 80 e 90 o Estado ser

capturado por uma nova configuração de poder mundial quando os passam a ser desterritorializados e comandados cada vez mais por uma dinâmica ditada por uma outra territorialidade (Império/Imperialismo) o que quer dizer por setores/classes/estamentos/grupos que se fazem por meio de outra territorialidade que não o Estado-Nação. Mais interessante ainda é observar que essa des-nacionalização, essa des-democratização, vem ensejando a emergência à cena política exatamente daqueles setores que, desde sempre, ficaram à margem da formação dos Estados: os indígenas (os mapuches, no Chile), no Equador e no Brasil; os indígenos-camponeses na Colômbia (Floro Tunubalá, governador eleito em Cauca), os zapatistas no México, na Bolívia (a luta contra a capitalização da água em Cochabamba e a luta dos cocaleros no Xapare cujo ciclo de lutas proporcionou, pela primeira vez, que um indígena camponês, Evo Morales, se destacasse numa eleição presidencial); os camponeses, como é o caso do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra do Brasil (MST) e no Equador; os afrodescendentes com seus palenques na Colômbia (Pacífico Sul) ou com os quilombos no Brasil, agora reconhecidos como direito à territorialidade nas Cartas Magnas dos dois países.

O ESPAÇO: CONDIÇÃO PARA A COMPREENSÃO DO SISTEMA-MUNDO MODERNO-COLONIAL

A dimensão espacial é fundamental, ainda, para uma boa caracterização do “sistema-mundo moderno-colonial” (Lander, 2000; entre outros), assim como o papel que a natureza joga na constituição desse mesmo mundo moderno-colonial.

Afinal, a Europa só se afirma como centro geopolítico e cultural do mundo moderno a partir da constituição da América enquanto periferia colonial (1492) com seu ouro e sua prata; com sua tropicalidade, condição natural favorável, mas não suficiente, sabemos, para o plantio da cana, do cacau, do algodão, do café, da banana, ou para a coleta da canela, da borracha, do caucho; com o braço escravo modernamente implantado ou com a servidão indígena modernamente direcionada para atender aos ditames do conquistador.

É preciso considerar os dois lados dessa geografia que constitui o “sistema-mundo moderno-colonial” e, definitivamente, abandonarmos a idéia de uma Modernidade que se constituiu isoladamente na Europa sem que se considere o papel que a América, enquanto colônia, teve na constituição do que se viria ser chamado e, paradoxalmente idolatrado, Modernidade. A Modernidade se constituiu no mesmo movimento que constitui a colonialidade. Assim, é preciso romper com o evolucionismo eurocêntrico que vê cada lugar do mundo como se fôra um determinado estágio da evolução européia, o que só é possível a partir de uma perspectiva teórica que toma o tempo como algo linear (o europeu) e ignora o espaço, enfim, uma perspectiva teórica que pensa a sucessão de eventos numa linha temporal unidirecional e ignora a simultaneidade constitutiva da história (espaço-tempo). Pensar com o espaço implica admitir múltiplas temporalidades convivendo simultaneamente. Sem considerar o espaço geográfico e a natureza, a clivagem constitutiva do “sistema-mundo moderno-colonial” desaparece e o mundo europeu emerge como se fôra por auto-geração e fruto de uma presumida superioridade, cuja legitimação sempre corre o risco de cair no racismo. O mundo não é simplesmente um conjunto de regiões atrasadas (pelo relógio de quem?) à espera que chegue a modernização, como se o pólo moderno (Europa) fosse o lado ativo e o resto do mundo o lado passivo do devir histórico⁸.

A Europa não se constituiria como pólo hegemônico do mundo sem a América, insistimos. Nos séculos XVI e XVII, por exemplo, não existia na Europa nenhuma manufatura que se comparasse às existentes no Brasil (os engenhos de açúcar, por exemplo) e, assim, o desenvolvimento da manufatura deveria ser buscado aqui mesmo na América e não na Europa como etnocentricamente se faz⁹. Se essas manufaturas não foram capazes de gerar sociedades mais justas e auto-sustentáveis não foi por não ter um elevado nível de desenvolvimento tecnológico, mas sim pelo caráter colonial inerente à modernidade que aqui se implantava. Quando da Segunda Revolução Industrial em finais do século XIX o boom da exploração do látex –goma elástica amplamente empregada na fabricação de correias de transmissão nas máquinas, de batentes, de encapamentos de fios elétricos que tanto propiciaram a expansão das comunicações e da transmissão de energia, além de ser utilizada

na fabricação de pneumáticos– fez com que se desenvolvesse na Amazônia brasileira, colombiana e boliviana o fenômeno que, no Brasil, ficou conhecido como correria –prática de correr atrás dos indígenas para matá-los e, assim, dominar seus territórios para produzir látex. Assim, a modernidade que se afirmava na Europa e nos Estados Unidos se fez com a colonialidade da opressão e da exploração e, mesmo, massacre daqueles cujo único pecado era o de serem diferentes e habitarem um território que detinha recursos sem os quais a Europa e os Estados Unidos não seriam o que são. A velocidade das máquinas tornada possível pela goma elástica com suas correias de transmissão e batentes era acompanhada de uma outra correria que não era veiculada pelos meios de comunicação que, também, se ampliavam a partir da utilização do látex enquanto suporte material das transmissões¹⁰. Isso tudo já deveria estar suficientemente admitido para que não mais considerássemos, como ainda se faz, que o desenvolvimento tecnológico gera necessariamente bem estar para a humanidade como um todo (tecnocentrismo).

Não nos esqueçamos, também, que o racismo e a escravidão foram criações modernas que geraram riqueza para um dos pólos do mundo moderno-colonial, a Europa, e miséria e sofrimento para a América, África e Ásia. Não há como querer ficar só com o lado bom da modernidade, olvidando-se do seu contrário historicamente necessário, a colonialidade que, como bem salienta Aníbal Quijano, pode muito bem sobreviver ao colonialismo¹¹.

GEOGRAFIA E MOVIMENTOS SOCIAIS

Independentemente das razões que muitos teóricos tentam a priori estabelecer para compreender a(s) lógica(s) inscritas nos processos sociais os conflitos expressam a dialética aberta dos processos instituintes. Considerá-los, assim, como contradição em estado prático, é um primeiro passo teórico-metodológico que ao recusar qualquer lógica a priori, seja do capital, seja do que quer que seja, aceita o caráter instituinte das possíveis ordens sociais inscritas no magma de significações imaginárias (Castoriadis, 1982). A conflitividade se revelaria, assim, rica de possibilidades teóricas e, porque não dizer, políticas. É nela que as bifurcações possíveis se tornam reais ou não.

É freqüente o uso de metáforas topológicas (espaciais) nas ciências sociais –base e superestrutura; “os de cima” e “os de baixo”; centro e periferia; classe social como lugar que o indivíduo ocupa diante dos meios de produção¹²; relações Norte-Sul– indicando que as relações sociais são, também, relações de poder. O mesmo se pode observar na linguagem dos próprios movimentos sociais onde, quase sempre, reivindicam ocupar mais espaços. Deste modo, devemos considerar com mais atenção o lugar e o espaço (em suas diferentes escalas –local, regional, nacional, global) onde ocorre um determinado conflito, ali onde uma determinada luta social põe frente a frente dois ou mais protagonistas sociais. Afinal, o lugar é, ele mesmo, constituído por essas relações (lutas) e a sociedade se constitui, constituindo seus lugares. Observemos que fronteira deriva de front, expressão do campo militar que significa um espaço que ainda está sendo objeto de luta nos limites espaciais de duas forças em confronto aberto por afirmar seu controle. Definido quem controla o front este se transforma em fronteira que, depois, passa a ser naturalizada. Daí dizer-se que o rio Grande faz a fronteira entre os Estados Unidos e o México; que o rio Paraguai separa a Bolívia do Brasil e por aí vai. Nenhum rio separa coisa alguma, na verdade, *une*. A palavra fronteira tem como raiz front que indica que por trás das fronteiras sempre está a política, seja por meios diplomáticos, seja por meio da guerra.

Os movimentos sociais adquirem, no contexto teórico que abraçamos, um lugar de altíssima relevância por trazerem à luz, com sua própria existência, não só as contradições inscritas no espaço-tempo como, também, os possíveis inscritos nessa própria realidade (Santos, 1996). Afinal, a realidade é constituída não só pelo que é, mas também, pelo que pode ser e, por alguma razão, está impedido de ser.

Sendo assim, todo movimento social é portador, em algum grau, de uma nova ordem que, como tal, pressupõe novas posições, novas relações, sempre socialmente instituídas, entre lugares. É por isso que o pensamento conservador, isto é, aquele que quer conservar a ordem social, chama aos movimentos sociais de desordeiros, procurando assimilar a contestação da

ordem que querem manter (da sua ordem) à desordem. Frequentemente chama-se de baderneiros aqueles que se movimentam buscando outras relações dos homens e mulheres entre si por meio das coisas. Procura-se, assim, desenvolver estratégias discursivas de criminalização dos que contestam a (sua) ordem como se só houvesse uma ordem possível – a sua.

Assim, a dialética entre o ser e o dever ser se instaura não como categoria abstrata, mas no chão concreto das lutas sociais, nas lutas sociais. Afinal, toda(o) aquela(e) que se sente oprimido ou explorado diz querer mais espaço – as mulheres querem mais espaço; os negros querem mais espaço; os sem-terra ocupam, isto é, se co-locam; os indígenas querem demarcar suas terras, na verdade, seus territórios; os desempregados reinventam as lutas sociais bloqueando estradas, bloqueando a circulação e, assim, retomando seu lugar no espaço geral da produção da sociedade, eles que foram deslocados (desplazados) dos lugares fixos de produção (fábricas, lojas, escritórios, das fazendas...). Enfim, os diferentes movimentos sociais re-significam o espaço e, assim, com novos signos grafam a terra, geografam, reinventando a sociedade. A Geografia, deste modo, de substantivo se transforma em verbo – ato de marcar a terra.

É possível, deste modo, construirmos uma teoria geográfica dos movimentos sociais levando em conta a experiência dos “homens e mulheres de carne e osso” (Thompson, 1983) que através das suas lutas esperam mudar de lugar. Assim, a esperança de construção de uma nova ordem é posta no centro do debate da sociedade contemporânea. Afinal, movimento é, literalmente, mudança de lugar e, assim, todo movimento social é, de alguma forma, em maior ou menor grau, portador de uma outra configuração social possível. Eis uma possibilidade de aproximação da geografia das ciências sociais.

“Cuando un sistema histórico está viviendo su etapa de desarrollo normal, el rango de opciones y alternativas para los actores sociales es bastante limitado. Sin embargo, cuando un sistema histórico se encuentra en su fase de desintegración, el rango de opciones posible se amplía y las posibilidades de cambio son infinitamente mayores” (López Segrera, 2000: 193). Quando sabemos que o Observatório Social da América Latina e Caribe –OSAL– registrou, somente do 1º para o 2º quadrimestre do ano de 2001, um aumento de cerca de 64% (de 1.221 para 2003) nos número de conflitos, a assertiva de Francisco López Segrera, assim como as considerações feitas anteriormente, acabam por ganhar uma importância ainda maior na medida que a conflitividade social tende a se tornar mais aberta. É isso que a iniciativa de múltiplos movimentos sociais vêm demonstrando, num cenário político incerto, como a quadra que se inicia desde os finais dos anos 80, sobretudo após o fim do socialismo real. No entanto, as possibilidades de superação das enormes desigualdades sociais que marcam a América Latina só terão oportunidade de ser consistentes se, de fato, forem capazes de incorporar o próprio conflito enquanto dimensão instituinte da vida social e, assim, oferecer a oportunidade para que novos protagonistas se façam presentes na vida política. Paradoxalmente, admitir o conflito como tensão criativa pressupõe construir uma cultura de paz por parte dos movimentos sociais, posto que a lógica da guerra acaba por impor a negação do outro. Para isso é fundamental a construção de contra-hegemonias, de uma revolução de tempo longo, como é possível imaginar a partir de Antonio Gramsci.

É por todas essas razões que nos vimos estimulados a buscar alternativas metodológicas que, de alguma forma, possam contribuir para uma aproximação comum para os estudos de conflito e dos movimentos sociais.

BIBLIOGRAFÍA

Altvater, Elmar 1994 O Preço da Riqueza (São Paulo: Edunesp).

Anderson, Perry 1984 Linhagens do Estado Absolutista (Porto: Afrontamento).

Anderson, Perry 1976 Passagens da Antigüidade ao Feudalismo (Porto: Publicações Escorpião/Ed. Afrontamento).

- Arrighi, Giovanni 1994 O Longo Século XX (São Paulo: Contraponto/Unesp).
- Bernardo, João 2000 Transnacionalização do Capital e Fragmentação dos Trabalhadores (São Paulo: Boitempo).
- Boron, Atilio 2002 Imperio & Imperialismo. Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri (Buenos Aires: CLACSO).
- Bourdieu, Pierre 1989 O Poder Simbólico (Lisboa-Rio de Janeiro: Difel-Bertrand).
- Cassirer, Ernst 1977 Antropologia Filosófica. Introdução a uma Filosofia da Cultura Humana (São Paulo: Mestre Jou).
- Castoriadis, Cornelius 1982 A Instituição Imaginária da Sociedade (Rio de Janeiro: Paz e Terra).
- Ceceña, Ana Esther 2001 “El Nuevo Pensamiento y la Transformación de la lucha en Argentina. Entrevista con Victor de Gennaro”, em Chiapas (México: UNAM/Ediciones Era) N° 11: 61-74.
- Clastres, Pierre 1982 Arqueologia da Violência. Ensaio de Antropologia Política (São Paulo: Brasiliense).
- Coronil, Fernando 2000 “Naturaleza del poscolonialismo: del eurocentrismo al globocentrismo”, em Lander, Edgardo (compilador) La Colonialidad del Saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (Buenos Aires: CLACSO/UNESCO).
- Coronil, Fernando 1997 The Magical State. Nature, Money and Modernity in Venezuela (Chicago: University Press).
- de Sousa Santos, Boaventura 2000 Introdução a uma Ciência Pós Moderna (Rio de Janeiro: Graal).
- de Sousa Santos, Boaventura 1997 Pela Mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade (São Paulo: Cortez).
- de Sousa Santos, Boaventura 1996 Um Discurso sobre as Ciências (Porto: Afrontamento).
- Escobar, Arturo 2000 “El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: globalización y posdesarrollo”, em Lander, Edgardo (compilador) La Colonialidad del Saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (Buenos Aires: CLACSO/UNESCO).
- Escobar, Arturo 1996 La Invención del Tercer Mundo. Construcción y Desconstrucción del Desarrollo (Santa Fé de Bogotá: Norma).
- Escobar, Arturo e Pedrosa, Alvaro 1996 Pacífico: ¿Desarrollo o Diversidad? (Santa Fé de Bogotá: CEREC).
- Espinosa, Myriam Amparo 2001 Contraste entre Miradas Colonizadoras y Subalternas sobre Plan Colombia (Cauca) mimeo.
- Foucault, Michel 1979 Microfísica do Poder (Rio de Janeiro: Graal).
- Foucault, Michel 1976 “Questions à Michel Foucault sur la Géographie”, em Revista Heródote (Paris) N° 1.
- Funtowicz, Silvio e de Marchi, Bruna 2000 “Ciencia Posnormal, Complejidad Reflexiva y Sustentabilidad”, em Leff, Enrique (coordinador) La Complejidad Ambiental (México: Siglo XXI/UNAM/PNUMA).

García Linera, Álvaro 2001 "Multitud y Comunidad. La Insurgencia Social en Bolivia", em Chiapas (México: UNAM/Ediciones Era) N° 11: 7-16.

Guatari, Félix 1982 Micropolítica. Cartografias do Desejo (Rio de Janeiro: Brasiliense).
Guigou, Jean-Louis 1995 Une Ambition pour le territoire. Aménager le temps et l'espace (Paris: Laube-Datar).

Lander, Edgardo (compilador) 2000 La Colonialidad del Saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (Buenos Aires: CLACSO/UNESCO).

Latour, Bruno 1989 Nós Jamais Fomos Modernos (Rio de Janeiro: Ed. 34).

Leff, Enrique 2001 Epistemologia Ambiental (São Paulo: Cortez).

Leff, Enrique 1998 Saber Ambiental: Sustentabilidad, Racionalidad, Complejidad, Poder (México: Siglo XXI/UNAM/PNUMA).

Leff, Enrique 1994 Ecología y Capital (México: Siglo XXI).

Lévy-Strauss, Claude 1989 O Pensamento Selvagem (São Paulo: Papyrus).

López Segrera, Francisco 2000 "Abrir, impensar y redimensionar las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. ¿Es posible una ciencia social no eurocéntrica en nuestra región?", em Lander, Edgardo (compilador) 2000 La Colonialidad del Saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (Buenos Aires: CLACSO/UNESCO).

Marx, Karl e Engels, Friedrich 1947 The German Ideology (New York: International Publishers).

Negri, Antonio e Hardt, Michael 2001 Império (Rio de Janeiro-São Paulo: Record).

OSAL 2003 (Buenos Aires: CLACSO) N° 9, enero.

OSAL 2002 (Buenos Aires: CLACSO) N° 6, enero; N° 7, junio; N° 8, septiembre.

OSAL 2001 (Buenos Aires: CLACSO) N° 4, junio; N° 5, septiembre.

Polanyi, Karl 1978 A Grande Transformação (São Paulo: Campus).

Porto Gonçalves, Carlos W. 2002 "Da geografia às geo-grafias: um mundo em busca de novas territorialidades", em Ceceña, Ana Esther y Sader, Emir (coordinadores) La Guerra Infinita. Hegemonía y terror mundial (Buenos Aires: CLACSO).

Porto Gonçalves, Carlos W. 2001[a] Amazônia, Amazônias (São Paulo: Contexto).

Porto Gonçalves, Carlos W. 2001[b] Geo-grafías. Movimientos Sociales, Nuevas Territorialidades y sustentabilidad (México: Siglo XXI).

Porto Gonçalves, Carlos W. 2001[c] "Meio Ambiente, Ciência e Poder: diálogo de diferentes matrizes de racionalidade", em Ambientalismo e Participação na Contemporaneidade (São Paulo: Educ/Fapesp) 135-162.

Porto Gonçalves, Carlos W. 2001[d] Para Além da Crítica aos Paradigmas Em Crise; Diálogo entre diferentes matrizes de racionalidade (Popayan, Cauca, Colômbia: Facultad de Ciencias Humanas y Sociales) Programa de Geografía del Desarrollo Regional y Ambiental. VII Coloquio de Geografía Universidad del Cauca.

Porto Gonçalves, Carlos W. 2000 Para Além da Crítica aos Paradigmas em Crise: Diálogo entre diferentes matrizes de racionalidade (Caracas) Anais do III Encontro Iberoamericano de Educação Ambiental.

Porto Gonçalves, Carlos W. 1998 Geografando – Nos Varadouros do Mundo (Da Territorialidade Seringalista à Territorialidade Seringueira) (Rio de Janeiro: UFRJ) Tese de Doutorado.

Porto Gonçalves, Carlos W. 1996 “Geografia Política e Desenvolvimento Sustentável”, em Revista Terra Livre (São Paulo: Marco Zero/AGB) Nº 11-12.

Quijano, Anibal 2000[a] “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, em Lander, Edgardo (compilador) La Colonialidad del Saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (Buenos Aires: CLACSO/UNESCO).

Quijano, Anibal 2000[b] “Los movimientos campesinos contemporáneos en América Latina”, em OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Nº 2, septiembre: 171-180.

Raffestin, Claude 1993 Por Uma Geografia do Poder (São Paulo: Ática)
. Santos, Milton 1996 A Natureza do Espaço – técnica e tempo / razão e emoção (São Paulo: Hucitec).

Semeraro, Giovanni 1999 Cultura e educação para a democracia – Gramsci e a sociedade civil (Petrópolis: Vozes).

Soja, Edward W. 1993 Geografias Pós-Modernas. A Reafirmação do Espaço na Teoria Social Crítica (Rio de Janeiro: Zahar).

Thompson, Edward 1983 A Miséria da Teoria (Rio de Janeiro: Zahar).

NOTAS

* Coordenador do Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense (Rio de Janeiro, Brasil). Ex-presidente da Associação dos Geógrafos Brasileiros-AGB (1998-2000).

1 “Limite entre saberes, limite entre disciplinas, limite entre países. Por todo lado se fala que os limites já não são rígidos, que os entes já não são tão ‘claros, distintos e definidos’ como recomendara René Descartes. Cada vez mais se fala de empresas internacionais, ou transnacionais ou multinacionais, assim como se fala de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade ou multidisciplinaridade. Enfim, por todo lado são usados os prefixos inter, trans ou multi indicando que as fronteiras, sejam elas epistêmicas, sociológicas ou geográfico-políticas, se é que podemos separá-las, são mais porosas do que se acreditava” (Porto Gonçalves, 2002).

2 Que não se reduz à natureza como, freqüentemente, os cientistas sociais associam.
3 O reducionismo naturalista tem-nos impedido de buscar uma análise mais complexa entre o biológico e o social. A vida, no seu sentido estritamente biológico implica, sempre, abertura; implica, sempre, a existência de poros por onde se vai buscar o alimento, a inspiração. Todo ser vivo é autônomo e dependente e a sociedade humana sendo constituída por um ser biológico que se faz por meio da cultura (Fazer/Nomear) nem por isso deixa de ser biológico, embora não seja a dimensão biológica que faça a cultura.

4 Caso o conhecimento científico e tecnológico dos Estados Unidos, por exemplo, fosse suficiente para gerar o carvão ou o petróleo o faria em seu próprio território e, assim, o Oriente Médio, a Ásia Central ou a América Latina não teriam a importância que têm na geopolítica mundial. Deste modo, a força militar que se coloca como tão necessária para o controle daquilo que não fazem é a melhor expressão da limitação daqueles que mostram a força militar.
5 O jovens que constituem o movimento hip hop produzem um deslocamento da violência direta das gangues das periferias urbanas para um sentido estético com o rap, o break e o grafite entre outras práticas que os caracterizam.

6 E aqui deveremos ser capazes de considerar as múltiplas fontes desse conceito –jurídico–política, antropológica, biológica e geográfica.

7 Aqui é sutil a observação de Quijano pois o des-nacionalizar indica que estamos diante de Estados que voltam a costas às suas populações, sobretudo a grandes parcelas dos que vivem de seu próprio trabalho.

8 Se a conquista da América não tivesse nenhum sentido para a Europa a própria colonização não teria existido. Afinal, não tem sentido dominar o que não tem importância. Assim, o primado do dominado se revela com toda intensidade como constitutivo da própria relação de dominação que só existe por meio daquilo que nega.

9 Evito aqui comparar o que se passava na Europa com outras matrizes de racionalidade, como a Inca, a Maia, a Asteca, a Zapoteca, a Ashanti, a Guarani, a dos Bantos até porque sendo outras não se prestam a comparações. Considerando que o projeto moderno foi, desde o início, colonial, posso comparar o grau de desenvolvimento desigual entre a Europa e a América posto que se trata de níveis distintos do mesmo. O que surpreende aqui é que o grau maior de desenvolvimento tecnológico estivesse aqui, na América, e não na Europa. O mesmo pode ser dito do atual processo de expansão (diz-se modernização!) do cultivo de soja pelos cerrados do Planalto Central brasileiro, como se fôra uma grande novidade. A exploração sempre foi moderna e é isso que a ideologia da modernização esconde.

10 Para aqueles que acham que isso era um problema amazônico recomendo que assistam ao filme Indochina.

11 É o que se vê, por exemplo, na ideologia dos que querem ser “primeiro mundo”, dos que querem ser desenvolvidos, cujo modelo vem sempre se fora. (Des) envolvidos é o que são.

12 Não é aqui o lugar mais adequado para demonstrar que os lugares não estão lá para serem ocupados como se fossem anteriores e exteriores às relações sociais, conforme se poderia depreender da definição de classes sociais acima indicada. É por meio das lutas/das relações sociais que os lugares e as classes se constituem. Anibal Quijano, numa passagem genial, diz que os camponeses estão se classificando, ao caracterizar o período atual das lutas camponesas na América Latina (Quijano, 2000[b]; Porto Gonçalves, 1998).

Hacia una estrategia de análisis coyuntural

Hugo Zemelman*

A partir de los artículos presentados anteriormente, y en el marco del seminario que nos convoca, voy a intentar realizar una serie de aportes teniendo en cuenta dos premisas fundamentales.

En primer lugar, considero necesario retomar el concepto de construcción del conocimiento a partir de la exigencia de historicidad. Hacerlo no es sencillo, porque el concepto de historicidad, una herencia que podemos tomar del pensamiento de Marx, ha sido apropiado por una serie de otras posturas epistémicas con distintas acepciones, como podría ser el caso de la epistemología genética.

La segunda premisa remite al contexto en que nos movemos, un capitalismo desenfrenado pero además con una clase política que representa a este capitalismo sin escrúpulos y que no está en condiciones de impulsar un contra-discurso.

Es imprescindible, entonces, tener en consideración ambos elementos que muestran cómo es administrado y dirigido el capitalismo, para plantearnos el problema del conflicto y de las alternativas que en este momento surgen para América Latina. Sin duda, esto es fundamental. No basta decir que el capitalismo se mueve en función de una tasa de ganancia: también tenemos que ver quiénes son los que administran esa tasa de ganancia, pues de ello se pueden conformar diferentes opciones.

En este sentido, a partir de estas premisas, podemos hacer ciertas afirmaciones que reflejan las grandes cuestiones que se han planteado en las intervenciones precedentes. Para empezar, creo que estamos en presencia de un tipo de dinámicas que se transforman, pero no tenemos seguridad de lo que puedan llegar a producir en el mediano y largo plazo. En efecto, tenemos una cantidad de síntomas elocuentes pero no hemos profundizado suficientemente para leer lo que hay detrás de ellos y que merezca poder describirse.

Las intervenciones que hemos escuchado son la constatación de un fenómeno complejo, que lleva a plantear en voz alta una advertencia: no volver a inventar sujetos o crear ficciones para, desde ellas, creer que construimos la historia de nuestros países. Porque si algo tenemos que asumir críticamente las generaciones de los '50, '60 y '70 es que, en gran medida, inventamos nuestras sociedades, actores y futuros. No podemos repetir estos errores e incurrir en otros que se tornen irreversibles, más aún en el contexto de un capitalismo sin contrapesos, por lo menos en el corto o mediano plazo.

Lo anterior lleva a plantearnos preguntas como las siguientes. ¿A qué nivel de profundidad están las ciencias sociales de América Latina para apropiarse de la subjetividad social constituyente de los diferentes tipos de sujetos? Pregunta que debemos asumir mucho más claramente de lo que lo estamos haciendo en este momento.

¿Cuántas variedades de colectivos surgen? ¿Qué espacios ocupan? ¿Qué temporalidades tienen? ¿Qué capacidad tienen de elaborar proyectos y de incidir en la orientación de la sociedad? ¿Qué relación hay entre colectivos y proyectos? ¿Qué densidad tienen esos colectivos? ¿Qué formas organizativas asumen? ¿En qué tipo de prácticas se expresan? ¿Las mismas prácticas o distintas prácticas? ¿Los proyectos son proyectos de un sujeto o proyectos de varios sujetos? ¿O hay sujetos con varios proyectos? En una palabra, más allá de las dinámicas socioculturales, incluso de las políticas, ¿cuánta fuerza realmente está emergiendo de esta convulsión de conflictos o de conflictividades? Son preguntas que no podemos plantearnos en términos especulativos, sino más bien metodológicos, porque son parte de los problemas que en este momento tienen la sociología, la economía, la antropología, relacionados con el problema de los movimientos sociales.

Algunos científicos sociales indican que “los sujetos no crean el conflicto, es la conflictividad la que crea a los sujetos”. Trataría de colocar el problema precisamente en esa relación ¿Qué

genera entonces el conflicto? ¿Cuándo el conflicto se expresa en sujeto? ¿Qué tipo de sujetos expresan al conflicto? ¿Con qué duración? ¿Con qué tiempo? ¿Con qué capacidad de incidencia sobre la sociedad en el contexto actual?

En este momento histórico –que todos deberíamos conocer– nos encontramos en un contexto que estimula la emergencia de múltiples tipos de sujetos, aunque algunos de éstos se agoten en sí mismos, ya que se reducen a su espacio local o a su micro-tiempo y no son capaces de exceder la coyuntura en la que nacen. Para eso hay políticas, incluso estatales, orientadas a fomentar esta emergencia porque es una forma de “practicar” la democracia, el juego político. Aparecen respetándose proyectos, el juego entre ideologías, pero en el fondo se acaba con la posibilidad de construir algo distinto a lo que el discurso dominante pretende con sus lógicas de atomización de los sujetos. He aquí un primer problema que no planteo en el plano teórico ni ideológico, sino metodológico.

El segundo problema con el que nos encontramos nos remite a lo que está sucediendo con los grupos dominantes. Como si se tratara de un retorno a la gran polémica de la década del cincuenta propiciada por la CEPAL en tiempos de Raúl Prebisch. Pareciera que, en muchos lugares de América Latina, los temas se vuelven a repetir en torno a la gran pregunta: ¿realmente ha habido alguna vez en América Latina burguesías dominantes? ¿Ha habido grupos dominantes? Tomemos por caso lo que está ocurriendo con las privatizaciones. Encontramos de esta manera una segunda afirmación en la respuesta a la pregunta ‘¿qué pasa con los grupos dominantes?’. Los grupos dominantes están en proceso de disolución, en una lógica muy clara de subordinación a las grandes corporaciones transnacionales. Ello define un parámetro del análisis, porque están cambiando las coordenadas espaciales y temporales. El conflicto, entonces, no es con actores nacionales, sino con actores invisibles, ni siquiera con las grandes corporaciones, sino con la clase ejecutiva de esas corporaciones transnacionales, que tienen un discurso propio y con proyección histórica. De esto surge entonces que no es lo mismo hablar de burguesía, ni siquiera de empresarios, que hablar de compradores, de especuladores, de rentistas, o hablar de una capa dominante que lo que hace –por ejemplo en el caso de Chile, como todos sabemos– es comprar a través de la política de privatización activos que han sido patrimonio público y valorizarlos para después venderlos a las empresas transnacionales, porque no tiene capacidad para salir de la frontera, como la práctica se los está demostrando.

Si no hay capacidad de ocupar mercados, sino solamente de valorizar activos para venderlos al mejor postor, que los transforma en chatarra, o bien los absorbe en sus grandes instalaciones, ¿dónde están esos grupos dominantes? ¿Cómo se relaciona esa declinación de los grupos dominantes con el cómo se ejerce el poder en estos países? ¿Y quién efectivamente lo ejerce? Lo que nos remite a una tercera cuestión: ¿cuál es la naturaleza real del sistema político? Cuando hablamos de sistema político, ¿hablamos de representaciones? Es decir, ¿qué pasa con el sistema político cuando uno constata que los diputados y los senadores no son ni diputados, ni senadores de tendencias ideológicas distintas, sino en el mejor de los casos socios de señores que no muestran su cara, que simplemente son administradores de un mismo proyecto?

Así es como surge el gran tema de la subalternidad de la clase política como otro parámetro del análisis, el cual afecta directamente al funcionamiento del sistema político. ¿Funciona efectivamente el sistema político? ¿Hay efectivamente espacios públicos? ¿Hay congreso? ¿Hay tribunales de justicia? Debemos ser cuidadosos con las respuestas porque podríamos estar induciendo un discurso que reconozca, como presupuesto, que sí existe la posibilidad de plantear las cosas en la prensa, en los medios de comunicación, que sí se pueden plantear cuestiones a los parlamentarios, porque representan discursos diferentes, aunque lo que en verdad se impone sea una homogeneización ideológica tosca y sesgada, apareciendo una clase transversal que en este momento, a nivel de la administración del estado, cubre por igual desde la izquierda –o la llamada a sí misma izquierda– hasta una derecha disfrazada de centro y con un discurso neo-populista con el cual esconde su neo-liberalismo.

Creo que ésa es una cuestión que no podemos evadir. No es un juicio a priori, sino un elemento que hay que tomar en cuenta, porque es un desafío para el conocimiento si queremos entender los conflictos sociales en el contexto en que se están dando. ¿Qué significa

hoy el movimiento indígena? ¿Qué significa el movimiento obrero? ¿Y el de las capas medias? El ejemplo más dramático es lo que está ocurriendo en México con el Plan Puebla-Panamá, donde el movimiento indígena se ha convertido, más que en un problema del sureste de México, en un problema de toda Centroamérica al hacerse parte de las políticas de globalización que, en este momento, están representadas por un sector significativo de la clase política, tanto mexicana como de los otros países de la región.

La última afirmación que propongo se relaciona con el problema de los datos. Este problema nos remite, por ejemplo, en el ámbito de CLACSO y el de sus instituciones afiliadas, a preguntarnos qué están haciendo estos institutos en América Latina, algunos de los cuales tienen subsidios públicos.

Creo que muchas cosas se podrían hacer, pero aquí quiero plantear sólo una cuestión, ya que es imposible desarrollar otras: tenemos que hacer un esfuerzo por modificar los diseños de investigación, cambiar el cómo se construye el conocimiento. No podemos seguir construyendo el conocimiento en la forma en que lo hemos estado haciendo hasta ahora, afirmación que abre un gran debate vinculado con la premisa de la cual parto, que es recuperar la discusión epistémica. Pero no basta, no es suficiente una discusión epistémica abstracta si ésta no se traduce en modos concretos de construcción del conocimiento.

Por esto es que creo que el problema de los datos es fundamental, sobre todo cuando apreciamos que muchos grandes problemas que hoy día se están planteando en América Latina no se pueden desenvolver a nivel de la investigación empírica con el argumento de que no hay datos, o que no hay técnicas, o que no hay instrumentos. ¿Cómo investigar temas originales si no hay datos? ¿Cómo investigar si no se tienen los instrumentos adecuados? Tenemos que enfrentar estos problemas siendo originales en la construcción de nuevos diseños, y –me permito agregar algo que a lo mejor puede ser demasiado iconoclasta– que sean baratos, que no impliquen grandes inversiones. Se pueden hacer muy buenas investigaciones sobre temas relevantes en América Latina, como el de los movimientos sociales, sin grandes presupuestos. Más aún, creo que es un dilema fundamental para la academia, porque la academia cada vez más cree que las buenas investigaciones solamente se pueden hacer con grandes presupuestos, lo que es una falacia que nos impide ver los desafíos ineludibles. Al revisar los diseños de investigación se plantea la necesidad de buscar formas de investigación que permitan vincular la construcción del conocimiento con los sujetos. Lo que decimos no significa hacer ideología de los sujetos, porque sería una contradicción con lo que hemos señalado; pero sí construir el conocimiento de los movimientos sociales no convirtiéndolos a éstos en objetos de la disquisición teórica, sino construir el conocimiento desde las exigencias de constitución de estos sujetos. De ahí la importancia de entender la complejidad de la problemática de los colectivos.

Los colectivos son un tema casi inédito, variable, complejo, que se relacionan entre sí de manera inmediata y mediata, tienen distintos espacios y tiempos, lo que no siempre está presente en la investigación, ni siquiera en la investigación especializada sobre los sujetos sociales, por lo que constituyen un desafío que tenemos que revisar.

En este sentido, lo que planteo es trazarnos estrategias de investigación que partan de la idea de las coyunturas, pero de éstas no como análisis de contingencia sino como el momento histórico que sucede a otro momento histórico y que da lugar a otro momento histórico. Es a través de esa secuencia donde podemos entender las dinámicas complejas y multidireccionales que pueden asumir los fenómenos sociales, entre ellos los procesos de constitución de los sujetos sociales, ya que son los espacios desde donde actúan y reaccionan éstos.

De no ser así, corremos el riesgo de caer en formas clasificatorias de los sujetos sociales, siendo las clasificaciones un mecanismo de tipologización (esto no es sujeto, éste es un sujeto de mediano tiempo, éste es un sujeto de larga duración, etc.) que no toma en cuenta ni el espacio ni el tiempo donde los mismos se constituyen, y por lo tanto desconoce qué es lo que se está conociendo. En ese espíritu una estrategia de investigación transcoyuntural puede ser fundamental para conocer los procesos de constitución de los fenómenos y, en consecuencia, la riqueza de direcciones posibles de los procesos históricos.

En el ámbito del Grupo de Trabajo de Teoría y Método de CLACSO estamos tratando de impulsar esta línea mediante el establecimiento de un vínculo, no fácil, entre los intelectuales que están en las academias, que se supone tendrían la responsabilidad de conocer más de lo que conocen, con los científicos sociales que desarrollan su trabajo fuera de la academia, en relación con movimientos sociales o con proyectos sociales. Es lo que hemos procurado impulsar como Grupo de Trabajo de Teoría y Método con algunos sindicatos, por ejemplo con la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). Y ha tenido una gran acogida por parte de los dirigentes sindicales asumir ellos mismos lo que significa el análisis desde la exigencia de la coyuntura.

Pero para ello es necesario cambiar los modos de investigación, salir de la academia para vincularnos con quienes están en los movimientos sociales, esto es, directamente con los actores sociales, aunque no en un marco ideológico sino metodológico, como lo hemos señalado.

1 De otra manera impulsar la construcción del conocimiento desde una estrategia que simplificamos con la expresión: construcción del conocimiento desde las exigencias de la secuencia de coyunturas, por ser éstas los espacios de construcción de los sujetos. Es lo propio de los científicos sociales que han abandonado el cubículo y preferido la intemperie, que han abandonado los senderos prefijados prefiriendo el campo abierto.

Nota

* Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México